

# Revista Temas Número 67 julio-septiembre de 2011

## Rutas de la revolución latinoamericana

*Nils Castro.* [Se rehace proyecto al andar.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Luis Maira.* [América Latina en la Posguerra fría: una mirada a los factores internos.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Alberto Montero Soler.* [El proceso de cambio en Bolivia: una lectura desde la economía política.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Valter Pomar.* [Brasil 2011-2014: dos proyectos en disputa.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*John Saxe-Fernández.* [Revolución/contrarrevolución en México. La ofensiva contra el sector petro-eléctrico.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Luis Guillermo Solís Rivera.* [Transición y nueva política en Costa Rica: del bipartidismo «perfecto» a la movilización social y el pluripartidismo](#)

*José Javier Colón Morera.* [Puerto Rico entre los límites y las paradojas de la colonialidad.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Rocío de Prato.* [De la ética para la desesperanza a la esperanzadora para Latinoamérica.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Camila Piñeiro Harnecker.* [Empresas no estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Ricardo Núñez Muñoz.* [Cambios sociales y políticos en América Latina y el Caribe.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Georgina Arias, Guillermo Bernaza, Enrique Pérez Díaz, Ricardo Quiza, Denia García Ronda.* [¿Qué dicen los textos escolares?.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Ibrahim Hidalgo Paz.* [Saco y Martí. Coincidencias y divergencias.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Ovidio D'Angelo Hernández.* [La burocracia en la dimensión compleja de la emancipación humana. Los retos del socialismo.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Enrique López Oliva.* [¿Existe una Iglesia católica cubana fuera de Cuba?.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Carlos Alzugaray Treto.* [Cuba-Estados Unidos: ¿es posible una relación distinta?.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Denia García Ronda.* [Un nuevo libro sobre cultura cubana.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

*Rogelio Rodríguez Coronel.* [Rogelio Rodríguez Coronel presenta el número 65 de la revista Temas.](#) No. 67 julio-septiembre de 2011

# Se rehace proyecto al andar

**Nils Castro**

*Profesor y diplomático.*

**D**urante el último período del siglo xx, América Latina registró dos grandes cambios de signo opuesto, que los diferentes países de la región han experimentado según sus respectivas características. Cada uno de estas sacudidas se incubó a lo largo de años, se precipitó en corto tiempo y ha dejado un conjunto de secuelas que aún se entrecruzan.

Buena parte de las contradicciones, incertidumbres y oportunidades que estos países ahora viven resultan de la superposición de ambas estelas, que todavía mantiene inconcluso al segundo de esos movimientos. Probablemente hará falta un estremecimiento adicional para destrabarlo, pero aún están formándose los actores idóneos para que eso tenga un buen desenlace.

## Primer movimiento

El primero de estos cambios comenzó al atascarse las políticas desarrollistas que, alcanzado su apogeo con el nacionalismo revolucionario de los años 60, se agotaron sin encontrar relevo en los 70 y los 80, y poco después fueron desmanteladas tras el deterioro de ese fenómeno

y el colapso del «socialismo real». Su pérdida dio pie a la rápida entronización de la hegemonía neoliberal, masivamente implantada sobre el espacio vacío —o mal defendido— que la extenuación del desarrollismo y el derrumbe soviético habían dejado.

La alternativa neocolonial y reaccionaria desplegada por la ofensiva neoconservadora encabezada por la señora Margaret Thatcher y el presidente Reagan —cuyo primer objetivo era destruir la Unión Soviética y todo lo que esta había significado—, también consiguió éxitos de otro alcance: aprovechó las decepciones legadas por la decadencia de aquel nacionalismo, los angustiosos procesos inflacionarios, y las incertidumbres que siguieron a la caída de las dictaduras latinoamericanas. En tan propicias circunstancias, a las prédicas neoliberales se les facilitó infiltrar la cultura política ya establecida, y capitalizar a su favor unas fugaces ilusiones de estabilización económica, tranquilidad social, restablecimiento de derechos civiles, empleo y sosiego.

Las demás corrientes socialistas y socialdemócratas no quedaron menos damnificadas. Tapándose con la hoja de parra de la «tercera vía», gran parte de sus mentores

Europeos optaron por doblegarse a la dominación unipolar norteamericana y a la hegemonía ideológica neoliberal y, con la excusa de evitar peores daños, renunciaron a su legado histórico y a sus banderas reivindicativas. Si eso les permitió temporalmente conservar cierta participación en gobiernos cada vez más conservadores, a mediano plazo los llevó a perder su identidad y, con ella, a millones de electores. A la postre, a mayor claudicación socialdemócrata, mayor primacía obtuvieron los nuevos regímenes de derecha.

## El movimiento opuesto

Pero el reinado neoliberal precipitó su propio colapso, una vez que los efectos de sus políticas pronto revelaron su auténtica naturaleza, lo que propició la emersión de la siguiente sacudida regional. Lejos de generar nuevas «derramas» de prosperidad, el tsunami neoliberal dejó a los gobiernos cada día más debilitados, a los pueblos más desvalidos y expuestos, y a la fortuna de las naciones dependiendo de los azares de una economía de casino. Al cabo, a la agudización de la pobreza, el malestar y el desamparo sociales, y las consiguientes oleadas de inconformidades e insubordinaciones, se les agregaría el estallido de otra gran crisis global. Y, enseguida, el descrédito —aunque todavía no el remplazo— de los dogmas ideológicos que habían justificado esas políticas.

No obstante, el fracaso y desprestigio de los preceptos del credo neoliberal no implicó que sus favorecidos cayeran en el infortunio. Su repertorio de prédicas y recetas se desacreditó; sin embargo, la mayor parte de las reformas neoliberales ya materializadas y los privilegios cosechados por sus beneficiarios han seguido vituperados pero vigentes. Con lo cual todos nos vemos en una situación como la descrita por Antonio Gramsci, donde lo viejo se hunde pero lo nuevo que habrá de sepultarlo todavía no ha logrado constituirse.

Esto hace de América Latina un inmenso tablero en disputa. En algunos sitios antes, en otros después, las derechas fueron vencidas o quedaron esquinadas, mas no conformes ni derrotadas. Esta historia no ha concluido. Aun sacadas del gobierno, las burguesías más recalcitrantes conservaron la mayor parte de su poder económico y mediático, una enorme influencia cultural y, pasada la sorpresa, hoy movilizan un vasto concierto internacional y una importante capacidad para reevaluar tanto sus antiguas experiencias como los nuevos medios para concebir e instrumentar su contraofensiva.

## ¿Qué saldos y retos quedaron?

Para visualizar nuestras opciones también es preciso aprender autocriticamente de los errores. El desarrollismo latinoamericano y el modelo soviético no fueron vencidos solo por la potencia de la acometida neoconservadora abanderada por la Thatcher y Reagan, sino también por sus propios desatinos. Si hemos de retomar la iniciativa, no será repitiéndolos.

En su primera etapa, aquel desarrollismo aprovechó oportunidades de industrialización al resguardar nuestros mercados, sustituir importaciones y crear un área de empresas estratégicas en manos del sector público. Entre sus resultados sobresalieron el perfeccionamiento de la soberanía, el fortalecimiento de la clase obrera y de la clase media, progresos en la urbanización, seguridad social y educación, etc. No obstante, sus gobiernos asimismo prohijaron una burguesía y una burocracia que se ocuparon demasiado poco de incrementar la productividad y la competitividad de sus empresas y de la economía nacional y, a la vez, abusaron de las empresas del Estado como instrumentos para ofrecer empleo y servicios que no competían al perfil de esas empresas, sin velar por su autosostenibilidad.

La excesiva prestación y perduración de protecciones, privilegios y subsidios ocasionó, con frecuencia, un estilo de gestión y unas empresas que así resultaron crecientemente ineficientes y costosas, y al cabo insostenibles, a la vez que a un desmedro contable que imposibilitaba controlar y prever los costos, o detectar la desviación de recursos, así como una cerrazón aislacionista respecto a la progresiva aparición de nuevas oportunidades —tecnológicas, culturales y económicas— en el contexto continental y mundial, que dejaban de aprovecharse.

Prácticas equivalentes proliferaron en el socialismo «real» de modelo soviético. En ambos casos se les ha señalado como «capitalismo de Estado» para rechazar que tuvieran naturaleza auténticamente socialista, aduciendo que allá el Estado, o su burocracia, habían tomado el lugar y el papel de la burguesía. No es esta lo ocasión ni el espacio para discutirlo. Pero, de cualquier forma, esas eran unas prácticas que obstruían o impedían cumplir dos roles históricamente positivos de la gestión capitalista: el afán de competitividad que incentiva renovar las fuerzas productivas, y la organización obrera que busca disputarles a los dueños (o a los administradores) de las empresas una mayor participación en las decisiones sobre las condiciones de trabajo y repartición de las ganancias. Es decir, a la larga, eran prácticas ineficientes o remolonas que,

en el primer caso, eran igualmente perjudiciales tanto para el interés capitalista como para el socialista.

Así las cosas, luego de su etapa progresiva, el desarrollismo latinoamericano no generó a mayor plazo (o sus promotores no previeron a tiempo) los instrumentos necesarios para superar estas deficiencias. Con lo cual, luego de sus éxitos iniciales, empezaban a sobresalir sus desviaciones menos deseables —estilo burocrático de gestión, persistencia de tecnologías ineficaces y contaminantes, falta de capacidad para incursionar en mercados exteriores, desviación de recursos y corrupción, baja tasa de ganancias y de aportación a otros sectores de la vida nacional, etc.—, con un saldo de estancamiento económico y pérdida de confianza ante unas sociedades progresivamente más educadas y demandantes. A la postre, esto deparó derivaciones que la ofensiva neoconservadora —y las prédicas neoliberales que la acompañaban— pudieron extrapolar de manera crítica para explotar a favor suyo la secuela de malestares y decepciones provocadas por aquellas deficiencias, sin reconocerles mérito alguno a los progresos antes logrados.

Como bien sabemos, para que cualquier sistema socioeconómico (y cualquier nación) pueda subsistir y prosperar es indispensable que, día tras día, sepa darse los medios de gestión y producción necesarios para alcanzar mayor eficiencia, productividad y competitividad. En la medida en que la sociedad se vuelve más compleja e ilustrada, su sistema productivo y la gestión pública tienen que hacerse más eficientes. En el caso particular de las empresas latinoamericanas de la época desarrollista —tanto las públicas como las privadas—, solo de ese modo hubieran podido mantener la sostenibilidad, la pujanza, la responsabilidad social, la utilidad pública y la credibilidad que hicieran factible y provechoso asegurar su reproducción y continuidad. Pero la mayor parte de las veces esto no fue el caso. Como tampoco lo fue para otras instituciones de interés público.

## Y vino el lobo

En ese contexto, en los años 80 y los primeros 90, la evolución de las circunstancias políticas y económicas mundiales —la carrera armamentista, el estancamiento del sistema socioeconómico y político soviético, etc.— favoreció que las «reformas estructurales», presuntamente adecuadas para superar esas deficiencias, pasaran a consistir en la aplicación masiva de los preceptos neoliberales. Pero estos se resumían en un repertorio de recetas que, aunque se presentaran como las oportunas para enderezar dicha situación, en realidad no venían a implementar ese objetivo, sino a

aprovechar la coyuntura en beneficio del capital privado transnacional. Bajo la piel de oveja de que la gestión privada —una vez liberada de los controles y restricciones estatales que supuestamente la ahogaban— sería la más eficaz para superar el estancamiento y propiciar un nuevo auge, de hecho impulsó la privatización de las infraestructuras y los recursos productivos creados bajo el impulso desarrollista, para transferírseles a los dueños locales y transnacionales del sector privado (y aprovecharlos como base para instalar otros negocios no necesariamente vinculados al desarrollo nacional).

En pocos años, con el pretexto de aliviar al Estado y al erario público del costoso deber de administrar y subsidiar un amplio conjunto de empresas e instituciones, las cacareadas reformas estructurales facilitaron traspasárselas a las corporaciones —por lo general extranjeras— capaces de adquirirlas, con lo cual las respectivas economías resultaron enajenadas y desnacionalizadas, y el Estado quedó drásticamente achicado, debilitado y constreñido a desempeñar las funciones socialmente ineludibles que no interesan al capital privado: básicamente, las de mantener el orden público y dispensarle de ciertos servicios de salubridad y enseñanza para la población de menores recursos —insolvente para adquirirlos de mejor calidad en el sector privado—, además de cobrar los impuestos con qué costearlos.

Esto implicó una severa reforma de las normas de regulación de la economía y de los modos de propiedad o control sobre los medios de producción y circulación de bienes, servicios y comunicaciones. Tal reforma, de paso, sirvió para «sincerar» los mecanismos esenciales del capitalismo, es decir, regresar a su forma salvaje, eliminando la mayor parte del acervo de conquistas sociales y laborales, y los derechos que el movimiento popular y la defensa de la soberanía nacional habían atesorado durante los dos siglos anteriores de luchas alentadas por el humanismo, el liberalismo y los anhelos de justicia social. La gestión capitalista volvió a desembarazarse de múltiples obligaciones o restricciones de interés humanitario.

No hace falta repetir aquí una historia ya conocida. Dicho de manera abreviada, luego del efímero período durante el cual pareció que los males más angustiosos dejados por la agonía del desarrollismo —burocratismo, hiperinflación, devaluación monetaria, desempleo, empobrecimiento, inestabilidad política, y regímenes autoritarios— iban a quedar atrás, las reestructuraciones y políticas neoliberales enseguida empezaron a suscitar otra generación de causas de irritación e inconformidad sociales. Si bien en algunos casos la situación fiscal y monetaria se estabilizó, como lo reclamaba el capital y lo exigían las instituciones financieras internacionales, se recrudecieron la precariedad del empleo, la

**El tsunami neoliberal dejó a los gobiernos cada día más debilitados, a los pueblos más desvalidos y expuestos, y a la fortuna de las naciones dependiendo de los azares de una economía de casino. Al cabo, a la agudización de la pobreza, el malestar y el desamparo sociales, y las consiguientes oleadas de inconformidades e insubordinaciones, se les agregaría el estallido de otra gran crisis global.**

marginación, el empobrecimiento la incertidumbre y la inseguridad.

De paso, vale recordar que la liberalización de los flujos de dineros y mercancías, y la eliminación o relajación de los controles y fiscalizaciones sobre sus movimientos no solo beneficiaron al capital privado transnacional de carácter lícito, sino también al ilícito y a los medios de «lavarlo». Por lo tanto, favorecieron a las nuevas modalidades de criminalidad internacional.

Al propio tiempo, el debilitamiento de los controles sobre los movimientos financieros internacionales y sobre el funcionamiento de la economía mundial pronto se tradujeron en causa de repetidas crisis. En cascada, y con variadas características, estas fueron haciéndose cada vez peores y menos justificables, hasta culminar en la catástrofe mundial y multimodal que detonó en 2007, la cual, entre otras cosas, evidenció el fiasco que acabaría de desacreditar y desautorizar todo el repertorio neoliberal.

La frustración y la inconformidad colectivas se expresaron en una multicolor ola de movimientos populares y de reacciones políticas y electorales que en los últimos años ha dado un nuevo perfil a los comportamientos latinoamericanos, sobre todo en Sudamérica. En tajante contraste con lo que continúa pasando en Europa occidental, donde la mayor parte de los partidos socialdemócratas tradicionales aún no se han desprendido de las consecuencias programáticas y sociopolíticas de conchabarse con el neoliberalismo, en América Latina dichas reacciones han puesto en marcha nuevos modos de abanderar a las izquierdas, así como una nutrida pluralidad de gobiernos progresistas.

Sin embargo, esto nos sitúa ante varias situaciones y derroteros que todavía están en proceso de formarse y reclamarán una mayor variedad de análisis. Se ha generalizado un escenario sociopolítico e ideológico-cultural que nos obliga a releer a Gramsci. La propuesta desarrollista quedó en el pasado, y a su vez la neoliberal se desplomó de manera vergonzosa, pero el desarrollo histórico todavía no ha elaborado las alternativas programáticas que podrían remplazarlos. Asimismo, los sistemas políticos que por decenios permitieron ponerles y reponerles gobiernos a nuestros

países —y que *mutatis mutandis* sirvieron para administrar los proyectos liberales, desarrollistas y neoliberales— en muchos de ellos hoy escasamente pueden mantener la gobernabilidad. No obstante, salvo iniciales pininos, todavía no logramos reformarlos o sustituirlos por otros que viabilicen mejor representatividad y participación sociales.

Donde las protestas sociales desbordaron al sistema político establecido —Venezuela, Bolivia, Ecuador—, los consiguientes procesos de «refundación» constitucional han permitido importantes reformas democratizadoras y modernizadoras del sistema político. La excepción es Argentina, donde el viejo sistema logró reponerse con menos cambios. Pero donde la insatisfacción social posibilitó elegir un nuevo tipo de gobierno —progresista— sin haber reformado ese sistema —Brasil, Argentina, Paraguay, El Salvador, Perú—, estos aún se ven precisados a actuar con las restricciones o la camisa de fuerza de un balance conservador de las normas vigentes y de las relaciones con los demás órganos del Estado, como lo había instrumentado el sistema político antes instaurado por la democracia oligárquica y el neoliberalismo. La excepción es Nicaragua, donde luego del período revolucionario, los gobiernos liberales reformaron el sistema a su propia medida.

### Sin contrincante mayor

Dicho de otro modo, estamos *en proceso*, en una situación ambivalente donde se viven unas condiciones prometedoras, pero inconclusas, instaladas por el repudio al anterior estado de cosas más que por adhesión a un nuevo proyecto. Esto es, sabemos qué se rechaza, pero todavía hay mucha, rica, creativa, y hasta riesgosa incertidumbre sobre las alternativas que más adelante nuestras iniciativas podrán forjar. Y en la lucha por reconformar esa situación en uno o el otro sentidos, no jugamos solos; también actúan las tradiciones anteriormente sembradas por la vieja cultura política, así como el poder mediático y conspirativo de la gran burguesía local y de los consorcios transnacionales.

¿Aparte del multiforme rechazo colectivo que eligió a esos gobiernos progresistas, de dónde viene esta situación de estar *en proceso*? El tema requiere distintas consideraciones previas, entre las cuales se pueden señalar las siguientes. Para empezar, una observación de Perogrullo, pero no por ello de menor relevancia: los gobiernos progresistas ahora existentes —y que en Sudamérica son mayoría— no resultaron de revoluciones. Hemos tenido levantamientos populares que derribaron gobiernos, pero no revoluciones conscientes, que entronizaran gobiernos revolucionarios, con poderes revolucionarios y sostenidos por fuerzas revolucionarias, como en el siglo xx pensábamos que podía suceder. Lo que tenemos son nuevos liderazgos que, dentro del agotamiento de los sistemas políticos dejados por la pasada generación, vencieron electoralmente a las viejas opciones, para llevar otro tipo de gente al gobierno, aunque no al poder.

Pero, antes de que ese repudio colectivo —contra el viejo sistema político, contra las secuelas de las políticas neoliberales, etc.— tomara esta fortaleza político-electoral, sufrimos un enorme desarme ideológico y programático. En los años 60 y los 70, en una atmósfera de auge del «factor subjetivo» de la revolución, las ideas que orientaban a las organizaciones revolucionarias (y cuyas recíprocas confrontaciones ideológicas a veces también las desquiciaron) tenían previsto otro género de procedimientos y desenlaces. Pero si bien esas ideas alentaron tanto heroísmos como martirios, y estremecieron al Continente y lo hicieron avanzar, salvo contadas excepciones no produjeron las victorias esperadas. Así, cuando el sistema soviético colapsó (y cuando la revolución china renunció a su opción radical), las organizaciones que habían animado esas ideas ya habían sido derrotadas o andaban en busca de otros caminos. La rápida entronización de la ideología neoliberal fue posible porque irrumpió sobre un espacio político-cultural que ya se replegaba.

## Sobre la marcha

En otras palabras, las ideas que en el pasado período les dieron inspiración, identidad y propósito a aquellas izquierdas ahora no son —ya no pueden ser— las que guían a los actuales gobiernos y proyectos progresistas, ni a los partidos que los apoyan. Es decir, que también las ideas las tenemos *en proceso*. Los principios y los objetivos a largo plazo son los mismos, por eso la orientación y el ánimo se pueden sostener y desarrollar. Pero, de nueva cuenta, estamos haciendo camino al andar y, en consecuencia, las ideas se están rearticulando, poniendo a prueba y mejorando sobre la marcha. Por ahora, no son nuestra guía para la acción, sino productos

de la acción emprendida. Muchos de los efectos de aquel vacío ideológico aún están por superarse, lo que se logrará mientras tales experiencias nos ayuden a formar una nueva cultura política.

En el ínterin, estos gobiernos progresistas y los desarrollos sociales que los han traído a donde están no se encuentran realizando un proyecto anticapitalista; es más, en la mayor parte de los casos, ni siquiera están desmantelando todas las estructuras legadas por los gobiernos neoliberales, sino corrigiendo sus extremos más aberrantes y mitigando sus peores efectos.

No en balde, lo mismo José Inácio (Lula) da Silva que José (Pepe) Mujica, por ejemplo, han probado fehacientemente que la izquierda sabe gobernar el sistema existente mucho mejor que la derecha. No solo lo administra mejor, sino que lo lleva a mitigar las injusticias y atrasos que más agobian a nuestros pueblos, y a darles una vida más digna. Pero lo hacen sin remplazar el sistema, en el entendido de que el intento de cambiarlo de modo radical aún no sería aceptado, ni mucho menos secundado, por las mayorías que los eligieron democráticamente. Porque el voto recibido para gobernar fue el que se le concedió *al programa electoral prometido* en campaña, no a uno radical de transformación del sistema.

Pero formar la cultura política que lleve a que la mayoría popular demande un programa más radical *es una responsabilidad y una función propia de los partidos y movimientos revolucionarios*, más que de estos gobiernos progresistas. Para erradicar todas esas estructuras y remplazarlas por otro sistema, habría que contar con un proyecto alterno que las pueda sustituir de manera coherente. Uno que no vuelva a echar por tierra los principios de productividad, racionalidad y transparencia indispensables para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas, sin el cual luego sería imposible satisfacer las necesidades populares y fundamentar confianza. Porque sabemos que la temporal ausencia de ese proyecto no podrá suplirse reinstalando el viejo esquema desarrollista, que funcionó en una época hace mucho inexistente. Además, porque tampoco tendría sentido reinstalar un modelo que en su última fase generó consecuencias inaceptables y se volvió insostenible. Mientras tanto, se trabaja por tanteo y error, y sobre la marcha se discuten y ensayan otras soluciones y proyectos originales.

Así las cosas, es comprensible que los maximalistas de antes y de ahora denuncien con enardecida impaciencia que estos no son gobiernos revolucionarios. Porque, en efecto, no lo son. Como, si ese fuera su intento, tampoco hubieran llegado a ser gobiernos. Lo que de ningún modo implica que todos sus protagonistas se han vuelto unos socialdemócratas adocenados. Antes bien, la cuestión está en que hubiera carecido de sentido

plantearle un propósito radical a una masa de electores que todavía no está dispuesta a apoyar ese género de alternativa, y hasta a jugárselo todo —sus medios de subsistencia, la familia y la vida— para lograrla, defenderla y sostenerla. Es decir, una masa a la que todavía no hemos ofrecido ese proyecto convincente y factible. En consecuencia, el discurso de esos críticos, por bravío que parezca, no se condesciende con la pertinaz anemia de los resultados que su práctica política obtiene.

El asunto quedó claramente descrito en la metáfora guevarista de la vanguardia y el pelotón principal de una columna guerrillera. La vanguardia no debe adelantarse tanto que pierda el contacto con el grueso del pelotón, o se extravíe, como tampoco demorarse al punto de refrenar el avance de la columna. Ser revolucionario supone hacer, en cada momento, lo más revolucionario que el desarrollo popular pueda asumir. Quienes en los años 60 y los 70 hicieron suya la idea de que el vanguardismo foquista podía acelerar el parto revolucionario desafortunadamente no pudieron lograrlo, porque la realidad no era así. Una pléyade de los mejores latinoamericanos de esa época pereció en el intento sin que aquella revolución se produjera: el pueblo al que buscaban redimir no estaba preparado para compartir sus convicciones y aún menos para acompañarlos. Esto no demerita la inmensa calidad ética de su entrega a ese ideal, pero hace ver que antes es preciso desarrollar condiciones de sustentación social. Por ahora, esta será, de nueva cuenta, la primera tarea de una etapa por venir.

Todo eso vuelve a traernos al tema del desarme o repliegue ideológico que acompañó al desplome del sistema soviético y el abandono del maoísmo. Una inmensa porción de los actuales contingentes populares ya reclama un cambio de fondo para transformar su condición de vida y expectativas. Pero esto (aún) no quiere decir que ya estaría dispuesta a sacrificar sus precarias condiciones de vida y alzarse en armas por un proyecto que aún no la ha persuadido. Revolución no es aquella que se intenta —o se dice intentar—, sino la que, una vez puesta en marcha, será efectivamente sostenida, defendida y reproducida por grandes fuerzas populares.

## ¿Están verdes las uvas?

En nuestros días, el disgusto y la esperanza populares han electo a estos gobiernos progresistas, brindándoles una inusual ocasión a sus dirigentes. En las respectivas sociedades se abre un compás histórico distinto de lo que fue casi toda la tónica anterior. Sería imperdonable desaprovechar esta ocasión posicionándose como meros

críticos de tamaño coyuntura. Hay que zambullirse en ella y consolidarla, como oportunidad de organización de los trabajadores, de los pobres y marginados, para que estos puedan mejorar sus condiciones de supervivencia y lucha, desarrollar sus propios instrumentos para hacer más adecuados sus medios de vida, aprender a informarse y desarrollar aptitudes productivas, y no solo para recibir instrucción política. Y no apenas de la organización y educación que sirva a los propósitos de una élite de conspiradores, sino para servir a los fines de los propios pobres y trabajadores. Como las pasadas experiencias lo han demostrado, la vanidad y el empeño de reducir las organizaciones populares a meras correas de transmisión de una élite, o de crearlas para este fin, solo conducen a engañarse con simulaciones, y a frustrarlas.

Así pues, como en la vieja fábula de la zorra en el parral, ¿están verdes las uvas o es que a los vendimiadores les falta arrojo? Ni lo uno ni lo otro se demostrará juzgando la situación desde la barrera. Para que la fruta consiga madurar como se debe hay que acompañarla a lo largo del cultivo.

En efecto, esta etapa no es la de la revolución antes soñada —¿por qué habría de serlo si los revolucionarios no la hemos producido?—, sino la de cultivar conciencia independiente y organizada en el seno de esa plebe desengañada y recelosa que todavía es presa de los medios de comunicación y manipulación manejados por los grandes consorcios de la prensa impresa o electrónica. Aún falta ayudarla a emanciparse de la hegemonía cultural ejercida por la clase propietaria de los medios tanto de subsistencia como de información, que todavía subordina a la mayor parte del pueblo. Esta es oportunidad de cultivar pensamiento crítico y criterio propio en el seno de ese pueblo, para que él mismo pueda dirimir su propia agenda de los asuntos que de veras le importan para salir de sus condiciones de sometimiento.

Todo ello obliga a preguntarse con qué fuerzas se cuenta para seguir adelante y de qué «adelante» cabe hablar. En la óptica de los cambios experimentados por América Latina en esas últimas dos etapas, hace falta observar cuánto ha ocurrido y qué sigue pendiente.

En su momento, la hegemonía neoliberal se tomó todo el Continente en menos de diez años. Ahora, la respuesta popular ya lleva más de diez luchando por abrirse paso. ¿A qué atribuir la diferencia? La oleada neoliberal se convirtió en un tsunami porque cayó sobre un campo que ya estaba en crisis, luego de que los viejos proyectos nacionalistas y revolucionarios dejaron de cumplir sus expectativas. Hoy por hoy buscamos recuperar ese ámbito a partir de la fuerza de un disgusto y un afán populares a los cuales, sin embargo, todavía es necesario proponerles formas y objetivos de mayor alcance histórico. Y lo hacemos enfrentados a unos



enemigos del cambio que aún pueden contraponernos poderosos recursos, que será preciso superar por nuevos medios. Lo que nos exige desplegar una gran creatividad.

## En el plano político

En realidad, en esta última etapa, ¿qué ha cambiado y qué falta por cambiar? Los cambios más relevantes han estado ocurriendo en el plano político y en el de la recuperación de la soberanía nacional y popular. Hoy la mayor parte de los países suramericanos y un par de naciones centroamericanas tienen gobiernos progresistas, lo que hace dos o tres lustros nadie preveía. Por añadidura, el imperialismo estadounidense, que hace dos décadas no lo hubiera permitido o lo habría castigado severamente, ahora se conforma con influir y presionar para que tal situación no vaya mucho más allá.

Dentro de ese plano, estos gobiernos progresistas procuran subsanar, o mitigar, modalidades históricas de injusticia y marginación sociales, mejorar la atención a los sectores más necesitados (con no pocos éxitos en los campos de la educación, nutrición y salud), luchar contra la pobreza, corregir la injusticia distributiva, mejorar la situación en materia de derechos humanos. Y por lo general buscan, además, reanudar el desarrollo de las fuerzas productivas, muchas veces en términos negociados con empresas transnacionales. Paralelamente, intentan coordinar y robustecer políticas de bloque con las que resistir las presiones de las grandes potencias y el imperialismo, e iniciar procesos de integración, como el fortalecimiento del MERCOSUR, el proyecto del ALBA, la constitución de UNASUR y los primeros pasos en dirección a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CEALC). No obstante, al propio tiempo, todavía deben lidiar con una amplia trama de principios, reglas y mecanismos —internos e internacionales— legados por la anterior etapa neoliberal, lo que hace de ellos una peculiar especie de regímenes mixtos.

Por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de gobiernos obligados a llevar a cabo la gestión pública acorralados en la estrechez de las reglas y mecanismos recibidos de sistemas político-constitucionales resultantes de las transiciones a la democracia tradicional, que en el pasado fue preciso pactar con los mandos oligárquicos y militares durante los esfuerzos para dismantelar las dictaduras. Esta es una modalidad de sistema político de democracia condicionada que los pueblos latinoamericanos hace rato encuentran restrictiva y decepcionante. Para decirlo en pocas palabras: esta segunda etapa de cambios aún se halla estructuralmente incompleta, tanto en sus mecanismos internos como en sus proyecciones.

## ¿Más de lo mismo?

Una hipótesis en boga dice que seguiremos adelante —tanto para avanzar como para consolidar— en tanto que estos gobiernos progresistas puedan reelegirse y cumplir metas adicionales. Pero esto solo será verdad cuando sus sucesores sean más ambiciosos y audaces que sus predecesores, cosa que solo ocurrirá cuando deban su respectiva elección a masas ciudadanas más avanzadas y demandantes. De no ser así —si para volver a elegirse se acepta dar marcha atrás— solo podrá preverse una reedición del trillo reformista, antaño adoptado por la derecha socialdemócrata, que se contenta con prometer una gradual secuencia de progresos y acto seguido se va de uno a otro retroceso, a lo largo de una barranca de concesiones ante cada amago de las derechas y las transnacionales, o de conciliación con ellas.

Lo que significa que esa bonita hipótesis tiene un embrión de verdad, optimista, que, sin embargo, no puede sostenerse por sí solo. Para que, en las condiciones democráticas que deseamos, se haga factible dismantelar la herencia neoliberal, domeñar los excesos capitalistas y avanzar en el camino de la equidad y la solidaridad, hace falta la movilización consciente de fuerzas populares que, sobre la base de compromisos programáticos más avanzados, escojan y elijan mejores propuestas y candidatos. Es decir, de masas organizadas y conscientes, cuya movilización convierta en fuerza material los principios, ideales, aspiraciones y objetivos de las izquierdas.

Para que esto se haga cierto, es preciso no solo sacudir críticamente la cultura política que la clase dominante ha implantado desde siempre como si respondiera a toda la sociedad, sino ir de su crítica sistemática a la formación de *otra* cultura política. Hace falta un amplio trabajo ideológico, que no solo consiste en ofrecer nuevas ideas y objetivos, sino que asimismo exige tolerarse mutuamente, cooperar entre todos los sectores de las izquierdas, y darle coherencia a lo que ellos representan para el conjunto de la sociedad.

Lo cual no supone que con todo ese legado tocará hacer tabla rasa. Al contrario, este deberá ser objeto de una depuración selectiva y reactualizadora, pues algunos de sus preceptos continuarán siendo necesarios, ya que apuntan a resolver deficiencias del sistema precedente. Depurar implica tirar la basura, pero también preservar los logros aportados por cada una de las épocas anteriores. Objetivos como la racionalidad y la transparencia fiscal y presupuestaria, la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas y proyectos, impedir el abultamiento improductivo de las instituciones, garantizar el incremento de la productividad del trabajo, etc., son igualmente indispensables para desarrollar las alternativas posneoliberales y poscapitalistas.

Ciertamente, el trabajo de ofrecer educación escolar y laboral, de organizar a las comunidades locales para mejorar su convivencia y servicios, de promover la sindicalización de los trabajadores, la agremiación de los profesionales, la asociación de los estudiantes y de las mujeres desde el punto de vista cívico, legal y participativo, figura entre las actividades propias de un gobierno progresista. Sin embargo, la formación, organización y movilización políticas de los sectores populares no es una tarea suya. Es una misión de los partidos y organizaciones políticas. Si a alguien puede denostarse por el rezago de la formación de esas fuerzas del cambio no es a los gobiernos sino a los partidos, a sus dirigentes y candidatos locales, a sus representantes municipales y parlamentarios. No puede ser de otro modo.

### **De lo que ahora se trata**

Para ir a lo esencial del asunto, debe recordarse que el orden social y político previo —explotador, marginador, abierta o implícitamente autoritario—, al que es preciso sacudir mediante la crítica y cambiar en interés social, no

se estableció solo por la fuerza represiva y burocrática. Una vez instituido, ese orden se ha consolidado, se mantiene y se maneja, generalmente, a través de la influencia persuasiva y el reinado político y cultural de las clases dominantes, que se esmeran en maquillarlo como «natural» y, por ende, mejorable pero eterno.

En última instancia, de lo que se trata es de enfrentar y superar dicha hegemonía político-cultural de las clases dominantes desarrollando una contrapropuesta ideológica y cultural consecuente con los afanes y expectativas de las clases y grupos interesados en cambiar ese orden de cosas. No hay historia sin movilización popular. A la hegemonía subordinante, históricamente establecida, toca oponerle una contrahegemonía, en cuyo seno pueda idearse otro futuro, y organizar su construcción, que para ser colectiva asimismo deberá ser plural e incluyente. Solo por ahí podrá completarse el cambio que está en curso y emprender los que le sigan.

© TEMAS, 2011

# **América Latina en la Posguerra fría: una mirada a los factores internos**

**Luis Maira**

*Profesor e investigador. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, DF.*

América Latina ha sido una de las regiones del mundo que más ha cambiado desde el término de la Guerra fría. Durante esta, fuimos marcados a fuego, tanto por nuestra ubicación geográfica, que acentuaba nuestra dependencia de Washington, como por el peso del pasado histórico, que permitía la preservación de rasgos oligárquicos y visiones conservadoras. Ahora, por el contrario, nuestros márgenes de acción han crecido a la luz de las nuevas tendencias globales afianzadas por los grandes ajustes que en los años recientes se han producido. Por eso, desde principios de los 90, la lógica de los acontecimientos no tiene relación con la que prevaleció en las cuatro décadas que siguieron al término de la Segunda guerra mundial.

En diversos trabajos he examinado el entorno internacional reciente de América Latina, y los desafíos que este plantea. Intentaré aquí, en cambio, referirme a algunos factores domésticos —políticos, sociales y culturales— que tienen peso y significación en los escenarios de nuestros países, con preferencia hacia los que presentan una importancia política generalizada en la mayoría de ellos.

Para comprender mejor el proceso que vivimos, debemos también tener en consideración las transformaciones ocurridas desde el final de la Guerra fría que han cambiado, de modo durable, los contenidos de la política. Hasta la penúltima década del siglo xx, la contradicción principal en América Latina se planteó, en el campo de los regímenes políticos, entre dictadura y democracia. Una fuerte persistencia de los gobiernos militares caracterizó al siglo y este impulso duró hasta la caída de las dictaduras de seguridad nacional, experiencias políticas muy características del alineamiento de la región con los Estados Unidos durante toda la confrontación bipolar. Hubo una época, no muy lejana, en que el mapa político regional estaba casi totalmente dominado por estas experiencias. Así, en 1977, solo dos de los diez países latinoamericanos de América del Sur (excluyamos a Guyana y Surinam que vienen de otra matriz) tenían gobiernos elegidos en las urnas: Colombia y Venezuela. Dictaduras militares de distinto signo, la mayoría de ellas ligadas a la estrategia de guerra interna y al propósito de aniquilamiento de los llamados «enemigos subversivos» prevalecían en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia.

Entre tanto, Perú y Ecuador tenían dictaduras con rasgos modernizantes, y una postura internacional de no alineamiento. En ese mismo año, regímenes de fuerza dominaban también América Central: la Nicaragua de Anastasio Somoza, hijo; El Salvador del general Humberto Romero; la coalición de militares y civiles ultraconservadores que dirigieron Guatemala desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y el régimen militar del general Juan Alberto Melgar en Honduras. En el Caribe, entre tanto, Jean Claude Duvalier continuaba el régimen dinástico iniciado por su padre en 1957, y en República Dominicana se vivía todavía la prolongada etapa semidemocrática que siguió al asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Pero los años 80 marcaron la declinación de los regímenes de fuerza y consolidaron gobiernos democrático-liberales que permanecen hasta hoy.

Debido a ese antecedente, el cambio epocal que puso fin a la era contemporánea, iniciada con las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, tuvo en nuestro entorno efectos muy profundos. Al mismo tiempo, hemos sido impactados por la inestabilidad que ha caracterizado a escala global a este tiempo de transición internacional y nueva globalización. En esta etapa, conocida como Posguerra fría, se puede distinguir dos tendencias predominantes. Lo ocurrido en la década de los años 90 muestra un momento de hegemonía de los modelos neoliberales. En cambio, en la primera del siglo XXI se ha producido el predominio de experiencias políticas que se orientan del centro hacia la izquierda; y que han surgido a raíz del fracaso de las anteriores.

Desde que, a fines de 1983, se iniciara en Argentina, con el ascenso del presidente Raúl Alfonsín, el primer proceso de transición a la democracia en la región, estos experimentos se convirtieron en el contexto histórico para la superación de los gobiernos de fuerza. Al igual que en la Europa del Sur, cuando se desplomaron, en los años 70, las últimas dictaduras en Portugal, Grecia y España, aquí tampoco se registró el tránsito inmediato de dictaduras a gobiernos democráticos. Como consecuencia de la complejidad y fuerza de los gobiernos autoritarios que concluían, hubo un repliegue ordenado de fuerzas por parte de los militares y las coaliciones civiles que detentaban el poder, y solo fue gradual la instalación de las nuevas coaliciones que buscaban la plena consolidación de un régimen basado en la soberanía popular. Los gobiernos de transición latinoamericanos, sobre todo en América del Sur, fueron experiencias situadas a medio camino entre la lógica de las dictaduras que declinaban y las tendencias democráticas que, ya hegemónicas, se abrían paso. Los años 80 fueron un tiempo intermedio, resultado de una ardua negociación política que ofreció garantías a los anteriores detentadores del poder, lo que significó

enormes dificultades para el desarrollo de la agenda de estas transiciones. En estas, hubo que manejar asuntos tan difíciles como la investigación y juicio sobre violaciones a los derechos humanos; el establecimiento de proyectos económicos para retomar el crecimiento; el pago de la deuda social, ocasionada por el recorte de prestaciones salariales y de las conquistas sociales de los sectores medios y populares, provocado por las estrategias económicas de ajuste; la normalización institucional y el rediseño de los ordenamientos jurídicos que habían establecido las dictaduras, así como la búsqueda de una reinserción de nuestros países en el sistema internacional.

Es preciso tener en cuenta, además, una complicada circunstancia que acompañó al establecimiento de estos gobiernos democráticos. Esto coincidió con la peor crisis financiera y productiva de la segunda posguerra, que acompañó al incremento de la deuda externa y a los pesados compromisos para su pago luego del virtual *default* que se produjera en México en 1982. La «década perdida», como se la llamó, impidió a los nuevos gobernantes democráticos una mayor holgura económica y márgenes políticos más flexibles para enfrentar los duros gravámenes financieros durante estos procesos de transición a la democracia.

Así estaban las cosas cuando se produjo el *big bang* del desplome de la Unión Soviética y la maduración de la tercera revolución científico-técnica, que cambió completamente, a fines de los años 80, el entorno político y económico mundial. Por eso es interesante mirar estos últimos veinte años como un tiempo en que se han amontonado acomodos y ajustes de tendencia tanto a escala global como regional. Ello explica el sustancial contraste con la racionalidad política que había prevalecido anteriormente.

Así, aunque los rasgos específicos varían de un país a otro, podemos encontrar en América Latina, actualmente, ciertas grandes tendencias que configuran un nuevo modo de hacer política, e influyen en una transformación de los regímenes políticos previamente existentes. Entre estos, comentaremos los que nos parecen los principales.

## **La definitiva consolidación de sociedades urbanas con fuertes componentes de globalización**

Hace apenas cincuenta años, muchas de las sociedades latinoamericanas tenían un fuerte predominio rural. Más de 50% de la población de nuestros países vivía en el campo. Eso explica, por ejemplo, que el programa de la Alianza para el Progreso del presidente John Kennedy, pusiera un énfasis principal en la realización de reformas

agrarias. Estas propiciaban no solo la redistribución de la tierra y el término del latifundio, sino una mayor modernización, con los consiguientes componentes de urbanización y transformación industrial. Esta tendencia se ha afianzado. En la totalidad de los países latinoamericanos prevalecen los asentamientos y el modo de vida propio de las actividades urbanas. En el campo, naturalmente, subsisten rezagos e injusticias que hay que resolver; pero estos ya no tienen la centralidad que tuvieron en el pasado. La agenda de estos países corresponde ahora con los problemas en las grandes ciudades, y se definen desde estas. En algunos, principalmente en los mayores —México, Brasil y Argentina—, hallamos una actividad industrial significativa. En todas partes hay una extensión de las actividades del sector terciario donde los servicios desempeñan una función cada día más importante. Esto, a su vez, facilita las estrategias de inserción global, que han multiplicado la vinculación de los países latinoamericanos con otras regiones del mundo, con las que, en el pasado, tuvimos una escasa relación.

América Latina, además, ha visto crecer incesantemente su población. En 1951, especialistas norteamericanos expresaron su sorpresa cuando advirtieron que la población total de nuestra región —en ese momento 152 millones de personas— había sobrepasado el número de habitantes de los Estados Unidos. Sesenta años después, en nuestros veinte países viven casi 600 millones de habitantes, el doble de ese país.

Aunque el nivel promedio de existencia ha crecido considerablemente en este tiempo, aumentando las expectativas de vida, los niveles de educación y las pautas de consumo, los países de América Latina no han podido llegar al umbral del desarrollo, lo que origina una agenda con nuevos y acuciantes problemas. Uno de los más dramáticos es el que provocan las desigualdades geográficas en muchos de ellos, principalmente en los de mayor tamaño. En forma creciente, se han producido allí manchones de progreso y atraso, de crecimiento y contracción productiva. Esto ha llevado a una compleja convivencia de dos países distintos en un mismo territorio nacional. Vemos un México del Norte, cercano a la frontera con los Estados Unidos, y cuyo epicentro es Monterrey, que tiene enormes diferencias con el México pobre y atrasado del Sur, que se inicia en el istmo de Tehuantepec, con sitios tan emblemáticos como Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Lo mismo ocurre entre los Estados pobres del Noreste brasileño, que viven el drama del *sertão* y frecuentes hambrunas y epidemias, por una parte, y los procesos modernos de desarrollo industrial de São Paulo, Paraná, Santa Catarina o Río Grande do Sul, por la otra. En Argentina encontramos el tremendo contraste entre la

Capital Federal que —como demostró un estudio del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) poco después de la crisis de 2001—, tiene una economía e ingresos comparables a los de Corea del Sur, mientras que las provincias más pobres del interior, como Formosa, Santiago del Estero o Corrientes, se hallaban apenas en el nivel promedio del África subsahariana, con un producto de menos de mil dólares per cápita.

Estas impresionantes desigualdades regionales alientan un imparable flujo migratorio desde estas áreas hacia sitios más prósperos. En la parte norte del continente, esto se expresa en el «sueño americano» que ya no solo tienen los pobres de México, sino también los de varios países de Centroamérica y el Caribe. En nuestra región, en cambio, esta expectativa tiene dimensiones más endógenas. Como muestra la propia biografía de Luiz Inácio (Lula) da Silva, su madre se desplazó de una de las comunidades nordestinas más pobres a los suburbios de São Paulo, para asegurar a sus numerosos hijos un destino mejor. Lo mismo hacen los argentinos que migran al Gran Buenos Aires, donde también han llegado centenares de miles de ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos. Esta tendencia ha adquirido otras expresiones binacionales, pero siempre acotadas al espacio suramericano. Tal es la situación de la masiva migración peruana a Chile en años recientes, solo frenada con el dinámico ciclo de crecimiento que últimamente ha experimentado la economía de Perú. Antes, lo mismo había ocurrido con los trabajadores colombianos que se desplazaban a Venezuela.

Una de las tareas urgentes que hoy se plantean, para tratar de superar la pobreza en la región es lograr un emparejamiento de las oportunidades en los territorios, que haga posible, otra vez, el objetivo de la integración nacional. En este sentido, se hace indispensable aplicar instrumentos de equidad territorial que lleven más inversión pública y proyectos productivos a los lugares más atrasados, donde los pobres viven. Este ha sido uno de los objetivos del exitoso Programa Bolsa Familia, que Lula aplicó en Brasil, y que en ocho años sacó de la pobreza a veinte millones de personas.

Las disparidades que hoy distorsionan a los países de la región obligan a aumentar la autonomía y las competencias de las entidades subnacionales —provincias, estados, regiones, así como también el gobierno de las grandes ciudades— y a incluir los procesos de descentralización como un capítulo importante en los proyectos de reforma del Estado. Hay que aprender a leer y a impulsar a nuestra América Latina en sus tres dimensiones territoriales: la regional, la nacional y la subnacional, equilibrando los proyectos y buscando su armoniosa compensación.

Esta creciente segmentación interna que en los tiempos de la globalización se ha producido en varios

países, tiene también enormes impactos culturales. En casi todas partes, el segmento más influyente —que ya no es el primer decil, sino apenas el 1% más rico— ha accedido en plenitud a lo que Fernando Fajnzylber, llamaba el «consumo cósmico». En él prevalecen, junto al estilo de vida, muchas de las pautas y niveles de innovación tecnológica propias de los países desarrollados. Estos grupos tienen mucho más contacto con sus pares de Nueva York, Tokio o Ginebra, que con el resto de la población de sus países, de tal modo que solo en un sentido muy lato siguen perteneciendo a sus comunidades nacionales.

### **Los límites del afianzamiento de la democracia liberal**

Ya hemos señalado que, desde los años finales de la Guerra fría, en nuestra región se fueron consolidando los gobiernos democráticos. Aquí estamos hablando de la implantación de un piso democrático mínimo, lo que Robert Dahl denominó «poliarquía», un Estado con consensos acerca de los derechos políticos de los ciudadanos, y las competencias para el funcionamiento legítimo de las autoridades. A la luz de esta dimensión básica de los procesos democráticos en los países latinoamericanos, se ha progresado en materia de elecciones libres, del reconocimiento del pluralismo ideológico y se ha logrado una relativa independencia entre los poderes públicos del Estado. El gran problema que tenemos hoy es que la utopía democrática, a la que se adhirieron muchas organizaciones sociales en la etapa de lucha contra los regímenes autoritarios, abordaba otras dimensiones complementarias que no se han emprendido, tales como una cultura del reconocimiento de la diversidad como algo legítimo y enriquecedor; o, más aún, de la democracia como un régimen político que debe responder por la satisfacción generalizada de las necesidades de los ciudadanos, asegurándoles «pan, trabajo, justicia y libertad» de acuerdo con la hermosa consigna que movilizó a los opositores de Augusto Pinochet, en Chile.

Se registra así una brecha creciente en muchos de nuestros países en que la democracia ofrece una oportunidad de elegir a los gobernantes y de ejercer los derechos políticos fundamentales, pero no abre camino a un sistema incluyente en lo político social, ni participativo en cuanto a la adopción de aspectos centrales de las políticas públicas. Esta situación trae, como corolario, una creciente distancia de los ciudadanos con las autoridades y la política, un amplio descrédito de los partidos políticos y un juicio negativo sobre el quehacer de los parlamentos. A esto se agrega el impacto de las nuevas tendencias en el campo de las

comunicaciones, que pone el énfasis en los episodios negativos y favorece un enfoque coyuntural y de corto plazo. Hallamos una gradual sustitución del antiguo debate político —reflexivo, basado en una fundamentación ideológica y en la valorización de las perspectivas estratégicas— que tuvieron los países más avanzados del continente, por una mera difusión, abrumadoramente generalizada, de imágenes y mensajes simplificados en torno a temas de alcance coyuntural que se desvanecen uno tras otro. Esta situación se vuelve más compleja cuando va acompañada por déficit de participación ciudadana y por un cierto hermetismo ante las demandas de transparencia y sanción de los actos de corrupción en la esfera pública.

La reacción frente a este empobrecimiento democrático que, en algunos casos, llega a comprometer la legitimidad de los regímenes políticos, se produce, por otra parte, mediante canales no regulados institucionalmente. La participación solo recupera su lugar a partir de las convocatorias de las nuevas redes sociales, y en torno a una crítica por el aumento de las desigualdades y el retiro del compromiso público en muchos de los temas cruciales en la vida de un país. Esta tensión va originando, en muchos lugares, amplias manifestaciones populares en las que, sin embargo, no participan ni los partidos ni los movimientos sociales históricos, que en el pasado tuvieron un papel protagónico en los avances democráticos.

Ir más allá de una democracia mínima e integrar las nuevas demandas y tendencias que, masiva pero desorganizadamente, provienen del mundo social, ha pasado a ser una de las tareas cruciales para la valorización de la democracia y la política, en muchos países latinoamericanos.

Aunque el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, así como el intento de golpe en Ecuador de octubre de 2010, colocan algunas sombras, la tendencia prevaleciente es la del mantenimiento en el poder de los gobiernos emanados de elecciones legítimas. La verdadera amenaza, que conlleva riesgos de ingobernabilidad política, se liga a los problemas de legitimidad de los gobiernos existentes. Hace unos años, la encuesta Latinobarómetro, que se realiza en las principales capitales del continente, estableció que 44% de los ciudadanos latinoamericanos estaba dispuesto a aceptar gobiernos no democráticos si estos se mostraban capaces de enfrentar temas cruciales de la agenda política y social, como los de inseguridad, desempleo y pobreza. Ediciones posteriores de dicha encuesta han mostrado una reducción significativa en dicho porcentaje, pero los síntomas de descrédito de las autoridades y las políticas públicas, la falta de adhesión y reconocimiento a los partidos políticos, el recelo a la gran prensa y a las entidades corporativas que expresan

**Las disparidades que hoy distorsionan a los países de la región obligan a aumentar la autonomía y las competencias de las entidades subnacionales —provincias, estados, regiones, así como también el gobierno de las grandes ciudades— y a incluir los procesos de descentralización como un capítulo importante en los proyectos de reforma del Estado.**

los grandes negocios, subsisten. Encontramos en muchos lugares un agotamiento —y a veces hasta una ausencia— de proyectos nacionales, y el ascenso de un ambiente entrópico y negativo por parte de amplios sectores ciudadanos que oscilan entre la apatía y la protesta, pero que siempre dejan la sensación de un vacío político que no se sabe de qué modo se puede llenar, aunque su sola existencia resulta inquietante.

Así las cosas, el fortalecimiento de la convivencia política y el surgimiento de nuevas y mejores alternativas democráticas han pasado a ser el gran reto de muchos países latinoamericanos. Esto puede darse luego de un debate que conduzca a una reingeniería de las actuales coaliciones políticas o al surgimiento de nuevas entidades con mayor cercanía y convocatoria ciudadana. Pero de lo que no parece caber duda es de que el presidencialismo latinoamericano, tal como lo conocemos, así como la forma tradicional de «hacer política» en la región, ya no es viable y se acerca a un estado terminal.

### **Las transformaciones del movimiento social**

Un tema que se podría caracterizar como «el gran dilema» de los movimientos políticos progresistas latinoamericanos es el que se refiere al quehacer frente al movimiento social, en la mayoría de nuestros países. Esto tiene que ver con el hecho de que el paso de la segunda a la tercera revolución industrial ha marcado un debilitamiento de las organizaciones sociales tradicionales y la aparición de actores nuevos y de otro tipo, pero que aún no alcanzan su plena consolidación. En este tránsito, ha perdido espacio el discurso del protagonismo y hegemonía de la clase obrera en el movimiento popular.

La historia del siglo xx reforzó, entre las organizaciones políticas de izquierda, a los actores sociales que ahora podemos llamar históricos: el movimiento obrero, las organizaciones campesinas y la actividad de las federaciones universitarias desde el surgimiento de la reforma de Córdoba, en 1918. Los partidos de izquierda afianzaban su identidad y ligaban

sus plataformas al desarrollo del proletariado organizado y a las acciones de apoyo de campesinos y estudiantes. Así fueron ampliando su influencia hasta convertirse, en algunos países, en una alternativa de gobierno que nunca tuvo continuidad, pero que nos entregó una suerte de archipiélago de experimentos transformadores desde los que surgieron de la consolidación de la Revolución mexicana al ciclo transformador que iniciara el maestro Juan José Arévalo en Guatemala; desde el peronismo a la Revolución boliviana de 1952; desde la primera etapa de la Revolución cubana a la Vía chilena al socialismo de Salvador Allende; desde la Revolución nacionalista de los militares peruanos encabezada por el general Juan Velasco Alvarado hasta los experimentos progresistas en el Caribe de Michael Manley en Jamaica y Forbes Burnham en Guyana; desde las tentativas de recuperación territorial del coronel Omar Torrijos en Panamá hasta el intento renovador del partido New Jewel en Granada. El solo enunciado de estos proyectos muestra la variedad y, las más de las veces, escasa continuidad de las tentativas de la izquierda y el progresismo en América Latina y el Caribe, en el siglo pasado, hasta el término de la Guerra fría. Ahora bien, si se buscara un hilo conductor de estas variadas experiencias, este se encontraría en la estrecha asociación entre las organizaciones políticas que las dirigieron y un amplio movimiento social que logró su expansión en el momento en que estas alcanzaron el poder. Confirmamos esta impresión al revisar sus declaraciones de principios y sus programas de gobierno.

Este es precisamente el escenario que se ha desarticulado en la Posguerra fría. Desde el punto de vista de las transformaciones en el proceso productivo que caracterizan la tercera revolución científico-técnica, las principales son una fragmentación de las fases para la elaboración de los bienes y un aumento en la significación de las corporaciones transnacionales. Para producir un automóvil o un bien de consumo durable, ahora el diseño se hace en Italia, los componentes y piezas se pueden hacer en México o Corea, y en otro el ensamblaje para la comercialización, que se efectúa en múltiples mercados globales. Esto ha roto decisivamente la dinámica del conflicto de los

tiempos del diseño fordista, donde se sentaban a la mesa de negociación dos actores poderosos: la gran empresa y la confederación sindical, que negociaba por rama de actividad, o en términos más globales, las remuneraciones y prestaciones del mundo del trabajo. En la actualidad, esa dinámica ya no opera. Las centrales de trabajadores se han debilitado en todo el mundo y el número de sus afiliados ha disminuido. Las autoridades de las empresas, más pequeñas y especializadas, imponen sus condiciones en medio de la flexibilización laboral y el aumento del desempleo. Al mismo tiempo, ha disminuido la significación y el papel del mundo campesino y también la fuerza del movimiento estudiantil, que otrora fue determinante del cambio político latinoamericano.

Sin embargo, junto al debilitamiento de estas grandes agrupaciones, surgen otros movimientos sociales característicos del nuevo ciclo de cambio tecnológico: entidades que se ocupan de temas más concretos como el medio ambiente, y luchan en áreas como el cambio climático y la preservación de la biodiversidad; movimientos étnicos que demandan respeto a la identidad cultural, y a los derechos de los pueblos originarios; de género, que buscan el reconocimiento más amplio de la igualdad de derechos y oportunidades y una mejor distribución de las cuotas de poder; organizaciones que asumen las demandas de regiones y pueblos en contra del centralismo estatal o activos movimientos que reclaman por el derecho de los jóvenes al trabajo y a la integración social. En América Latina, se esbozan, cada vez con más fuerza, estos nuevos grupos y sus plataformas, pero aún están lejos de haber adquirido protagonismo y madurez. Además, hay que reconocer que a las fuerzas políticas de la izquierda no les ha resultado fácil entenderlos e incorporarlos en sus programas. Esto plantea la mayor dificultad que encaran quienes proponen la transformación social en el continente: ¿cómo pasar hoy del discurso —propio de la segunda revolución industrial— de la centralidad del movimiento obrero y sus luchas, a un escenario nuevo en que las viejas organizaciones sociales están debilitadas y aún no redefinen su nuevo espacio y programas, mientras las nuevas no acaban de consolidarse y plantearse una lucha por la hegemonía política? Y en este segundo segmento, ¿qué hacer para que estos nuevos movimientos asuman el papel central que los partidos políticos tienen en la búsqueda del poder?

Estamos viviendo un proceso de cambio en que, paradójicamente, por los buenos resultados económicos logrados por los gobiernos de izquierda y centro izquierda en la última década, amplias capas del mundo popular se han convertido en sectores medios. En estas sociedades crecientemente mesocráticas, esos grupos

demandan más consumo y movilidad social, pero ya no responden al protagonismo colectivo que en la vieja estructura de clases les asignaba la izquierda. Resolver este complejo «teorema político» —en términos de estrategia y programa— parece ser una clave que definirá su futuro.

## Los retos de la pobreza y la desigualdad

Las transformaciones estructurales producidas en América Latina —comenzadas en sus países más grandes y también en los de mayor dinamismo en su crecimiento— han elevado la importancia en la agenda de problemas ancestrales, como la pobreza y la desigualdad, pero hoy más acuciantes. Porque cuando en los países que crecen y se modernizan llegan al gobierno autoridades más sensibles que las de la era neoliberal de Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Fujimori, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, lo primero que aparece es la voluntad de superar los factores de atraso que afectan a los sectores mayoritarios. En este sentido, la llegada al poder de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile (1990), del Movimiento Bolivariano, de Hugo Chávez en Venezuela (1998), del Partido de los Trabajadores, de Lula, en Brasil (2002), del peronismo kirchnerista en Argentina (2003), del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, en Bolivia (2006), de Rafael Correa y su Alianza PAIS, en Ecuador (2006), de Fernando Lugo, quien a partir de su Movimiento de Resistencia Ciudadana forja la coalición que lo lleva al poder en Paraguay (2008), más el triunfo, en 2011, de Ollanta Humala, en Perú, deja a Colombia como el único país suramericano que ha mantenido gobiernos conservadores.

En este contrastante ciclo, la agenda social ha pasado a tener una importancia central. Los dramáticos frutos de la experiencia neoliberal —un aumento hacia 2001 del número de pobres a 221 millones de personas, de las cuales 99 millones eran indigentes— hizo de los temas de la pobreza y la desigualdad la mayor de las prioridades de la política regional.

Es necesario subrayar que se trata de dos asuntos situados en ámbitos distintos, ambos de enorme complejidad. El ciclo de crecimiento productivo, iniciado en 2003, cuando, por primera vez en casi cincuenta años, el promedio de crecimiento económico anual de América Latina llegó cerca de 5%, permitió a estos gobiernos con mayor voluntad política, plantearse esfuerzos nacionales para la superación de la pobreza dentro de nuevos diseños que se proponían simultáneamente la dinamización de las capacidades productivas y la inclusión social. Esto marcó un auge de las políticas sociales e introdujo numerosos



aprendizajes. Hoy día, sabemos que se puede superar la pobreza en un esfuerzo que combine el acceso de los pobres a los servicios sociales —agua potable, luz eléctrica, servicios de alcantarillado, telefonía— sobre la base de la acción del Estado; un incremento de la infraestructura social que rompa el aislamiento de las localidades apartadas y el rediseño de las diferentes políticas públicas para incluir en ellas la variable de la superación de la pobreza; el aumento de la capacidad de gestión de las autoridades públicas en las regiones y localidades en situaciones peores y, sobre todo, el impulso de proyectos productivos dirigidos a las áreas donde existe la mayor densidad de pobres. En números agregados, y pese al retroceso puntual que ocasionó la crisis económica iniciada en los Estados Unidos en septiembre de 2008, el número de pobres en la región se redujo hasta 167 millones, mientras que los grupos situados en la extrema pobreza disminuyeron a 64 millones.

Pero estos importantes logros no pudieron ser transferidos con la misma fuerza al campo de la desigualdad. Con la excepción de Uruguay, los otros dieciocho países, cuyo registro lleva CEPAL y cuyos resultados se publican en su informe *Panorama social de América Latina*, mantienen un Coeficiente de Gini con grados que muestran alta o extrema desigualdad, siempre con cifras superiores a 0,50 en una escala de 0 a 1. Así, a pesar de los mejoramientos relativos, la pobreza y la desigualdad son las dos mayores «enfermedades» de América Latina en la segunda década del siglo XXI. Enfrentar estas situaciones y resolverlas será un asunto crucial en las estrategias de desarrollo que apliquen los distintos gobiernos. A estas alturas, se han convertido en graves problemas políticos, de los que depende la gobernabilidad y hasta la viabilidad de varios países. No deja de resultar paradójico que el advenimiento de gobiernos más sensibles y eficaces en estos asuntos haya aumentado las demandas y exigencias que se les hacen, lo que acorta los plazos para desplegar una acción eficaz.

### **El resquebrajamiento de los ordenamientos jurídicos y la demanda de nuevos esquemas institucionales**

Toda sociedad, desde la más conservadora a la más revolucionaria, necesita para progresar un orden político estable y dotado de legitimidad. Esto tiene que ver con la emblemática «pirámide kelseniana», que define jerárquicamente las normas para el quehacer de las autoridades públicas y los ciudadanos, desde la cúspide de las reglas constitucionales hasta la base donde se sitúan los decretos y resoluciones del ámbito

administrativo. También en este terreno los grandes cambios recientes han introducido significativos desajustes, al privar de legitimidad y validez a las normas más antiguas y obsoletas, pero cuestionando, igualmente, textos sancionados hace escaso tiempo, en los que se habían depositado grandes expectativas para mejorar la situación.

En América Latina, a comienzos del siglo XX, la sabiduría popular definía a las Constituciones políticas como «unos libros negros que duran mucho tiempo, se cambian todos los años y se violan todos los días». Tal era la dinámica que nos llevaba a lo que el jurista francés Georges Burdeau definió apropiadamente como «el cesarismo empírico» de la región. Era impresionante la capacidad para elaborar y hacer aprobar constituciones admirablemente modernas, que luego nadie respetaba. Así, los expertos en derecho público de hace unas décadas acuñaron la expresión «disposiciones programáticas» para referirse a estas construcciones teóricas que resultaban prácticamente utópicas porque nadie tenía la menor intención de aplicarlas.

Con el inmenso cambio global de finales del siglo pasado, pareció que esta tendencia se corregía. En muchos países, desde el inicio de la década de los 90, se pusieron en marcha serios procesos de elaboración de nuevos y más amplios textos constitucionales, extensamente discutidos por organizaciones políticas y sociales a todo lo ancho del espectro ideológico. Así ocurrió en la elaboración de la Constitución de 1991 en Colombia, la de 1992 en Paraguay, la de 1998 en Ecuador y la Constitución Bolivariana de Venezuela en 1999. En todos estos casos se evaluó el resultado como ejemplar y se predijo que sería duradero. Sin embargo, a los pocos años —a veces por sus mismos autores— se consideró que se trataba de documentos que se debían modificar radicalmente.<sup>1</sup> En varios de los casos anotados, la aprobación de meditadas constituciones, extensamente discutidas, las más de las veces en asambleas constituyentes, no sirvió del todo para colocar las bases de un nuevo edificio constitucional, sino solo para recaer, a los pocos años, en la tentativa de revisar y mejorar este trabajo, al punto de que en Ecuador se aprobó una nueva Constitución en 2008; y en Venezuela, en 2009, se introdujeron decisivas enmiendas al extenso texto aprobado una década antes.

Pero el fenómeno del desajuste entre los ordenamientos jurídicos y las expectativas sociales es más extenso y abarca prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos. En algunos casos, como en Chile, se vive la frustración de no haber podido sustituir en plenitud la Constitución aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, mientras en otros, como en México, se levantan muchas voces pidiendo

una nueva Ley Fundamental, luego de que la histórica Constitución revolucionaria aprobada en Querétaro, en 1917, ha experimentado decenas de reformas a lo largo del tiempo, que exigen contar con un nuevo texto para enfrentar la cambiante realidad del país.

Todas estas situaciones imponen una reflexión sobre el valor y la oportunidad de emprender extensas enmiendas al sistema jurídico. Pareciera que el orden lógico de los factores fuera a empezar por definir las bases de un nuevo sistema político, alcanzar consenso acerca del funcionamiento de la economía, acordar las pautas para la inclusión social de sus ciudadanos y determinar la lógica de su inserción internacional. Una vez que se logre un amplio consenso sobre estos temas, el trabajo de remodelar un orden institucional que funcione tiene muchas más alternativas de éxito.

## Una nueva mirada sobre el proceso de integración

En medio de avances y fracasos que caracterizan a las dos décadas de la Posguerra fría, se ha producido una interesante revisión del proceso de integración regional, tanto en su dimensión económica como política. A pesar de que su historia comenzó en el momento mismo en que se consolidaron nuestras independencias, esta tiene un largo balance de frustraciones. El primer intento de constituir una Confederación de Estados, que replicara el modelo de la Unión Americana, se desbarató en el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826. Desde entonces, el tema de una mayor coordinación política ha sido una aspiración retomada por muchos intelectuales destacados, pero no ha tenido eco en los gobernantes y no ha avanzado en su realización. A eso se sumó, en el siglo xx, la propuesta, igualmente fallida en la esfera productiva y comercial, de establecer un Mercado Común Latinoamericano que impulsara el proceso industrializador en la región, a partir de un vigoroso mercado ampliado para los nuevos bienes que se elaboraban, tal como lo planteara CEPAL en su importante *Informe* sobre este tema en 1959.

Ahora, en medio de las condicionantes y oportunidades que plantea la globalización, muchos gobiernos han visto el esfuerzo integrador como una tarea de largo aliento que puede ayudar a resolver muchos de los problemas que hemos examinado. Igualmente, se comparte la sensación de que el mundo de la Posguerra fría es de grandes regiones económicas, donde tienen ventaja los grupos de Estados que combinan la cooperación con la competencia. Este es el caso de los países desarrollados asociados en la Unión Europea, los del Acuerdo del Asia del Pacífico —que tiene como referente al foro de Cooperación

Económica Asia-Pacífico (APEC) y, desde 2010, a la coordinación que forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China— y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), establecido en 1993. Muchos perciben, con una mirada pragmática, que América Latina podría ser la cuarta macro región económica del mundo, lo que le daría un mayor peso e influencia en los asuntos globales.

Pero el mayor impacto de este entendimiento se sitúa en la esfera doméstica. La integración económica, se comprende ahora, no es una restricción sino un complemento de las metas buscadas a escala nacional, en las diferentes estrategias de desarrollo de los países del área. No es tampoco un impulso único, como se pensó durante mucho tiempo, sino una búsqueda gradual de acuerdos que en alguna medida ya están en marcha, en entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en el más limitado Plan Puebla-Panamá, para México y Centroamérica o, en entendimientos de grupos de países como el Sistema de Integración Centroamericano o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en donde los dos mayores países sudamericanos —Brasil y Argentina— trabajan junto a las pequeñas economías de Uruguay y Paraguay. A ello se suman numerosos proyectos de cooperación a escala subnacional y nacional, que van estableciendo pequeños eslabones en el esfuerzo más amplio de integrar a toda la región. Eso origina algo que los expertos norteamericanos llaman *intermestic politics*, es decir, asuntos en que se cruzan intereses y decisiones internas con otras de alcance internacional, y que cada vez hace parte más activa del acontecer latinoamericano. Esta es una historia de pequeños éxitos que, hasta ahora, no se han apreciado ni valorado debidamente.

Dentro de una perspectiva más realista y estratégica, resulta claro que los esfuerzos de integración se han convertido en uno de esos factores que pueden dar salida a los muchos problemas y soluciones pendientes enfrentadas por los países latinoamericanos en sus esfuerzos de modernización y en los intentos para alcanzar su desarrollo.

Este sentimiento y esta constatación son particularmente válidos en América del Sur, un área que abarca doce países y más de 17,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Allí viven cerca de 400 de los 590 millones de latinoamericanos. En ese extenso territorio se almacena 40% del agua dulce existente en el planeta; los mayores espacios de biodiversidad del mundo están en las cuencas del Amazonas y el Orinoco; hay grandes recursos energéticos, un extenso mar patrimonial, variados minerales convencionales y estratégicos e importantes superficies agrícolas, aptas para cultivos tropicales y subtropicales, que pueden encontrar amplios mercados en una coyuntura global

Luis Maira

tendiente a afianzar el crecimiento estable de los precios de alimentos y *commodities*.

Siempre es bueno, al examinar los problemas de una determinada región del mundo, mirar también los cursos de acción que pueden emprender para resolverlos y lograr un estadio superior. De alguna manera, la integración regional es hoy día un proceso en marcha, pese a sus retrocesos puntuales y restricciones. De igual modo, constituye una oportunidad realista para progresar en la búsqueda de los objetivos que sus países intentan alcanzar consensualmente: reforzar la conectividad física para romper el aislamiento, a través de corredores bioceánicos; establecer una coordinación energética para asegurar la progresión y éxito de sus proyectos productivos; encarar conjuntamente los muchos esfuerzos pendientes para la superación de la pobreza y la desigualdad; establecer democracias más amplias y participativas, que aumenten la legitimidad de los gobiernos al abrir cauces a las inquietudes de la sociedad civil; asegurar los esfuerzos de la cooperación científico-tecnológica para insertarse en la sociedad del conocimiento. Y, finalmente, avanzar en una identidad colectiva que nos dé una nueva fuerza en el proceso de reestructuración del sistema internacional pendiente desde el término de la Guerra fría.

Los esfuerzos de integración —y esto ya se comienza a entender— no son, principalmente, un asunto de alcance internacional, sino algo que se juega en la voluntad política de los diversos gobiernos, en los acuerdos que se van logrando en cada país y en la capacidad de estos para alcanzar consensos que conviertan a América Latina en su conjunto, o a alguno de sus componentes internos —como puede ser América del Sur— en «una región» que hay que construir con tenacidad y lucidez.

## Nota

1. El primero en señalar la fugacidad de estas Cartas Fundamentales y el inevitable impacto negativo que este fenómeno acarrecaba al ensombrecer la validez del ordenamiento jurídico en los diversos países fue el jurista mexicano Diego Valadés, a quien debemos, también, interesantes reflexiones sobre la «dictadura constitucional» en América Latina. Véase Diego Valadés, *La dictadura constitucional en América Latina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, DF, 1994.

© TEMAS, 2011

# **El proceso de cambio en Bolivia: una lectura desde la economía política**

**Alberto Montero Soler**

*Profesor. Universidad de Málaga.*

La comprensión del proceso boliviano de transformación social y política exige del conocimiento previo de las particularidades propias de su economía, de sus modos específicos de producción y reproducción social, muy distantes de los patrones convencionales que, con mayor o menor intensidad, están presentes en los de su entorno. Ese conocimiento es necesario por cuanto dicha especificidad constituye un determinante ineludible de los márgenes de actuación del gobierno boliviano y de sus capacidades de transformación real de las condiciones sociales de su población, que, por otro lado, parte de la necesidad de rearticular las bases materiales de generación de riqueza y otorga carta de naturaleza, visibilidad y protección específica a las formas de producción comunitarias, practicadas desde tiempos ancestrales y que no han podido ser doblegadas por la extensión de las capitalistas.

En este sentido, este artículo parte de la exposición de las peculiaridades de la economía boliviana, de su carácter profundamente excluyente para la mayor parte de la población y de su naturaleza desestructurada, para analizar su incidencia sobre el proceso de cambio que

vive el país desde la llegada al poder del presidente Evo Morales, a comienzos de 2006.

## **Las bases desestructuradas de la economía boliviana**

La economía boliviana se caracteriza por la confluencia y superposición, sin apenas integrarse, de diferentes formas de producción que, en el mejor de los casos, llegan a algún grado de complementación. De ahí que sea necesario advertir que la mayor parte de ellas se mantiene alejada de los patrones productivos modernos —salvo en determinados sectores privilegiados, tradicionalmente en manos del capital transnacional. Esta estructura económica responde, en gran medida, a las características impresas por la dominación colonial sobre la estructuración autóctona. De ese proceso resultaron formas mixtas e intermedias de organización social y económica, las cuales, a su vez, con el desarrollo capitalista, han ido estableciendo relaciones y vínculos de comunicación entre sí, ya sea por el intercambio

económico o por el de las instituciones jurídico-políticas del Estado.<sup>1</sup>

El hecho de que la interrelación de los resultados de distintos modos de producción —con diferencias abismales en sus niveles de productividad relativa— se produzca, en la mayoría de los casos, a través del mercado, con el agravante de que el Estado prácticamente carece de capacidad para realizar acciones compensatorias en este, ha ido intensificando la desigualdad en las relaciones de intercambio. Esto ha provocado que se hayan marginado, cada vez en mayor grado, a las formas productivas relativamente más atrasadas, pero no por ello minoritarias en el país.

Por otra parte, las diferencias en términos de desarrollo de las fuerzas productivas se ven incrementadas por una desigual presencia del Estado y sus políticas a lo largo del territorio nacional. La razón fundamental es que la estructura estatal, heredada del período colonial, es de enclave; por ello el Estado solo ha estado y está presente en aquellas zonas en donde el capital transnacional o la oligarquía local han tenido intereses, vinculados por lo general a la industria extractiva y a la agricultura extensiva.

La consecuencia lógica de esta confluencia de modos de producción —en distintos estadios de evolución— y de un Estado carente de voluntad y/o capacidad niveladora, ha sido la supervivencia de diferencias y asimetrías brutales en todo el Estado boliviano y a todos los niveles, pero, sobre todo, en los que al bienestar de su población se refiere.<sup>2</sup> Esas asimetrías constituyen, en gran medida, la base material y objetiva que condiciona el conflicto social en Bolivia y que se encuentra en la raíz de la profunda desintegración de la sociedad o, por decirlo más suavemente, de la carencia de cohesión social que está asolando el país.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la coexistencia de formas de organización social y de producción tan diversas, que se interrelacionan de manera no igualitaria —la mayor parte subordinadas a las formas productivas y relacionales de carácter capitalista—, se encuentra en el origen de las tensiones sociales, territoriales, políticas y económicas que persisten en Bolivia.

Además, esta situación de desigualdad y tensión se ha visto acentuada, en lo que se refiere al predominio y dominación de las formas capitalistas de producción sobre las restantes, por el crudo proceso de ajuste estructural al que se vio sometida la economía boliviana desde la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado, el cual, por otra parte, está en la base del período de luchas populares que antecedió a la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) y que tiene sus principales hitos en la Guerra del agua y en la Guerra del gas, el denominado «ciclo rebelde».<sup>3</sup>

Ese proceso constituyó la respuesta neoliberal a los desequilibrios económicos que acaecería a principios de esa década y que hundieron sus raíces en el patrón de crecimiento impuesto tras la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952. El patrón se sustentó en la minería como elemento central de desarrollo de la economía nacional y de las relaciones comerciales con el exterior. De hecho —como destacan Horst Grebe y Carlos Toranzos—,<sup>4</sup> la actividad minera extractiva ha constituido para Bolivia, a lo largo de su historia, la principal actividad económica, la mayor fuente de excedente y la base del intercambio con el exterior para el suministro de divisas. Además, el proceso de nacionalización acometido a partir de la Revolución de 1952 se convirtió en la fuente de irradiación del capitalismo hacia el interior, sin que se lograra ningún tipo de mejoría en la inserción internacional del país ni en el desarrollo de la industria nacional.<sup>5</sup>

Hay que añadir que la reforma agraria de 1953 sería tan insuficiente como escasa, lo que provocó que el sector rural campesino se mantuviera en condiciones de severo atraso.<sup>6</sup> Esto dará lugar a dos efectos perniciosos y perdurables sobre la estructura económica del país. Por una parte, incentivará el flujo migratorio de los habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades con el fin de buscar mayores ingresos. Estos, enfrentados a la situación de crisis generalizada que experimentara el país desde finales de los 70, caerán en las redes del trabajo informal.

Por la otra, para aquellos campesinos que se mantienen en el ámbito rural, supondrá la necesidad de activar estrategias de supervivencia que permitan complementar sus ingresos con servicios de carácter personal, minería, comercio, etc. Así se ha ido generando un fuerte tejido económico de carácter microempresarial y un proceso de especialización gradual que hacen que lo rural no se limite exclusivamente a lo agropecuario. También hay que destacar el establecimiento de redes económicas muy tupidas con la vida económica urbana, a través de un amplio sector poblacional de origen rural, pero con importantes ramificaciones comerciales y productivas en todas las grandes ciudades del país.<sup>7</sup>

Los desequilibrios de este patrón de crecimiento tardaron en manifestarse, como consecuencia de que la década de los 70 fue un período de crecimiento sustentado sobre el aumento de los precios del estaño y del petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, ello fue insuficiente para financiar el monto del volumen de importaciones necesario para preservar las altas tasas de crecimiento producidas a nivel interno. Por lo tanto, se incrementó el déficit comercial y el recurso al endeudamiento externo como forma prioritaria de financiación que, con la caída de los precios de las materias primas junto con la elevación

generalizada de los tipos de interés a finales de esa década coadyuvaron al estrangulamiento externo de la economía boliviana.

Una grave recesión haría acto de presencia a partir de 1982. El peso de la deuda externa era ya insostenible.<sup>8</sup> A ello hay que sumar la caída de los ingresos del Estado —provenientes, en gran medida, del sector exterior—, lo cual generó un déficit público que, financiado a través del recurso al Banco Central, terminó por producir un proceso hiperinflacionario que asoló el país.<sup>9</sup>

La respuesta a la crisis se articuló en dos dimensiones diferenciadas, pero con una característica común: fueron las políticas neoliberales más intensas que se aplicaron en todo el continente durante esos años infaustos. Así, por un lado, se planteó un plan de estabilización orientado, en lo fundamental, a recuperar la estabilidad de precios, tanto internos como externos, por la vía de la apertura externa de la economía, la reestructuración del sector público y la intensificación de la desregulación del mercado de trabajo. Y, por otro, un proceso de ajuste estructural de la economía boliviana en sentido estricto sobre la base de la profundización en el sector primario, la privatización y venta al capital transnacional de las principales empresas públicas y con la continuación en el ajuste sobre el trabajo y el definitivo desmantelamiento del sector público.<sup>10</sup>

Los hitos de ese proceso están perfectamente delimitados. En primer lugar, se aprobaron la Ley de Inversiones, en 1990, las Leyes de Privatización, en 1992, y la Ley de Capitalización, en 1994. Las tres pueden considerarse las reformas legales más importantes del proceso de reestructuración productiva en el país y, por consiguiente, los pilares del ajuste neoliberal.

Un ajuste que, para más *inri*, ni siquiera consiguió revertir el lugar de Bolivia en el espacio económico mundial, como país exportador de materias primas con escaso valor añadido. De hecho, el paso del tiempo solo ha dado lugar a modificaciones en el tipo de productos exportables (plata, estaño, soja o gas) y en los modos de administrar el patrón de crecimiento, siempre al servicio de la lógica de acumulación capitalista mundial y en función del espacio residual que Bolivia ocupaba dentro de esta.

Bolivia ha cambiado varias veces de modelo económico, pero nunca ha intentado transformar realmente su patrón de desarrollo.<sup>11</sup> Y, lo que es más grave, la crisis de la deuda y los problemas de la economía boliviana condujeron a que el período 1985-2005 estuviera dominado por la ofensiva de las políticas neoliberales que perpetuaron su dependencia externa y el patrón de desarrollo extractivista, esto es, las bases esenciales del subdesarrollo boliviano. En esta ocasión, el patrón productivo exportador se centró en dos

materias primas y en dos destinos fundamentalmente: el gas a Brasil y la soja a la Comunidad Andina.

Asimismo, han persistido prácticamente inalterados los fundamentos básicos del patrón de crecimiento de una economía monoprodutora para la exportación: la explotación de recursos naturales —renovables o no— con muy poco valor añadido; una elevada concentración de las exportaciones en este tipo de bienes —cuya producción suele ser intensiva en capital, pero no necesariamente en progreso tecnológico, y que, además, absorben una mano de obra de muy baja cualificación—; alta dependencia de las importaciones, que sí incorporan valor agregado con los consiguientes desajustes en la balanza comercial cuando los términos de intercambio se desequilibran; una dependencia del ahorro externo como consecuencia de las salidas masivas del interno, derivadas del pago de la deuda y de la expatriación de beneficios.

Es evidente que un patrón de crecimiento de esta naturaleza carece de todo futuro. Está condenado, como se ha señalado, a perpetuarse en su condición dependiente y, por consiguiente, es incapaz de transformar las riquezas existentes en el país en mayores cotas de bienestar para su población.

La situación se ha visto agravada porque, con independencia de su signo político, las estrategias económicas desarrolladas por la mayor parte de los gobiernos bolivianos durante los últimos años han sido incapaces o no han tenido la voluntad de alterar ese patrón de crecimiento y, con ello, las condiciones de producción y de reproducción de la mano de obra boliviana, y sus estándares de vida. No se ha avanzado hacia una progresiva industrialización de la producción; no se han articulado cadenas productivas que se extiendan a lo largo de todo el proceso; no se ha fortalecido e integrado la producción primaria con la de transformación; y el deterioro de las relaciones laborales y salariales de los trabajadores dio lugar a la expulsión de muchos de ellos hacia el sector informal de la economía.

De esta suerte, la economía boliviana ha sido caracterizada por Gray como de «base estrecha» entendiéndose por tal una configuración de la estructura productiva en la cual la mayoría de las empresas cuenta con menos de cinco trabajadores y, aunque dan empleo a la mayor parte de la fuerza laboral (83%), su aportación al ingreso bruto nacional es mínima (25%); mientras que, en el otro extremo, se encuentra un reducido número de empresas con más de cincuenta empleados, que genera la mayor parte del ingreso nacional (65%).<sup>12</sup>

En suma, la economía boliviana está marcada por una serie de condicionantes de carácter estructural que se manifestaron con mayor rotundidad tras la crisis de los años 80 y han pervivido hasta ahora con desigual

intensidad; y marcan, a su vez, todas las luchas de resistencia articuladas desde los 90, que explican, en definitiva, el acceso al gobierno de Evo Morales y el MAS.<sup>13</sup> Son, principalmente, los siguientes:

- a) La orientación primaria de la producción, que redundaba, a su vez, en la escasa diversificación de sus exportaciones, limitándola, en lo fundamental, a productos agropecuarios, minerales e hidrocarburos y algún agroindustrial. Evidentemente, la concentración de la actividad en esos sectores provoca que la economía boliviana sea muy dependiente tanto de las condiciones vigentes en los mercados internacionales, como de las condiciones ambientales y meteorológicas.
- b) Una insuficiente infraestructura de servicios públicos tales como energía eléctrica, agua y viales, lo que incide sobre el transporte y comercialización de la producción nacional y dificulta la conformación de un verdadero mercado interno.
- c) Una estructura productiva muy heterogénea, poco articulada, con escasos niveles de transformación y procesamiento y con diferentes posibilidades de incorporación de progreso tecnológico y de acceso a financiación. Conviven unidades productivas pequeñas y medianas con grandes empresas, por lo general transnacionales. Tal heterogeneidad se convierte en un elemento que dificulta la creación de cadenas productivas que integren las diferentes etapas del proceso hasta su comercialización final.
- d) El predominio de una gran cantidad de unidades productivas muy pequeñas con dificultades para acceder a fuentes de financiación y, por consiguiente, para incorporar mejoras tecnológicas básicas.
- e) La estructura de la propiedad de la tierra y su distribución es muy desigual. Coexisten grandes latifundios altamente improductivos —fomentados por una legislación de derechos sobre la tierra que favorece la concentración y el acaparamiento— con zonas en donde la excesiva parcelación deriva en unidades que solo permiten la subsistencia de quienes la trabajan o, en el mejor de los casos, cuando se generan excedentes, solo posibilitan una parcial vinculación de los pequeños productores agropecuarios con el mercado.
- f) La ausencia o extremada debilidad de instituciones de apoyo a las actividades económicas nacionales que faciliten la difusión e incorporación de tecnología y el aumento de la productividad; la asimetría en el acceso a la información acerca de la obtención de recursos; un excesivo burocratismo por parte de la Administración Pública, el cual facilita comportamientos corruptos, que, si bien revisten una naturaleza institucional, su persistencia en el tiempo los ha convertido en estructurales.

Todas las políticas neoliberales aplicadas desde 1985 no solo no han contribuido a la superación de estos problemas estructurales, sino que muchas de ellas los han agravado. De hecho, un punto de influencia clave de la crisis de legitimidad que se produciría en 2003 fue el sentimiento generalizado de que la política económica llevada a cabo desde 1985 no solo había fracasado en su lucha contra los problemas estructurales del país; sino que parecía haberlos acentuado.<sup>14</sup>

La economía no siguió creciendo como lo hizo en los primeros momentos, tras la aplicación del paquete de medidas de ajuste y estabilización neoliberales. Además, el Estado había perdido gran parte de su margen de maniobra para articular políticas públicas tendientes a subsanar los referidos déficit estructurales. Baste señalar que, para principios del siglo XXI, el pago de los sueldos de los funcionarios, el coste de las pensiones y el de la deuda interna y externa sumaban casi 90% del gasto público, lo que expresa el escaso margen de maniobra con el que cuentan los gobiernos en Bolivia para la inversión pública y para el diseño y aplicación de políticas de bienestar social.

Todo ello indica que el modelo económico neoliberal no ha contribuido en nada a resolver los problemas estructurales del país ni a reducir los niveles de desigualdad y pobreza existentes. Si algo queda claro es que los beneficios del crecimiento económico derivados del proceso de capitalización, se distribuyeron de un modo en extremo desigual entre los distintos grupos sociales, y beneficiaron más al sector empresarial que al resto de la población.<sup>15</sup>

En este sentido, los crecientes niveles de desigualdad han conferido una importancia cada vez mayor a conceptos más éticos de justicia económica, y a la necesidad de crear una nueva sociedad sobre una base totalmente distinta y que tenga en cuenta, por fin, la tremenda diversidad social, económica y cultural de Bolivia. Se debe entender que cualquier avance hacia la reversión de las condiciones de vida de la mayor parte de la población boliviana necesita no solo tener en consideración los déficit estructurales recién detallados, sino también la diversidad de formas de organización de la producción existentes en el país y la complejidad de las formas de interrelación entre ellas.<sup>16</sup>

Esa diversidad refleja una economía estructuralmente heterogénea en sus formas de producir, consumir e intercambiar; coexisten en ella diversos modos de producción o, lo que aún es más interesante y complejo, llegan a superponerse diversos tiempos históricos a la vez.

Así, la heterogeneidad no solo se circunscribe a diferencias tecnológicas o a manifestaciones de identidad cultural u organización socio-política, sino que implica también la existencia de distintas

racionalidades y patrones culturales en el sentido más amplio del término, aquel que se refiere a la relación con la naturaleza y el establecimiento y la utilización de medios de vida.<sup>17</sup>

Es por ello que cualquier análisis de la realidad social y económica boliviana debe partir —según Roberto Laserna— del

reconocimiento de que en Bolivia hay distintos sistemas de valores y de metas sociales, a los que también corresponden diversos comportamientos, medios y procedimientos [...] Esas diferencias ponen de manifiesto la heterogeneidad estructural como un rasgo definitorio del modelo económico boliviano.<sup>18</sup>

## El momento de la ruptura: la Asamblea Constituyente

La exposición precedente nos permite entender las dificultades estructurales a las que se enfrentó Evo Morales una vez que accedió a la presidencia, en enero de 2006, y se convocó, cumpliendo con su promesa electoral, una Asamblea Constituyente con el objetivo de superar la Constitución en vigor y, con ella, el pacto social que mantenía condenada a la pobreza a la mayor parte de la población boliviana. Fue con su llegada al poder y su activación del poder constituyente cuando todas las tensiones emergieron de forma abierta y se convirtieron en el sustrato sobre el que debía modificarse el marco relacional en el que tienen lugar las interacciones entre las distintas formas de producción señaladas en el epígrafe anterior; incluido, por supuesto, el propio papel del Estado en la economía.

La elección de los miembros de la Asamblea Constituyente se produjo en julio de 2006; sin embargo, antes, Evo Morales ya había tomado algunas decisiones que —más allá de su incidencia efectiva en la transformación del modelo de desarrollo boliviano— tenían una carga simbólica significativa y, en consecuencia, contribuyeron a fortalecer la percepción de la población de que se apostaba por superar el patrón de desarrollo colonial y neoliberal. La más relevante de esas medidas fue el decreto de nacionalización de los recursos hidrocarbúricos del país por la vía de nacionalizar la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y, por la de forzar la migración de los contratos de explotación de las empresas transnacionales del sector, las cuales revestían la forma jurídica de riesgo compartido, hacia los de prestación de servicios.<sup>19</sup> La diferencia es sustantiva, por cuanto, con esa migración, se conseguía que las transnacionales perdieran sus derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en las distintas fases del proceso, y pasaran a meras operadoras del servicio de YPFB, a cambio de una retribución variable sobre los ingresos del negocio.<sup>20</sup>

Sin duda, es la celebración de la Asamblea Constituyente el hito esencial en el proceso de refundación de Bolivia emprendido por Evo Morales y el gobierno del MAS. La refundación significaba, en esencia, que los constituyentes se enfrentaban a una tarea ímproba, por cuanto debían elaborar una Carta Magna que recogiera, sin eufemismos, la pluralidad, diversidad y heterogeneidad de la realidad boliviana. A partir de ahí, y una vez reconocida tanto esa diversidad como las relaciones de dependencia y dominación subyacentes, el texto constitucional debía tratar de trascender y contribuir a transformar un modelo de organización social, económica, política y cultural sustentado en el predominio de los modos de producción y reproducción social minoritarios, pero dominantes, que a los mayoritarios.<sup>21</sup>

La superación de ese estado de cosas no tenía por qué significar, necesariamente, su inversión radical y que los dominados pasaran a la condición de dominantes. La tarea era aún más compleja porque debía buscar, si realmente tenía pretensión transformadora y voluntad de perdurabilidad, la articulación armoniosa de esas distintas formas de organización social y económica y su complementación. En consecuencia, debería ser una nueva Bolivia, mucho más integrada e integradora; refundada sobre unas bases no excluyentes, como lo habían sido hasta ahora.

La aspiración de la gran mayoría del pueblo boliviano era, por lo tanto, que el texto que surgiera de la Asamblea Constituyente permitiera, por fin, no solo la refundación de Bolivia, sino también su definitiva descolonización. En materia económica, ello se traduciría en la necesidad de una transformación en el balance de su estructura productiva, dominada por los desequilibrios y la dominación del modo de producción capitalista sobre los restantes. En este sentido, era necesario sentar las bases de un cambio radical en el patrón de acumulación existente, y establecer las normativas desde las que el gobierno pudiera, a continuación, impulsar políticas de transformación estructural del modelo económico.

El desarrollo económico debía pasar por una comprensión más profunda que trascendiera el mero concepto de acumulación y que solo adquiriría sentido pleno si, al tiempo que mejoraba las condiciones de vida de toda la población, se sustentaba sobre amplia participación y deliberación, de tal forma que comunidades y pueblos pudieran decidir las prioridades, los contenidos y las expectativas de su futuro, desde sus valores culturales y su imaginario colectivo.

Una economía que basa la subsistencia de la mayor parte de su población en formas de organización económica de naturaleza claramente no capitalista —que tienen una inserción muy limitada y descompensada en las estructuras mercantiles de producción e



**La economía boliviana se caracteriza por la confluencia y superposición, sin apenas integrarse, de diferentes formas de producción que, en el mejor de los casos, llegan a algún grado de complementación. De ahí que sea necesario advertir que la mayor parte de ellas se mantiene alejada de los patrones productivos modernos.**

intercambio y que, además, conviven en un contexto que profundiza la desigualdad y dominación de una sobre las restantes— solo puede comenzar a superar las asimetrías si, al mismo tiempo que se visibilizan todas, se empieza a ofrecer un tratamiento diferenciado en favor de las más atrasadas.

Así, no solo se trataba del reconocimiento y la visualización de lo que hasta entonces se había tratado de mantener oculto por la vía de no nombrarlo, sino que se revirtiera una situación que, basada en ese ocultamiento, había servido para acrecentar la preminencia de una de esas formas de organización económica —la mercantil capitalista— sobre las demás.

Y, por último, hay que valorar que los constituyentes se enfrentaban con la posibilidad de orientar el desarrollo económico del país hacia aquellos objetivos e introducir, con ello, una línea de quiebra en el discurso dominante en el que el desarrollo económico, medido a través de alguna macromagnitud, se convierte en un fin en sí mismo.

Es ahí donde la concepción del «vivir bien», propia de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia, aparece como el referente sobre el que se podría hacer girar todo el sistema económico en tanto va más allá de la compartida satisfacción de necesidades materiales y económicas y, por lo tanto, del concepto occidental de «bienestar». Así, el «vivir bien» debe ser entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.<sup>22</sup>

Esta es una noción que ha nutrido el sentido de la vida en las comunidades originarias de Bolivia y, por lo tanto, constituye su referente más cercano cuando se trata de orientar la organización social y económica de las comunidades. Por consiguiente, era lógico que los constituyentes se plantearan si ese mismo objetivo y, en definitiva, esa forma de ser y estar en el mundo podrían convertirse también en lo que orientara y diera sentido al conjunto del sistema económico.

El «vivir bien» no supone, pues, un modo de comportarse en comunidad, sino también de relacionarse con la naturaleza, respetando sus ciclos y evitando su destrucción; implica eliminar las

estructuras de dominación cultural y de discriminación racial y sustituirlas por el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre las culturas que conviven en una misma área geográfica, buscando favorecer su interacción, complementariedad y reconocimiento mutuo. Y todo ello, además, en un marco de democracia participativa, con implicación directa de las comunidades en la toma de decisiones sobre las cuestiones que las afectan.

Evidentemente, el avance hacia el buen vivir exigía algo más que un nuevo texto constitucional. Ante semejante tarea, era necesario que se instrumentaran políticas económicas alternativas para configurar de manera progresiva un nuevo paradigma económico que superara las viejas trampas del desarrollismo. Era fundamental entender que sería de todo punto contraproducente que el cambio los últimos objetivos económicos propuestos en la Constitución no viniera acompañado, simultáneamente, de una modificación de los medios para alcanzarlos, esto es, de las políticas económicas.

Con la vista en semejantes fines, la nueva Constitución política del Estado ha implantado en primer lugar, al menos formalmente, una nueva lógica de la economía: la comunitaria, como mecanismo fundamental para dejar atrás el sistema colonial y neoliberal imperantes. A su vez, se le ha otorgado al Estado un papel protagónico en la economía tanto para reajustar los desequilibrios ya existentes como para propulsar esa nueva lógica en todas las relaciones económicas que pudieran resultar determinantes para alcanzar el «vivir bien» del pueblo boliviano. Por tanto, deberá desempeñar un papel clave en el cambio de régimen de acumulación, asentar las bases para la democratización de los medios de producción e intervenir abiertamente en el ámbito del pacto social y de la concreción de la comunidad social y política, así como modificar sus límites, y las relaciones internas que la definen y realizar potentes políticas redistribuidoras tanto de la riqueza como de los propios medios productivos.

Como puede apreciarse, los retos a los que se enfrentaba la Asamblea Constituyente no eran pequeños y afectaban, por necesidad, los intereses de los grandes grupos económicos que habían dominado el país

durante siglos y habían puesto las instituciones públicas y el Estado, al servicio de un proyecto perpetuador de las estructuras de dominación coloniales y tremendamente excluyente; unos intereses que ya se manifestaron de manera oportuna cuando se constató que la redacción del texto constitucional avanzaba en la línea antes dicha y que los privilegios comenzaban a verse seriamente cuestionados. De ello puede dar fe tanto la excesiva duración del proceso constituyente como las dificultades que tuvo la aprobación definitiva del texto y, por último, el retraso que sufrió la convocatoria del referendo en el que la nueva Constitución política del Estado debía ser ratificada por el pueblo boliviano, y en el que no solo esta debía someterse a votación, sino también lo que se denominó «referendo dirimitorio» sobre la redacción concreta de uno de los artículos —del que no se había llegado a ningún tipo de acuerdo en el seno de la Asamblea— relacionado con la propiedad de la tierra.<sup>23</sup>

El 9 de diciembre de 2007, la Asamblea Constituyente aprobó el borrador de la que debía denominarse Nueva Constitución Política del Estado y lo remitió al Congreso Nacional desde donde se convocó la realización del referendo para el 4 de mayo de 2008. Los resultados fueron abrumadores: la Constitución resultó aprobada con 61,43% de los votos y fue promulgada por Evo Morales el 7 de febrero de 2009.

Bolivia disponía, por fin, de un texto constitucional en el que quedaría reflejada su tremenda diversidad, y desde el cual se podía comenzar la construcción de una nueva hegemonía política, a partir de una opción real de poder buscando un cambio social, político, económico y étnico profundo.

## **Rebelión oligárquica, derrota electoral y resistencias internas**

Antes de la aprobación de la Constitución, la oligarquía ya había activado sus mecanismos tradicionales de subversión —incluidos los más violentos— para tratar de frenar, precisamente, que esa opción de poder articulada en torno al indigenismo y las clases excluidas pudiera consolidarse y, con ella, la recuperación del Estado para emprender un proyecto en el que necesariamente sus intereses económicos y de clase se verían afectados.

A tal efecto, en septiembre de 2008, con la Constitución ya redactada pero aún no aprobada, y tras el triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio al que se sometió junto al resto de prefectos del país, el 10 de agosto de 2008,<sup>24</sup> se produjo una serie de actos de sedición en los Departamentos de la denominada «media luna» boliviana, auspiciada por sus propios

prefectos, todos ellos contrarios al proceso de cambio, y que situaron a Bolivia al borde de una guerra civil.

La derecha más conservadora y de rancio abolengo del país se lanzó a una estrategia de violencia, tan abierta como planificada, contra el poder elegido de manera legítima. Tal escalada de tensión apuntaba al golpe de Estado y encontraba en el gobierno una sorprendente apariencia de pasividad, de incapacidad de respuesta ante una violencia que, como es evidente, no solo carecía de las bases de legitimación que tradicionalmente habían tenido las revueltas populares frente al poder sino que también ponía al descubierto que la oligarquía estaba dispuesta a recurrir a la violencia explícita y directa —masacres de poblaciones indígenas, saqueos, paralización de comercios, etc.— para proteger sus privilegios y, en especial, los vinculados a la posesión y acaparamiento de la tierra.

En ese contexto fueron, en gran medida, los movimientos sociales y los campesinos quienes asumieron la responsabilidad de enfrentar la violencia desatada en el país, a través de la movilización de sus bases sociales rescatando así su capacidad de combate y resistencia desarrollada durante el «ciclo rebelde» de las Guerras del agua y del gas, reforzada por su nivel de conciencia política así como por la defensa de un proyecto propio para la refundación del Estado.

En cualquier caso, a la luz de los resultados del referendo revocatorio y del constitucional posterior, ese conflicto permitió visibilizar sus verdaderas entrañas. Así, más allá de la idea de que la confrontación se producía entre los departamentos de la «media luna» y sus demandas de mayores grados de autonomía frente a los de las «tierras altas», sus propuestas de cambio «andinocentristas» —que se distanciaban de los modos de producción y reproducción social del oriente boliviano—, el verdadero conflicto se dio entre el mundo rural y el entorno urbano, el cual constituye, a su vez, la síntesis más palmaria de la fractura socioeconómica y étnica en la que vive la sociedad boliviana

La tensión consiguió apaciguarse gracias a la presión campesina y popular, que actuó como vanguardia de la defensa de la integridad territorial y que no solo facilitó unas duras negociaciones entre el gobierno y los prefectos rebeldes, sino que, además, impulsó la convocatoria del referendo en el cual, finalmente, se aprobaría el texto constitucional, no sin haber sido sometido a algunas modificaciones sustantivas en la sede parlamentaria.

A pesar de la enorme victoria electoral de Evo Morales al ser reelecto para su segundo mandato con 64% de los votos en diciembre de 2009, nuevas turbulencias aparecieron en la escena nacional. Esta vez no tenían un enemigo común y extraño a las fuerzas del proceso de cambio, sino que se instalaban en el

marco del propio proceso y enfrentaban al gobierno con sectores sociales descontentos, debido a supuestos incumplimientos del mandato popular.

Las expresiones de ese descontento son ya varias: el rechazo inicial a un incremento salarial de 5%, dispuesto por el gobierno en mayo de 2010, y que se tradujo en los intentos de cooptación, por parte de este, de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes acabaron firmando el acuerdo salarial en contra de sus bases, tras diversos enfrentamientos en el seno de la organización sindical, que dieron como resultado su revitalización e independencia política frente al gobierno.

Al descontento sindical se unió el de los pueblos campesinos encarnado en la marcha emprendida desde Trinidad hasta La Paz por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) un mes más tarde, y tuvo como consecuencia la desatención gubernamental a sus propuestas de autonomía indígena para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y, por tanto, su denuncia de la vulneración de derechos colectivos y formas de participación política reconocidas en la Constitución.

Este descontento se enmarca en el contexto de una gestión de la política económica del país que sigue aferrada a la obsesión por el control de las principales macromagnitudes nominales (inflación, déficit público o tipo de cambio) y que no termina de dar el salto cualitativo que debe acometer si lo que desea es transitar hacia una sociedad orientada hacia el «vivir bien».

Prueba de ese distanciamiento en el que se sitúan, por un lado, las aspiraciones indígenas, campesinas y populares y, por otro, la gestión económica del gobierno fue el denominado «gasolinazo»: el intento de aumentar los impuestos sobre los combustibles para tratar de frenar, supuestamente, su contrabando hacia países vecinos —anunciado el 26 de diciembre de 2010 y abrogado apenas cinco días después tras una masiva movilización popular en contra de la medida, en todas las regiones del país.

Bolivia vive en estos momentos una situación de tensión propia de un proceso que lleva en su seno las demandas ancestrales de grupos sociales y étnicos que han sido las grandes víctimas de su historia y que, por primera vez, se consideran dueños de su destino y se han dotado de los mecanismos que entienden que les permitirían revertir la historia y construir, finalmente, un verdadero Estado plurinacional. El camino y el tiempo son ahora los suyos.

## Notas

1. Luis F. Baudoin, *El régimen económico en la nueva Constitución Política del Estado*, Estrategia, La Paz, 2007, p. 11.

2. Así, en el año 2000, el porcentaje de pobres en Bolivia era de 55,4 y la pobreza extrema alcanzaba a 45,2% de la población. En el área rural, ambos niveles suponían 87% y 75%, respectivamente; esos porcentajes eran aún más graves para la población indígena que habitaba en esas zonas: 89% y 78%. Por otro lado, en términos de desigualdad, el valor del Índice de Gini para Bolivia es de 0,57; así, 45% de los ingresos se concentran en la primera decila de la distribución, mientras la más baja solo aglutina 1% de estos.

3. Jesús González Pazos, *Bolivia. La construcción de un país indígena*, Icaria, Barcelona, 2007.

4. Horst Grebe y Carlos Toranzos, *Los estudios sobre el sector informal humano en Bolivia*, FLACSO-Bolivia, La Paz, 1988.

5. Véase Pablo Rossell y Pablo Poveda, *Reestructuración capitalista y formas de producción*, CEDLA, La Paz, 2004, p. 10.

6. Sobre la situación de las comunidades campesinas y rurales, véase Mamerto Pérez Luna, *¿El último capítulo? Posibles impactos del ALCA en las Comunidades Campesinas e Indígenas de Bolivia*, CEDLA, La Paz, 2004.

7. Luis F. Baudoin, ob. cit., p. 39.

8. La deuda externa había pasado de suponer 223% de las exportaciones en 1980, a 420% en 1984.

9. En 1985, la tasa de crecimiento de los precios fue de 11,57% anual.

10. Para una exposición centrada, en mayor medida, en los contenidos de los planes de estabilización y ajuste, véase Juan C. Requena *et al.*, «Ajuste estructural y crecimiento económico: evaluación y perspectiva del caso boliviano», *Revista de Análisis Económico*, v. 3, La Paz, 1992; y Ricardo Molero Simarro, «La privatización de los hidrocarburos bolivianos por el capital transnacional de 1996 a 2003. Razones para la nacionalización». Ponencia presentada al I Congreso de Economía del Desarrollo. Málaga, 2007, p. 8.

11. Así, entre 1900 y 1920, bajo el signo del liberalismo, el patrón de desarrollo se basó en el estaño. En 1937, tras la nacionalización de la Standard Oil y la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF), el patrón siguió siendo de naturaleza extractiva aunque dominado por un modelo más nacionalizador y nacionalista que daría lugar, ya en 1952, a la nacionalización del sector del estaño y la aparición de la importante Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La década de los 60 fue testigo del retorno de los planteamientos liberales y se abrieron los sectores de minería e hidrocarburos a la inversión privada, hasta que, en octubre de 1969, se nacionaliza la Gulf Oil. Véase George Gray Molina, «La economía boliviana “más allá del gas”», *América Latina Hoy*, n. 43, Salamanca, 2006.

12. George Gray Molina, ob. cit.

13. Véase Julio Humérez Quiroz y Hugo Dorado Aranibar, «Una aproximación de los determinantes del crecimiento económico en Bolivia. 1960-2004», *Revista de Análisis Económico*, v. 21, La Paz, 2006.

14. John Crabtree, «Desempeño económico, desigualdad y legitimidad política: Bolivia 1985-2003», en Pilar Domingo, coord., *Bolivia: fin de un ciclo y nuevas perspectivas políticas (1993-2003)*, Bellaterra, Madrid, 2006, p. 132.

15. *Ibidem*, p. 137.

16. Pablo Rosell y Pablo Poveda (ob. cit., p. 14) identifican la existencia de al menos tres formas de organización de la producción en Bolivia: la empresarial, la semiempresarial y la precapitalista.

17. Roberto Laserna, «Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del ch'enko. Una visión desde la economía política», *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*, n. 7, Caracas, 2004, p. 54.

18. Ídem.

19. Sobre el papel de las empresas multinacionales y transnacionales en Bolivia, véase Erika González y Marco Gandarillas, *Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio*, Icaria, Barcelona, 2010; y Alberto Montero Soler, «Transnacionales españolas en Bolivia: crónica de un saqueo», *Viento Sur*, n. 87, Madrid, 2006, pp. 5-14.

20. La distribución de la renta derivada de la explotación y venta de los hidrocarburos quedaba, a partir de entonces, de la siguiente forma: 18% en concepto de regalías (es decir, el porcentaje de los ingresos que se paga al propietario del recurso por permitir su explotación); 32% por Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) —ambos ya existían desde 2005—; y a ellos se sumaba ahora un impuesto de 32% que deberían pagar aquellas empresas que operaran en los grandes campos del país (San Alberto, San Antonio, Margarita, Itaú e Incahuasi), con producción superior a los cien millones de pies cúbicos diarios, certificada en 2005; en el resto de los campos —mucho menores, la mayor parte de carácter marginal y destinados a la producción de petróleo y gas para el mercado interno—, los impuestos se mantendrían en 50%, esto es, regalías más IDH.

21. Sobre el proceso constituyente y la discusión en torno al modelo económico que se deseaba construir para el país, véase Teresa Morales Olivera *et al.*, *Organización económica del Estado en la nueva Constitución política del Estado*, Enlace-Intermon Oxfam, La Paz, 2008.

22. Ministerio de Planificación y Desarrollo, *Plan Nacional de Desarrollo 2006*, La Paz, 2006, p. 10.

23. Más concretamente, la decisión se centraba en cuál era la extensión de tierra mínima para que una propiedad pudiera ser calificada como tal, si cinco mil o diez mil hectáreas.

24. En efecto, el 10 de agosto de 2008, el presidente, el vicepresidente y todos los prefectos del país, salvo la prefecta de Chuquisaca —por haber accedido a su cargo apenas unas semanas antes—, se sometieron a un referendo revocatorio a pesar de la negativa inicial de algunos de ellos —los de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz— a someter su mandato a dicha votación. Excepto los prefectos opositores de La Paz y Cochabamba, el resto de los mandatarios fueron ratificados en su cargo.

© TEMAS, 2011

# **Brasil 2011-2014: dos proyectos en disputa**

**Valter Pomar**

*Secretario ejecutivo del Foro de São Paulo y miembro del Directorio Nacional del PT.*

**B**rasil es un caso particular de un proceso más general en el cual las poblaciones latinoamericanas tratan de solucionar sus problemas principalmente por las vías electorales. Además, el país expresa otro fenómeno regional: los gobiernos conquistados por la vía electoral y en coalición con sectores burgueses actúan dentro de los marcos del capitalismo, aunque también puedan impulsar reformas de tipo estructural que apunten en dirección al socialismo.

El apoyo político requerido para la aplicación de semejantes reformas es muy superior al que se necesita para ganar elecciones y administrar el capitalismo.

La realización de cambios estructurales a partir de un gobierno electo es totalmente distinta a la de gobiernos conquistados por medios revolucionarios, aunque a veces las reformas sean de igual naturaleza.

A pesar de ello, y de que la izquierda aún se encuentra en una etapa de defensiva estratégica a nivel mundial, la experiencia brasileña —al igual que otras en América Latina y el Caribe— presenta un potencial objetivamente favorable para la reconstrucción de una alternativa socialista, lo que empieza por completar las tareas históricas de desarrollo de las fuerzas productivas

sociales, propias del capitalismo. Este texto comenta algunos aspectos de la experiencia brasileña.

## **Las clases sociales en Brasil**

La burguesía, que constituye cerca de 1% de la población brasileña, es la clase dominante de la sociedad. Se caracteriza por detentar la propiedad de los medios de producción y circulación y por la compra de la fuerza de trabajo de los trabajadores que no poseen capital, medio a través del cual extrae su plusvalía, su lucro o su rentabilidad. Aunque disfruta de un alto grado de cooperación para el proceso de explotación y de confrontación con los que venden su fuerza de trabajo, no es homogénea y su existencia está marcada por un intenso proceso de competencia interna dentro de cada rama o sector y entre estos.

Durante la década de los 90, cuando predominaron la ideología y la política neoliberales, la burguesía brasileña sufrió un intenso proceso de transferencia patrimonial de unos sectores a otros, y el capital o burguesía financiera conquistó la hegemonía en el seno

de la clase; de ahí que las burguesías agrícola, industrial y comercial pasaran a convertirse en sus sirvientes.

A fines de los años 90, al hacerse evidente la desnacionalización de una porción considerable del parque industrial brasileño y con las crisis internacionales que afectaron con fuerza a Brasil, una parte de los restantes sectores de la burguesía pasó a oponerse a la hegemonía de la financiera y a buscar una salida para la crisis estructural brasileña.

La pequeña burguesía urbana representa una masa poblacional muy diversificada y dispersa. Está compuesta principalmente por pequeños industriales y comerciantes, es decir, propietarios de medios de producción en pequeña escala. A veces utilizan de manera exclusiva su propia fuerza de trabajo o la familiar. Otras, explotan la comprada en el mercado. Su existencia padece las influencias tanto de las imposiciones de la competencia del gran capital como de la falta de protección y estímulo del Estado. Por lo tanto, están signados por la inestabilidad y buscan acceder a la burguesía, pero se hallan expuestos a la insolvencia y a convertirse en trabajadores asalariados.

La pequeña burguesía agrícola, también diversificada y dispersa, está compuesta por agricultores o criadores individuales y familiares, propietarios de sus medios de producción tales como la tierra y los implementos agrícolas. Sus miembros se enfrentan constantemente a las incertidumbres del clima, las plagas, la falta de créditos, las dificultades de comercialización y, sobre todo, las amenazas de expropiación por parte de los agronegocios, y a convertirse, en el mejor de los casos, en pequeños rentistas y, en el peor, en campesinos sin tierra o en trabajadores asalariados urbanos.

Aún existen en Brasil cerca de dos o tres millones de campesinos sin tierra, provenientes en su mayoría de propiedades rurales expropiadas por los agronegocios o en virtud de deudas bancarias y comerciales. Su conversión en pequeños productores agrícolas efectivos enfrenta la resistencia de la burguesía agrícola, la cual pretende completar la ocupación de todas las tierras cultivables para la producción de mercancías, así como la de los remanentes del antiguo latifundio, que no quieren que sus tierras sean repartidas, y la del conjunto de la burguesía, que desea mantener a los sin tierra como parte del ejército de reserva de mano de obra barata.

Los trabajadores asalariados o proletarios volvieron a sumar cerca de 40 a 45% de la población brasileña después de la reanudación del crecimiento económico en el primer decenio del siglo XXI. Su característica es que no son propietarios de sus medios de producción y circulación y, para sobrevivir, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los propietarios de dichos medios a cambio de un salario.

En la década de los 90, una considerable porción de esos trabajadores quedó desempleada y se convirtió en parte del ejército de reserva industrial o fue dispersada por varias regiones del país, acompañando la relocalización o segmentación de plantas industriales y comerciales, con lo cual la clase de trabajadores asalariados perdió densidad y concentración de fuerza. A partir de 2005, dio inicio una paulatina recomposición de esa densidad y de esa fuerza, cuyo resultado fue que retomara progresivamente un papel más activo en la sociedad.

Entre los trabajadores asalariados, los rurales permanentes aumentaron, desde hace algún tiempo sus filas a más de dos millones, a la par con el crecimiento de la cifra de agronegocios. En algunas zonas del país, sobre todo durante la cosecha, se incrementa el número de los temporales, muchos de los cuales son propietarios de medios de producción rural en otras regiones y se desplazan, con vistas a complementar sus ingresos. Tal proceso puede sufrir cambios importantes con el aumento de la utilización de máquinas para la recogida de cosechas que antes se realizaban de manera manual.

En las periferias urbanas habitan algunos millones de brasileños desprovistos de propiedades y de condiciones de trabajo; gran parte de ellos recurre, para sobrevivir, a medios antisociales de apropiación: robo, contrabando, prostitución, etc. Esa capa social, en general denominada «lumpenproletariado», tiende a reducirse si se acentúa el proceso de crecimiento.

## El Estado brasileño

El Estado brasileño está siendo reformado, desde su constitución, como instrumento no solo de control social, sino también como la prerrogativa de las clases dominantes. Sus principales mecanismos son los gobiernos ejecutivos y los parlamentos, los órganos estatales permanentes (como los que se ocupan de las relaciones exteriores y las fuerzas armadas) y el sistema judicial.

Desde el cese de la dictadura militar, en los años 80, esos mecanismos han estado sufriendo presiones para que sean democratizados y sirvan de instrumentos al servicio de la mayoría del pueblo. Pero en el curso del período neoliberal de los 90, la presión hacia su reducción a un «Estado mínimo» se volvió predominante y condujo a una privatización de los servicios públicos y de las empresas estatales, así como al desmantelamiento de los instrumentos estatales de planeamiento y control.

El sistema judicial se encuentra en una permanente crisis, ya sea porque no logra atender las demandas

judiciales en el lapso previsto por las propias leyes, o porque en todo momento salen a relucir los privilegios vitalicios de los miembros de ese poder, y los casos de abusos y corrupción. El poder judicial se niega a someterse al control social externo, legisla en beneficio propio y se arroga el derecho a legislar.

Las fuerzas armadas se retiraron —luego de los desastrosos resultados de sus veinte años de poder dictatorial— y perdieron la prerrogativa de hallarse directamente representadas en el primer escalón gubernamental, si bien siguen manteniendo el contenido tradicional conservador y reaccionario en la formación de sus oficiales y sargentos, y en el trato de los cabos y soldados. En su medio se encuentran aún vivos los conceptos nacionalistas de derecha.

La maquinaria burocrática gubernamental no ha abandonado todavía el concepto tradicional de que es la sociedad la que debe servirla y no al revés. Tarda en adaptarse a los nuevos tiempos y en varias oportunidades se ha constituido en un freno a la marcha de las políticas de carácter democrático y a favor del desarrollo.

## Las fuerzas políticas

Brasil posee una legión de corrientes políticas que representan distintos segmentos de la sociedad. A pesar de ello, al enfrentar la cuestión clave del desarrollo del país, se agrupan principalmente en tres grandes corrientes, que marcan la historia brasileña desde la primera mitad del siglo xx: la conservadora, la progresista y la democrático-popular.

La primera se caracteriza por defender un desarrollo capitalista sin la realización de reformas estructurales ni la difusión de los derechos democrático-burgueses, y por estar a favor de mantener al país uncido a los intereses de las potencias capitalistas. En su seno se puede distinguir una brecha entre los que defienden una mayor participación activa del Estado en la economía y los que no. De cualquier modo, esa corriente, dirigida por los que privilegian el Estado, fue hegemónica en Brasil durante la mayor parte del siglo xx, y sus impulsores fueron responsables por la industrialización de los años 30 y los 40 y, después, de los 60 y los 70. Incluso bajo gobiernos dictatoriales hubo un rápido crecimiento económico en paralelo con la conservación del latifundio, el incremento de las desigualdades sociales y la difusión de la miseria.

La corriente progresista defiende un desarrollo capitalista combinado con reformas parciales, democratización limitada, participación activa del Estado y cierta dosis de soberanía nacional y de política externa autónoma. Durante casi todo el siglo xx, además de ser minoritaria, dicha corriente estuvo bajo

la hegemonía de fuerzas burguesas que tuvieron como aliadas —en determinados momentos— a algunas fuerzas democráticas, populares y socialistas. El período de gobierno del presidente Juscelino Kubitschek, en los años 50, resulta representativo de esa tendencia, con un ambiente de relativa democracia política, crecimiento acelerado, pero también de conservación del latifundio y aumento de las desigualdades sociales.

La corriente democrático-popular está a favor de un desarrollo combinado de formas capitalistas y socialistas con participación activa del Estado, reformas estructurales profundas, amplia democratización económica, social y política, con una constante redistribución de la renta, soberanía nacional y política exterior autónoma. Aunque ha sido minoritaria durante la mayor parte del siglo xx, adquirió fuerza desde finales de la década de los 80, con la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) e incluso pasó a dirigir el bloque de fuerzas políticas y sociales defensoras de la corriente progresista, en virtud del proceso de divisiones internas en el seno de la burguesía.

Tales cambios en la situación de las fuerzas políticas parecieron indicar que se había producido una creciente polarización entre la corriente capitalista-conservadora y la democrático-popular y progresista. Sin embargo, en los 90, la ofensiva global neoliberal, asociada a la crisis del socialismo, la reestructuración del mundo del trabajo y la disminución de las movilizaciones sociales, introdujo profundas modificaciones en la correlación de fuerzas. Como resultado, el Partido de los Trabajadores (PT) y la corriente democrático-popular adoptaron de manera paulatina los objetivos programáticos de la corriente progresista como sus objetivos principales, con un mayor énfasis, no obstante, en las políticas sociales, democracia, soberanía e integración. En los 90, al igual que la primera década del siglo XXI, se reanimó la disputa entre la corriente conservadora, ahora sometida a la hegemonía de la burguesía financiera neoliberal, y la corriente progresista y democrático-popular, encabezada actualmente por el PT.

La hegemonía de la burguesía financiera sobre la corriente conservadora acentuó las tendencias más conservadoras y reaccionarias del desarrollo brasileño. Por una parte, estableció los antiguos preconceptos anticomunistas, que parecían ya enterrados. Por otra, generó nuevas escisiones en su propio seno, con lo cual sectores disidentes de la pequeña, la mediana e incluso la alta burguesía fueron fundamentales en la elección de Luiz Inácio (Lula) da Silva para la presidencia de la República en 2002 y 2006, y en la de Dilma Rousseff, en 2010.

La conquista de la presidencia de la República por parte de las fuerzas socialistas, progresistas y democráticas promovió un mayor grado de democracia,

**Aún existen en Brasil cerca de dos o tres millones de campesinos sin tierra, provenientes en su mayoría de propiedades rurales expropiadas por los agronegocios o en virtud de deudas bancarias y comerciales. Su conversión en pequeños productores agrícolas efectivos enfrenta la resistencia de la burguesía agrícola, así como la de los remanentes del antiguo latifundio y la del conjunto de la burguesía.**

una mejor calidad de vida, soberanía nacional e integración suramericana. Hoy hay más personas alfabetizadas, más servicios de salud, menos hambre y mayor derecho a las viviendas. El crecimiento económico reintrodujo la necesidad de industrialización, estimuló la creación de un mayor número de empleos y proporcionó jubilaciones menos degradantes.

Pero esos avances todavía no se han convertido en estructurales, no se transformaron en otro modelo de desarrollo, de tipo democrático-popular, que democratice la estructura de propiedad y genere un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. En la práctica, el bloque progresista y democrático-popular no logró dejar atrás la herencia neoliberal. La sociedad sigue estando polarizada sin que la alternativa progresista de desarrollo haya impuesto una victoria decisiva sobre la alternativa conservadora y pueda transformarse en una democrático-popular. El candidato conservador-reaccionario obtuvo 46% de los votos válidos en las elecciones de 2010, y demostró que la herencia neoliberal continúa siendo en extremo influyente.

## Tendencias del gobierno de Dilma

Al gobierno de Dilma no le basta con continuar los proyectos del de Lula. Es necesario hacer más, mejor y a mayor velocidad.

La legitimidad y la prioridad de los asuntos sociales, en especial los relacionados con la educación, la salud, el saneamiento, los transportes públicos, el empleo y la vivienda, exigen, para atenderlos, un esfuerzo aún mayor del realizado durante el período presidencial de Lula. De inmediato, parece imprescindible dar continuidad a ese proceso y, a la vez, imponerle un ritmo que apunte a la perspectiva real de su solución. Y tal vez esto solo sea posible si se produjese un salto de calidad, con reformas todavía más profundas, claramente encaminadas a la superación de la deuda histórica de atraso político, económico, social, científico y tecnológico del país.

Un avance más veloz en infraestructura y saneamiento, transportes, energía y vivienda puede posibilitar un nivel casi pleno de empleo y la elevación sustancial de la

producción y de la productividad agrícola e industrial. Ello, a su vez, puede permitir que los millones de brasileños que viven en haciendas abandonadas, chozas lacustres y otras moradas en peligro permanente, o en las calles, tengan acceso a un techo digno con condiciones ambientales saludables. Y puede crear otras para asentar a los millares de trabajadores carentes de tierras para laborar.

De otro lado, la elevación de la producción y de la productividad agrícola e industrial debe hacer ascender a un nuevo nivel el tratamiento de la cuestión ambiental. No será fácil convertir el desarrollo económico en socio activo de la evolución ecológica sin encaminarse hacia la solución de la cuestión agraria, del trazado de zonas agrícolas y forestales, del tratamiento de los contaminantes y de la emisión de gases, así como del desarrollo científico y tecnológico.

Sin la implantación de un proceso racional y sostenible del uso económico del suelo, de las aguas y de los bosques, y sin ofrecer soluciones técnicas y científicas que posibiliten una producción industrial limpia, es difícil establecer una correspondencia adecuada entre la cantidad de población y el área del territorio, y combinar de un modo más equilibrado procesos en apariencia antagónicos, tales como una creciente producción agrícola y una creciente urbanización con la protección de bosques, fuentes de agua, fauna, etcétera.

Sin embargo, aún más que en el período anterior, el nuevo gobierno debe enfrentar una resistencia cada vez mayor de los sectores abiertamente reaccionarios, de los conservadores reaccionarios y de los pseudodemócratas, para quienes cualquier participación popular en el gobierno y en el poder huele mal, y cualquier política exterior independiente es antinorteamericana. La acción de esos sectores en la campaña electoral y su posterior reacción a la derrota muestran que no están dispuestos a tregua alguna. No admiten que la democracia se haya consolidado o ampliado con la creciente presencia en las esferas de poder de las capas populares —la mayoría de la población brasileña. Tampoco desean permanecer impasibles ante la continuidad de la política de integración de América del Sur, de diversificación de



las asociaciones internacionales de Brasil y de la política soberana en el proceso de globalización.

El desarrollo de las fuerzas productivas, retomado por el gobierno de Lula, posibilitó que la burguesía se apropiase de riquezas mucho mayores. Pero tal desarrollo también recompone la fuerza social de los trabajadores, amplía la participación de los micro y pequeños empresarios y, asociado a las políticas sociales del gobierno, mejora el esquema de vida de los sectores populares que vive en la línea de la pobreza y por debajo de ella.

En esas condiciones, lo natural es que la recomposición trabajadora, la ampliación del capitalismo democrático y el mejoramiento del poder adquisitivo de las capas pobres eleven las demandas de esos sectores populares y democráticos en cuanto a nuevas mejoras económicas y sociales, y por mayores derechos políticos. Esto tiende a chocar con el ritmo de acumulación de riquezas por parte de la burguesía y va en contra de las propensiones antidemocráticas de los sectores más reaccionarios y conservadores de esta. El renacimiento de las luchas clasistas, tal como apuntan algunos indicios, puede enfrentar al gobierno de Dilma a desafíos diferentes a los confrontados por el gobierno de Lula.

Con vistas a amainar semejantes choques y evitar que entorpezcan el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, el gobierno de Dilma enfrentará nuevos retos que provendrán tanto de la necesidad de garantizar el derecho a la lucha de los trabajadores y demás capas populares como de la necesidad de oponerse a las exigencias conservadoras y reaccionarias de reprimir y criminalizar esas luchas. Tales contradicciones no serán exclusivas del gobierno. Tienen que ver también con el PT y varios otros partidos de izquierda, en el gobierno y fuera de él. Quizás ya todos se estén viendo obligados a considerar esos escenarios futuros, tomando como base los acontecimientos referidos al renacimiento del submundo de la política en el transcurso de la campaña electoral, y también de algunas luchas emblemáticas, tales como las de los bomberos de la ciudad de Río de Janeiro y los obreros de la construcción civil de la hidroeléctrica de Jirau.

Esa toma de conciencia de las principales contradicciones durante el actual gobierno puede conducir a los partidos de izquierda a realizar al menos dos desplazamientos indispensables. Primero, volver a enraizarse y nuclearse en la base de las fábricas y en las comunidades populares, de modo que puedan sentir y medir el desarrollo de las antiguas y nuevas demandas populares, y orientar a los movimientos sociales y al gobierno en el enfrentamiento de semejantes problemas como aliados y no como oponentes. En segundo lugar, buscar una agenda que los unifique en los embates dentro y fuera del gobierno y del parlamento, para

avanzar en la lucha contra los enemigos comunes y evitar que la coalición gubernamental trace pautas inducidas en lo fundamental por los intereses de la burguesía. Eso debe abarcar temas como la cuestión cambiaria, la apertura fiscal y el método para enfrentar la inflación, la reforma política, la tributaria y otros asuntos estructurales.

Tal vez en mayor grado que el gobierno de Lula, el de Dilma tendería a ser un área de constante disputa en la cual la colaboración y el conflicto, la unidad y la lucha estarían alternándose permanentemente.

## Desafíos estratégicos del PT

Los principales desafíos del Partido de los Trabajadores son mantener el gobierno nacional, fortalecer su hegemonía sobre las fuerzas progresistas, retomar la alternativa democrático-popular y socialista de desarrollo, transformar dicha alternativa, paulatinamente, en uno de los polos de la disputa y consolidar al partido como una organización de masas y de dirección social.

Para ello, el conjunto de la militancia del partido tendrá que realizar una reflexión teórica más profunda sobre algunos asuntos que perturban su análisis coyuntural y estratégico y su elaboración política. Eso tiene que ver sobre todo con los conceptos actuales sobre el neoliberalismo, el nacionalismo, la socialdemocracia, el socialismo y el desarrollo, la necesidad de valorar la importancia que tiene, para las grandes masas del pueblo, la actual experiencia de participación en los procesos electorales y en los mecanismos institucionales del Estado, y la necesidad de forjar alianzas, no solo para dividir y debilitar al enemigo principal, sino también para acumular fortaleza y cambiar la correlación de fuerzas.

No debe confundirse el neoliberalismo, como ideología y política de la burguesía transnacional, con el liberalismo y el democratismo burgueses. Estas son expresiones políticas diferentes y más antiguas que todavía aparecen de manera diferenciada en la sociedad brasileña, la mayor parte de las veces en contradicción con el neoliberalismo, cuyo ascenso ocurrió a la zaga de la crisis internacional de reestructuración capitalista de los 70.

El neoliberalismo condujo a la formación de las grandes corporaciones transnacionales y, asociado a la expansión globalizada del capital, desencadenó en el mundo un proceso regresivo, caracterizado por el colapso de la socialdemocracia europea, de los nacionalismos africanos, de los desarrollismos latinoamericanos y del socialismo de tipo soviético. De 1980 a 1999, el neoliberalismo se volvió hegemónico en

América Latina y acentuó la dependencia, la desigualdad y el conservadurismo político característicos del período anterior.

No se debe confundir el nacionalismo practicado por las potencias del centro, con el que se ejerce como forma de defensa contra las grandes potencias. De otro lado, parte de la burguesía brasileña resulta incapaz de practicar cualquier tipo de nacionalismo en sus relaciones con las grandes potencias, en tanto la burguesía en su conjunto acostumbra a contemplar a los países vecinos de América Latina y el Caribe, así como a los países africanos y asiáticos, a través de un prisma nacionalista de gran potencia.

No se debe olvidar que la socialdemocracia nació, en el siglo XIX, como una corriente popular revolucionaria anticapitalista e internacionalista europea. A partir de la Primera guerra mundial, se transformó en corriente reformista del capitalismo. Con los resultados de la Segunda guerra mundial, después de 1945, la socialdemocracia desempeñó un papel fundamental en la creación de Estados de bienestar social en Europa, que elevaron los patrones de vida de los trabajadores asalariados y del conjunto de sus poblaciones, pero a costa de la superexplotación de las poblaciones de las antiguas colonias y semicolonias.

La liberación de los antiguos países coloniales y semicoloniales, completada en los años 70, la transformación de varios de ellos en potencias emergentes, el surgimiento de las grandes corporaciones transnacionales y el fin de la Unión Soviética —a principios de los 90—, liquidaron los motivos y las condiciones de existencia de los Estados de bienestar y convirtieron la socialdemocracia europea en una corriente defensora del neoliberalismo.

No se debe confundir el socialismo con el comunismo. La práctica de los últimos noventa años mostró que el primero fue y sigue siendo una fase de tránsito del capitalismo hacia una sociedad de tipo superior: el comunismo. En tal fase, el capitalismo aún no ha agotado su papel histórico de desarrollo de las fuerzas productivas, y el comunismo tampoco posee las bases materiales y culturales para implantarse. Sería necesaria por ende, en ella, la coexistencia de colaboración y conflicto entre las propiedades sociales —estatales, públicas, cooperativas, solidarias— y las capitalistas y mixtas. Y en ello el Estado tendrá que combinar planeamiento y mercado, rectificando los caóticos desvíos de este último, pero utilizándolo como instrumento de determinación de los precios y de la asignación de recursos hasta el pleno desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de las condiciones materiales y culturales necesarias para el paso a una etapa superior de civilización.

Finalmente, no se debe confundir nuestro desarrollismo con el de ellos. La actual oposición de derecha, capitaneada por la coalición entre el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Demócratas (DEM), arguye que el actual desarrollo, promovido por los gobiernos bajo hegemonía del PT, se debe al sendero abierto por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Plantea que este fue responsable por la creación de las condiciones para el desarrollo futuro, aprovechadas antes por Lula y ahora por Dilma. Pero la mayoría de las personas saben que Brasil escapó a las principales consecuencias de la crisis mundial que estalló en 2008 justamente porque el gobierno de Lula no siguió el sendero abierto en el período de Cardoso (1995-2002).

De hecho, el camino seguido por Cardoso fue el de la privatización de los bancos públicos y de las empresas estatales, de la implantación del Área de Libre Comercio para las Américas —ALCA—, de la atracción de capitales especulativos, de la inutilización de los mecanismos de planeamiento y control del Estado y de otras políticas que condujeron al país al borde del precipicio. Las dificultades que enfrentó el gobierno de Lula, y que siguen presentes en el de Dilma, tienen su origen en la maldita herencia de Cardoso, en especial el peso de la especulación financiera y la legislación que impide el crecimiento de las inversiones públicas en infraestructuras y en el proceso productivo.

De ese modo, el debate sobre el desarrollo, incluso dentro de los marcos del capitalismo, conlleva problemas distintos, en dependencia de cuál fracción burguesa tenga la hegemonía sobre el proceso. Un desarrollo con crecimiento económico, redistribución de la renta, gran peso en la educación y el desarrollo científico y tecnológico, sostenido por el medio ambiente y con participación soberana y diversificada en el mercado internacional, también puede ocurrir en el capitalismo, sujeto a la correlación de fuerzas establecidas en el gobierno y en el Estado.

El desarrollo progresista tiene por límite los marcos capitalistas y de la democracia liberal. El democrático-popular tiende a ir más allá de esos marcos: a introducir instrumentos económicos de carácter social y público —como las empresas estatales, públicas, cooperadas y solidarias—, instituir mecanismos de redistribución efectiva de la renta, universalizar la educación y la salud para todas las capas de la población y radicalizar el proceso democrático a través del apoyo a nuevos mecanismos de participación popular y control social.

En ese sentido, para transformar el desarrollo progresista en democrático-popular, incluso paulatinamente, desempeña un papel importante la valoración de la experiencia de participación de las grandes masas del pueblo en los procesos electorales,

en los mecanismos institucionales del Estado y hasta en las alianzas con sectores de la burguesía. Esa es una experiencia nueva en la historia brasileña, cuya característica hasta el momento actual ha sido la sustitución de las movilizaciones masivas —al modo de las grandes huelgas obreras y de movimientos como *Directas Já*<sup>1</sup> y Amnistía, de fines de los 70 y principios de los 80— por los votos a favor de candidaturas y partidos de izquierda, con la esperanza de que estos realizaran las mejoras deseadas en aquellos aspectos que marchaban manifiestamente mal.

Tal esperanza explica el gran giro cultural de las elecciones de 2002, en las que grandes capas pobres de la población finalmente superaron su resistencia a votar por alguien que las representara. En 2006 y 2010, estas capas mantuvieron su voto por la izquierda. Sin embargo, hay que reconocer que gran parte de ellas, y otra significativa de las llamadas clases medias siguen opuestas a la izquierda y a sus propuestas, por lo que son presas fáciles de los preconceptos alimentados por la derecha conservadora y reaccionaria.

En esas condiciones, no se debe suponer que sea posible modificar la situación a través de la radicalización verbal, ni renunciar a una experiencia compleja de aprendizaje político de las grandes masas. Tampoco se debe olvidar que esta experiencia electoral está plagada de riesgos para la izquierda, en particular para el PT. Puede conducir a que se confundan las concesiones tácticas con otras programáticas e ideológicas, y el empleo de métodos de acción propios de la burguesía. También puede conducir al abandono del trabajo de base entre los trabajadores asalariados, las demás capas populares y clases medias, en beneficio exclusivo del trabajo institucional y electoral.

La rebaja o el abandono de los objetivos generales de carácter democrático-popular y socialista puede expresarse de distintas formas. Suponer, por ejemplo, que para alcanzar el pleno desarrollo económico y social, acabar con la miseria y la pobreza y consolidar la democracia participativa, basta con seguir conquistando la presidencia de la República por tiempo indeterminado, sin que sea necesario reestructurar en profundidad el Parlamento, el sistema judicial y los demás aparatos del Estado. Es una ilusión pensar que manteniendo intactos esos aparatos de poder y el modo de producción capitalista sea posible vencer los problemas estructurales de la sociedad brasileña y domar las férreas leyes del desarrollo capitalista.

Esa reducción subestima, además, que el desarrollo progresista refuerza a la burguesía y que las condiciones de ese desarrollo, que requiere el máximo de lucro, deben alcanzar un estadio en el cual entrarán en fuerte contradicción con una amplia redistribución de la renta

y con la ampliación de la participación democrática. En algún momento de ese proceso de desarrollo, las fuerzas democráticas y populares tendrán que enfrentarse a los más profundos intereses de la burguesía.

Tan dañino como la reducción o el abandono de los objetivos generales de carácter democrático-popular y socialista, es la adopción de métodos de acción propios de la burguesía, así como la ilusión de que esta clase se sentirá satisfecha porque el Partido de los Trabajadores y otros de izquierda se vuelven iguales a ella. Esos partidos no pueden recurrir al tráfico de influencias, a la corrupción y a otros métodos comunes de la vida burguesa, no solo porque necesitan diferenciarse de los métodos de la burguesía, sino también porque, hipócritamente, esta es la primera en denunciar esos deslices del PT y de sus aliados de izquierda (Partido Socialista Brasileño, Partido Comunista del Brasil, Partido Democrático Laborista) y en hacer uso de ellos para desmoralizarlos.

Al mismo tiempo, un partido de izquierda no puede abandonar sus bases sociales organizadas, ya sean núcleos u otros tipos de organización existentes en los locales de trabajo, en los barrios y en las comunidades, y suponer que pueda realizar su trabajo político a través de mandatos electorales. La experiencia histórica, nacional e internacional ha demostrado que esa sustitución es un camino que no solo conduce a la derrota ideológica y política, sino también a la propia derrota electoral.

Esa misma experiencia enseña que partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores, requieren organizaciones enraizadas y con gran poder de capilaridad entre las grandes masas populares y democráticas. Esta es la única forma probada de capacitar al partido para que apoye y fomente tanto la organización como la movilización de sus bases sociales, ya sea para luchas masivas a favor de reivindicaciones económicas, sociales o políticas, o para participar en la lucha electoral y en los gobiernos.

Traducción del portugués: David González.

## Nota

1. *Directas já!* fue un movimiento que entre los años 1983 y 1984 reclamó inmediatas elecciones presidenciales directas en Brasil [N. del T.].

# Revolución/contrarrevolución en México. La ofensiva contra el sector petro-eléctrico

**John Saxe-Fernández**

*Profesor e investigador. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).*

Al gobierno de Felipe Calderón le correspondió organizar las celebraciones por el bicentenario de la Independencia así como las de la Revolución mexicana de 1910. En los dos ámbitos, sus programas y actos de gobierno, además de altamente significativos por sus impactos sobre la vigencia de la soberanía y las reivindicaciones de la Constitución de 1917, representan lo que solo puede calificarse como la culminación del persistente asalto oligárquico-imperial en vigor desde principios de la década de los 80 —por igual bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN)—, contra los ejes que motivan esas celebraciones: a) la soberanía nacional, fundamento de la «seguridad nacional» mexicana, y b) los principales ejes de acumulación (combustibles fósiles y electricidad), actividades reservadas a la nación según la Constitución.

En relación con el primer punto, se ofrecerá una reflexión, desde planteamientos interpretativos ofrecidos por Maurice Dobb, en torno a las tendencias que subyacen en los esquemas vigentes. Por lo que respecta al segundo, la atención también se dirige al estudio de la naturaleza y dimensión de la ofensiva

desplegada por los gobiernos priistas y panistas tendiente al desmantelamiento, privatización y extranjerización de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del sector eléctrico: un despliegue de «iniciativas» y acciones que en el curso del año 2010 incluye la aniquilación policial del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el decreto de «desaparición» de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y, también de manera igualmente significativa, una resolución de la Suprema Corte de Justicia contra el sindicato minero de Cananea, prácticamente a cien años de que esa organización social liderara la chispa que encendió el proceso revolucionario de 1910.

En 1906, cuatro años antes del estallido de la Revolución mexicana, y bajo la persecución y acorralamiento por una dictadura implacable, modernizadora y extranjerizante —la de Porfirio Díaz, cuyos «fundamentos» financieros estaban a punto de ser pulverizados por el *crack* de Wall Street de 1907—, los trabajadores de la Compañía de Gas y Luz Eléctrica Limitada, de la Hidroeléctrica de San Ildefonso, de la Nacional de Electricidad, y de Siemens y Halsky, decidieron organizarse para defender sus intereses colectivos. Dos años después y como resultado de sus

esfuerzos, quienes laboraban en la ciudad de México, ya bajo el paraguas de la Gran Liga de Electricistas Mexicanos, de corte cooperativista y mutualista, empezaron a establecer mecanismos de comunicación y de acción, de cara a las empresas eléctricas extranjeras.<sup>1</sup> Iniciada la Revolución, esa Liga hizo una amplia convocatoria a ingenieros mecánicos electricistas, telegrafistas, telefonistas, instaladores, motoristas y a todos los que, de manera directa o indirecta, se relacionaban con la industria eléctrica. A finales de 1914, cuando arreciaba la violencia y el caos, los empleados de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. (Mexican Light and Power Company) junto a otros trabajadores del ramo —en total unos trescientos—, fundaron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al cual pocos días después se afiliaron trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y de la Telefónica Ericsson. Con fuertes tendencias anarcosindicalistas, se alejó del cooperativismo y mutualismo para enfatizar las expresiones del interés de clase desde las bases, y abrió canales democráticos para el combate y defensa de los intereses obreros. Desde entonces, a lo largo del siglo xx, el SME encabezó luchas por la defensa del salario y de los contratos colectivos. Con el advenimiento de los regímenes «neoliberales», que operan bajo los lineamientos privatizadores del Consenso de Washington, articulados en México y en América Latina por medio de líneas de crédito altamente condicionados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el SME fue baluarte de la izquierda mexicana en la defensa de los preceptos constitucionales vigentes, relativos tanto al sector eléctrico como petrolero. Ciertamente, la meta de privatizar y extranjerizar primero la industria petrolera y luego, como se verá más adelante, el sector eléctrico, ha estado presente en la agenda estadounidense —y de la oligarquía mexicana—, desde que entró en vigor la Constitución de 1917, que enarbó el concepto de «dominio directo de la nación» sobre el petróleo y todos los recursos bajo la jurisdicción territorial del Estado-nación mexicano. La intención de Washington de revertir los preceptos constitucionales y la posterior nacionalización petrolera realizada por Lázaro Cárdenas en marzo de 1938, se ha planteado tanto al nivel operativo como político-administrativo.<sup>2</sup>

La agresión al SME y al Sindicato de Cananea, dos pilares del sindicalismo independiente mexicano, perpetrada en 2010, que lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores, jubilados y sus familias, se realiza en un contexto de procesos históricos, político-económicos, de corte doméstico e internacional que ameritan atención.

## Los instrumentos imperiales

La experiencia reciente de América Latina muestra que, con el capitalismo, los instrumentos imperiales de control se amplían sin dejar a un lado, en momento alguno, el ingrediente militar y territorial. Los certeros estudios sobre el desarrollo capitalista y el imperialismo de Maurice Dobb,<sup>3</sup> apuntan al uso de cuatro mecanismos, o de una combinación de ellos, para «imperializar»<sup>4</sup> a otros países y pueblos por medio de: a) tarifas preferenciales; b) programas de inversión; c) colonización y d) instrumentos para el control abierto político-militar.

En el siglo xx, este esquema sintetiza una perspectiva de dominio internacional económico de los Estados Unidos que, en el caso de América Latina y el Caribe, se asemeja en su operación a la experiencia británica y a la planteada por los ideólogos nazis en torno a un bloque europeo continental encabezado por Alemania, con un fuerte ingrediente geopolítico y militar, que incluye la «guerra de conquista», como ocurre en Iraq-Afganistán-Pakistán. El almirante Michael Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, durante su visita a México —primera oficial de un Jefe de Estado Mayor registrada en la historia bilateral—, a principios de marzo de 2009, después de reafirmar el apoyo del Pentágono a la Iniciativa Mérida (IM) (un émulo del atroz Plan Colombia), dio aviso a la opinión pública mexicana de que las fuerzas armadas de su país «están listas para ayudar a México en su guerra contra el narco con tácticas de contrainsurgencia, como las empleadas contra los rebeldes de Iraq y Afganistán».<sup>5</sup> Por lo que se refiere al Plan Colombia, recuérdese que Washington, antes de hacerlo en México con la IM, planteó ampliar el Plan Colombia hacia la región cocalera del Chapare en Bolivia, por medio del Plan Dignidad; la Iniciativa Regional Andina, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, los Tratados de Libre Comercio con Chile, Perú y Centroamérica, y su extensión hemisférica mediante el ALCA, una iniciativa sepultada por las naciones sudamericanas en Mar del Plata, 2005. Todo ello en medio de esquemas de ampliación de bases militares, en Colombia y Panamá en 2009; y apenas iniciado 2010, aprovechando el catastrófico terremoto que sufrió Haití, Washington —con un Secretario General de la ONU que se hizo a un lado—, procedió a la ocupación militar de ese país «por tiempo indefinido». Agréguese numerosos programas militares y de guerra política de los Estados Unidos, junto con una vasta ofensiva de privatizaciones impulsadas por los grandes monopolios, en especial los del petróleo, gas y minería con el acostumbrado respaldo del BM, FMI y BID, y el cuadro resultante es el de una inusitada

intensificación de la ofensiva imperial en la región, con líneas de continuidad fundamentales entre la belicista administración Bush/Cheney y la de Obama. En la mira tanto de esos intereses como de la oligarquía mexicana —siempre dispuesta a participar (de manera crónica como socio menor) en el reparto del botín—,<sup>6</sup> se incluyen, de manera notable, los recursos naturales estratégicos y el complejo petro-eléctrico mexicano.

Las mayores implicaciones del fenómeno imperialista solo pueden apreciarse de manera cabal teniendo presente la estrecha relación entre lo histórico y lo geográfico. Es un asunto que se percibe al revisar la vasta extensión de los complejos económico-territoriales, urbanos, suburbanos, agrícolas, presentes en la operación cotidiana de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Alan Milward y Franz Newman han ilustrado este asunto y mostrado la forma en que el gran capital alemán articulaba concepciones sobre la «integración» similares a las de los Estados Unidos hasta nuestros días.<sup>7</sup> Los ideólogos del nacionalsocialismo se inclinaron por adoptar y adaptar la Doctrina Monroe como «modelo», sin dejar de incluir la experiencia imperial/colonial británica. Las nociones germanas de «economías de grandes áreas», como ocurrió con la *Grand Area* planteada en el gobierno de Franklin D. Roosevelt, luego revivida por George Bush padre, William Clinton, y Bush hijo; con el TLCAN y el ALCA; y ahora con sus expresiones de «seguridad» y de «absorción jurisdiccional-territorial, tipo Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte —ente en proceso de «remodelamiento bautismal»— y la Iniciativa Mérida, corresponden a las ambiciones de clase, de corte económico y geopolítico de la burguesía estadounidense, como lo ha detallado el economista Jeff Faux.<sup>8</sup> En ambos casos, las clases gobernantes de los Estados Unidos y México trataron de justificar políticas económicas en el ámbito internacional, resultado de decisiones económicas internas a las que se dio prioridad por encima de cualquier situación global. La comparación entre los planteamientos y acciones del liderato nacionalsocialista y las que se han emitido desde la Casa Blanca, a partir de Harry S. Truman, es justificada si se tiene presente que la forma predominante de capitalismo que se observó en la Alemania nazi trató también de vencer la crisis por medios coercitivos extremos, interna e internacionalmente. Tanto en un caso como el otro está presente una nueva división del mundo y la incautación de un «nuevo espacio vital» racionalizado con doctrinas de «ampliación», disfrazadas con la retórica del «globalismo pop», así como por justificaciones racistas e ideológicas, como la cruzada contra el «narcoterrorismo», y «la contrainsurgencia»,

para el intervencionismo en los asuntos internos de sus vecinos, máxime si hay grandes negocios de por medio.

## El sector petro-eléctrico en la mira

La intervención de los Estados Unidos en México, multifacética y multisectorial, se centra en el sector petro-eléctrico (sin dejar de incidir sobre otros, como la minería, el agua, la biodiversidad), porque desde la perspectiva de las grandes firmas de la energía y, por tanto, del BM, la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial, tanto desde la perspectiva de las ganancias empresariales como de la geopolítica y la geoeconomía a ellas asociada.

Después de la Segunda guerra mundial, la simbiosis entre PEMEX, la CFE y LyFC fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura, por tratarse de la sinergia en el principal polo de acumulación del país. Aunque, con claras intenciones privatizadoras, extranjerizantes y antisindicales, el 10 de octubre de 2009 Felipe Calderón lanzó un asalto, como bien lo narra María E. Valdés Vega,<sup>9</sup> utilizando a la Policía Federal, contra el SME y el edificio central, subestaciones, talleres, oficinas de LyFC, liquidando así, por decreto, a ese ente público.

El cambiante panorama sobre la magnitud del «negocio» ayuda a explicar el evento. Como lo he indicado en varias ocasiones, es notable que ahora, en el ámbito internacional, las empresas se inclinen por la adopción de las formas de organización y relación orgánica similares a las establecidas en México durante décadas, gracias a la existencia de PEMEX y a la nacionalización eléctrica realizada por el presidente López Mateos, mediante una integración *de facto* que elevó la actividad petro-eléctrica a un rango mayor como eje de acumulación. Ello colocó su contribución al fisco —y a la economía— en un orden de magnitud mayor que al de todas las empresas privadas —nacionales y extranjeras— «juntas».

A principios del siglo XXI, la tónica de las grandes empresas del ramo también es promover «el fin de las empresas petroleras tradicionales» dedicadas exclusivamente al petróleo, y la conformación de unidades mayores que integren el crudo con la electricidad, es decir, lo que desde hace años realiza el sector público mexicano. La sinergia es de primer orden, lo que explica que el BM opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos «graduales», pero significativos hasta ahora, para inducir la privatización, desmembramiento y desnacionalización del complejo petro-eléctrico mexicano.<sup>10</sup> Por ejemplo, promueve los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) en grandes

**La intervención de los Estados Unidos en México, multifacética y multisectorial, se centra en el sector petro-eléctrico (sin dejar de incidir sobre otros, como la minería, el agua, la biodiversidad), porque desde la perspectiva de las grandes firmas de la energía y, por tanto, del BM, la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial.**

proyectos en los que participan empresas ajenas a PEMEX, encabezadas por Bechtel y Halliburton, ambas con estrechos vínculos con el aparato bélico-industrial, político y de «seguridad» de los Estados Unidos.

Con la «reforma energética» de 2009, las actividades sustantivas de PEMEX se abrieron de lleno al contratismo desenfrenado. Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano, están, además del BM, el Departamento de Energía norteamericano (DE) que exige «se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización». La «desincorporación» del sector petro-eléctrico es percibida por Washington como un área con oportunidades para la inversión y control por parte de sus grandes empresas, porque es un renglón altamente redituable y estratégico de la economía y de la integración territorial de México. Con el aval de los gobiernos neoliberales, desde los priístas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una masiva y brutal agresión de clase y antisindical, como se mostró en el proceso que desembocó en la firma del TLCAN, la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, y el mencionado asalto a LyFC y contra el SME, lo cual representa una regresión de dimensiones históricas solo equiparable a las grandes pérdidas territoriales del siglo XIX.<sup>11</sup>

Con esta acción se hizo trizas «el pacto social que fundó el Estado mexicano tras el proceso revolucionario de principios del XX»,<sup>12</sup> fundamento sociopolítico, económico y jurídico-jurisdiccional que permite y aglutina fuerzas esenciales para la seguridad, defensa e integridad territorial de la Federación como un todo: «en medio del caos revolucionario surgió el Sindicato Mexicano de Electricistas el 14 de diciembre de 1914 con los obreros y empleados de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. [...] y otros empleados del ramo eléctrico»<sup>13</sup>. La actuación del SME en los principales acontecimientos que cimbraron la dinámica de clase del país fue la de una organización obrera transparente y alejada del charrismo y corrupción de la autocracia presidencial, y llegó al todavía más oscuro y entreguista período neoliberal como una cuña esencial

en la defensa del interés público nacional, como lo he reseñado en otra ocasión.<sup>14</sup> En especial, su resistencia ha sido —y es— nodal ante lo que Emilio Krieger calificó de violaciones presidenciales a la Constitución, en este caso, las iniciativas de Salinas y Zedillo para modificar los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y una reforma legal que indicaba «qué no era» servicio público; con ese malabarismo lingüístico se dio entrada «legal» al capital privado en el sector, al poner bajo la categoría «no servicio público» a rubros como la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad. Los analistas del SME ofrecieron vitales datos técnicos, empresariales, de licitaciones, etc., sobre el inconstitucional proceso. Pero además, y esto es fundamental, movilizaron amplios sectores, más allá del área sindical: estudiantes universitarios, servidores públicos, parte de la clase media urbana, entre otros.<sup>15</sup> El endoso de Washington al esquema privatizador desbordó el área técnico-económica (BM, BID, etc.) hacia el fortalecimiento de instrumentos de seguridad y de intervención político-electoral, bajo la pantalla del combate al crimen organizado y al narcotráfico, que, como en el caso del sindicalismo de la electricidad, también se utilizan como guerra de clase a favor del esquema oligárquico-imperial centrado en las privatizaciones.

Los intereses empresariales de la industria eléctrica, del gas y del petróleo de los Estados Unidos, que se articulan desde el DE, requieren de una «sombrija de seguridad» en México, ya que plantean explícitamente que solo con el «retiro» del Estado mexicano —y latinoamericano— de las áreas estratégicas es posible brindar ventajas a los inversionistas de su país, de cara a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petro-eléctrico mexicano, según fuentes oficiales del DE, «ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y, en muchos casos, realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país».<sup>16</sup> La privatización del complejo petro-eléctrico (incluyendo, desde luego, el gas natural) es concebida por Washington y su Banco Mundial de manera integral; de ahí que para la nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor,

tanto económica como geopolíticamente; esto último, insisto, por la colindancia geográfica con los Estados Unidos. El asunto es planteado por el DE del siguiente modo:

[L]a privatización también ha desembocado en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras —particularmente aquellas con actividades importantes en la producción y/o distribución de gas natural— y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en el combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica, en parte por las ventajas ambientales relativas del gas natural sobre el carbón y el petróleo.<sup>17</sup>

El enfoque del DE representa la articulación de los intereses de los altos círculos de propietarios y gerentes de las grandes empresas que han impulsado la fusión «petro-eléctrica», entre las que sobresalen Enron —de triste memoria por su escandalosa y corrupta actuación—<sup>18</sup> y El Paso, en Texas, así como las principales petroleras incluidas las que ofrecen «servicios». La prensa mexicana dio amplia cobertura al papel decisivo de Enron en el delineamiento del programa energético de Fox, llevado a cabo por su Secretario de Energía, Felipe Calderón. Se trata de un vórtice de intereses, de un «botín» de dimensiones billonarias que, como ha mostrado John Ross, está en el corazón mismo de la elección presidencial del 2 de julio de 2006 en la que destaca la ilegal intervención de Halliburton de México, el mayor subcontratista de PEMEX, «subsidiaria del titán de la industria petrolera con sede en Houston [...] la mega corporación del vicepresidente Dick Cheney y el mayor proveedor de los petroleros del planeta [que] realiza negocios en México desde hace muchos años».<sup>19</sup> Después de mencionar que Calderón se comprometió a privatizar PEMEX, Ross destaca el delicado asunto, al señalar el papel de Cheney como vicepresidente de Bush y sus asociados de Halliburton:

[A]l ayudar y favorecer el robo de la elección presidencial del 2 de julio —2006— al izquierdista López Obrador [...] En su calidad de miembro del Consejo de Comunicación que agrupa a transnacionales con negocios en México, Halliburton ayudó a pagar un vil spot televisivo con contenido difamatorio, presentando a López Obrador como un peligro para México. Como solo los partidos políticos pueden montar campañas semejantes, la participación de Halliburton fue flagrantemente ilícita, según el máximo tribunal de México.<sup>20</sup>

Corroborando el aserto de Ross, David DeGraw advierte que Calderón «fue declarado victorioso [...] con la ayuda de Bush, Dick Morris de Fox News, Wal-Mart, Craft y, sí, Halliburton».<sup>21</sup>

La conexión histórica entre los grandes monopolios y oligopolios y los instrumentos de Estado se ha venido acentuando en los Estados Unidos. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo, codicias múltiples e intensas, e ímpetu en el alto empresariado petrolero, gasero y eléctrico y, desde luego, en la cúpula del BM, la Casa Blanca y el Pentágono. El Paso, Enron, Halliburton, Bechtel, Shlumberger, Fluor-Daniels, cuyos negocios y en algunos casos (Enron) escándalos de corrupción no parecen haber enfriado los ardores privatizadores del BM y de los gobiernos neoliberales mexicanos, han hecho sus negocios por medio de la oferta de una extensa gama de servicios, que tenía en cuenta, además del gas y electricidad, la subcontratación de actividades de exploración y perforación —lo que convierte a PEMEX, como se contempla en los documentos del Banco Mundial, en un cascarón—, y de las actividades de las aseguradoras y servicios varios. Lo mismo se observa en otras empresas del sector. Por ejemplo, Shell, firma tradicional dedicada al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir el servicio eléctrico en el territorio norteamericano; Electricité de France ahora comercia gas, aunque fuera de ese país. Centrica, el conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas ramas para incursionar en otras áreas.

La motivación de este proceso de integración horizontal es clara. Según Paul Marsh, director de TXU Europe Finance: «una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50% y 75% superior al de las que se dedican a una sola de estas actividades. Con ganancias unitarias de 40 libras esterlinas, comparadas con 25».<sup>22</sup>

## Codicia y *diktat* energético

Con esas ganancias unitarias «jalando» a burócratas fondomonetaristas y funcionarios venales, además, desde luego, del *peak oil*, se intensifica el ímpetu privatizador que se presenta al público como «reformas de segunda generación del sector energético». El informe reciente de que, por medio de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la Ley de obras públicas, el PAN y el PRI intentan «legalizar» los servicios de energía eléctrica, agua y «seguramente también el petróleo», es sintomático. Según se dio a conocer, se trata de contratos por cincuenta años con empresas nacionales y extranjeras. Varios legisladores de oposición advirtieron sobre el riesgo de permitir a empresas extranjeras firmar contratos con el Gobierno Federal para realizar «todo tipo» de obras y servicios «pasando por encima de lo que señalan las leyes nacionales y la misma Constitución».<sup>23</sup>



En medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en la cúpula político-empresarial mexicana, en codicia obsesiva y brutalidad policial-militar: el asalto contra las instalaciones de LyFC es una réplica de los despliegues contra el crimen organizado. Como se evidencia una y otra vez en la historia mexicana, panistas y priístas se han aliado con esos poderosos intereses, de dentro y fuera, en la acometida contra el sector público de la petro-electricidad. Bajo tales auspicios, el influjo del Pentágono-CIA y el brío del BM se acrecientan, en especial en su tarea de abrirle caminos a la poderosa industria de la electricidad, el gas y el petróleo de los Estados Unidos en México. Aunque con las presidencias simultáneas de Bush hijo y Fox parecía que ya el sector energético mexicano «estaba maduro», no es sino hasta una fecha como el mencionado asalto del 10 de octubre de 2009, que Calderón finiquita LyFC, cuando se procede, de manera abierta, con su apropiación a favor del empresariado extranjero y sus «socios» locales.

El paquete de reformas estructurales impulsadas por medio de empréstitos condicionados del FMI-BM y BID, al promover esquemas de *outsourcing* a favor de contratistas nacionales y extranjeros, socavaba el control público nacional de los vastos complejos económico-territoriales, rurales, urbanos y suburbanos involucrados en la operación diaria de PEMEX, CFE y LyFC. El dominio de la nación sobre ese sector es vital para la soberanía y la integridad de la Federación.

Como se muestra en *La compra-venta de México*, por más de veintisiete años, los Estados Unidos han impulsado, desde Los Pinos y la Secretaría de Hacienda, lineamientos en materia económica que, según Joseph Stiglitz (ex-economista principal del BM) desembocan en descabros como el de diciembre de 1994. Son calamidades que debilitan al Estado nacional e impulsan intereses oligárquico-imperiales. Así lo documenta la economista Sarahí Ángeles en un estudio sobre los diseños privatizadores de la industria eléctrica en México.<sup>24</sup> Recuerda que en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, anexo a la Carta de Intención enviada al FMI en junio de 1999 por Zedillo, se estipula que el gobierno mexicano «se encuentra en la fase final de su programa de privatización, que incluye servicios de infraestructura, previamente en poder del Estado: puertos, aeropuertos, ferrocarriles, satélites, electricidad y la distribución de gas natural».<sup>25</sup>

La resistencia del SME a este diseño obstaculiza un proceso que incluye la «liquidación» de LyFC y el desmembramiento de la CFE, para abrirles espacios a empresas norteamericanas y de Canadá, favorecidas en el capítulo 11 del TLCAN. Por ahora se envía a la calle a más de cuarenta mil familias para, según el Diktat del BM,

crear corporaciones de generación múltiple de energía a lo largo de las líneas geográficas o por tipo de planta [...] Establecer una o más corporaciones de transmisión para que sean las propietarias del sistema de transmisión de alto voltaje [...] establecer corporaciones de distribución para que sean propietarias de los sistemas de distribución en cada área para manejar los precios de menudeo de la energía [...] corporatizar Luz y Fuerza del Centro como una compañía de distribución, transfiriendo las plantas generativas a una nueva Compañía de Generación, decidir el grado de participación privada de estas nuevas corporaciones, el cual puede ser desde 0% a 100%, con la mira de incrementar con el tiempo la participación privada [...] Transferir la responsabilidad reguladora de tarifas de la SHCP a la Comisión Reguladora de Energía para todas las entidades que participen en el sector de la energía.

Este es, en síntesis, el motivo y el *modus operandi* de un robo al futuro de los mexicanos. La situación de por sí grave, se hace más lastimosa porque, como lo plantea José Luis Manzo al recordar que el lunes 1 de marzo de 2006 el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y recuperó para el Estado boliviano el control de la industria petrolera, «desde la producción a boca de pozo, hasta la exportación del gas y del petróleo, pasando por el transporte, almacenamiento, distribución, procesamiento industrial y comercialización interna de la producción», México retrocede: «México va, cuando Venezuela y Bolivia están de regreso».<sup>26</sup> Aún más, esta inadmisibles regresión ocurre precisamente en momentos en que el país está sometido a lineamientos intervencionistas de corte policial-militar y para-militar (Iniciativa Mérida); cuando, como se apuntó, se degrada la función de Defensa Nacional por el baño de sangre y el desvío y desgaste que ocasiona la «guerra contra el narcotráfico».

Además, el aparato militar y de inteligencia de los Estados Unidos que aplica estos esquemas de intervención y ocupación plantea, en su más reciente evaluación de los escenarios para 2025,<sup>27</sup> que en América Latina, el Oriente Medio y Asia, por sobrevivencia, ante las grandes sacudidas de la economía y la política mundial, las naciones toman control de sus recursos naturales y en especial de los relacionados con los estratégicos servicios de la energía. En *Global Trends 2025*, a esto se le denomina *resource nationalism*, articulado por medio de la promoción, ascenso y consolidación de las empresas de propiedad pública. En esas naciones, abrir caminos para el futuro de sus pueblos es prioritario. Aquí también.

## Notas

1. La Gran Liga de Electricistas Mexicanos tenía su sede en Monterrey. Para consultar una bien lograda revisión bibliográfica y documental sobre los antecedentes y evolución del SME, desde 1906 hasta nuestros días, véase María Eugenia Valdés Vega, «El

- SME ante la mayor agresión de su historia», *Coyuntura*, n. 153-154, México, DF, septiembre-diciembre de 2009, pp. 21-9. Entre los trabajos sugeridos están Víctor M. Sánchez Sánchez, *Surgimiento del sindicalismo electricista*, FCPS-UNAM, México, DF, 1978; Gustavo A. González, *Desarrollo de la industria eléctrica y del proletariado electricista*, tesis de Licenciatura, FCPS-UNAM, México, DF, 1980; Silvia Gómez Tagle, *Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas*, El Colegio de México, México, DF, 1980.
2. Me he referido extensamente a este proceso en *La compra-venta de México*, Plaza & Janés, México, DF, 2002.
3. Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, Routledge Paperback, Londres, 1963.
4. Adopto la expresión verbal «imperializar» porque es una aproximación más exacta a la realidad de las relaciones internacionales, que la de «globalizar», ya que enfatiza el contexto asimétrico de poder y de dominación en que ocurren los procesos internacionales.
5. Staff/Reforma «Ofrece EU tácticas de contrainsurgencia», *Reforma*, México, DF, 7 de marzo de 2009, p. 7.
6. Abundantes ejemplos de ello y su papel en la articulación del TLC los ofrece Jeff Faux, *La guerra global de clases (Cómo nos robaron el futuro las élites de Estados Unidos, Canadá y México y qué hacer para recuperarlo)*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, DF, 2008.
7. Alan Milward, *La Segunda Guerra Mundial*, Crítica, Barcelona, 1987 y Franz Newman *Behemot: teoría y práctica del nacional-socialismo*, FCE, México, DF, 1944.
8. Jeff Faux, ob. cit.
9. María Eugenia Valdés Vega, ob. cit.
10. Me he referido ampliamente a este proceso y retomo ese análisis ofrecido en «Banco Mundial: PEMEX y CFE al hoyo negro», *La Jornada*, México, DF, 19 de septiembre de 2002.
11. Línea argumental planteada por el historiador Gastón García Cantú desde los primeros intentos de privatización de la petroquímica, retomada en John Saxe-Fernández, *La compra-venta de México*, ed. cit.
12. María Eugenia Valdés Vega, ob. cit., p. 21.
13. Ídem. Véase además Víctor Sánchez Sánchez, *Surgimiento del sindicalismo electricista*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, México, DF, 1978.
14. John Saxe-Fernández, *La compra-venta de México*, ed. cit., pp. 368 y ss.
15. Ídem.
16. Department of Energy, *México: Country Brief*, US Government Printing Office, Washington, DC, 2002; citado en John Saxe-Fernández, «Banco Mundial...», ed. cit.; también en *La compra-venta de México*, ed. cit., p. 356.
17. Ídem.
18. Al respecto cabe recordar que el proyecto energético de Fox —articulado por medio de Felipe Calderón, a cargo de la cartera de Energía—, fue planteado por Enron: un esquema que, en sus líneas centrales de desmantelamiento del sector público mexicano, persiste con ese funcionario ocupando la oficina presidencial de México.
19. John Ross, «Halliburton arruina México», *Counter-Punch*, disponible en [www.rebelion.org/noticia.php?id?=41643\\_](http://www.rebelion.org/noticia.php?id?=41643_).
20. Ídem. Se refiere al TRIFE, es decir, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
21. David DeGraw, «Halliburton Steals Mexican Election?», disponible en [www.alternet.org/bloggers/degraw/41366](http://www.alternet.org/bloggers/degraw/41366).
22. *Business Week*, septiembre de 2002, citado en John Saxe-Fernández, «Banco Mundial...», ed. cit.
23. «AN y PRI legalizarán privatización de servicios del Estado, denuncian», *La Jornada*, México, DF, 6 de diciembre de 2009, p. 1.
24. Sarahí Ángeles Cornejo, «Aplicación de la reforma neoliberal y privatización de la industria eléctrica en México», en John Saxe-Fernández, coord., *La energía en México: situación y alternativas*, CEIICH/UNAM, México, DF, 2009, pp. 267-304.
25. *Ibidem*, p. 288.
26. José Luis Manzo, «La privatización reciente de los hidrocarburos en México», en John Saxe-Fernández, coord., *La energía en México...*, ed. cit.
27. National Intelligence Council, *Global Trends 2025: a Transformed World*, Washington, DC, 2008, disponible en [www.gov/nic./NIC\\_2025\\_project.html](http://www.gov/nic./NIC_2025_project.html).

# **Transición y nueva política en Costa Rica: del bipartidismo «perfecto» a la movilización social y el pluripartidismo**

**Luis Guillermo Solís Rivera**

*Político e historiador. Universidad de Costa Rica.*

Durante más de medio siglo, el sistema político costarricense se caracterizó, entre la mayoría de los de la región latinoamericana, por la conjunción de cuatro elementos fundamentales: su *estabilidad*, fruto del establecimiento de mecanismos de elección democrática; su *legitimidad*, sustentada en un marco institucional encabezado por un Tribunal supremo de elecciones autónomo y con facultades omnímodas en materia electoral; su *representatividad*, expresada en la inclusión de casi todas las fuerzas políticas existentes en el país (hasta los partidos comunista y socialista, aun en momentos en que estos se encontraban formalmente ilegalizados), y su *naturaleza sólidamente bipartidista*, condición que se manifestó, desde 1953 en adelante —salvo contadas excepciones que confirmaron la regla—, en un control alterno del Poder Ejecutivo por los partidos o coaliciones mayoritarias cada cuatro años. Si bien estas y otras condiciones resultan más o menos de curso corriente en la América Latina de nuestros días, lo notable en el caso costarricense es que aquel conjunto de factores confluyeron a partir de la finalización de la última guerra civil del país (1948) y tras la promulgación de la Constitución de 1949, en plena Guerra fría.<sup>1</sup>

Desde un punto de vista sociológico, tal sistema político fue, en palabras de Jorge Rovira Mas, «mesocrático». Valga decir, se articuló en torno a un tenso entendimiento entre las oligarquías tradicionales del país —históricamente vinculadas a la producción del café, el comercio y las finanzas, pero reforzadas con un sector transnacional, de creciente peso político, relacionado con el cultivo del banano—, y los sectores de pequeña y mediana burguesía aliados con fragmentos progresistas de las élites nacionales y fortalecidos tras el triunfo militar de José Figueres Ferrer —*don Pepe*— en la guerra civil.<sup>2</sup>

Surgió así, conducida por el Partido Liberación Nacional (PLN) —fundado en 1951 por Figueres— la llamada «Segunda República», en esencia un Estado benefactor, que incorporaba en su seno dos grandes tradiciones políticas: la socialcristiana, que hizo posible la gran reforma social de los años 40, propiciada por un insólito pacto entre el Partido Comunista, la Iglesia católica y un fragmento de la gran burguesía nacional, y la «socialdemócrata», resultante de una ecléctica conjunción de keynesianismo económico, liberalismo político y conservadurismo cultural. Con altibajos, este

«modelo» se mantendría incólume hasta principios del siglo XXI, dotando a Costa Rica de una excepcionalidad reconocida en todo el hemisferio, subrayada aún más por la abolición constitucional de las fuerzas armadas como institución permanente.

Sobre el Estado benefactor y su crisis se ha escrito mucho y no es este el espacio para reseñar dicho análisis. Sí conviene recordar que, ya para finales de los años 70, Costa Rica tuvo que enfrentar los efectos de dos crisis provocadas por los aumentos en el precio del petróleo. También por esa misma fechas se generalizaron las propuestas de «ajuste estructural» promovidas por el Fondo Monetario Internacional con el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos —bajo Ronald Reagan— y Gran Bretaña —bajo Margaret Thatcher. Ello produjo grandes desequilibrios financieros en lo que había sido un modelo de organización que se desarrollaba sin sobresaltos, y motivó, a partir de entonces, un proceso de recortes en los programas estatales así como una caída sin precedentes en la inversión social. Aunque en Costa Rica los impactos de tales políticas fueron mucho menores y de aplicación más tardía que en otros países de América Latina, en última instancia marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del sector público —hasta ahora incuestionado y decisivo— que para entonces sostenía a más de 30% de la población económicamente activa (PEA). También produjeron los primeros síntomas de desgaste del sistema político tradicional, el cual ya para aquel momento empezó a denotar los efectos de males que posteriormente se generalizaron: el clientelismo y otras formas igualmente perversas de corrupción.<sup>3</sup>

El corolario de este derrotero histórico ha sido una profunda transformación del sistema político costarricense acrecentada durante los tres últimos lustros y cuyos perfiles no terminan todavía de concretarse. Este ensayo interpreta esos cambios y los coloca en una perspectiva más amplia, pues junto a la política, también la sociedad costarricense ha experimentado otras profundas modificaciones en todos los órdenes.

## Una sociedad transformada

En los últimos sesenta años, la sociedad costarricense, su conformación, usos y costumbres, y también los factores estructurales que la condicionan, ha sufrido cambios notables.<sup>4</sup> La población del país, después de una fase intensa de expansión durante los años 50 y los 60, ha empezado a envejecer. Esto significa que, para mediados del siglo XXI, la pirámide poblacional se habrá invertido: serán pocos los jóvenes y muchos los viejos a quienes el Estado y la sociedad tendrán que atender.

En efecto, el incremento en la edad promedio de los ciudadanos traerá aparejados grandes desafíos de orden financiero —pensiones, por ejemplo—, de salud —la morbilidad cambiará de manera radical en un entorno de expectativa de vida ampliado—, de transporte y organización territorial, y de convocatoria y conducta política.<sup>5</sup>

Asimismo, aunque el imaginario popular se resiste a admitirlo, el país ha dejado de estar dominado por valores y actividades productivas propias del sector rural, y es, en lo fundamental, urbano, con una economía orientada hacia el sector terciario. La producción agropecuaria, por ejemplo, hoy representa tan solo 15% del Producto interno bruto (PIB), contra más de 60% a mediados de los 50. Ello ha sido acompañado por una concentración desordenada en las principales ciudades del centro del país, donde, desde hace ya varias décadas, reside más de la mitad de la población de Costa Rica. Tal situación contrasta considerablemente con la de los demás países centroamericanos, donde la ruralidad poblacional prevalece por encima de 40% del total, y hasta casi 60% en el caso de Guatemala.

Esto ha traído aparejada una mayor fragmentación sectorial de la fuerza de trabajo. La sociedad costarricense fue casi homogénea durante el siglo y medio que siguió a la independencia, en 1821. Aquellos años fueron de vida rural, matizada por segmentos relativamente pequeños de burguesía urbana, profesiones liberales y otras actividades vinculadas con los pocos servicios disponibles. Como resultado de las políticas del Estado benefactor, después de los años 40 del siglo XXI, los costarricenses ampliaron de modo exponencial sus ocupaciones y se ubicaron cada vez más en el sector terciario. En la actualidad, la diversificación creciente de las actividades productivas, la ampliación de la cobertura educativa y, en particular, la aparición de multitud de centros universitarios públicos y privados, han producido un profundo cambio social en importantes sectores urbanos que, en ascenso consumistas e informados, tienen expectativas no siempre satisfechas por la oferta laboral disponible, y muestran grados cada vez mayores de conservadurismo e insatisfacción política.

La otra cara de la moneda de este fenómeno, resultante de la aplicación de medidas de corte neoliberal durante los últimos veinticinco años, lo refleja el progresivo deterioro de la calidad de vida de los sectores de ingresos medios y bajos del país. El desempleo y el aumento de la informalidad laboral, así como el deterioro en la calidad y el acceso a servicios públicos de educación, salud, vivienda y crédito, afectan de manera especialmente brutal a estos sectores que se han visto desplazados a la marginalidad y, en no pocos casos, a la miseria.<sup>6</sup> En otro sentido, la pauperización progresiva de las «clases medias» —las cuales, como ya

vimos, constituían la «columna vertebral» del sistema político— ha resquebrajado los cimientos mismos del Estado social de Derecho, y amenaza de forma directa la estabilidad imperante en el país desde hace medio siglo.

Esto es más que una metáfora. Las principales ciudades del país se encuentran hoy divididas por visibles fronteras determinadas por niveles de ingreso, entre barrios que bien podrían ubicarse en el mundo rico, y áreas paupérrimas contiguas, donde impera la violencia típica del Cuarto mundo.<sup>7</sup>

En Costa Rica, durante la última década, los índices de crimen violento han pasado de 7 a 11 homicidios por cada cien mil habitantes. Si bien estas cifras siguen ubicándose entre las más bajas de Centroamérica, por encima de Nicaragua y por debajo de Panamá, no es tranquilizador que se hayan casi duplicado en tan poco tiempo y con tendencia a empeorar. Al respecto, prevalece una generalizada opinión entre los expertos en cuanto a la vinculación entre el aumento de la violencia y la expansión de las actividades del narcotráfico, que se han incrementado en toda la región de manera exponencial, como parte de las nuevas dinámicas del crimen organizado en la zona. Sin embargo, también es notorio un incremento en otros tipos de criminalidad y de violencia, incluida la doméstica, que ha experimentado un ascenso considerable.<sup>8</sup>

En suma, desde un punto de vista estructural el mayor cambio de la sociedad costarricense tiene que ver con el aumento de la desigualdad, cuyos bajos índices la diferenciaron durante décadas del resto de los países vecinos. Esta condición, detalladamente analizada por diversos informes, constituye, a mediano y largo plazos, el principal desafío para la política nacional.

## La ruptura del modelo «tradicional»

En ese marco general, difícilmente la política costarricense podía quedar exenta de transformaciones. El proceso se inició de forma tardía con respecto a otros países latinoamericanos, motivado por disparadores sociales insospechados. El primer aviso de lo que estaba por venir fueron las protestas sociales que se produjeron para impedir el intento del gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez —del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 1998-2002— de modificar el monopolio del sector de telecomunicaciones con el propósito ulterior de privatizarlo utilizando como vehículo un «paquete» de leyes a las cuales el ingenio popular bautizó como «el combo». En Costa Rica, tanto este sector como el de la producción de electricidad, tienen una notable legitimidad asociada al imaginario del Estado benefactor de los años 50 y los 60. Su ente principal, el Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) tradicionalmente ha sido un símbolo de la modernidad del país y un baluarte del principio de la soberanía energética, el cual, además, ha sobresalido por su eficiencia y alta competencia técnica en toda América Latina. Pese a ello, desde hace más de veinte años, el ICE ha sido acosado por las fuerzas privatizadoras. Sin embargo, en 1999, la arremetida frontal del gobierno, en connivencia con otras fuerzas políticas, dos expresidentes de la República y grandes capitalistas locales vinculados con compañías transnacionales, provocó una explosión social —sin precedentes desde 1969, cuando un movimiento social similar impidió el establecimiento en el país de la compañía minera ALCOA. Conducida en un primer momento por estudiantes universitarios y de colegios de secundaria, la ola de indignación se generalizó de inmediato. En pocas horas, el gobierno de Rodríguez y sus fuerzas policiales se vieron superadas por los manifestantes, quienes, severamente reprimidos al inicio, se recompusieron con rapidez, hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad del Poder Ejecutivo.

El desenlace del «Combo del ICE» fue catastrófico para el gobierno de Rodríguez y sus aliados. No solo tuvieron que dar marcha atrás con la pretendida reforma legal, sino que el desaguado generó una fuerte crisis política que dejó al partido oficialista desacreditado y vulnerable, a más de dos años del fin de su administración. Para las fuerzas sociales y estudiantiles, por el contrario, la lucha contra el «combo» evidenció al menos tres fenómenos concomitantes, de los cuales tomaron debida nota: en primer lugar, la existencia de una «propuesta» hegemónica que trascendía a los partidos políticos históricos e involucraba a varios poderes fácticos; en segundo lugar, la importancia estratégica que en esa lucha había tenido la convergencia de los movimientos sociales, gremios, asociaciones ambientales y religiosas, organizaciones estudiantiles, etc., muchos de los cuales habían mostrado actitudes muy sectarias en el pasado; y, por último, la opacidad de los pactos y de los procedimientos de negociación utilizados por la élite política tradicional, que insinuaban no solo actitudes excluyentes sino también grados notorios de corrupción.

Curiosamente, las organizaciones populares y sociales involucradas en este inédito movimiento social no fueron capaces de trascender la coyuntura y la fuerza política que en su momento pudieron haber aprovechado se disipó. Esto fue especialmente cierto para el principal partido de la izquierda histórica que, habiendo liderado la lucha contra el «combo», quedó relegado entre los principales actores que se presentaron a los comicios presidenciales de 2002.

No obstante, la lucha contra el «combo del ICE» sí produjo una importante fisura en el PLN.

Crecientemente conservador, el Partido fundado por Figueres se plegó a los conciliábulos del gobierno y sus aliados y, en consecuencia, también terminó afectado por el descalabro sufrido por estos. De su seno se desprendió en el año 2000 un bloque de simpatizantes liderados por una figura joven y contestataria —Ottón Solís— que fundó el Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual reivindicó de manera especialmente firme la ética y la moral en la administración pública, así como la defensa del Estado social de Derecho puesto en cuestión por los partidos históricos que en su momento lo prohicieron. Aunque el PAC terminó tercero en los comicios de 2002, su votación, alimentada por un bloque inusual de ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales, fue suficiente para forzar a una segunda vuelta —inédita en la historia electoral del país— en la que el PLN fue derrotado por el PUSC.

La aparición del PAC constituyó una novedad en el sistema político costarricense e inauguró un nuevo ciclo en la vida electoral. Acusado de «moralista» y «ultra», el PAC y su líder lograron, sin embargo, posicionar el tema ético como central en la agenda pública de Costa Rica. Más aún, pusieron fin al bipartidismo «perfecto» que había dominado, con pocas excepciones, la política local desde 1953. Este logro, así como la profundidad de la crisis que afectaba al sistema político en ese momento, no fue percibido en toda su magnitud hasta que se realizaron las investigaciones y luego los arrestos y prisión preventiva de los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez (este último, a la sazón recién electo Secretario general de la OEA— en los años 2004 y 2005; en ambos casos, acusados de varios delitos contra la cosa pública.<sup>9</sup> A ello se sumó una investigación posterior que reveló la relación contractual de otro expresidente —el liberacionista José María Figueres Olsen (1994-1998)— con una empresa contratada por la compañía francesa ALCATEL, en ese momento involucrada en el escándalo en el que aparecía Rodríguez como actor prominente. A diferencia de lo ocurrido con Calderón y Rodríguez, las autoridades judiciales nunca le levantaron cargos a Figueres, ni encontraron razones objetivas para enjuiciarlo; no obstante, su salida *sine die* de Costa Rica y su renuencia a presentarse a las sesiones indagatorias realizadas por la Asamblea Legislativa levantaron muchas suspicacias y críticas que aún prevalecen en amplios sectores del país.

Estos acontecimientos produjeron un impacto sin precedentes en la ciudadanía y, profusamente cubiertos por los medios de información, se convirtieron en el punto de quiebre del sistema político tradicional. Las consecuencias tampoco se hicieron esperar. En las elecciones presidenciales de 2006, el PUSC fue repudiado en las urnas de forma masiva: pasó de 19 a 5

legisladores, y cayó al cuarto lugar en la votación general. Además, cuando el PLN postuló como candidato a Oscar Arias Sánchez —quien ya había ocupado el cargo de primer mandatario en el período 1986-1990—, la que parecía una fácil reelección se vio de pronto seriamente desafiada una vez más por Ottón Solís.<sup>10</sup> Aprovechando una inédita coyuntura de desencanto socialcristiano, y ayudado por la extrema polarización producida por el debate sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos (TLCCA-RD o CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), Solís alcanzó un máximo histórico en la votación del PAC y casi derrotó a Arias, quien solo logró superarlo por escasos nueve mil votos, algo más de 1,2% del total.

Fue tan estrecho el triunfo de Arias que incluso levantó sospechas poco usuales en la historia contemporánea del país respecto a la pureza de esos comicios y el papel desempeñado en ellos por el Tribunal Supremo de Elecciones. Superada esa fase inicial de tensión, todo pareció volver a la normalidad; hasta que, según lo previsto, la administración Arias convocó a la ratificación del TLC en la Asamblea Legislativa, cuya firma se había producido, aunque con mucho atraso y evidente renuencia, en los meses finales del gobierno de su predecesor, Abel Pacheco (2002-2006).

## La lucha contra el TLC y su significado como catalizador político

El proceso de ratificación legislativa del TLC<sup>11</sup> suscitó una nueva movilización de agentes y movimientos sociales, así como de partidos políticos que una y otra vez frustraron las intenciones del gobierno de concretarlo. En esta ocasión, sin embargo, la polarización que ya se había manifestado durante la campaña electoral aumentó de manera exponencial, y dividió a la sociedad costarricense en dos grupos, casi idénticos, de favorecedores y detractores del Tratado. Especialmente importante en este contexto fue la aparición, por primera vez en la historia nacional, de los llamados «Comités Patrióticos», organismos sociales sin adscripción partidaria conocida, que se integraron de forma voluntaria e independiente en muchos municipios del país a partir de convocatorias locales. En estos núcleos ciudadanos se encontraron representantes de las más variadas proveniencias partidistas e ideológicas, y pronto se convirtieron en importantes plataformas de acción política que sustituyeron en protagonismo y capacidad de movilización, a los partidos involucrados —nunca en lo formal, sino por intermedio de sus militantes—, y le dieron a la lucha social un contenido mucho más autónomo y popular.

Para 2007, Costa Rica era el único país centroamericano que no había ratificado ese instrumento y esto le producía a la administración Bush una situación embarazosa frente a sus aliados regionales y en especial, ante sus propios aliados y adversarios en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos.

No corresponde realizar aquí un análisis del largo camino discurrido por el TLC desde su firma hasta su aprobación, prolongado por tres años. Es suficiente indicar que Arias, asediado por la terca oposición del Movimiento Patriótico del NO al TLC, se vio obligado a convocar un referendo con el fin de someter la decisión final a la voluntad popular. Por ser la primera vez que se utilizaba este mecanismo de consulta en la historia del país, el proceso estuvo marcado por grandes tensiones, manipulaciones oficialistas y desencuentros. El balance final antes del día de las votaciones mostraba la existencia de dos bloques irreconciliables entre sí: el Movimiento del NO, conformado por una variopinta coalición de entidades y organizaciones sociales, políticas y religiosas, y ciudadanos de todas las extracciones sociales; y el Grupo del SÍ, que aglutinaba al gobierno, las compañías transnacionales, los grandes bufetes corporativos que las representaban, el bloque de partidos políticos neoliberales —PLN y Movimiento Libertario principalmente—, los medios de comunicación tradicionales, las Cámaras empresariales, el gobierno norteamericano por medio de su embajada en San José, los capitales centroamericanos, y trabajadores movilizados por sus patronos, en particular del sector de manufacturas textiles. Se trataba, en suma, de un caso emblemático para el análisis desde la sociología política.

En última instancia, tras una campaña en la que el oficialismo recurrió con gran efectividad al recurso del miedo como principal argumento a favor del TLC, y no sin que antes se produjera una intervención *in extremis* de la propia Casa Blanca en los días inmediatos previos a la realización del referendo, el SÍ se impuso al NO por un escaso margen de menos de 3% de los votos emitidos. Este resultado, si bien fue considerado «heroico» por las fuerzas sociales involucradas, provocó paradójicamente un cisma entre las organizaciones contestatarias que terminaría —al igual que el «combo del ICE» siete años antes— desaprovechándose desde un punto de vista electoral.

En efecto, con dosis variables de intimidación, chantaje político, apelación al miedo, y concesión de prebendas económicas y políticas, la administración Arias utilizó con habilidad la legitimidad otorgada al TLC por el referendo no solo para ratificarlo sino principalmente para aprobar posteriormente toda la legislación que permitiera su implementación. Este proceso de enmiendas legales, que en algunos casos

incluso fue mucho más allá de los términos requeridos por el Tratado, sentó las bases de una nueva etapa en el desmantelamiento del Estado benefactor y, sobre todo, de los sectores que más interés concitaban en las empresas transnacionales: los monopolios estatales en energía, telecomunicaciones y seguros, y la modificación de las normas de propiedad intelectual, que facilitaría el acceso de las transnacionales a un promisorio mercado de productos farmacéuticos y medicamentos que, solo en lo que toca a la Caja Costarricense del Seguro Social, representaba, en el año 2007, gastos por más de setenta millones de dólares al año.

En ese contexto, la amplia movilización social concitada por la lucha contra el TLC perdió fuelle y, finalmente, se desvaneció como motor de articulación electoral de cara a las elecciones de 2010. De manera particular, los sectores más progresistas y de izquierda que integraban el Movimiento del NO le reclamaron al PAC y a otros partidos —que en su momento estuvieron en contra del Tratado, pero tras el referendo decidieron no obstruirlo— por una conducta que algunos no dudaron en calificar de abierta «traición» a la causa popular. Desmovilizados los Comités Patrióticos, dividido el Movimiento, y desgastado el PAC, que fue objeto de una de las campañas mediáticas de descrédito más abrumadoras y sistemáticas de la historia reciente de Costa Rica, el PLN ganó sin problemas las elecciones en la figura de la primera mujer en acceder a la primera magistratura de la nación, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

## **El corolario del cambio: arbitrariedad, corrupción y la «Alianza por Costa Rica»**

No obstante el triunfo obtenido en el referendo y la capacidad que tuvo la administración Arias para recomponer su popularidad en la segunda parte de su mandato, el bienio 2008-2010 estuvo marcado por la arbitrariedad presidencial y la adopción de decisiones de dudosa legalidad que, en algunos casos, terminaron en los tribunales de justicia. Cabe mencionar, entre otras, las presiones de la Presidencia de la República sobre diversas instancias del Poder Judicial, incluida la manipulación de nombramientos de magistrados de varias salas de la Corte Suprema de Justicia; la política deliberada de dominar, por medio de designaciones de individuos política y personalmente afines al presidente y a su hermano, el ministro de la Presidencia, las instituciones contraloras del Estado —Contraloría y Procuraduría Generales de la República y Ministerio Público—; el otorgamiento de concesiones de carreteras sin adecuadas salvaguardas del interés público y exentas de marcos regulatorios; la autorización —vía decreto y

declaratoria de interés público— para el funcionamiento de una mina de oro a cielo abierto en una zona de conservación cercana a la frontera con Nicaragua; la destitución ilegal del Sindicato de Trabajadores de la Junta Administradora de los Puertos de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), con el fin de facilitar la concesión del puerto de Moín (ello, tras fracasar el intento de «retribuir» a todos los afiliados con un pago de 160 millones de dólares, su apoyo al proyecto gubernamental y consecuente despido), etc.

Curiosamente, la primera «víctima» de este entramado de malas prácticas y abusos de poder fue la presidenta Chinchilla, cuyo mandato se inició en medio de intensas polémicas en torno a las actuaciones de su predecesor. Enfrentada a todos estos problemas y acosada, desde su propio partido, por el prematuro anuncio de Rodrigo Arias, hermano de Oscar, de su precandidatura presidencial activa para 2014 —que le significó a ella la pérdida del control político sobre la fracción legislativa del PLN—, tuvo un primer año de gestión muy problemático, agravado por dos temporales que, a finales de 2010, destruyeron 25% de la infraestructura vial asfáltica del país.

Este fue el escenario en el que, el 1 de mayo de 2011, se produjo uno de los acontecimientos políticos más inusuales en la historia del Poder Legislativo costarricense: la formación de un frente multipartidista, denominado Alianza por Costa Rica, entre casi todas las fracciones de oposición al PLN, las cuales, pese a sus profundas diferencias ideológicas resolvieron unar esfuerzos para formar, con 31 de 57 votos, una nueva mayoría en el Parlamento, y así desplazar al partido oficial, que cuenta con apenas 25 votos propios y dos de los partidos religiosos evangélicos, por primera vez en los últimos cuarenta años. Más aún, esta fue la primera ocasión en la historia costarricense en que una alianza partidaria logra este objetivo, pues otrora fue solo un partido —no varios— el que pudo romper la hegemonía oficialista.

La Alianza ha sido presentada como un espacio de articulación política de tipo parlamentario, cuyo propósito fundamental es rescatar la autonomía de la Asamblea Legislativa frente al Poder Ejecutivo. También como un instrumento para agilizar la tramitación de leyes y acuerdos, y como una oportunidad para mejorar la calidad del control político que los partidos de oposición tienen la obligación de ejercer frente al gobierno nacional. Pero, además, la negociación que culminó con su creación constituyó un proceso transparente, de cara a la ciudadanía y los medios de comunicación, y conllevó no solo la firma pública de los acuerdos por parte de todos los congresistas involucrados, sino también la de las Comisiones Políticas y los Comités Ejecutivos de sus respectivos partidos.<sup>12</sup>

Pero si algo llamó la atención al crearse la Alianza, más allá de su amplio espectro ideológico, fue la función que en ella tuvo el PAC. Este Partido, que siempre se caracterizó por su renuencia a participar, por razones de principio ético, en ejercicios de convergencia política como este, no solamente acompañó el proceso, sino que desempeñó un papel destacado en su concreción. Tanto es así, que uno de los diputados del PAC, Juan Carlos Mendoza García de apenas 35 años, resultó escogido para encabezar el Directorio opositor, y hoy ejerce la presidencia del órgano legislativo nacional.

Para los efectos de este ensayo, la conformación de la Alianza por Costa Rica marca un hito más —el tercero según lo indicado en páginas anteriores— en el proceso de cambio político que podría conducir, en 2014, a un gobierno antihegemónico en el país. Evidentemente, la Alianza es un fenómeno que se produjo en el ámbito legislativo, en el cual no es extraño ni difícil de imaginar la creación de una plataforma opositora de las características mencionadas. Un esfuerzo idéntico, pero dirigido a formar una coalición electoral con el fin de llegar a controlar el Poder Ejecutivo no solo plantearía muchos más desafíos prácticos, sino que conllevaría —para ser exitosa— una flexibilización ideológica y programática de parte de quienes la integren, lo que por el momento parece altamente improbable.

## En conclusión

Durante la última década, el sistema político de Costa Rica ha sufrido tres importantes «sobresaltos» caracterizados, todos ellos, por la articulación de fuerzas sociales y políticas insospechadas. El punto de encuentro de estos sectores ha sido, en términos generales, el repudio a los «usos tradicionales» de administrar la cosa pública que en ese período han sido hegemonizados por el PLN, abanderado del «reformismo costarricense» en el pasado y hoy parte de una alianza conservadora con quienes, por largo tiempo, fueron sus enemigos de clase. En particular, el cambio se ha producido porque una buena parte de los movimientos, sectores, organizaciones y partidos que han participado en este giro histórico, son «progresistas». Valga decir, son entidades que con diversos grados de radicalidad, se oponen a lo que genéricamente se podría denominar el «proyecto neoliberal», que tras dos décadas de aplicación en Costa Rica, pareciera haber desplazado al Estado benefactor que fue predominante en el país por más de medio siglo.

El marcado cambio en este debate no se ha producido en el vacío. La sociedad costarricense, su economía y relaciones culturales también se han modificado mucho. En la actualidad, Costa Rica es



una sociedad fragmentada, que envejece gradual pero inexorablemente, muy urbana, insegura, temerosa y desconfiada «del otro» y, sobre todo, escéptica de la política, los políticos y sus organizaciones partidarias, cuya legitimidad se ubica en los lugares menos privilegiados en las encuestas de opinión.

La estrategia de desmantelamiento del Estado benefactor de los años 50 y los 60, tercamente resistida por el país durante una década pero que por fin tomó forma y empezó a tener resultados concretos a finales de los 80, alcanzó un punto alto con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos. Este instrumento —firmado en 2005, pero que no se ratificó sino hasta 2007 en medio de masivas movilizaciones sociales—, permitió a los sectores más conservadores del país contar con el recurso jurídico necesario para modificar por vía interpretativa, lo que les había resultado casi imposible lograr en las instancias políticas debido a la resistencia del modelo y sus propios agentes.

Está claro que las transformaciones políticas vividas por el país durante la última década abarcan no solo a los grupos progresistas y contestatarios de la sociedad. Si bien es cierto que estos grupos sobresalen por su combatividad y por sus originales, novedosas y en muchos sentidos inéditas maneras de articulación, también los sectores de la élite económica y política han modificado de modo sustantivo sus enfoques en relación con la administración del poder. En el caso de los primeros, llama mucho la atención la disposición de buscar nuevas formas de convergencia social y política que, sin evitarlas, disimulan mucho las grandes brechas ideológicas y programáticas que en otros momentos impidieron tales acercamientos y adopción de posiciones comunes. En el de los segundos, el abandono de la preocupación —muy acendrada en la política costarricense de la «Segunda República»— por la equidad, por la preservación de los equilibrios sociales que, sin desmerecer ni atentar contra el orden establecido sino, en última instancia, potenciándolo por medio del fortalecimiento de la «mesocracia» nacional, produjeron un sistema de convivencia estable, culturalmente conservador, reformista en lo social y progresivo en lo económico. Un sistema mucho más «revolucionario» y exitoso que otros resultantes de procesos radicales. Este abandono, que algunos han caracterizado como un proceso de «centroamericanización» del «modelo» costarricense, es quizá el más notable retroceso experimentado por la democracia nacional en el último medio siglo.

La cuestión ahora es saber cuál será el resultado final de esta serie de profundos cambios. Una posibilidad es que, al igual que lo sucedido con el «combo del ICE» y la lucha contra el TLC, la Alianza por Costa Rica

y cualesquiera otras propuestas de convergencia del movimiento social y político progresista, de camino al año 2014, se malogren. En tal caso, una vez más el país sería testigo de una dinámica social incapaz de convertirse en fuerza electoral que pueda derrotar al PLN. También podría ocurrir, sin embargo, que finalmente dichas fuerzas sociales encuentren, junto a los partidos políticos de los cuales tanto desconfían —no solo los progresistas sino incluso otros de mucho menor «pedigrí popular»—, un espacio para la construcción de agendas y la distribución de cuotas de poder que rompan con la hegemonía del PLN y sus aliados. En ese contexto, el país podría estar a las puertas de un cambio político equivalente al experimentado por otras naciones latinoamericanas —como Uruguay, país con el cual Costa Rica guarda muchas similitudes—, en donde la llegada al poder de sectores alternativos de izquierda moderada han dado un golpe de banda inesperado a un sistema político que lucía incapaz de sostenerse frente a las embestidas del capital transnacional.

Aún así, cabría preguntarse si un gobierno de tales características podría, frente a los desafíos que le plantea la globalización y los compromisos regionales ya adquiridos en el marco del TLC, resistir las tendencias globales; máxime cuando la escala de su economía es tan pequeña y tan dependiente frente de los factores de poder internacionales. Pero esta es una pregunta con mucho de retórica, pues no hay forma de contestarla, excepto llegando primero al poder, algo que solo ocurrirá en 2014 (como muy pronto); a menos que se considere que ya ha acontecido en el plano local, pues hay municipios donde ya gobiernan alianzas locales, conformadas por los mismos partidos que controlan el Directorio de la Asamblea Legislativa. Allí, los resultados hasta el momento son mixtos, al igual que no son concluyentes las lecciones aprendidas durante la elección de alcaldes y concejales de distrito del pasado mes de diciembre de 2010. En este caso, hubo alianzas exitosas, otras fallidas y aun otras en las cuales la experiencia fue muy positiva a pesar de la derrota frente a las fuerzas oficialistas.

Algunos lectores dirán, posiblemente con razón, que todo lo mencionado hasta ahora puede resultar interesante como anécdota, pero poco impresionante desde un punto de vista político, pues la transformación aludida como motivo principal de este análisis ni es lo suficientemente profunda, ni marca una verdadera ruptura de las tendencias del sistema político costarricense. Es legítimo tener esa posición, pero no hay que olvidar la peculiar naturaleza del país, donde los cambios no suelen ocurrir de manera abrupta, ni los procesos políticos modificarse en plazos cortos. De hecho, lo que más llama la atención de lo sucedido en Costa Rica durante la última década, es la gradual

pero progresiva acumulación de experiencias y fuerza política de partidos y organizaciones sociales por lo general poco vinculadas entre sí, y con poca capacidad de incidencia electoral en el conjunto del sistema político; en especial, frente a un PLN hegemónico, cuya fuerza y control han sido casi incontrastables durante ese período, pero que ya empiezan a hacer aguas como resultado de sus propias contradicciones internas, además de la presión que, desde afuera, ejerce una oposición en ascenso empoderada.

Para finalizar, habría que indicar la sensación, la percepción, de que debido a los abusos, arbitrariedades e ilegalidades del grupo hegemónico, en Costa Rica están madurando las condiciones de hartazgo social que, equivalentes a las de los «indignados» en España, podrían provocar un estallido de insatisfacción cuando se produzca una mínima chispa, un motivo ínfimo para decantar la ira contenida de la gente. Sobre esto no hay mediciones objetivas, sino distintas manifestaciones de malestar, tensión callejera e impaciencia creciente frente a la irresolución de problemas graves que, pese a serlo, no son eficazmente atendidos por las autoridades.

En suma, el sistema político costarricense, fruto de la «Segunda República», finalmente periclitó y ahora se encuentra en una fase de transición hacia un nuevo escenario, que todavía no termina por aclararse. Ese doble desafío, el de la transición y el de la construcción del espacio en donde se afincará el nuevo sistema, será uno de los principales asuntos de la agenda costarricense en los próximos años.

## Notas

1. Iván Molina y Steven Palmer, *Breve historia de Costa Rica*, Editorial de la Universidad de Costa Rica (EUCR), San Pedro, 2007.

2. Jorge Rovira Mas, ed., *Desafíos políticos de la Costa Rica actual*, EUCR, San Pedro, 2007. El tema fue elaborado previamente por el mismo autor en *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, EUCR y Fundación Friedrich Ebert, San Pedro, 2001.

3. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño, *Entre el desarraigo y el despojo*, EUCR, San Pedro, 2001.

4. Juan Manuel Villasuso, ed., *Procesos de cambio en Costa Rica: reflexiones al inicio del siglo XXI*, CEDAL y Fundación Friedrich Ebert, San José, 2001. La mejor colección de datos «duros» sobre el proceso de transformación de la sociedad costarricense durante los últimos tres lustros es el *Informe sobre el estado de la nación*, proyecto de investigación e incidencia política. El más actualizado de ellos, el XVI, correspondiente al año 2009, se divulgó en 2010.

5. Marlon Mora, *Discursos de la vejez*, manuscrito inédito.

6. Dos datos reveladores en esta materia: según el *III Informe sobre el estado de la educación* (2011), más de 50% de los estudiantes que

ingresan al nivel secundario —en Costa Rica la asistencia hasta el 9º grado de educación diversificada es obligatoria y costeadada por el Estado— no lo concluyen. En el caso de las mujeres, casi 20% de los partos son de jóvenes adolescentes, sin pareja. Su vulnerabilidad, en estas condiciones, es manifiesta.

7. De especial valor heurístico es el volumen de Jorge Nowalski, ed., *Asimetrías económicas, sociales y políticas en Costa Rica*, PNUD/CIDH/Fondo Costa Rica-Canadá, San José, 2003. Véase también Carlos Castro *et al.*, *Transformaciones en la estructura social en Costa Rica*, EUCR, San Pedro, 2007.

8. Entre otros, véase Daniel Matul Romero y Carlos Torres Jiménez, *Costa Rica y la seguridad democrática, valores para un modelo de seguridad*, FUNPADEM/CRIES, San Pedro, 2004. También PNUD, *Venciendo el temor. (In)Seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica*, PNUD, San José, 2005. Véanse datos más actualizados en Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo, eds., *Seguridad regional en América Latina y el Caribe* (Anuario 2009), Fundación Friedrich Ebert, Bogotá, 2010.

9. El caso del PUSC es emblemático de los tiempos que corren en el país. Sobre su evolución histórica véase Oscar Aguilar Bulgarelli, *La forja del Partido Unidad Social Cristiana (su verdadera historia)*, Progreso, San José, 2003 y Orlando Salazar Mora, *El Partido Unidad Social Cristiana: antecedentes, fundación e importancia en la vida política nacional (1963-2011)*, en prensa.

10. La reelección de Arias también resultó polémica. Prohibida desde 1969 por prescripción constitucional, la reelección no consecutiva fue restituida en la Carta Magna como resultado de un recurso presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por favorecedores y amigos cercanos de Arias. Véase Guillermo Arce y Federico Tinoco, *Reelección en Costa Rica: golpe de Estado «constitucional» o reafirmación del orden constituyente*, Cuatricomía, San José, 2005.

11. La literatura sobre el TLC es abundante. A los efectos de este ensayo resultan relevantes María Florez-Estrada y Gerardo Hernández, *TLC con Estados Unidos: contribuciones para el debate*, EUCR, San Pedro, 2004; Alvar Salazar Antillón, *et al.*, *El Informe de los notables (Informe de carácter no vinculante al Presidente de la República sobre el TLC-CA-DR con los EEUU)*, Universidad Estatal a Distancia, San Pedro, 2005; Ludovico Feoli *et al.*, *Jornada de análisis sobre el TLC*, CIAPA, Curridabat, 2009; Gerardo Fumero Paniagua, *El Estado solidario frente a la globalización: debate sobre el TLC y el ICE*, Zeta Gráficos, San José, 2006; Saúl Weisleder, ed., *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos: proceso y resultados*, EUNED, San Pedro, 2004. Sobre la posición de la Iglesia católica, véase Arquidiócesis de San José, Vicaría Episcopal de Pastoral Social, *Iglesia y TLC: documentos episcopales*, VEPS, San José, 2007.

12. Véanse declaraciones y compromisos de la Alianza por Costa Rica en [www.pac.org](http://www.pac.org).

# **Puerto Rico: entre los límites y las paradojas de la colonialidad**

**José Javier Colón Morera**

*Profesor. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.*

It takes a pretty distracted country to forget about a colony. But I think it's fair to say that we, the people of the US, have managed to pull off just such a feat of collective amnesia when it comes to Puerto Rico.

Gary Silverman

**E**l Puerto Rico (PR) de comienzos del siglo XXI plantea paradojas múltiples. ¿Cómo continúa exhibiéndose cierta estabilidad política en un país sometido a controles coloniales directos, resultado de una época con una mentalidad abiertamente racista? ¿Cómo coinciden tasas enormes de ganancias del capital extranjero con aumentos en las transferencias financieras del gobierno federal de los Estados Unidos a la creciente población pobre de la Isla? ¿Por qué la cantidad de isleños se reduce significativamente mientras aumenta la presencia de una comunidad boricua en territorio estadounidense sin que ello produzca nuevas formas efectivas de hacer política sobre su futuro?

En cierto modo, la cita del editor de *Financial Times* que sirve de epígrafe en este ensayo<sup>1</sup> ayuda a entender algunas de las paradojas del PR contemporáneo: la relativa

invisibilidad de sus reclamos de descolonización, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, contribuye a «congelar» la solución del problema político, aunque no las graves consecuencias económicas y sociales de su estancamiento y aislación. Los intentos, por ejemplo, de traer a la consideración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los incumplimientos del gobierno norteamericano sobre la Isla<sup>2</sup> avanzan lentamente, pero reciben insuficiente cobertura mediática internacional y escasa acción de seguimiento gubernamental y no-gubernamental.

En este breve ensayo pretendo comentar la complejidad de algunos de esos problemas políticos y sociales, de naturaleza crónica, que parecerían, de manera superficial, desafiar la dialéctica y sus contradicciones. El contexto particular de Puerto Rico, lamentablemente poco comprendido y valorado aún, sobre todo por la comunidad internacional, sigue confundiendo a aquellos que aún piensan la Isla como una vitrina de la modernización capitalista.<sup>3</sup> En realidad, PR subsiste desde el punto de vista económico, de manera principal, sobre la base de un modelo económico de exenciones contributivas al capital manufacturero de los Estados

Unidos, que ya no le sirve bien.<sup>4</sup> Es un modelo que perjudica la creación de capital doméstico mientras se deteriora la infraestructura pública y la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad, y que depende cada vez más de la existencia de transferencias de programas federales para gestionar la precaria cotidianidad de un amplio sector de la población.<sup>5</sup>

Lo cierto es que el tamaño de los retos que enfrenta Puerto Rico es extraordinario. Sus problemas sociales se incrementan de forma exponencial mientras la capacidad real del gobierno interno para desarrollar políticas públicas efectivas y diferenciadas de las propiciadas o impuestas por la esfera del gobierno federal estadounidense es limitada. Si no se produce un nuevo paradigma de acción política, Puerto Rico parece abocado a un *impasse* político permanente, incapaz de asumir un programa realista de renovación social.<sup>6</sup>

Las fuerzas que pugnan por la descolonización enfrentan así un doble reto: redefinir el marco de sus relaciones políticas con los Estados Unidos para liquidar completamente el colonialismo, y alterar las coordenadas básicas de su obsoleto modelo de desarrollo económico y social. Pero la clase política del país se muestra más interesada en ganar las elecciones dentro del marco jurídico de territorio estadounidense y administrar de ese modo un poder político cada vez más limitado, que en modificar los viejos paradigmas inservibles.<sup>7</sup> Sin embargo, a comienzos de la segunda década del siglo xxi, una relación política altamente asimétrica con el gobierno norteamericano plantea posibles contradicciones que abren posibilidades novedosas de acción. Veamos algunas de las paradojas de esta crónica asimetría y algunas vías de escape de la inercia colonial.

No es posible entender este complejo contexto sin valorar la pervivencia de dinámicas y discursos que mantienen la fuerte hegemonía estadounidense.<sup>8</sup> Para ello, resulta oportuno revisar brevemente el impacto de la reciente visita del presidente Barack Obama a la Isla, en el verano de 2011.

## Los símbolos de la colonialidad

[La visita de] Obama viene a afirmar que cincuenta años no es nada. Que aún seguimos siendo boricuas pa' que tú lo sepas y que mientras haya una identidad diferenciada, pensar Puerto Rico desde Washington es un soberano lío, sin aparente solución. Aunque la solución, Mr. President, la estamos dando nosotros.

Daniel Nina

Cuando el pasado 14 de junio de 2011 el presidente Obama visitó Puerto Rico, se produjo algo así como la mejor caricatura posible de un escenario típicamente colonial (aunque algunos argumenten que más bien es

poscolonial).<sup>9</sup> En el hangar de la Base aérea de la Guardia Nacional Muñiz, en San Juan, estaban el liderazgo de los dos partidos principales —el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), defensor del Estado Libre Asociado (ELA)— y alrededor de un millar de invitados especiales. El escenario militar servía para ilustrar las consideraciones de seguridad al visitar una jurisdicción en donde se han producido diversas acciones radicales en el pasado.<sup>10</sup>

Sin embargo, a su llegada, Obama pareció más interesado en conversar con el cantante y actor Marc Anthony, a quien, según se alega, invitó personalmente para que lo acompañara en su llegada a San Juan. Así se evidenciaba que el Presidente podría estar en la Isla en una gestión más vinculada con atraer el voto de la comunidad latina residente en su país que lidiar con el complejo problema colonial. Hay que recordar que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos pueden votar en las elecciones presidenciales, pero no los de la Isla (ciudadanos estadounidenses por virtud de la Ley Jones del Congreso de 1917).<sup>11</sup> ¿No será esta la mayor de las paradojas?

En los días anteriores al arribo del Presidente se suscitó una discusión bastante risible entre alcaldes anexionistas del PNP (conocidos en Puerto Rico como «estadistas»). Algunos, contrarios a Obama y al Partido Demócrata de los Estados Unidos, argumentaban que una estadía de tres o cuatro horas era una falta de respeto a los puertorriqueños, mientras sus defensores alegaban que ningún presidente del Partido Republicano había pisado suelo puertorriqueño en cincuenta años. Ambas partes, desde luego, tenían razón.<sup>12</sup> De todas formas, eso no impidió que brigadas especiales de los municipios remozaran La Fortaleza, casa oficial del Gobernador, como otros edificios históricos ubicados en la «ruta presidencial».

Justo el día anterior de su llegada, Obama había visitado el estado de Florida, en donde se calcula que residen 848 000 personas de origen puertorriqueño. Dicho estado es un bastión clave de lo que podría ser una cerrada contienda presidencial, en vista de la lentísima recuperación económica que experimenta ese país al presente. En su mensaje de diez minutos al llegar a la Isla, Obama hizo lo que se esperaba. Su discurso estuvo repleto de generalidades y lugares comunes sobre el deseo del gobierno de los Estados Unidos de respetar la autodeterminación de Puerto Rico. Expresó, como se esperaba, que apoyaría cualquier petición de cambio que viniera avalada por una mayoría clara del electorado. Se ocupó, además, de hablar del «arroz con gandules» —plato típico de la cocina boricua—, como algo tan propio de su país como el *apple pie*, en lo que algunos podrían reprochar como un multiculturalismo algo hiperbólico.

Requerirle a Puerto Rico un mandato claro en cuanto a su estatus político es una *condición imposible*: la opinión pública de la Isla, compuesta por 3,7 millones de habitantes, está absolutamente dividida sobre su futuro político. A pesar de las múltiples consultas al respecto, en 1967, 1993 y 1998, ninguno de los resultados recientes puede interpretarse como un mandato claro de cambio.<sup>13</sup> Sin un mapa de transición hacia las alternativas descolonizadoras, es razonable entender la indecisión del electorado puertorriqueño. Afirmar que se respetaría su voluntad en una elección especial es, por tanto, algo trillado e inconsecuente. Nada nuevo en un país tan dividido en relación con el impacto concreto de la presencia de los Estados Unidos en su vida material, su textura cultural y su visión política de futuro. Así, las declaraciones presidenciales parecerían más una receta simplona para la inacción que una preocupación real por el futuro de la Isla, o inquietud respecto a los derechos de los puertorriqueños bajo distintos pactos y declaraciones de derechos humanos.<sup>14</sup>

No obstante, por alguna razón, a alguien se le ocurrió que la visita debía proyectarse como un evento «histórico», de la misma importancia que la que hiciera John F. Kennedy al exgobernador y fundador del ELA, Luis Muñoz Marín, en 1961. La comparación resultó ser, cuando menos, exagerada. Kennedy arribó a la Isla en pleno apogeo de la Guerra fría y en el momento del surgimiento de la Revolución cubana. Su visita puso a Puerto Rico en el mapa de las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos en la región. La Isla experimentaba entonces niveles rápidos de crecimiento económico a costa, en parte, de una exportación masiva de su población más pobre a terrorio estadounidense.<sup>15</sup> La base industrial norteamericana había encontrado en PR un paraíso fiscal, mano de obra barata y, como consecuencia, el crecimiento manufacturero capitalista fue continuo.<sup>16</sup> Kennedy pareció encontrar en Muñoz Marín un político sagaz con quien consultar aspectos de su estrategia de «Alianza para el Progreso», desarrollada en la década de los 60.<sup>17</sup> Pero su supuesta amistad con Puerto Rico quedó en entredicho cuando su administración se opuso a ampliar el marco de autonomía del ELA en el Congreso.<sup>18</sup>

En el caso de Obama y el gobernador Luis Fortuño, las diferencias ideológicas son más obvias; este último es un firme creyente en el neoliberalismo económico y está fuertemente influenciado por el sector más conservador del Partido Republicano.<sup>19</sup> El Presidente estuvo en la Isla apenas cuatro horas y una tercera parte de ese tiempo lo dedicó a recaudar casi un millón de dólares en fondos de campaña para su esfuerzo presidencial de 2012,<sup>20</sup> y aprovechó la oportunidad para intentar complacer a todas las facciones políticas que apoyan la hegemonía estadounidense sobre la Isla. Lo que se suponía fuera,

desde su óptica, un acto de buena voluntad del primer presidente negro de los Estados Unidos hacia una comunidad latina, se convirtió en otro recordatorio vivo de quién es el que verdaderamente tiene acceso a la estructura de poder norteamericana: aquel que paga, de un modo o de otro, su boleto de entrada.<sup>21</sup>

## Las realidades coloniales

Los símbolos del colonialismo son evidentes porque, en este caso, forma y contenido son parte de una descripción exacta de la realidad. A la altura de la primera década del siglo XXI, un presidente norteamericano puede visitar la Isla para recaudar dinero y obtener el concurso de la gran mayoría de la clase política para ello porque la estructura política y económica que sostiene esa relación «asimétrica» ha ido reforzando esos patrones de dependencia y dominación.

El llamado ELA, creado en 1952, se quedó muy corto en su proyección de una unión política que llevaría a Puerto Rico a niveles de desarrollo económico comparables con los de los Estados Unidos. La propuesta del PPD al crear el ELA era conducirlo a una verdadera asociación política entre dos entidades soberanas. Uno de los fundadores del ELA, Roberto Sánchez Vilella, confirmó su decepción en sus Memorias, publicadas recientemente:

Si hubiésemos pensado que lo que hacíamos [el ELA] era inútil, que desde el punto de vista político era seguir con una colonia [...] ninguno de nosotros se hubiera prestado ni un minuto para tamaña farsa [...] Creíamos de buena fe que con el proceso del 50 al 52 dábamos un paso adelante que iba a permitir seguir dando otros pasos.<sup>22</sup>

Los otros pasos, sin embargo, no ocurrieron y el ELA de 1952 pervive hoy como mero territorio no incorporado. No solo Puerto Rico no evolucionó políticamente hacia una mayor autonomía, sino que tampoco logró el tipo de desarrollo económico que le hubiese permitido hacerlo en esa dirección. El ingreso per cápita de Puerto Rico es menor que la mitad del del estado más pobre de la Unión.<sup>23</sup> De ser pieza importante de dicho país en su proyección de una «vitrina del Caribe» y muestra de las posibilidades del crecimiento capitalista, ahora Puerto Rico ha quedado en el olvido, excepto cuando, como en este caso, cierta lógica electoral aconseja lo contrario.

En realidad, como nos recuerda el profesor puertorriqueño Félix Jiménez, en su lúcida reflexión publicada en la liberal revista *The Nation*, la breve visita del Presidente sirvió para resaltar las contradicciones evidentes de esta larga interacción política:

El asunto más urgente —sacando aparte la economía y las guerras de Iraq y Afganistán, en las cuales ciento once (111) puertorriqueños han muerto hasta la fecha— es

**El contexto particular de Puerto Rico, lamentablemente poco comprendido y valorado aún, sobre todo por la comunidad internacional, sigue confundiendo a aquellos que aún piensan la Isla como una vitrina de la modernización capitalista.**

la percepción de una constante «intervención federal» en asuntos locales. Los ejemplos sobran: la batalla para recobrar el control de Vieques de la Marina de los Estados Unidos, el asesinato del líder de los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, por agentes del FBI, en 2005 y la acusación y juicio federal del pasado gobernador Aníbal Acevedo Vilá por acusaciones de recibir dinero a cambio de gestiones gubernamentales. Los residentes de Puerto Rico resienten la frecuencia de estas intervenciones así como la ausencia de comunicación por parte del gobierno federal. La percepción es que Puerto Rico no es parte de la conversación nacional estadounidense, sino más bien una posesión colonial lejana (*outpost*).<sup>24</sup>

### Parálisis económica

En la última década, Puerto Rico ha estado atravesando por lo que los economistas catalogan como una fuerte devaluación interna de su economía. Juan Lara, profesor de la Universidad de Puerto Rico, analista con gran experiencia en asuntos económicos de la Isla, en medios internacionales, explica muy bien las implicaciones profundas de tal proceso:

Si Puerto Rico tuviera una moneda propia, hace ya tiempo que hubiéramos tenido que devaluar el peso puertorriqueño como parte de la crisis económica que vivimos. Pero, como todos sabemos, nuestra moneda es el dólar, ya que somos parte de la unión monetaria que integran los cincuenta estados de Estados Unidos. La devaluación de la moneda, por lo tanto, es un instrumento de política económica que no está disponible.

[...]

Aun así, es posible que un país que no puede devaluar su moneda se vea obligado a sobrellevar lo que llamamos una «devaluación interna»; es decir, *una compresión de los ingresos, los salarios y las ganancias*, que se da en lugar del ajuste de la moneda para compensar los desequilibrios de la economía interna frente al resto del mundo. Eso ha estado ocurriendo en Puerto Rico.

[...]

En Puerto Rico hemos tenido [...] un problema con la deuda pública, agravado por el déficit estructural del gobierno central y los problemas financieros de las corporaciones públicas. Además, sufrimos desde hace años un aumento fuerte y sostenido en el costo de nuestras importaciones de productos energéticos, especialmente del petróleo y sus derivados [...] Como parte del proceso, la recesión se ha llevado por el medio a la construcción y a la banca —por mencionar solo a los dos sectores más lesionados— y ha entorpecido los esfuerzos de ajuste

fiscal en el gobierno por el debilitamiento sostenido de los recaudos fiscales.<sup>25</sup>

La parálisis económica se refleja, por lo tanto, en una reducción del valor de los activos de la economía de la Isla como no se experimentaba desde la época de la Gran depresión, en los años 30. Los propios funcionarios gubernamentales aceptan la gravedad de la situación: «Desde el año fiscal 2007 al año fiscal 2010, la economía de Puerto Rico ha tenido un período de cuatro años de contracción, en donde el cambio porcentual del producto bruto a precios constantes ha sido negativo».<sup>26</sup> En 2008, la economía se contrajo en 2,9%; en 2009, 4%, y en 2010, 3,8%.<sup>27</sup>

El encogimiento económico ha contribuido a agravar otro problema estructural de la economía: la acumulación creciente de deuda pública. El economista Argeo Quiñones, resume bien la situación:

[L]a deuda pública bruta continúa aumentando y, en junio de 2010, alcanzó el total de \$58,8 billones, un aumento de \$3 843 millones respecto al año fiscal anterior con el cual la razón de la deuda pública bruta al producto nacional bruto aumentó de 84,4% a 89% en un solo año.<sup>28</sup>

Sin embargo, esta deuda no es un asunto que afecta solo la calidad de vida de las próximas generaciones por la obligación que impone de asignar vastos recursos a inversionistas externos. Su impacto *es inmediato* en la medida en que el Estado recurre a políticas de ajuste para satisfacer las presiones de los bonistas y de las casas acreditarias que establecen si una jurisdicción satisface criterios para continuar participando en el mercado de adquisición de una nueva deuda. Tal es el caso de Puerto Rico.

Esa presión ejercida, junto a la propia predisposición del gobierno de Puerto Rico a poner en vigor políticas públicas de orientación neoliberal, fue lo que condujo, en parte, al PNP a despedir fulminantemente a cerca de 17 000 empleados públicos en 2010.<sup>29</sup> La magnitud de esa decisión, nunca antes tomada por gobierno insular alguno desde la creación del ELA en 1952, representó un duro golpe para miles de familias que fueron tomadas completamente por sorpresa y a las que les esperaba una economía de alto desempleo. Las demostraciones públicas de protesta llevadas a cabo por el movimiento sindical fueron masivas y contundentes, pero de corta duración.

No obstante, estas políticas de ajuste fueron aplacadas por un incremento, de corto plazo, pero sustancial, del monto total de las transferencias del Gobierno Federal a los residentes de la Isla: «En el año fiscal 2010 las transferencias federales a las personas en PR registraron un total de \$15 633 millones, representando un aumento de 15,5% y crecimiento absoluto de \$2 096 millones». <sup>30</sup> Tal ascenso (que se sostiene en 2011) tuvo que ver con las medidas especiales tomadas por el presidente Obama para reactivar la economía norteamericana, pero no se trata de uno permanente con el cual la Isla pueda contar en el futuro próximo. Por el contrario, se puede anticipar que la pasada elección, en 2010, de una Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano, implicará disminuciones en la asignación de fondos federales para la Isla. <sup>31</sup> Ello podría perjudicar los esfuerzos actuales del gobierno insular por reactivar la economía y volver a reflejar patrones de crecimiento económico.

El analista internacional Fareed Zakaria ha resumido bien la situación político-económica de Puerto Rico a fines de la primera década del siglo:

El Gobierno de la Isla se ha mostrado satisfecho con el estado de cosas presente, complacido de estar a cargo de un Estado benefactor financiado en gran parte por el Gobierno Federal de los Estados Unidos y en transferir riqueza de un bolsillo a otro sin crear las condiciones necesarias para crear riqueza a nivel local. <sup>32</sup>

Del cuadro antes dicho sobresalen varios elementos cruciales, por ejemplo, que el estancamiento de la economía de la Isla ha sido dramático. A medida que se han ido reduciendo los beneficios contributivos de las empresas estadounidenses que realizan negocios en Puerto Rico, ha ido declinando la economía. Además, la incapacidad del gobierno de fungir como ente efectivo para estimular la economía mediante un aumento del gasto público, ha tenido un efecto significativo. Sin embargo, el incremento de la dependencia de transferencias federales como una especie de «tabla de salvación» de corto plazo, ha servido para reducir la repercusión total de la devaluación interna de la economía de la Isla y ha servido para evitar que la aguda crisis económica adquiera connotaciones políticas serias.

La combinación de las transferencias federales y una amplia economía informal <sup>33</sup> es la base de niveles de consumo conspicuo que no concuerdan con la capacidad real de la economía. La investigadora Laura Ortiz Negrón describe los niveles de consumo:

Se dice a nivel popular y mediático que el ir de *shopping* es el deporte nacional en Puerto Rico. No es solo que la Isla está cubierta de centros comerciales, megatiendas, automóviles, urbanizaciones, autopistas y celulares, sino que todos estos centros comerciales están siempre llenos. Para diciembre de 2005, existían aproximadamente 572 centros comerciales en Puerto Rico. <sup>34</sup>

Alguien podría cuestionar las razones que tiene el gobierno norteamericano para efectuar un aumento de transferencias federales al presente. Pero no hay que olvidar que las tasas de ganancia de las corporaciones foráneas (principalmente de los Estados Unidos) que hacen negocios en la Isla siguen siendo todavía muy altas. <sup>35</sup> Habría otras hipótesis que explorar pero el espacio nos traiciona.

## Un cuadro social que apremia

Pero, que la juventud se mate y se muera, a diario e insensatamente, no es de entenderse. Como tampoco que nunca llegáramos a saber del contenido de sus sueños, el alcance de sus ideas, la frondosidad de sus pasiones. Y las contrapartes saludables de todo ello: el calado de sus rabias, la densidad de sus antipatías, la frecuencia de sus resentimientos.

Luis Rafael Sánchez

Ante este cuadro económico no debe sorprender que Puerto Rico entre al siglo XXI con signos claros de crisis social. El desempleo es de 17%, la tasa de personas buscando activamente empleo es la más alta de todas las jurisdicciones bajo el control de los Estados Unidos. <sup>36</sup> La de personas empleadas, mayores de 16 años, es de 39,6%, una de las más bajas del mundo. <sup>37</sup> Ante cifras de desempleo tan significativas, la tendencia a depender de ayudas del Gobierno es muy alta. 33% de la población recibe asistencia nutricional (cupones de alimentos) y el 38,6% tiene acceso a una tarjeta gubernamental de salud. Puerto Rico se ubica como uno de las jurisdicciones con mayores niveles de desigualdad económica en toda América.

Nunca es más evidente la crisis social que cuando se considera la situación de violencia generalizada. Si la tasa de asesinatos continúa su actual tendencia, ocurrirán más de mil muertes en el año, la mayoría debido al alto nivel de trasiego de drogas ilegales. Esto representa cerca de veintiséis asesinatos por cada cien mil habitantes. En 2005, en España este indicador fue de uno, en Finlandia, tres, y en los Estados Unidos, poco más de cinco. En este renglón, el deterioro de la calidad de vida es evidente: «la probabilidad de ser víctima de homicidio en Puerto Rico se duplicó entre 1950 y 2010». <sup>38</sup> La mayoría de los que participan de estas actividades delictivas son jóvenes. Ello tiene una explicación. De todas las jurisdicciones bajo el control de los Estados Unidos, Puerto Rico presenta la mayor cantidad de jóvenes que no asisten a la escuela, ni trabajan (14,6%). <sup>39</sup>

Todo este cuadro socio-económico ha implicado un proceso acelerado de emigración de los puertorriqueños hacia territorio norteamericano.

«Puerto Rico es el único país de América Latina que tiene una población en declive», ha dicho recientemente en San Juan el reconocido analista internacional Fareed Zakaria. Ya hay más personas de origen puertorriqueño en los Estados Unidos (4,6 millones) que residentes en la Isla (3,7 millones).<sup>40</sup> Esto se debe, en parte, al nivel tan profundo de pérdida de empleos en la última década; 232 000 entre 2006 y 2011.<sup>41</sup>

## Mirando hacia el futuro

El futuro de Puerto Rico, su viabilidad como sociedad saludable y con una visión integrada de desarrollo socio-económico, que adelante de manera efectiva una agenda de derechos humanos, es un asunto generador de gran ansiedad en la sociedad. En realidad, se perciben altos niveles de pesimismo entre la población.<sup>42</sup> Sin embargo, es de notar que comienza a mostrar su rostro un amplio movimiento social y comunitario empeñado en dar respuestas concretas al conjunto de necesidades apremiantes antes descrito. Los nuevos consensos dirigidos a la renovación social de PR no parece que vayan a surgir desde su clase política.

Actualmente, existen varios escenarios de lucha comunitaria que pueden estar marcando una nueva etapa de movilización ciudadana.<sup>43</sup>

Algunos ejemplos que se pueden destacar son: la amplia movilización de los estudiantes universitarios que reclaman que la educación se preserve con acceso amplio a las mayorías pobres; las demandas masivas para que la Isla se mueva en serio a una plataforma de energía renovable y descarte alternativas contaminantes; el renovado interés en favor de la descriminalización de algunas drogas y el impulso de agendas salubristas para lidiar con el problema de la drogadicción y la criminalidad, la movilización de las comunidades pobres en contra de iniciativas de expropiación forzosa, los esfuerzos por que cese la violencia de género y por razón de preferencia sexual y las actividades comunitarias para rescatar sus escuelas públicas del deterioro. De esas luchas está surgiendo un liderazgo cívico que empieza a generar un capital muy preciado: la credibilidad de sus gestiones a favor del bien común. Este es un movimiento plural y emergente.

No deben subestimarse estos desarrollos que tienden a reforzar el llamado capital social y la capacidad de generar acción colectiva para el bien común, cuando ello es esencial para el desarrollo de un proyecto de futuro. Francisco Catalá ilustra muy bien este aspecto:

En un vacío [...] no hay confianza, ni transacciones eficientes ni comportamiento cívico, ya sea expresado vía el cumplimiento del pago de impuestos, de las leyes de tráfico, de la limpieza y cuidado de los baños públicos o

de las más sanas normas de convivencia. Esto es lo que algunos llaman *capital social*. En el mundo moderno, el que nos ha tocado vivir, se encarna en la nación.

Una nación no es solo ni principalmente su pasado, sino su futuro. Las naciones son entidades históricas. No son imperecederas, pero tampoco tan fáciles de diluir como algunos piensan. A la postre, el ser humano se pierde si no pertenece a un pueblo, a una cultura más o menos homogénea. Desafortunadamente, en nuestro país existe una profunda confusión sobre esto.<sup>44</sup>

Es en este sentido que Puerto Rico tiene que plantearse formas efectivas de afianzar su acción colectiva nacional. En su esfuerzo exitoso por terminar los bombardeos de la Marina estadounidense sobre Vieques, se demostró que es posible reclamar con efectividad, si se generan ciertas condiciones. La fórmula utilizada para lograr la desmilitarización de Vieques combinó, por lo menos, ocho factores que explican su éxito: la claridad en el reclamo planteado, la unidad de propósito, la diversidad ideológica y social, un recio apoyo en la opinión pública y utilización efectiva de los medios de comunicación internos y externos; una masividad constante, desobediencia civil, internacionalización del reclamo, y la activación de la diáspora puertorriqueña en una estrategia conjunta de unidad nacional.

Reproducir con éxito una estrategia como la ya ensayada en Vieques parece ser la única forma de escapar al gran peso de la paradoja enorme que es el colonialismo. Dentro de esta perspectiva, un mecanismo procesal que podría ayudar a lograr los consensos sustantivos necesarios es la convocatoria de una asamblea constitucional de estatus para negociar con los Estados Unidos los términos futuros de su relación política:

Esta Asamblea de Pueblo permitiría conocer definitivamente la opinión de los norteamericanos sobre si están dispuestos a conceder la estadidad y bajo qué condiciones; sobre cuáles serían las condiciones de negociación de una república asociada; y cuáles serían las condiciones de transición para una independencia. Esto pondría fin a la manipulación y demagogia de los partidos políticos sobre las definiciones viables de solución al problema colonial.<sup>45</sup>

Tal mecanismo procesal podría, incluso, ser utilizado por los autonomistas en la Isla para reclamar un ELA no colonial ni territorial. Todo ello es posible si se logra establecer la necesidad imperiosa de cambiar el marco institucional donde se gestionan las políticas públicas que hagan mejorar la calidad de vida. La existencia de ese vínculo entre lo político y lo socio-económico es lo que debe proveer la clave para generar la masividad que se hizo presente en conflictos como el de Vieques.

Esta no es una ruta fácil pero, en realidad, no existe camino sencillo en la coyuntura actual. Tiene que gestionarse de forma activa la unidad nacional



para alcanzar una nueva etapa de desarrollo político y social. Plantearse tal cosa podría ser similar a emprender una carrera de obstáculos y, en cierto modo, de eso se trata.

## Notas

1. Gary Silverman, «Make more of a Fuss over Puerto Rico», *Financial Times*, Londres, 16 de junio de 2011, disponible en [www.ft.com](http://www.ft.com).

2. Para una mirada sobre la naturaleza de esos incumplimientos, véase la posición del Colegio de Abogados ante el Comité de Descolonización de la ONU, presentada el 20 de junio de 2011, disponible en *El Nuevo Día*, San Juan, [www.elnuevodia.com](http://www.elnuevodia.com).

3. El propio José Trias Monge —uno de los principales arquitectos de la relación política de Estado Libre Asociado, aceptó que había sido un error del liderazgo de gobierno proyectar que Puerto Rico poseía un patrón de desarrollo económico que nunca fue realmente exportable a otras latitudes. José Trias Monge, *Historia constitucional de Puerto Rico*, v. V, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1994, p. 14.

4. Miguel A. Soto Class, Sergio M. Marxuach Colón, «Ponencia del Centro para la Nueva Economía ante la Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico», San Juan, 21 de septiembre de 2007.

5. La importancia de los fondos federales para la economía de la Isla es objeto de debate. Un reconocido economista puertorriqueño, Francisco Catalá Oliveras, insiste en que una parte significativa de estos corresponde a beneficios adquiridos por razón de aportación de los ciudadanos a dichos programas (como es el caso del programa de Seguro Social que depende de las aportaciones de los asalariados) o beneficios adquiridos (como, por ejemplo, aquellos asociados con la participación en el Ejército norteamericano). Véase Francisco Catalá Oliveras, *La economía de Puerto Rico: del enclave colonial al imperativo de la independencia*, en Rubén Berríos et al., *Nación independiente, imperativo del siglo XXI*, s/e, San Juan, 2010.

6. José Luis Méndez, *El país que se autoderrota: de la Liga de Patriotas al consenso sobre Vieques*, Publicaciones Gaviota, San Juan, 2003.

7. Bajo el sistema constitucional norteamericano, Puerto Rico es un territorio no incorporado. Ello quiere decir que pertenece a los Estados Unidos sin formar parte de dicho país; el Congreso tiene la potestad de decidir cuáles de sus doctrinas constitucionales son vigentes en su posesión caribeña. Para más detalles sobre este complejo marco jurídico-político, véase José Trias Monge, *Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo*, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1999.

8. Utilizo la categoría en el sentido de proceso mediante el cual «sectores considerables de la población del territorio manifiestan un grado apreciable de asentimiento a la asociación con la metrópoli». Efrén Rivera Ramos, *Hegemonía y legitimidad en el Puerto Rico contemporáneo*, Working Paper, Barcelona, 1998, disponible en [http://ddd.uab.cat/pub/worpaper/1998/hdl\\_2072\\_1317/ICPS149.pdf](http://ddd.uab.cat/pub/worpaper/1998/hdl_2072_1317/ICPS149.pdf).

9. Una discusión interesante sobre la pertinencia de la categoría poscolonial, enfocada sobre todo en el tema migratorio, se puede ver en Jorge Duany, «The Puerto Rican Diaspora to the United States: A Post Colonial Migration?», 2008, disponible en *El Centro*

*Journal*, [www.centropr.org/documents/events/Jorge\\_Duany\\_Puerto\\_Rican\\_Diaspora.pdf](http://www.centropr.org/documents/events/Jorge_Duany_Puerto_Rican_Diaspora.pdf).

10. Es interesante, por ejemplo, que en 2011 la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el 2011, nombra a varias organizaciones armadas vinculadas al movimiento independentista como los principales grupos de presión en PR. En realidad esos grupos tienen una presencia pública muy limitada en la discusión cotidiana de asuntos públicos. Véase CIA, *World Fact Book*, disponible en [www.cia.gov](http://www.cia.gov).

11. El sector anexionista ha intentado lograr que los tribunales norteamericanos determinen que la no otorgación del voto presidencial a los residentes en Puerto Rico es una discriminación que viola el principio de igualdad de derechos de la Constitución de los Estados Unidos. El Tribunal Apelativo del circuito correspondiente falló en contra de este pedido, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a revisar esa denegatoria. Véase José Julián Álvarez, *Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos: casos y materiales*, Temis, Bogotá, 2009, pp. 530-7.

12. Las críticas a Obama de parte de los propios alcaldes del partido gobernante en PR (PNP) obligaron a uno de sus líderes a defender públicamente al Presidente. Véase José Delgado, «Pierluisi defiende a Obama», *El Nuevo Día*, San Juan, 1 de junio de 2011, disponible en [www.elnuevodia.com](http://www.elnuevodia.com).

13. Los procesos de consulta sobre el llamado estatus han sido consistentemente intervenidos por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para evitar la unidad de las fuerzas que apoyan la descolonización. Sobre la intervención del FBI en 1967, véase Ronald Fernández, *La isla desencantada*, Editorial Cultural, San Juan, 1996, pp. 334-6. Sobre el resultado de 1998 y sus implicaciones respecto de la posible petición de estidadad, véase José Javier Colón Morera, «El repliegue de la estidadad», *Nueva Sociedad*, n. 160, Santiago de Chile, marzo-abril de 1999, pp. 20-8.

14. Sobre el debate en torno a este tema en los Estados Unidos, véase Gary Lawson y Robert Sloane, «The Constitutionality of Decolonization: Puerto Rico's Domestic and International Legal Status», *Boston College Law Review*, v. 50, n. 1, Boston, 2009.

15. James Dietz, *Historia económica de Puerto Rico*, Ediciones Huracán, Río Piedras, 2007, pp. 301-8.

16. *Ibidem*, p. 274.

17. Antonio Gaztambide-Géigel, *La política sin nombre: ¿Una misma política hacia América Latina y el Caribe desde 1950?*, disponible en <http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2010/files/2898.pdf>.

18. Ronald Fernández, *ob. cit.*, pp. 316-7.

19. Jose Javier Colón Morera, «Fortuño: la tormenta perfecta», *80 Grados*, San Juan, 27 de enero de 2011.

20. Véase Firuzeh Shokooh Valle, «Puerto Rico: decepción, frustración y risas en la visita de Obama», disponible en *Global Voice Online*, <http://globalvoicesonline.org>.

21. Además de recaudar fondos, la visita de Obama sirvió para solidificar los lazos del PPD en Puerto Rico con la administración demócrata de los Estados Unidos Su única entrevista con la oposición política se llevó a cabo con el que se perfila como candidato a Gobernador por el PPD, el joven senador Alejandro García Padilla, representante del ala moderada de esa entidad.

22. Celina Romani, *La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella*, s/e, Humacao, 2011.

23. De acuerdo con el Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio y el Buró del Censo de los Estados Unidos, al final de 2009, el ingreso personal per cápita, en dólares, en el estado de Mississippi, era de 19 554 dólares, aproximadamente el doble del de Puerto Rico (10 056 dólares) para la misma fecha. Para más información, consúltese <http://factfinder.census.gov>.
24. Félix Jiménez, «Obama's Puerto Rico Pit Stop», disponible en *The Nation*, [www.thenation.com](http://www.thenation.com). [Traducción del autor].
25. Juan Lara, «La devaluación interna en la economía de Puerto Rico», *El Vocero*, San Juan, 27 de julio de 2010.
26. Equipo Económico del Gobernador, *Informe sobre presupuesto recomendado 2012*, 3 de mayo de 2011, disponible en [www2.pr.gov](http://www2.pr.gov).
27. Junta de Planificación de Puerto Rico, *La economía de Puerto Rico en el año fiscal 2010 y perspectivas económicas para los años fiscales 2011 y 2012*, disponible en [www.presupuesto.gobierno.pr](http://www.presupuesto.gobierno.pr).
28. Argeo Quinones, «El fracaso del Plan Fortuño», *80 Grados*, San Juan, 13 de mayo de 2011.
29. AFP, «Gobierno de Puerto Rico despide a casi 17 000 empleados públicos», disponible en *El Economista*, 26 de septiembre de 2009, <http://ecodiario.economista.es>.
30. Equipo Económico del Gobernador, ob.cit., p. 13.
31. EFE, «Puerto Rico perderá un 10% de fondos federales tras el recorte de 38 000 millones», 24 de mayo de 2011, disponible en [www.sandiegored.com](http://www.sandiegored.com).
32. Véase «Dr. Fareed Zakaria's Visit to Puerto Rico», disponible en *Blog del Centro para la Nueva Economía*, <http://grupocne.org/cneblog>, 2011.
33. Según un estudio de 2004, la economía informal representa 23,2% del PIB de la Isla. Véase Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera, «El capital social movilizadO contra la pobreza», en *Pobreza y desigualdad: límites al desarrollo de PR*, disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/capital/03cap1.pdf>.
34. Laura L. Ortiz Negrón, «La economía del consumo como propuesta socio-teórica», *Athena Digital*, n. 12, otoño de 2007, pp. 62-77.
35. El economista Francisco Catalá ha calculado que las ganancias del capital extranjero (principalmente de los Estados Unidos) entre 1975 y el presente superaron el medio trillón de dólares.
36. Véase estadísticas disponibles en «Empleo y desempleo. Puerto Rico», Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, Gobierno de Puerto Rico, disponible en <http://tendenciaspr.uprrp.edu>, junio de 2010.
37. Sergio M. Marxuach, *Midiendo el progreso social en Puerto Rico*, Presentación ante el Centro para la Nueva Economía, 25 de marzo de 2011, disponible en [http://www.grupocne.org/2010econference/presentaciones/presentacion\\_2\\_sergio\\_marxuach.pdf](http://www.grupocne.org/2010econference/presentaciones/presentacion_2_sergio_marxuach.pdf).
38. Ídem.
39. National Council La Raza, «Poverty, Birth Complications and Family Problems Affect Well Being of Children and Youth in Puerto Rico», 15 de marzo de 2011, disponible en [www.nclr.org](http://www.nclr.org).
40. Jorge Duany, «La incesante diáspora boricua del siglo XXI», Presentación ante el Centro para la Nueva Economía, 25 de marzo de 2011.
41. Redacción Caribbean Business, «CNE's Marxuach: «PR is in a depression, and it won't be easy to dig out from it»», disponible en *Caribbean Business*, [www.caribbeanbusinesspr.com](http://www.caribbeanbusinesspr.com).
42. Como respuesta a la pregunta general sobre «cómo andan las cosas» en la Isla en estos días, una abrumadora mayoría (87%) dijo que están malas o muy malas. Véase «Un verdadero tsunami de preocupaciones», *El Nuevo Día*, San Juan, 27 de marzo de 2011.
43. Carla Minet, «Redes de apoyo en defensa de la educación pública», *80 Grados*, San Juan, 17 de diciembre de 2010.
44. Francisco Catalá Oliveras, «Radiografía de la economía de Puerto Rico: ayer y hoy», disponible en *AEPR Asociación de Economistas de Puerto Rico*, [www.economistaspr.org](http://www.economistaspr.org).
45. Rolando Emmanuelli Jiménez, «Asamblea constituyente ahora», 6 de abril de 2008, disponible en *Debido Proceso de Ley*, <http://debidoprosodeley.blogspot.com>.

# De la ética para la desesperanza a la esperanzadora para Latinoamérica

**Rocío de Prato**

*Educadora. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Venezuela.*

La insurgencia por doquier de movimientos y demandas populares para la construcción de opciones sociopolíticas que favorezcan una democracia participativa, protagónica, enraizada en el sentimiento y la esperanza popular, colocan la ética en un primer plano de la reflexión latinoamericana. ¿Para qué repensarla? ¿Cómo transformar la ética de la desesperanza para/en/desde la libertad y la esperanza? Las respuestas a estas interrogantes son diversas, como diversas son las intenciones y los objetivos en los que se basan.

En América Latina se debaten dos concepciones éticas.<sup>1</sup> Por una parte la neoliberal, sustentada en un naturalismo que defiende el individualismo y la privatización de las cuestiones políticas como reguladoras naturales de los sujetos; y por la otra, la ética de la liberación, que resitúa la exclusión y las opciones de posibilidad de los oprimidos, como centro de una dialógica de la esperanza comprometida con proyectos alternativos colectivos. El conflicto entre estas dos posiciones, y sus matices socio-económico-políticos, reflejan la llamada «crisis de los paradigmas», sus argumentos teóricos y epistémicos y la ética que los rige. Es la dialéctica entre la ética que se rige por la necesidad material, y la ética de la libertad y la esperanza.

En este ensayo, tomando como punto de partida el pensamiento de Simón Bolívar, José Martí, José Carlos Mariátegui, Enrique Dussel, Paulo Freire, José Luis Rebellato (por citar algunos latinoamericanistas), repienso la ética como una utopía de nuestros pueblos para abrir horizontes hacia la libertad posible; una energía creadora, continua, dinámica, recursiva para la formación de conciencia ético-crítica y la participación libre, desde las cuales se co-construye sentido y significado a la práctica social.

Es decir, intentaré fundamentar una utopía ética que al dinamizar el accionar responsable, autónomo y político del sujeto como ser-en-el-mundo lo constituya en participante protagónico de una «democracia radical» orientada a superar el estadio o momento de conciencia ingenua o mágica,<sup>2</sup> y la resignación, el pesimismo, la aceptación y el silencio que comporta como cultura ética; para alcanzar la conciencia crítico-reflexiva donde el reto de la libertad y la transformación conforman espacios principistas que dan nuevos modos, formas y condiciones a la relación social, nuevo orden a las interacciones, nuevas interpelaciones y preguntas para problematizar la realidad y para transformarla, transformándose permanentemente.

Por ello, las respuestas a las interrogantes planteadas no solo se orientan a considerar el empoderamiento del sujeto para la comprensión de su realidad y su historia como referentes o contextos de libertad, sino que destacan este poder como un acto de injerencia del pensar y la experiencia como sujeto/historia,<sup>3</sup> palabra/realidad, proyecto/acción, en co-construcción permanente. Repensar así la ética le otorga un sentido utópico, de movimiento que rescata la posibilidad/potencialidad/antagonismo de las continuidades y rupturas en que los sujetos viven, «leen» y se apropian del momento histórico. Es apostar por un futuro que no es un destino, sino una posibilidad para la transformación.

## La ética de la desesperanza, coacción y exclusión

Comparto con Dussel su afirmación de que el neoliberalismo como fenómeno de «invasión cultural» es otro modo de «conquista» que ha distorsionado los valores y la moral en América Latina, porque su ética, ligada a la concepción instrumental de la racionalidad que la constituye, se fundamenta en el egoísmo y el utilitarismo. Este autor destaca que en ese contexto el hombre es un individuo (no sujeto ni inter-subjetividad) que pierde el sentido de responsabilidad sobre sus actos, con lo cual comienza «a disolverse la noción misma de instancia moral»,<sup>4</sup> provocando desajustes, temores, incertidumbres, violencia, desconfianza, desesperanza y miedo en las relaciones y en la comunicación social. Tal neurosis colectiva e individual genera parálisis alienante y opresora en el pensamiento y acción, y da paso a la transacción de valores y posturas debido, entre otros factores, a:

- Separación entre la ética y la política, lo que a juicio de Rebellato «abre la puerta para toda clase de perversidades éticas».<sup>5</sup>
- Aceptación de la desigualdad como un principio inevitable, resultado de las diferentes capacidades de los individuos para adaptarse al mercado y a los cambios en las circunstancias históricas.
- Supeditación de la libertad a las leyes del mercado, a sus restricciones y determinaciones externas; y no una libertad para la potenciación de las capacidades del ser humano.
- Consideración de la ética del mercado como el único ordenamiento racional del sistema social.
- Desarrollo científico-tecnológico como mecanismo de control y manipulación de la realidad.

En este contexto, para mantenerse a flote y superar la desesperanza, el hombre asume una «cultura de la normalidad»<sup>6</sup> que promueve el individualismo, la

despersonalización y la atomización social. Ello lo reduce a un «ente» vibratorio egoísta y consumidor, que actúa según los «hilos» movidos desde el poder; y la coacción autoritaria que plantea la dicotomía «ustedes o yo», surgida de la división y discriminación, es la alienación personal convertida en histeria colectiva. Sus características fundamentales son:

- Se orienta a provocar en el imaginario colectivo la imposibilidad de pensar alternativas.
- Reproduce una ética de clase, que propugna relaciones de dominación y dependencia en todos los niveles de la sociedad.
- Penetra profundamente en la vida cotidiana y en las relaciones dentro de los movimientos y de los espacios territoriales.
- Produce y reproduce el saber y poder en conexión con los modos en que se entrecruzan el sentido y el poder en el mundo social
- La vida humana está sustentada en lo científico y tecnológico. El «credo» es el progreso.
- Forma el sentimiento de sobresalir sobre los demás, sin importar lo que haya que hacer para ello.
- Se pierden valores como el respeto a la edad y la condición humana, lo importante es lograr de manera eficaz las metas perseguidas.
- Es una ética orientada al «poseer» que ignora al sujeto, la diferencia, los sentimientos.
- No crea conciencia de pertenencia y compromiso social.
- Procura incentivar la competencia individualizada y no la cooperación entre las personas

El gran reto para la sociedad latinoamericana es desinstalar(se) de la cómoda normalidad y derrotar así un pensamiento, una cultura y una ideología inmovilizante, al reconocer su existencia y su influencia en lo social y cultural; no desde una actitud contemplativa y no comprometida, sino como práctica autónoma, responsable, cotidiana y coherente, de naturaleza reflexiva, contestataria y crítica.

## ¿Cómo transformar la ética para la libertad y esperanza?

Carlos Delgado señala cuatro principios para repensar y reconstituir una ética desde la desesperanza a la libertad y la esperanza: a) la sensibilidad, que «tiene que ver con el amor a la tierra, con el *pathos* griego que significa la capacidad de emoción, de afectividad»; b) el cuidado, «ligado a la esencia de la vida»; c) la cooperación d) la responsabilidad, que «es aquel momento de la conciencia en el que nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones».<sup>7</sup>

Desde mi punto de vista, estos principios redefinen dos aspectos fundamentales que reconstituyen la ética de la libertad y esperanza: 1) su naturaleza sistémica, de interconexión, incompletud, relatividad, cambio e incertidumbre; 2) la diferencia entre ética de liberación (modo clásico de entender la libertad) y ética de la libertad (sujetos libres, protagónicos, autónomos). Estas características se configuran desde el pensamiento/experiencia como bucle recursivo autorreferente y autopoietico que convierte la subjetivación en prácticas de libertad, de indocilidad meditada, de inservidumbre voluntaria.

Por eso repensar la libertad ética es asumir responsabilidad de pensamiento y acción, implica reflexionar sobre las sujeciones por medio de las cuales las relaciones de poder (y el bio-poder) objetivan, definen y normalizan a los sujetos y sus relaciones y también implica asumir la Ética desde la complejidad que supone la praxis diálogo/dialéctica entre diversidad/diferencia, unidad/múltiples dimensiones del sí mismo-otro, y como emergencia de la eco-reorganización del conocimiento y acción del hombre libre y su ejercicio de libertad.

Esta implicación y complejidad se expresa en las tesis/síntesis que constituyen una ética para/en/desde la libertad y la esperanza:

- Considera la dimensión «irracional» y sustantiva de la subjetividad creativa que regula las opciones emancipadoras.
- Respetar las opciones profundas de los sujetos en la alteridad de diferentes proyectos de vida asentados en la dignidad, cooperación, y justicia.
- Reconoce el diálogo y la dialéctica como estrategias del pensamiento para posibilitar la adaptación y la esperanza, el conflicto y el poder como fuentes autopoieticas de ética social desde la diversidad.
- La autonomía y la emancipación implica la auto-organización de los sujetos contra los procesos de retroalimentación del poder que tienden a que los sujetos pierdan su capacidad de autonomía.
- La humanización del oprimido parte desde él mismo: es decir, es él quien debe buscar los caminos de su libertad (más allá de la liberación), ya que esta no puede venir de aquellos que lo mantienen en tal situación.
- Es una visión de la conciencia, configurada en el reconocimiento de la ambivalencia de lo real, de la aleatoriedad, de la incertidumbre, así como de la pluralidad de las instancias epistemológicas
- Es una ética de la vida y la solidaridad porque toda actividad humana, toda cosmología y cosmogonía, toda cultura o civilización, toda norma moral o ética, tiene su fuente en la permanencia de la vida humana.

Se articula así una naturaleza ética compleja, dinámica, reticular, activadora de cambios sociales y redistribución del poder (empoderamiento popular) que construye/de-construye/re-construye la realidad/realidades, individuales y colectivas, al tiempo que las multiplica, las olvida, las consume en el tránsito vertiginoso hacia nuevas estéticas, nuevos valores, nuevas lógicas del sentir, pensar y producir, y nuevas conformaciones de relaciones entre ciudadanos y comunidades.

Por ello, la tarea ética primordial en Latinoamérica es deshacer la identidad tradicional, como tarea de des-subjetivación para el comienzo de las prácticas de libertad. Michel Foucault remarca esta postura al proponer individuos éticos y libres que se den a sí mismos reglas morales para lograr ser de otro modo, escapando así al poder y a ellos mismos.<sup>8</sup> La resistencia al poder se transforma por eso en un acto creativo sumamente cauteloso, que pasa por una fase de destrucción y una analítica, en tanto aspira a integrarse en un presente constituido por la incertidumbre, el caos, el conflicto.

## Repensar la ética latinoamericana

Afortunadamente, en el horizonte latinoamericano se vislumbran cambios cuyo centro es una revolución epistemológica<sup>9</sup> que impone transformar el modo de pensamiento y el mundo pensado y una ética compleja (antropoética, auto ética), que es traducción de ese mundo y actividad; es un cambio de creencia y de ser. Un pensar ético capaz de dialogar, relacionarse con las múltiples dimensiones de la realidad fenoménica y consigo mismo. Sobre todo es cambiar el «umbral de la mirada ética»<sup>10</sup> ligándola a la vida y a la esperanza. Es repensar la ética latinoamericana intentando desvincularse del poder actual porque ello implica legitimarlo. Es reconstituir el quehacer ético con una naturaleza abierta, justa, democrática.

Desde esta perspectiva, la esperanza se constituye y construye al aceptar la libertad, apertura y riesgo de transformar-se(nos), repensar-se(nos) para ser de otro modo. No para llegar a la verdad de uno mismo, sino con la esperanza y libertad de desasirse de ese «uno mismo»; es decir, una tarea de des-subjetivación: ser otro, desde un «pensar otro». Pero al mismo tiempo esta des-subjetivación constituye libertad y apertura dialógica para acercarse hacia «el otro» (inter-trans-subjetividad), no para conocerlo (por tanto no es una relación cognoscitiva) sino una relación-vinculación-interconexión de tipo ético, en el sentido de que el Otro (yo-otro-nosotros) nos afecta y nos importa (nos-otros), por lo que exige una postura ética abierta, flexible,

translógica, para que fluya la inter-retro-acción (acción comunicativa) incluso sin que se lo elija.

De allí que repensar la ética latinoamericana es asumir una actitud que implica acción (más bien, tendencia a actuar en coherencia con los otros componentes), implica cognición (palabra y pensamiento), pero también emoción y esperanza. Esta consideración de la ética como coherencia entre sentimiento, pensamiento, palabra y acción, supone una postura crítica/compleja para comprender y convivir la co-construcción de los procesos generadores de relaciones inter-subjetivas. Es reconocer las paradojas de la reflexividad (auto conocimiento del pensar) a través de las cuales se desvelan las redes de poder y su ética, así como las posibilidades de conocer/saber; o sea la libertad para romper, desestructurar, reconstituir la llamada «verdad» que se difunde en términos morales y sociales.

Pero como el conocer/saber finge que estas redes (de poder y ética) no existen, «que el contexto donde se genera[n] e inscribe[n] es puro, democrático, que vale por sí mismo y no por sus portavoces ni por sus vinculaciones»;<sup>11</sup> se impone repensar las posibilidades éticas latinoamericanas para vislumbrar rupturas conscientes del sujeto (individual y colectivo) de la postura epistemológica tradicional. Porque romper con este esquema implica transformación de valores, actitudes, emociones, modos de relaciones y estética cognitiva para permitir la creación de un paisaje comprensivo en el que coexistan y se reconozcan «multiplicidad de formas y moralidades para construir la experiencia, en parte paralelas y con cierta autonomía relativa, pero que se mixturán e hibridan, se solapan y encabalgan, se inhiben o se potencian, chocan entre sí o se ignoran».<sup>12</sup> En este reencuentro permanente surge la potencialidad autopoietica del pensamiento como Arkhenivel que «transforma las reglas de transformación» para correr el riesgo de la libertad responsable de conocer y producir sentido ético y moral desde lo contextual.

### **Tejiendo hilos de libertad y esperanza: co-construcción ética desde una mirada crítica/compleja**

En mi argumentación fluye la idea de que la co-construcción de una ética para la libertad y la esperanza solo es posible en una práctica social que propicie la reflexividad (más que reflexión) de los sujetos sobre su acción cultural y la praxis ético-política, para identificar y desvelar de manera autónoma, consciente, libre y responsable los objetivos y propósitos de discursos, representaciones, paradigmas, y establecer relaciones, conexiones y juicios pensados e informados, no

distorsionados por relaciones asimétricas o por desigualdades sociales de conocimiento o de poder de los sujetos.

Para fundamentar esta co-construcción, planteo cinco tesis que expresan su espíritu y naturaleza:

1) El hombre como totalidad sistémica abierta. Es «ser en relación»; es energía y actividad configuradora de experiencias (pensamiento, reflexividad, acción, ética), en inter-retro-acción dialógica/dialéctica con las múltiples dimensiones de la realidad fenoménica y consigo mismo; es decir, es un sujeto complejo caracterizado por:

- La reflexividad —pensar el pensamiento que piensa— que lo constituye como ser autónomo, libre y protagonista de sus decisiones y acciones.
- Reconocimiento de su naturaleza inacabada, incompleta, por tanto, en proceso de estar siendo persona para y con los demás.
- Posibilidad de autoexaminar-se críticamente para ver, reconocer y juzgar su pensamiento y acción asumiendo su destino de transformación. La revisión crítica supera la ingenuidad de sus concepciones cotidianas sobre la realidad y desvela la vivencia de poder en su vida.
- Capacidad de auto-eco-referencia para tejer, destejer y volver a tejer eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, de su mundo fenoménico en un proceso de autogeneración e incorporación de metacogniciones éticas sobre la relación dialógica con el otro.
- Pensar, re-pensar y pensar-se en una «construcción de lo posible» humano, que lo «entrelaza», lo vincula, lo relaciona, lo integra/desintegra; esto es, le permite pasar del sujeto-individual (de la modernidad) a la singularidad pre individual (posmodernidad).
- Ser experiencia, posibilidades, potencialidades para construir el mundo consciente (pensamiento de esperanza, libertad y transformación), dispuesto a apropiarse del momento histórico en el que convive para darle sentido y significado ético colectivo.

2) La sociedad/comunidad como mundo ético de relaciones/interretroacciones/recursividades, es decir, un mundo de comunicaciones que posibilita la libertad o el sojuzgamiento, la esperanza o la desesperanza, la creación de nuevos/diversos/diferentes espacios ético-relacionales entre personas y comunidades. Por tanto, es:

- Un organismo vivo que posibilita nuevas formas, nuevos caminos, nuevos escenarios, nuevas realidades vibrantes, dinámicas, inciertas, y en transformación permanente.

- Un cambio constante de sociedad, que emerge de nuevos sistemas éticos sobre relaciones y pensamientos.
- Resignificación ética de la vida cotidiana como escenario para la constitución trascendental del ser-en-el-mundo (Martin Heidegger, Edmund Husserl) es decir, sus posibilidades en proyectos concretos de existencia.
- Posibilidad para desvelar en los intersticios de sus prácticas cotidianas el meta-paradigma que gobierna discursos, postulados y principios del orden social, cultural, histórico, político y ético.
- Una revolución ética desde lo micro social (individuo, grupo, comunidad) producida de forma intencionada por actores, sujetos y agentes que impulsan modificaciones hasta el nivel macro social.

3) Sin pensamiento transformador es imposible constituir una ética emancipadora o una acción transformadora, porque pensamiento/ética/acción; sujeto/ética/proyecto; teoría/ética/práctica; palabra/ética/relación son complementarios/concurrentes/antagónicos para permitir la puesta en práctica de principios como inclusión, equidad, justicia. Esta premisa reconoce:

- Articulación multidimensional del ser humano (socio-cultural-política-histórica-económica-ecológica) para constituir un sujeto político transformador, y desarrollar una cultura que favorezca la autorreferencia y la autocrítica responsable y permanente en el individuo y el colectivo.
- Releer permanentemente la realidad (desestructuración/reestructuración) asumiendo la circularidad de la ética entre partes y todo, causa y efecto de los procesos cotidianos.
- Pensar como aventura problematizadora (curiosa, intuitiva, inconforme, creativa), paradójica (independencia/dependencia, diversidad/unidad) y en espiral, que tiene punto de partida histórico pero no término. Como un modo de interacción, una actividad poética (productiva y poética) desde la cual emerge la ética y la acción.
- La dialógica como espacio autopoietico (pensamiento re-configurativo y lateral) para la creación y la anticipación estratégica, la cooperación, la participación, las posibilidades de acción ética.
- Desestructuración/reestructuración del soberano subterráneo (paradigma) para cuestionar su sistema de ideas, teorías, formas de razonamiento y su poder en relación con la acción, la ética y con el mundo, consigo y con otros.
- La conciencia que a partir de la reflexividad y la auto-observación emerge como energía potenciadora de la construcción de su ser como sujeto ético, histórico, autónomo y protagónico.

4) Vivencia democrática para reconstituir formas emergentes de ser-hacer-estar-relacionarse; porque la transformación hacia una conciencia crítica del sujeto exige una estrategia activa, que lo sitúe en el centro de la dinámica social, a partir de:

- El convivir como acción socio-ética-política-cultural, definidora de significados y sentidos en la lectura de la realidad.
- Accionar esencialmente moral (incluyente, reflexivo, dialógico, crítico) sobre procesos, posibilidades, potencialidades, creaciones, para generar conciencia crítica y transformadora.
- La libertad creativa del pensar y actuar de la praxis, de las experiencias.
- Deliberación permanente, militante entre/con/ desde/en la realidad social y los sujetos (individuales y colectivos) que se reconvonan y articulan permanentemente.
- Un giro al sentido y significado de los valores de la práctica democrática (solidaridad, equidad, participación): pasando de la idea de saberes distribuidos (indicados por el poder) a la de saberes apropiados, ejercidos y socializados por los sujetos durante el desarrollo de la convivencia.
- Conformación ética de un nos-otros para la des-subjetivación de la práctica social y el logro de legitimidad, trascendencia, significado, sentido en un marco de libertad.
- Vinculación ética del sujeto con sus contextos de pertenencia (entorno-comunidad), desvelando la relación hologramática que lo subordina a su realidad socio-cultural, pero a la vez resalta la subordinación de la realidad a su acción.
- Aprender/desaprender/re-aprender permanentemente formas, modos y condiciones para negociar, conjuntar, religar, asociar, valores, sentimientos, percepciones desde una visión ética que es «movimiento» y transformación.

5) Eco-reorganización del pensamiento (visión sistémica, recursiva y retroactiva) caracterizada por:

- La doble contingencia entre conocimiento y epistemología, acción y valores/principios, como un territorio móvil e indefinido, esquivo por recursivo e indeterminado, y desde el cual pensar el pensamiento y la ética como una aventura de co-creación.
- Descubrimiento permanente de posibilidades, desmigajamientos, subordinaciones, sojuzgamientos, mutilaciones, determinados por la realidad y enraizados en los principios, procesos y contenidos del conocer y pensar éticos tradicionales.
- Reconocimiento del orden relacional social, no como categoría ontológica, sino como «huella invisible» asociada con la autonomía/dependencia

**Asumir en nuestro continente la tarea de des-subjetivación para una práctica de libertad comprometida, creativa, propia, implica construir un entramado de pensamiento y acción social que, paradójicamente, hace de la incertidumbre una oportunidad para reconocer la no predeterminación ética, su no universalidad y por tanto, reconstituir su configuración desde la responsabilidad.**

ética de quien selecciona relevancias y establece significados y comparaciones. El orden/desorden (por la multirreferencialidad) engendra aspectos complementarios en la organización ética que la produce y distingue.

- Integración de lo observado con los valores implícitos y explícitos en la actividad selectiva del observador. Es decir, las nociones que utilizemos para analizar los valores y la ética incorporan la emergencia resultante de la interacción entre el observador y el sistema observado
- La ética como «fluyente» que dinamiza procesos como la auto-organización y auto-reproducción social. Asumimos con Morín que la ética «acerca» los mundos interior y exterior del hombre.<sup>13</sup>
- Sustituir la primacía de la esencia y la permanencia por la importancia de la relación y el cambio<sup>14</sup> coadyuvando el análisis de las posibilidades de saber y su vinculación con la ética como organización dinámica compleja.

Estas tesis no dejan lugar a ambigüedades: La co-construcción de una utopía ética desde una mirada crítica/compleja implica asumir opciones, rupturas de pensamiento, posicionamiento ético. No se puede construir emancipación sin libertad, fraternidad, igualdad, implicación, injerencia y compromiso con nuevas/diferentes/diversas formas y condiciones en el pensar, el vivir, el actuar, el relacionar (ser, hacer, estar, decir, transferir, transformar).

Por ello, la co-construcción de una ética para la emancipación desde una mirada crítica/compleja tiene una naturaleza dinámica, interactiva, que se vuelve sobre sí misma en forma recursiva desde una gramática centrada en la acción, la reflexión y la poiesis. Pero además (y sobre todo), esta co-construcción ética expresa la relación entre ser, conocer y ética, clave para comprender el carácter opresor y la exclusión en la distintividad del «otro»; es implicación ética sobre quien piensa y lo que significa para él su pensar. Es pensamiento plural no solo en sus producciones y ética, sino en los modos en que produce conocimiento: pensando en, con, junto, desde, contra el colectivo con el que se convive, pues es en ese policontexto donde

se piensa y legitima el conocimiento desde la ética latinoamericana.<sup>15</sup>

### **Cómo co-construir en Latinoamérica una ética esperanzadora desde la mirada crítica-compleja**

Asumir en nuestro continente la tarea de des-subjetivación para una práctica de libertad comprometida, creativa, propia, implica construir un entramado de pensamiento y acción social que, paradójicamente, hace de la incertidumbre una oportunidad para reconocer la no predeterminación ética, su no universalidad y por tanto, reconstituir su configuración desde la responsabilidad y no desde el «deber ser» como categoría central.

La complejidad inherente a esta postura, me lleva a proponer una agenda que por su naturaleza abierta e inconclusa es una invitación para rescribir, desde cada particularidad, desde cada rincón latinoamericano, su propia esperanza, su propia historia, su propia libertad, su propia ética:

1) Reconocimiento de la naturaleza política del ser humano: Punto de partida como contrafuego a pretensiones individualistas y estatistas donde valores como la libertad, la honestidad, la igualdad son «mercancías canjeables». Al reconocer la naturaleza política del ser humano se sientan bases para co-construir conceptos y normas morales y éticas (no universales) desde los que in-surjan reglas básicas para la sociabilidad, el pensamiento, la interacción y la palabra como fundamentos de la convivencia.

Se resalta en este punto de la agenda el conocimiento ético como un proceso auto-eco-re-organizativo que configura una «ética para la naturaleza política»<sup>16</sup> y reconoce la multidimensionalidad, multiversidad, multirreferencialidad, que expresa la complejidad bio-psico-ego-eco-socio-cultural y ética de la naturaleza humana.

2) Resignificación del concepto y la praxis democrática: es el eje medular de los procesos de



transformación social que debemos emprender en nuestros países. Una ética para la democracia «radical, protagónica y participativa» debe construir bases para la toma de decisiones y acciones implicadas y empoderadas políticamente desde el ser/quehacer/estar/relacionarse del pueblo, para que asuma con responsabilidad, honestidad y equidad la libertad (no libertinaje) y la esperanza que emerge desde una transformación ética-humana-política profunda. Para ello, sugiero considerar aspectos estratégicos como:

- Crear condiciones para una «cultura política auto reflexiva»<sup>17</sup> que favorezca la interacción entre pueblo y autoridad, y genere en el poder político establecido un «pensamiento humilde» que cree la necesaria empatía y puesta en común de principios y valores colectivos para la acción.
- Sustituir los principios y reglas de una «moral positiva» por una «esclarecida o ética» (voluntad de todos) tal como lo plantea Habermas.<sup>18</sup>
- Favorecer el reconocimiento de igualdad, solidaridad y no discriminación implícitos en el concepto democracia no solo como valores que regulan las interacciones y el comportamiento social entre los sujetos, sino entre estos y su hábitat social, espacial, natural, económico, lo que requiere reconocimiento colectivo de que «todo deber ser o hacer implica poder ser o hacer».
- Armar y «desarmar» constantemente el «todo» de las normas morales, éticas, legales, para dilucidar y descubrir de manera colectiva las razones históricas de su formación, siempre problemática y provisional, develando procesos en esencial «endógenos»

3) Implicar (se) en una ética de responsabilidad para que sujetos y colectivo popular asuman el resultado de acción u omisión en una situación concreta y un contexto determinado. Tal perspectiva, contraria a una ética de principios, reconoce en cada situación los elementos nuevos y por consiguiente procura encontrar respuestas éticas nuevas/diversas/diferentes para situaciones nuevas lo que despierta conciencia social sobre ellas. La implicación en una ética de la responsabilidad puede generarse a través de:

- Difusión y apropiación del conocimiento que germina desde los saberes/conocimientos populares (reconocimiento y valoración de lo «endógeno» y la historia comunitaria), para reflexionar de manera crítica problematizando la realidad (circunstancias, contextos, alteridades, eco entorno) como un rizoma que hunde sus raíces, se extiende y fundamenta la co-creación de normativas para la ligazón de voluntades y responsabilidades en una realidad social.
- Convergencia multidimensional entre moralidad (lo individual) y legalidad (lo social y lo político).

- Creación del poder de la conciencia como el único capaz de legitimar la ética de responsabilidad.
- Conformación de redes para el ejercicio responsable de la democracia, la iniciativa, la cooperación en torno a intereses sociales y cívicos que transformen patrones éticos, al recuperar la prioridad de lo social sobre lo económico.

4) Co-construcción y reconocimiento de la «variabilidad» ética, porque para que los sujetos (comunidades/individuos) reconozcan diversidad/diferencia, unidad/heterogeneidad, concurrencias/complementariedades/antagonismos en la participación política popular, es necesario reconocer «la ilusión y falsedad del conocimiento»,<sup>19</sup> los errores e incertidumbres de las acciones sociales, los dilemas y paradojas de la sociedad, los contornos «borrosos» de la realidad, y la singularidad de cada situación. El conocimiento de tal «variabilidad» expresa éticamente:

- Autoconocimiento y autodominio para ser auténtico, íntegro y humilde en las comunicaciones y el manejo del poder.
- Co-construcción de un pensamiento estratégico orientado a conocer, sentir y vivir los desafíos, las oportunidades y amenazas, los conflictos, los recursos y alianzas, las esperanzas, etc. Considero que la ética se encuentra en la base de nuestros modos de producir pensamiento sobre/desde/con la realidad.
- Compromiso con la realidad social y con la búsqueda ética (autónoma, libre, responsable) del conocimiento y la información, para comprenderla (investigación-acción-reflexión-transformación)
- Combate a la opacidad ética surgida de la racionalización y el orden unificador, para asumir la responsabilidad y la humildad como compromiso vital para la acción.
- Reconocimiento de la pluralidad heterogénea de perspectivas, la construcción del imaginario sobre lo que se ha sido, se es y se puede llegar a ser como pueblo.
- Sensibilidad ética (ponerse en el lugar del otro e imaginarse cómo siente y piensa)

Desde mi perspectiva, estos puntos de la agenda contribuirían a la co-construcción de:

- a) Una ética fundamentada en la naturaleza de la tríada interrelación/organización/sistema que reconoce al hombre como ser viviente como organización-de-sí (en general). Así concebida, la ética destaca la conciencia antropológica y antropolítica<sup>20</sup> y acepta el desafío complejo conflictivo (orden-desorden-reorganización) que transforma, produce, reúne, mantiene la dependencia/autonomía del ser viviente.

- b) Una calidad democrática al aflorar experiencias éticas innovadoras de relación, organización y participación ciudadana que reconstruyen las bases sociales de una nueva/diferente/diversa convivencia social.
- c) Una forma de pensar y construir la ética como estrategia, abierta y sin clausura (el todo es incierto), es decir, desde la relación y la inclusión (pensamiento complejo – reorganización permanente), para redescubrir los fundamentos y principios ocultos en la ciencia, la cultura, la sociedad y la historia. Es un pensamiento organizacionista<sup>21</sup> que hace emerger organizaciones conceptuales (macro conceptos éticos) donde solo existen conceptos éticos aislados, atomizados, que desvirtúan la inteligibilidad de lo real social comunitario.
- d) Un sujeto ético (libre, participativo, responsable) que conoce su conocimiento (formas, modos, condiciones, contenidos), es decir que se refunda en la reconceptualización dialógica, a partir de la cual afirma su identidad (individual/colectiva) y la (auto) comprensión del discurso social co-creador de sentidos.

## Notas

1. Arturo Roig, *Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo*, EDIUNC, Mendoza, 2003.
2. Paulo Freire, *Extensión o comunicación*, Siglo XXI Editores, México, DF, 1975.
3. Licínio Lima, *Organização Escolar e Democracia Radical*, Cortez Editora, São Paulo, 2002.
4. Enrique Dussel, *Latinoamérica: retos y perspectivas*, Siglo XXI Editores, México, DF, 2002, p. 36.

De la ética para la desesperanza a la esperanzadora para Latinoamérica

5. José Luis Rebellato, *Ética de Liberación*, MFDAL, Montevideo, 2001, p. 8.
6. Carlos Delgado, «La bioética en la revolución del saber contemporáneo», *Boletín de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas*, n. 1, La Habana, 2003, pp. 4-14.
7. Ídem.
8. Michel Foucault, *El ojo del poder*, Paidós, Barcelona, 1999.
9. Edgar Morín, *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona, 1990.
10. Michel Foucault, ob. cit.
11. Licínio Lima, ob. cit.
12. Edgar Morín, *El método VI. Ética*, Cátedra, Madrid, 2006.
13. Edgar Morín, *El método I. Naturaleza de la naturaleza*, Cátedra, Madrid, 1993.
14. Edgar Morín, *El método V. La humanidad de la humanidad*, Cátedra, Madrid, 2003.
15. José Luis Rebellato, ob. cit.
16. Migue Prats, citado por Carlos Delgado, ob. cit.
17. Enrique Dussel, *Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión*, Trotta, Madrid, 2000.
18. Citado por José Luis Rebellato, ob. cit.
19. Edgar Morín, *Diálogos sobre ética y desarrollo*, Banco Interamericano de Desarrollo, París, 2000.
20. Edgar Morín, *El método VI...*, ed. cit.
21. Edgar Morín, *El método III. El conocimiento del conocimiento*, Cátedra, Madrid, 1994.

© TEMAS, 2011

# **Empresas no estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?**

**Camila Piñeiro Harnecker**

*Profesora, investigadora y consultora de empresas. Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).*

Uno de los cambios más significativos que se están dando en la sociedad cubana como parte del proceso de «actualización» del modelo económico, es la expansión del sector empresarial no estatal. Este término se refiere no solo a formas de propiedad privada,<sup>1</sup> sino también a aquellas en las que interviene la propiedad colectiva como las cooperativas.<sup>2</sup> Con este también se sugiere que una empresa administrada por personas que no sean representantes de instituciones estatales no tiene que ser, necesariamente, «privada», es decir, responder solo a intereses individuales estrechos o contradictorios con necesidades y expectativas de la sociedad en general. El asunto clave para una sociedad comprometida con la construcción socialista, donde el crecimiento económico no es un fin sino un medio al servicio de la sociedad, es precisamente cómo hacer que el sector no estatal responda a intereses sociales.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el empleo no estatal en Cuba en las tres últimas décadas ha representado como promedio 15,7% del total. Este se ha concentrado en las actividades agropecuarias, sobre todo privadas (alrededor de 7,3% del empleo lo componen campesinos independientes,

la mayoría asociados a las Cooperativas de Crédito y Servicios o CCS), cooperativizadas (cerca de 5,7% en Cooperativas de Producción Agropecuaria o CPA y en Unidades Básicas de Producción Cooperativa o UBPC; aunque en decrecimiento); y, en menor medida (alrededor de 2,8%), en el autoempleo en actividades no agrícolas o «cuentapropismo».<sup>3</sup>

Al cierre de 2010, se registraban 442 000 privados no cuentapropistas (8,7% del empleo total), 217 000 cooperativistas (4,2%) y 147 400 cuentapropistas (2,9%). Según la ONE, estos datos no reflejan del todo los más de cien mil nuevos campesinos privados que habían surgido desde que comenzara el proceso de entrega de tierras en usufructo (Ley 259 de julio de 2008), ni los casi ochenta mil nuevos cuentapropistas registrados en los últimos meses de 2010. Según Idalmys Álvarez, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al concluir enero de 2011, se habían otorgado 113 618 nuevas licencias.<sup>4</sup>

Dada la generalizada aceptación de la necesidad de optimizar el uso de los recursos en las instituciones estatales y de que el Estado se libere de la administración —no de la propiedad legal— de ciertas actividades

económicas no estratégicas, se espera que el empleo no estatal aumente considerablemente en los próximos años.

De hecho, se prevé aumentar el número de licencias de trabajo por cuenta propia (incluyendo a empleadores y empleados) en más de doscientos cincuenta mil antes de 2012, y otros doscientos mil puestos de trabajo serían creados, sobre todo por nuevas cooperativas de producción de bienes y servicios.<sup>5</sup> La titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Lina Pedraza estima que el número de personas empleadas en el sector no estatal aumentará a 1,8 millones en 2015,<sup>6</sup> lo que —teniendo en cuenta un incremento de 5% en la fuerza laboral como resultado de la Ley de Seguridad Social no. 105 de 2008— resultaría en más de 35 % del empleo total.

Previendo la importancia que el sector empresarial no estatal tendrá en la economía cubana, el objetivo de este trabajo es analizar su posible desarrollo. Dado que se ha reiterado el compromiso de no renunciar al socialismo, se comienza examinando los distintos criterios existentes sobre la pertinencia de formas empresariales no estatales en la construcción socialista. Se argumenta la necesidad de combinar empresas con formas de gestión democrática —autoempleo, cooperativas, cogestión y otras variantes autogestionarias— y no democrática —las tradicionales privadas basadas en el trabajo asalariado— priorizando las primeras porque son más socializadas al estar controladas por grupos no excluyentes de personas en igualdad de derechos y deberes. Se defiende, además, la necesidad de que las empresas no estatales respondan a intereses sociales más amplios y contribuyan así a una mayor socialización de esas actividades económicas. A lo largo del trabajo se sugieren algunas medidas generales imprescindibles para que la expansión del sector empresarial no estatal sea compatible con las necesidades y expectativas de los cubanos.<sup>7</sup>

## **Distintas posiciones sobre la pertinencia de empresas no estatales en el socialismo cubano**

Aunque existen diversas posiciones entre los miembros del gobierno cubano respecto a la pertinencia de empresas no estatales dentro del proyecto de construcción socialista cubano, parece haber consenso en que son una alternativa que deberá ser experimentada. El contenido del Proyecto de lineamientos<sup>8</sup> y las declaraciones de funcionarios públicos sugieren que la visión compartida por los hacedores de política es que la empresa administrada por el Estado no es la forma organizativa más adecuada para actividades no

estratégicas o de tamaño pequeño —quizás también mediano, dependiendo del criterio de clasificación— en cuanto al número de trabajadores y su intensidad de capital, como los servicios gastronómicos, de transporte público, de reparación de equipos electrodomésticos, e incluso de manufactura e industria ligera. Se está considerando que estas unidades productivas, sus locales y quizás también sus equipos y marcas sean arrendados por cuentapropistas o cooperativas, transformándose en formas no estatales.

Sin abordar la pertinencia o no de las formas empresariales no estatales en el socialismo, el Proyecto de lineamientos propone a las empresas de capital mixto, el trabajo por cuenta propia, las cooperativas, usufructuarios, arrendatarios, etc., como componentes de un sistema económico múltiple o mixto que tiene a la «empresa estatal socialista» como «la forma principal en la economía nacional» (lineamiento 2). Sin definir exactamente en qué consisten, se sugiere que cualesquiera de las formas no estatales que permitan «contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social» no son contradictorias con el proyecto socialista cubano.

A diferencia de la apertura a tales empresas en los años 90, la actual las promueve como modos de organización del trabajo que, lejos de ir en contra, contribuyen a «perfeccionar» el socialismo cubano, y deben ser aceptadas como permanentes.<sup>9</sup> En las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de julio y diciembre de 2010, los diputados debatieron sobre las experiencias de arrendamiento y sobre los cuentapropistas, pero no aparecieron opiniones al respecto en los reportes y transmisiones realizadas por los medios de difusión. No queda claro en qué medida las empresas no estatales son vistas como un mal necesario, ante las deficiencias de la empresa estatal, o como necesarios complementos de ella, que pueden permitir una socialización más efectiva de algunas actividades económicas.

La forma que han tomado las nuevas empresas no estatales (el arrendamiento de locales a individuos, y la contratación de fuerza de trabajo permanente por cuentapropistas), junto con las declaraciones de algunos funcionarios públicos y un balance de los artículos y cartas publicadas en el periódico *Granma* demuestran, en mi opinión, confusión entre hacedores de políticas públicas, académicos y población cubana en general sobre la organización del trabajo en una sociedad comprometida con un proyecto socialista. La contradicción entre los conceptos derivados de los manuales de Economía política soviéticos y la influencia de las teorías económicas liberales dificulta la definición de, por lo menos, algunos de los principios rectores que deberían guiar el actual rediseño del sistema económico cubano.

Mientras no se supere la idea de que la estatal es la forma de empresa más avanzada en el socialismo,<sup>10</sup> aquellas que no lo son serán consideradas solo como necesarias, pero indeseables, que deben ser mantenidas en los márgenes del sistema económico y eliminadas cuando se logre fórmulas que hagan efectiva la gestión estatal de pequeñas y medianas empresas. Según esta posición, lo que hace a una empresa más o menos socialista es la medida en que es administrada y controlada *directamente* por el Estado, a través de sus funcionarios. Cualquier cambio que lleve a una menor intervención de este significa, por tanto, un retroceso en el camino al socialismo.

En el otro extremo de la discusión están los que defienden que las empresas privadas no simples, administradas por individuos que contratan trabajo asalariado de forma permanente —y que la teoría marxista llamaría «capitalistas»—, deben predominar, porque pueden alcanzar los mayores grados de eficiencia económica. Se desdeñan los modelos de gestión democrática que caracterizan a empresas autogestionadas, como las cooperativas, tildándolos de utópicos. Como los defensores del liberalismo económico, se considera imprescindible que no se pongan trabas a que los administradores maximicen sus beneficios materiales personales, puesto se asume que los intereses individuales son irreconciliables con los colectivos de los trabajadores y aún más con los de carácter social que podrían exigir funcionarios estatales u otros representantes de la sociedad. Según esta posición, las empresas no estatales, sobre todo las privadas que contraten trabajo asalariado, son indispensables para el funcionamiento de toda la economía. Lo importante, sugieren, es que «el gato cace ratones, no cómo los cace», o sea, «hay que dejar que algunos se hagan ricos porque así hay más para repartir».

Otra posición considera que las empresas no estatales no son necesariamente capitalistas pues existen otras alternativas entre las privadas capitalistas y las estatales. De hecho, se plantea que hoy en día, en Cuba, el modelo de gestión en estas últimas y el sistema de dirección de la economía no cumplen, en general, con los postulados marxistas en los que se define la sociedad socialista como el conjunto de trabajadores libremente asociados, unidos por un plan,<sup>11</sup> es decir, donde la relación social predominante sea la de trabajo asociado. Para esta posición, cualquier forma empresarial,<sup>12</sup> puede contribuir a la construcción socialista, en la medida en que su gestión sea democrática y responda a intereses sociales expresados en planes de desarrollo local y/o nacional. En algunos casos, es más efectivo socializar la actividad económica a través de formas no estatales gestionadas democráticamente y guiadas por intereses sociales.

En el Proyecto de lineamientos no queda claro si se piensa dar prioridad a que los trabajadores se organicen en cooperativas. Las medidas adoptadas y las preocupaciones resultantes de los debates parecen indicar que ha sido menos complicado aceptar la creación de pequeñas empresas privadas no simples que la creación de cooperativas. Por otro lado, es comprensible que promover y apoyar el surgimiento de cooperativas no agropecuarias es una tarea más compleja que expandir y flexibilizar el ya existente trabajo por cuenta propia.

No obstante, el titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Marino Murillo, y la del MFP, Lina Pedraza, han planteado que las cooperativas tendrán un trato preferencial porque son formas «más socializadas», y se quiere evitar la concentración de la riqueza; con lo que se reconoce que esta se obtiene fundamentalmente a través de la contratación de fuerza de trabajo. Pero el énfasis no ha estado en las diferentes relaciones de producción en una u otra forma —trabajo asalariado *vs.* trabajo asociado—, sino en sus capacidades de acumular riqueza. Esto refleja la preocupación redistributiva y la despreocupación por la naturaleza de las relaciones sociales de los sujetos que construyen, o no, la sociedad poscapitalista; enfoque este que ha marcado las experiencias socialistas.

Pareciera, además, que se supone que mantener la empresa estatal como la predominante evita el riesgo de que las no administradas por el Estado obstruyan la planificación o concertación de los intereses individuales con los sociales; aspecto esencial del socialismo. Aunque parece reconocerse que es necesario adoptar un sistema económico con múltiples formas empresariales, aún no se define —tarea en la que se está trabajando, según declaraciones de funcionarios del MEP— cómo las no estatales se relacionarían o en qué medidas estarían insertadas en el «sistema de planificación socialista [que] continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional» (lineamiento 1).

Lo que sí está claro en el discurso oficial es que se busca separar la administración empresarial de las funciones de control y dirección que deberá mantener el Estado; y que estas últimas —afortunadamente— no les son cedidas a las leyes del mercado. Resulta significativo que se proponga dotar a los gobiernos provinciales y municipales del control de las empresas en sus territorios. Ello permitiría avanzar en procesos de socialización sustantiva de los ciclos de producción, distribución y consumo que ocurren a nivel local, mediante la coordinación horizontal entre los actores económicos (productores, consumidores, financistas, etc.) locales.

Pero así como una mayor autonomía empresarial no es equivalente a una gestión más democrática que

responda a los intereses de los trabajadores, un mayor control de los gobiernos locales tampoco garantiza una mayor socialización o control democrático de la economía por las personas que residen en esos territorios. Esto depende, en primer lugar, de la medida en que esos órganos de representación social respondan realmente a las necesidades y expectativas de sus electores, para lo que es imprescindible que los gobiernos locales puedan establecer espacios de concertación y articulación de intereses comunes, y marcos institucionales y regulatorios que orienten las actividades económicas hacia la satisfacción de esos intereses

### **Necesidad de dar preferencia a las empresas de gestión democrática**

En el primer Seminario Nacional del PCC sobre el Proyecto de lineamientos, a mediados de noviembre de 2010, Marino Murillo expresó:

Las cooperativas tienen cabida en la pequeña industria, en el sector de los servicios [...] pues hay cosas que bajo fórmulas estatales no funcionan. Pero esto debe hacerse con orden.<sup>13</sup>

Además, manifestó que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en una propuesta de Ley y en otros cambios legislativos que permitirían la creación de cooperativas no agropecuarias. Pero no se tiene mayor información al respecto, y hasta el momento solo es posible crear cooperativas agropecuarias, cuyas normativas, por otra parte, presentan significativas limitaciones.

Aunque después del triunfo revolucionario de 1959 se ha reconocido públicamente que las cooperativas son una forma de producción más socializada y por tanto más avanzada que las empresas privadas, no se han implementado políticas para fomentarlas después de algunos intentos en los inicios de la Revolución y con posterioridad al Primer Congreso del PCC de 1975 y al de 1992. Según datos de la ONE, el número de CPA y UBPC ha venido reduciéndose paulatinamente, después de que se incrementara durante los primeros años de la creación de esas figuras —1976 y 1993, respectivamente. Se han desintegrado cooperativas, sin haberse creado nuevas.<sup>14</sup>

No es posible analizar en este trabajo los factores que han motivado la reducción del número de cooperativas cubanas de producción agropecuaria y de sus membresías, pero es importante señalar que las facultades y obligaciones otorgadas a ellas no les han permitido diferenciarse lo suficiente de las empresas estatales.<sup>15</sup> Además, los campesinos privados, en relación con las cooperativas, han disfrutado de mayores niveles

Empresas estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?

de autonomía y menos responsabilidades sociales (compromisos de ventas al Estado, servicios y obras sociales en las comunidades), lo que les permite vender a precios más altos y reducir costos.

En Cuba, la actual ausencia de políticas que favorezcan a las cooperativas sobre las formas empresariales privadas puede ser resultado, en alguna medida, de que no se tenga en cuenta uno de los legados más importantes del marxismo: que las relaciones entre las personas durante el proceso productivo («relaciones sociales de producción») son las que —en última instancia, sin restarle a los seres humanos la capacidad de autodeterminarse y sobreponerse a sus circunstancias— generan los comportamientos y valores que nos caracterizan. De hecho, no se reconoce que la contratación de trabajadores de forma permanente —ya sea por cuentapropistas, campesinos privados e incluso por cooperativas—, establece relaciones de trabajo asalariado, y que, por tanto, es una forma de subordinación y, en general, de explotación aun cuando el empleador trabaje junto al asalariado.<sup>16</sup> Mientras no se comprenda la diferencia substantiva entre la relación de trabajo asalariado y la de trabajo asociado, no se podrá valorar la importancia de los modelos de gestión democráticos o autogestionarios como vías institucionales para superar las barreras que el trabajo asalariado establece para el pleno desarrollo humano de los trabajadores.

Una de las razones utilizadas para desestimar la significación de cooperativas y otras formas autogestionarias, como dije antes, es la creencia de que son demasiado utópicas y por tanto ineficientes. Sin embargo, cualquier duda sobre la factibilidad de su gestión empresarial queda deshecha cuando se estudian las experiencias de las cooperativas que componen el grupo Mondragón,<sup>17</sup> y otras más o menos grandes que existen en el mundo; así como la de la autogestión yugoslava<sup>18</sup> y la España republicana.<sup>19</sup> Las ventajas de los modelos de gestión democrática, como el cooperativo, han sido reconocidas no solo por teóricos socialistas<sup>20</sup> sino también por gerentes de empresas capitalistas interesados en poner en práctica métodos efectivos para motivar a sus trabajadores a aumentar la productividad, calidad e innovación.<sup>21</sup> Aunque hay que señalar que los capitalistas limitan la participación de los trabajadores para que no controlen realmente la toma de decisiones; y, por lo general el derecho a participar está asociado a la propiedad de acciones de la empresa (*stock ownership*) y no a su condición de seres humanos.

Aquellos comprometidos con la construcción socialista no ven en la gestión democrática solo una herramienta para motivar a los trabajadores a contribuir con sus capacidades, esfuerzo y conocimiento. La participación es entendida como un medio fundamental

para que se desarrollen como los hombres y mujeres nuevos que necesita una sociedad de justicia plena: con competencias técnicas, gerenciales y democráticas, sentido de pertenencia y compromiso con todo el proceso de producción, confianza en sí mismos, creatividad y solidaridad. Una gestión empresarial democrática posibilita también un mayor control de los trabajadores sobre las decisiones que tienen un gran impacto sobre sus vidas, y por ello —aunque no es suficiente— contar con condiciones objetivas y subjetivas más propicias para ser solidarios.

En la medida en que el pensamiento socioeconómico cubano —como viene ocurriendo en otros países latinoamericanos— se libere de los dogmas, tanto del «socialismo estatista» como del liberalismo económico, y retome la esencia humanista del socialismo, su objetivo no será reducido a la satisfacción de necesidades materiales, sino que incluirá las de desarrollo individual y social que tiene todo ser humano. Solo entonces se pondrá atención a la naturaleza de las relaciones entre las personas que determinan sus experiencias prácticas cotidianas. Este entendimiento tendrá como corolario la preferencia por formas de gestión democráticas en las empresas; formas de organización del trabajo que permiten, como Marx y Engels previeron, establecer relaciones de trabajo libre asociado que superen la injusticia inherente a las del trabajo asalariado, sobre las que se basan las sociedades capitalistas.<sup>22</sup>

Para identificar si una forma empresarial es pertinente o compatible con una sociedad socialista, hay que tener en cuenta la medida en que las decisiones importantes de su administración son tomadas de manera democrática por los propios trabajadores, directamente en asambleas generales, o mediante representantes elegidos por ellos. La propiedad legal es separable de la gestión empresarial, y el reparto de utilidades es solo una de las tantas decisiones gerenciales que toman los que controlan la gestión. Es decir, para que una empresa sea realmente útil para la construcción socialista —en cuanto a su organización interna— lo importante es que la autoridad suprema radique en el colectivo de trabajadores: son ellos quienes participan directamente en la toma de decisiones más importantes, establecen las reglas de funcionamiento de la organización, eligen a sus representantes y controlan su desempeño.

Para promover la relación de producción socialista —aquella que Marx definió como la asociación de trabajadores libres unidos por un plan— no es necesario ni aconsejable prohibir la contratación de trabajo asalariado. Pero sí es imprescindible establecer políticas que busquen democratizar la gestión de las empresas estatales, y que promuevan de forma prioritaria, en el sector no estatal, a las autogestionarias, mediante su acceso preferencial a financiamiento, insumos,

asistencia técnica y contratos gubernamentales, entre otras medidas.

El propósito debe ser crear condiciones para que las personas que tienen la ventaja de contar con recursos financieros e iniciativas emprendedoras consideren más atractivo conformar cooperativas u otras formas autogestionarias; y que las menos afortunadas prefieran incorporarse a ellas en lugar de convertirse en trabajadores asalariados. Se trata de instaurar un sistema empresarial con múltiples formas de gestión, más y menos democráticas, sin perder de vista que el objetivo es generalizar lo más posible la adopción de prácticas democráticas de administración. La idea no es por supuesto imponer o forzar su expansión, sino crear las condiciones para que ellas puedan demostrar que son vías más efectivas de organizar el trabajo, de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas.

### **Necesidad de que las empresas respondan a intereses sociales**

Las empresas no estatales —tanto como las estatales— son útiles o pertinentes para un proyecto de construcción socialista que busque satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas, en la medida en que contribuyan a ello. No basta que sean rentables y cumplan con sus obligaciones tributarias. Además de contribuir con recursos financieros mediante el pago de impuestos, sus propias actividades deben estar orientadas a satisfacer demandas reales de consumo, no fabricadas solo para vender. No menos importante es que las «externalidades», o consecuencias de su funcionamiento sobre terceras partes, deben contribuir a la satisfacción de otras necesidades o intereses sociales. Para lograr esto es necesario que las actividades económicas estén bajo «control social» o «propiedad social»; lo que, como veremos, no significa ignorar sus imprescindibles niveles de autonomía y otras exigencias de toda gestión empresarial.

Lógicamente, no es preciso que la sociedad se preocupe por asegurar la provisión eficaz de aquellas actividades relacionadas con requerimientos de consumo de bienes y servicios no básicos<sup>23</sup> ni estratégicos, pues la demanda de un mercado competitivo para esta clase de productos lo logra en gran medida. No obstante, para todo tipo de actividad económica, sea o no básica o estratégica, siempre es recomendable promover su eficiencia social, es decir, el equilibrio entre costos y beneficios sociales que se considere más adecuado: que sus externalidades repercutan de la manera más positiva posible —o al menos, no negativamente— sobre los intereses de las comunidades en las que impacta. No

**Solo democratizando o socializando la economía, materializando la propiedad social sobre ella, podremos avanzar hacia una sociedad que tenga como horizonte el desarrollo humano y no solo la redistribución de la riqueza.**

solo se trata de establecer un marco regulatorio que prohíba o penalice comportamientos no deseados, sino que es necesario además motivar conductas positivas, responsables y sensibles a las necesidades de otros; y, en primer lugar, definir esas necesidades e intereses que se pretenden satisfacer.

La insistencia en lo anterior, en no confiar en la «mano invisible» del mercado para que la economía responda a nuestras necesidades, no es un empecinamiento ideológico, sino un pragmatismo basado en evidencias irrefutables sobre lo inadecuado de las relaciones de mercado o mercantiles<sup>24</sup> para lograr esos propósitos. La experiencia en Cuba con los cuentapropistas y campesinos e intermediarios privados en espacios de «mercado libre», o de «oferta y demanda», ha confirmado el aserto de economistas marxistas de que las reglas de funcionamiento de las relaciones mercantiles promueven comportamientos cuando menos ajenos a intereses sociales.

Así, para algunos cubanos ya es evidente que un sistema de mercado no solo es inadecuado para lograr que las empresas no estatales satisfagan necesidades *básicas* de consumo,<sup>25</sup> sino que atenta contra otros intereses sociales como el logro de ciertos niveles de igualdad, justicia y solidaridad. Tampoco permite que las empresas internalicen costos sociales como la contaminación medioambiental y el desempleo, y externalicen beneficios sociales como sería compartir conocimientos, tecnologías u otros recursos. En los espacios de mercado que actualmente existen en Cuba se observa que los vendedores no están interesados en satisfacer las necesidades de las personas: priorizan las producciones que más ganancias generan a costa de otras de alta necesidad; concentran la oferta en los sectores poblacionales de mayor capacidad de compra aunque no de mayores urgencias; prefieren vender pocos volúmenes a precios elevados que más a unos más bajos; se aprovechan de situaciones, como eventos meteorológicos, para subirlos, aunque los costos de producción no hayan aumentando en la misma proporción; evaden impuestos; utilizan materias primas y tecnologías más baratas que dañan la salud y el medio ambiente, etcétera. Estos comportamientos «antisociales» no son generados —aunque sí acentuados— por las imperfecciones de esos espacios de mercado (resultado de las limitaciones

a la entrada de nuevos vendedores y de su segmentación por la dualidad monetaria y disparidades en la capacidad de compra), sino por la propia competencia de mercado y el escaso control social sobre ellos.

Falta reconocer que las relaciones mercantiles resultan inadecuadas para guiar a las empresas hacia los intereses sociales no porque los vendedores y compradores sean malas personas que necesiten lecciones de humanismo o inspectores más exigentes, sino que es el propio funcionamiento de las relaciones mercantiles lo que les fuerza a priorizar sus intereses estrechos sobre los de otros, y hace que parezcan «naturales» esos comportamientos. No obstante, acostumbrados a niveles de justicia y racionalidad no comunes en otras sociedades, los cubanos no nos resignamos a que los que comercialicen ganen más dinero que los que producen, que los precios de los mismos productos varíen abruptamente, que determinados productos se vendan solo en algunos barrios y a precios muy por encima de los costos de producción. La idea de que siempre habrá perdedores y ganadores no es aceptada de manera pasiva, porque se hace evidente que mediante el funcionamiento del mercado siempre pierden los desafortunados por causas ajenas a su voluntad (mujeres, ancianos, negros y grupos históricamente marginalizados). No parece justo que generalmente triunfen los insensibles y pierdan los que asumen los intereses de otros como propios.

No debemos ignorar que, bajo la competencia de mercado, cualquier intento genuino de una empresa por actuar de forma socialmente responsable por lo general implica un costo de oportunidad que afecta su posición en el mercado, pues solo se premian con seguridad los comportamientos antisociales.<sup>26</sup> Además, los que administran las empresas no cuentan con un marco institucional que les permita construir sus intereses individuales de manera menos estrecha. El carácter bilateral y atomista de las relaciones mercantiles les impide a los actores económicos no solo tener en cuenta, sino también identificar los intereses de otros.<sup>27</sup>

Ni siquiera las empresas gestionadas democráticamente pueden escapar de los efectos corruptivos de operar a través de relaciones mercantiles; terminarán comportándose como empresas capitalistas, guiadas por la maximización de la ganancia, ignorando o



quebrantando intereses sociales.<sup>28</sup> Algunos han planteado que estas tienden a internalizar intereses sociales aun cuando operan mediante relaciones mercantiles, porque la lógica u objetivo principal de su funcionamiento es la satisfacción de las necesidades de sus trabajadores; a diferencia de las empresas capitalistas donde lo que se busca es maximizar la ganancia y los beneficios de los dueños.<sup>29</sup> Sin embargo, aunque las empresas autogestionarias podrían estar más inclinadas a aceptar su responsabilidad social porque ello constituiría pasar de una lógica de intereses colectivos (del grupo de trabajadores) a otra de intereses sociales más amplios, estos por lo general solo pueden ser articulados mediante espacios de coordinación o «planificación democrática» donde se construyan, y además se concierten acciones para satisfacerlos.

Sin dudas, el sistema de «planificación» que ha marcado la economía cubana, aunque se ha preocupado porque todos los cubanos tengan acceso a bienes y servicios básicos, no ha sido efectivo en la satisfacción de ciertos intereses sociales, sobre todo los relacionados con el consumo individual y su heterogeneidad. El sistema de dirección en que han operado las empresas estatales cubanas, y en el cual se encuentran integradas las cooperativas agropecuarias, ha sido ineficiente en la utilización de recursos y, por tanto, no ha creado las condiciones para la sostenibilidad de las conquistas sociales alcanzadas.

En un sistema de planificación verticalista —solo formalmente democrático como el nuestro—, el control social depende de que los administradores estatales respondan de manera efectiva a las directivas que reciben de los organismos superiores, y, primero que todo, que esas orientaciones reflejen los intereses sociales. Numerosos economistas han identificado las limitaciones de un sistema de planificación autoritaria (no democrática y excesivamente centralizada) tanto para distinguir los intereses sociales, como para motivar a los administradores estatales a que ofrezcan la información necesaria para una efectiva planificación, y que después cumplan con las directivas asignadas.<sup>30</sup>

Pero esto no nos debe llevar a ver en las relaciones mercantiles la única alternativa a un sistema de planificación autoritario, verticalista, ni esperar que un mercado competitivo y bien regulado resuelva todos los problemas económicos, y, menos aún, el abastecimiento de bienes básicos. Es posible hallar síntesis superiores diversas—adaptadas a las distintas realidades—que combinen las ventajas de las actividades descentralizadas con las guiadas por intereses sociales definidos en los territorios y grupos sociales donde ellas impactan.

Así, puesto que la mayoría de las empresas no estatales, dado su tamaño y carácter no estratégico, repercutirán fundamentalmente sobre las comunidades

más inmediatas, es posible ejercer el control social —necesario para garantizar que satisfagan las necesidades de estas— a través de instituciones y políticas de alcance local, dirigidas por gobiernos municipales o, en municipios muy poblados, por consejos populares. Los gobiernos locales deben asumir la responsabilidad de orientar y apoyar a las empresas en su territorio en correspondencia con los intereses sociales y las actividades que dichas empresas realicen.

Para ello sería conveniente la creación de espacios de coordinación o planificación democrática, que incluyan representantes de las empresas no estatales —organizadas en asociaciones o consejos— y de los residentes —delegados del Poder Popular, asociaciones de consumidores y otras organizaciones sociales— en esos territorios, para que, de forma consensuada, se diseñen estrategias y planes de desarrollo, se decidan presupuestos, y algo muy importante: se supervise su cumplimiento. Como lo demuestran las experiencias de algunos gobiernos locales en Cuba y otros países, los métodos de «diagnóstico participativo» y «presupuesto participativo» permitirían identificar y aprovechar de forma más efectiva las potencialidades de las empresas en el territorio, y las motivaría a contribuir en mayor medida al desarrollo local.

Una vez identificados los intereses sociales, es necesario que el marco regulatorio de la actividad empresarial en el área establezca una lógica de compromiso con la satisfacción de dichos intereses: que se premien de forma coherente los comportamientos socialmente responsables y se penalicen los que atenten contra ellos. Así, las autoridades locales deberían establecer políticas de fomento de empresas que cumplieran necesidades insatisfechas; expresar, en las licencias de operación y en cláusulas condicionantes de los contratos (de arrendamiento, financiamiento, compraventa) aquellos comportamientos que se espera de ellas; premiar con contratos de financiamiento, compraventa o niveles de impuesto más favorables a las que satisfagan de forma más efectiva los intereses de sus comunidades. Y a aquellas empresas cuyas actividades están relacionadas con necesidades básicas, les podrían exigir criterios para definir precios a partir de costos y beneficios sociales, niveles de producción y de calidad requeridos, así como compromisos de ventas a instituciones públicas, entre otras obligaciones.

Para ejercer el control social también sobre la comercialización y consumo, los espacios de intercambio actualmente de mercado (agromercados de libre oferta y demanda e incluso mercados estatales tanto en divisa como en pesos cubanos) podrían ser socializados de modo que los que en ellos comercializan tomen en cuenta los intereses de los consumidores y las comunidades en general. Como ocurre en las

cooperativas de consumo, esas tiendas podrían ser administradas por personas que respondan y rindan cuenta a los gobiernos locales—como representante de los intereses de los consumidores en sus territorios—de manera que ellos cuenten con información transparente y vías concretas para mejorar la relación precio-calidad, el surtido, etc. Sería recomendable también que los gobiernos fueran los responsables de velar por la efectiva administración de las tiendas minoristas y mayoristas donde se aprovisionarían y venderían las nuevas formas no estatales, la disponibilidad de financiamiento y de asesorías y servicios para la administración empresarial, entre otras acciones vitales para su éxito.

Es importante aclarar que el establecimiento de espacios de planificación o coordinación democráticos, y otros mecanismos de control social, no implica prohibir que las empresas no estatales establezcan relaciones horizontales de intercambio. La descentralización es clave para que ellas puedan actuar con flexibilidad y celeridad y tener una gestión que satisfaga de modo efectivo necesidades sociales. No se trata de prohibirles que intenten aumentar sus utilidades, pues evidentemente no es posible ni conveniente si se quiere que sean autofinanciadas y que sus trabajadores reciban una remuneración adecuada. El asunto es lograr, mediante la planificación democrática y un marco regulatorio, que establezcan un sistema de incentivos coherente, que la lógica de las relaciones de intercambio horizontales que guíe el funcionamiento de las empresas no sea meramente la maximización de los beneficios estrechos de sus colectivos o administradores, sino que ellos interioricen el interés social, que tengan en cuenta las necesidades materiales y espirituales de los grupos sociales sobre los que repercuten.

En la medida en que los gobiernos locales logren una genuina articulación de los intereses sociales en sus territorios, los representen fidedignamente en estrategias, planes y presupuestos, y los implementen a través de políticas e instituciones, su control sobre las empresas será más legítimo. Así, si estas saben que sus aportes serán utilizados para la satisfacción de demandas sociales o, mejor aún, si sus representantes pueden participar en las decisiones de cómo utilizarlos y controlar su uso mediante una rendición de cuentas realmente transparente, entenderán mejor las repercusiones de sus acciones y les será más engorroso evadir impuestos y otras responsabilidades sociales.

## Consideraciones finales

Al centro de la dificultad para evaluar la pertinencia de empresas no estatales en la economía cubana y el papel que ellas pueden desempeñar en su relación con

el Estado está la necesidad de definir los principios esenciales que deberán caracterizar al socialismo cubano. Deben responderse preguntas como las siguientes: ¿comprende la mayor justicia social inherente a todo proyecto socialista que los trabajadores tengan iguales oportunidades de desarrollarse como seres humanos plenos y no sean reducidos a insumos del proceso productivo?, ¿se requiere o no que la actividad empresarial sea guiada por intereses sociales? En otras palabras, ¿lo que le preocupa a la sociedad cubana no es solo que aumente la oferta de bienes y servicios para satisfacer demandas de consumo, sino que esa oferta sea accesible a la mayoría de las personas, que priorice las necesidades más importantes, y que sea el resultado de puestos de trabajo dignos que les permitan a los trabajadores desarrollarse a plenitud y satisfacer sus necesidades materiales y espirituales?

Si se responden afirmativamente las preguntas anteriores, la empresa no estatal es útil y conveniente para la construcción socialista sobre todo en la medida que su gestión sea controlada no solo por el colectivo de trabajadores sino también —de manera más directa o indirecta, según resulte más efectivo— por aquellos grupos sociales que reciben la influencia de sus actividades. Solo así, bajo «control social», «unidas y guiadas por un plan», por una estrategia de desarrollo local, se garantiza y se les facilita que satisfagan intereses sociales. Esto implica, básicamente, una gestión democrática de la economía local por las comunidades, mediante las instituciones y procedimientos que ellas diseñen.

Aun a nivel local, alcanzar este control social sin dudas no será sencillo, ni se podrá avanzar de forma lineal: habrá logros y errores, avances y retrocesos. Se requerirá de una fuerte voluntad política y de tiempo para que los funcionarios de los gobiernos locales, los trabajadores y los ciudadanos desarrollen las habilidades y actitudes de autogestión democrática: de toma de decisiones en consenso, de sistemicidad para implementar las acciones acordadas, de responsabilidad por las decisiones y acciones realizadas. Será preciso evitar que los funcionarios de los gobiernos locales abusen de su poder mediante un sistema de fiscalización efectivo, y sobre todo, mediante su control por los propios ciudadanos y los medios de comunicación. Pero estos hábitos y competencias no pueden ser desarrollados sino a través de la práctica. Será, sin dudas, un proceso de aprendizaje de nuevos métodos y de cambio cultural considerable.

Lo más fácil —desde la perspectiva de los que se saben entre los ganadores— sería «liberalizar» o dar rienda suelta al interés individual, en la forma de contratación de trabajo asalariado permanente y de relaciones mercantiles. Pero una parte no desestimable

de los cubanos, educados en valores éticos de justicia y solidaridad, y conscientes de nuestro derecho de vivir dignamente —que implica la responsabilidad de contribuir con lo mejor de nosotros a la sociedad—, estamos dispuestos a intentar hacerlo mejor: a socializar o democratizar en lugar de solo liberalizar. Defendemos la oportunidad de autogestionar nuestras empresas y gobiernos locales para que la actividad económica, y toda actividad social en general, contribuya a satisfacer nuestras necesidades de desarrollarnos plenamente como seres humanos. De lo contrario, pasaremos a ser solo instrumentos para la maximización de la ganancia de unos pocos.

El actual proceso de reducción de las plantillas estatales y de expansión de empresas no estatales representa grandes riesgos. Pero es también una oportunidad para promover la creación de nuevas formas de organización del trabajo que no solo creen empleos más productivos que satisfagan necesidades de consumo y generen ingresos tributarios para el desarrollo local. Es también, si así nos lo proponemos, una coyuntura propicia para crear espacios donde se promuevan las habilidades y actitudes democráticas, la creatividad y los valores solidarios, indispensables para la construcción de un orden social que gire alrededor de las personas y no de la abundancia material, que las nuevas generaciones sientan como suyo.

Solo democratizando o socializando la economía, materializando la propiedad social sobre ella, podremos avanzar hacia una sociedad que tenga como horizonte el desarrollo humano y no solo la redistribución de la riqueza. Si no, corremos el riesgo de que —con el pretexto de crear beneficios materiales— la lógica de la ganancia se convierta en lo natural e inevitablemente choque con el intento redistributivo, y que así, un día, lo más «racional» parezca abandonar el horizonte socialista.

## Notas

1. Existen formas de propiedad privada simple (autoempleo o empleo familiar, sin contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente) y no simple (empresas con contratación de fuerza de trabajo asalariado permanente).
2. La cooperativa es una forma de la propiedad colectiva: ni privada ni estatal. Véase Jesús Cruz Reyes y Camila Piñeiro Harnecker, «Una introducción a las cooperativas», en Camila Piñeiro Harnecker, ed., *Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba*, Editorial Caminos, La Habana, 2011, p. 34.
3. Cuando surge la posibilidad del trabajo por cuenta propia en 1993, no se permitía la contratación de trabajadores que no fueran familiares de quien poseía la licencia. Por tanto, era —al menos formalmente— un tipo de autoempleo, de empleo individual o familiar: una forma privada simple de organización de trabajo. Con las regulaciones de octubre de 2010 (*Gaceta Oficial*, n. 11 y 12,

La Habana, 2010), al permitirse e incluso exigirse la contratación de trabajadores de forma permanente para varias actividades, el cuentapropismo deja de representar un modo de autoempleo pues en algunos casos se convierte en formas privadas no simples.

4. José Alejandro Rodríguez, «Casi se duplican los trabajadores por cuenta propia», *Juventud Rebelde*, La Habana, 4 de marzo de 2011.
5. «Información sobre el reordenamiento de la fuerza de trabajo», La Habana, 2010 citado por Carmelo Mesa-Lago, «El desempleo en Cuba: de oculto a visible», *Espacio Laical*, a. 6, n. 4, La Habana, octubre de 2010, pp. 59-66.
6. Lina Pedraza, «Intervención en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea del Poder Popular», 15 de diciembre de 2010.
7. Véase Camila Piñeiro Harnecker, ed., ob. cit., pp. 26-30; «Riesgos de la expansión de empresas no estatales en la economía cubana y recomendaciones para evitarlos», disponible en *Rebelión*, www.rebelion.org, 11 de octubre de 2010.
8. El *Proyecto de lineamientos de la política económica y social*, del Partido Comunista de Cuba (PCC), aparecido en noviembre de 2010, sirvió de base para los debates en preparación para el VI Congreso del PCC que tuvo lugar en abril de 2011.
9. Leticia Martínez Hernández, «Trabajo por cuenta propia: mucho más que una alternativa», *Granma*, La Habana, 24 de septiembre de 2010.
10. Planteamiento expuesto en manuales de economía política soviéticos, donde se redujo la propiedad social —identificada por los clásicos del marxismo como característica esencial de la sociedad poscapitalista— a la propiedad estatal.
11. Carlos Marx, «La nacionalización de la tierra» [1872], disponible en *Marxists Internet Archive*, www.marxists.org, p. 308.
12. Aunque no es imposible que propietarios individuales cedan el control de su gestión mediante arrendamiento, esto dependerá de las decisiones que tomen esas personas. Por ello, resulta recomendable que sean instituciones que representen intereses sociales (ministerios o gobiernos locales, regionales) los que tengan la propiedad legal al menos de esos medios de producción estratégicos.
13. Leticia Martínez Hernández y Yaima Puig Meneses, «Sesión reunión ampliada del Consejo de Ministros», *Granma*, La Habana, 1 de marzo de 2011.
14. Según Alcides López, mientras han desaparecido solo 136 CPA desde su creación (un promedio de tres anuales), se han disuelto 474 UBPC, para un promedio de veinticuatro anuales. Véase su tesis doctoral «Propuesta de un Sistema Integrado de Gestión para las UBPC», Universidad de La Habana, enero de 2011.
15. Avelino Fernández Peiso, «Notas características del marco legal del ambiente cooperativo cubano», en Camila Piñeiro Harnecker, ed., ob. cit., p. 366.
16. Esto se manifiesta en el hecho de que se proponga incluir en un mismo sindicato a trabajadores contratados y a los cuentapropistas y cooperativas que los contratan, y en planteamientos como el de Idalmys Álvarez, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: «[En] la contratación de trabajadores, autorizada para 83 de las opciones laborales no estatales [...] no se genera una tradicional relación de subordinación entre empleador y empleado, pues al ser ambos trabajadores por cuenta propia convenían los términos de la contratación» (Véase José Alejandro Rodríguez, ob. cit.). Sin embargo, se han publicado cartas en *Granma* que demuestran que incluso algunas UBPC han dejado de pagar salarios

a trabajadores contratados. La Central de Trabajadores de Cuba ha planteado estar velando por el respeto de los intereses de los trabajadores contratados.

17. Mondragón es una cooperativa de tercer grado, de más de cien cooperativas, cuya actividad la convierte en el séptimo grupo empresarial más importante de España. Véase [www.mcc.es](http://www.mcc.es).

18. Jaroslav Vanek, *The Labor-managed Economy: Essays by Jaroslav Vanek*, Cornell University Press, Ithaca, 1977, p. 208; Pat Devine, *Democracy and Economic Planning*, Polity Press, Cambridge, 1988, pp. 95-6.

19. Sam Dolgoff, ed., *The Anarchists Collectives: Workers' Self-management in the Spanish Revolution 1936-1939*, Free Life Editions, Nueva York, 1974.

20. Véase Camila Piñero Harnecker, ed., ob. cit., pp. 71-190.

21. Juan Guillermo Espinosa y Andrew Zimbalist, *Economic Democracy: Workers' Participation in Chilean Industry 1970-1973*, Academic Press, Nueva York, 1978, p. 171; John Bonin y Louis Putterman, *Economics of Cooperation and Labor-Managed Economy*, Harwood Academic Publishers, Nueva York, 1987, p. 6; Jaroslav Vanek, ob. cit., p. 167 y Gregory Dow, *Governing the Firm*, Cambridge University Press, Nueva York, 2003, pp. 8-15, 95-101, 176-8, apuntan a las principales ineficiencias de la empresa capitalista, y explican cómo ellas se derivan fundamentalmente de su gestión no democrática resultado del control privado. David I. Levine y Laura D. Tyson («Participation, Productivity, and the Firm's Environment», en Alan S. Blinder, ed., *Paying for Productivity: A Look at the Evidence*, The Brookings Institution, Washington, DC, 1990, pp. 183-244) demuestran empíricamente que la participación de los trabajadores en la gestión de sus empresas puede dar lugar a aumentos de productividad.

22. La injusticia de la relación de trabajo asalariado no reside realmente en la cuantía del salario, sino en el carácter no democrático de la gestión que ella establece en la que el trabajador cede su capacidad de participación substantiva. Véase Camila Piñero Harnecker, «Riesgos de la expansión...», ed. cit.

23. Como necesidad «básica» generalmente se incluye a la alimentación, educación, salud, higiene, transporte, vestimenta, entre otros. Sin embargo, la definición de un bien o servicio como «básico»

Empresas estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?

dependerá de las aspiraciones y hábitos culturales de las personas, así como de las condiciones de acceso a ellos que se tenga.

24. Por «relaciones mercantiles» no se entiende cualquier forma de intercambio horizontal, sino aquellas donde los precios y otras decisiones del intercambio son tomadas —al menos en teoría— de forma bilateral entre el vendedor y el comprador y cada parte busca maximizar su interés individual, sin tener en cuenta el social. Es posible, mediante instituciones de coordinación o planificación democrática, lograr relaciones de intercambio horizontales que no sean mercantiles sino «socializadas».

25. Incluso la teoría económica neoclásica reconoce que las leyes de oferta y demanda no se cumplen cuando los productos son difícilmente sustituibles como los de consumo básico.

26. Camila Piñero Harnecker, «Principales desafíos de las cooperativas en Venezuela», *Cayapa: Revista de Economía Social Venezolana*, a. 8, n. 15, Caracas, enero-junio de 2008, pp. 54-5.

27. Camila Piñero Harnecker, «Conciencia social y planificación democrática en las cooperativas venezolanas», *Temas*, n. 54, La Habana, abril-junio de 2009, p. 22.

28. Véase Robin Hahnel, *Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation*, Routledge, Nueva York, 2005, p. 355; Pat Devine, ob. cit., p. 13; Ellen T. Comisso, *Workers' Control under Plan and Market*, Yale University Press, New Haven, 1979, p. 110.

29. Para comprender esta diferencia es necesario percibir que no todas las necesidades humanas pueden ser satisfechas de manera individual mediante ingresos monetarios. Existen otras, tanto materiales, de carácter colectivo o social, como espirituales, relacionadas con la realización personal y con las relaciones que se establecen con otros seres humanos.

30. Véase Pat Devine, ob. cit., pp. 73-4, 88-91, 220-1, y Robin Hahnel, ob. cit., pp. 94, 97-8.

© TEMAS, 2011

# **Cambios sociales y políticos en América Latina y el Caribe**

**Ricardo Núñez Muñoz**

*Sociólogo. Instituto Igualdad (Chile).*

Las últimas décadas están marcadas por cambios trascendentales en la vida económica, social y cultural de América Latina y el Caribe. Todos sus países, en distintas dimensiones e intensidades, viven los efectos de procesos que, por su dinamismo, se encuentran en permanente cambio y transformación. Es altamente probable que sobre dichos cambios—debido al enorme influjo de la «idea única» para concebir el desarrollo, y de los efectos de la revolución científica y tecnológica que comanda solo un puñado de países—sea difícil concluir «leyes» que expliquen la totalidad y el devenir de los procesos en curso. Algunos de ellos son inéditos; otros, herencia del pasado, y muchos vislumbran futuros cuyos efectos son aún impredecibles.

Desde luego que la pobreza sigue constituyendo un tema de enorme relevancia. Ella ha acompañado a esta parte del mundo desde que las naciones se independizaron de la dominación del imperio español. La diferencia con ese momento histórico y con todos los ciclos posteriores del capitalismo dependiente—concepto acuñado en los años 60—, radica en lo siguiente: por un lado, existe un cambio cualitativo en los diversos nudos en los que esta se manifiesta, según

los niveles de desarrollo de los países en cuestión; y, por otro, aumenta en zonas donde el Estado evidencia su máxima debilidad, a pesar de las medidas implementadas para mitigarla.

Uno y otro fenómeno tienen su explicación fundamental en la irrestricta aplicación del ideario neoliberal que, con matices, ha estado presente en el escenario económico y social del continente. La estrategia de consolidar un equilibrio macroeconómico a cualquier costo, de liberalizar el comercio con su consiguiente efecto en las pequeñas y medianas empresas imposibilitadas de competir en los mercados globalizados, y la privatización de empresas del Estado y la consecuente reducción del aparato público, ha tenido efectos negativos indesmentibles.

El Informe de Latinobarómetro del año 2010 señala lo siguiente: «En 2009 la CEPAL estima que la tasa de pobreza en la región aumentó a 34,1% desde 33% registrado en 2008 y que la tasa de indigencia subió a 13,7%, frente a 12,9% en 2008». El mismo informe establece que estas cifras, si se comparan «con una tasa de pobreza de 44% y una tasa de indigencia de 19,4% en 2002», indican que «a pesar de la magnitud de la crisis

internacional, el impacto en los indicadores de pobreza en la región, en términos agregados, [ha sido] menor que en crisis anteriores».<sup>1</sup>

En otros términos, hacia 1990 había 200 millones de personas que vivían bajo la línea de pobreza en América Latina. En 2002, cuando las democracias estaban por completo asentadas, esta cifra había aumentado a 221 millones; es decir, 44% de la población total latinoamericana. Si actualizamos estos datos, según el informe más reciente del mismo organismo, en 2008 existían 180 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza; es decir, 33% de la población de la región.<sup>2</sup>

Tales estadísticas son elocuentes. Muestran que el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre fijado en los «Objetivos del milenio» de Naciones Unidas para el año 2015, constituirá una meta en extremo difícil de cumplir en muchos países del continente. No debe olvidarse que, para la zona latinoamericana, dichos objetivos se fijaron bajo el supuesto de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sería de 6% como promedio, a fines del tercer quinquenio.

Que la pobreza se encuentra radicada, en una proporción mayor, en las grandes ciudades donde la urbanización está consolidada, no es algo nuevo. Lo singular es que se instaló en nuevos asentamientos, en ciudades periféricas, nacidas al amparo del incontenible proceso de migraciones que vive la región. Es una pobreza más disimulada, menos evidente que la vivida en el continente en la época del desarrollo del capitalismo «hacia adentro». Es más hipócrita y sobre ella los gobiernos pueden operar sea con políticas asistencialistas de carácter populista, o con la compra de la conciencia de los líderes que surgen en las «barriadas». Son espacios donde se manifiesta la pobreza material con toda su secuela de desnutrición, abandono y prostitución infantil, así como el despliegue sin control de la delincuencia, amparada en el tráfico de drogas.

Este fenómeno se manifiesta de distintas maneras según el nivel de desarrollo del país o de la región de que se trate. El norte de México —sometido a la lógica que impone la cercanía a los Estados Unidos y las bandas de narcotraficantes que sostienen una verdadera guerra entre ellas y contra el Estado— es muy diferente a los sectores urbanos del entorno del Gran Buenos Aires, donde se evidencia con mayor crudeza el incremento de la pobreza de sectores medios argentinos, luego de la crisis de 2001, y la fuerte migración proveniente de países cercanos que tienden a radicarse preferencialmente en la capital argentina.<sup>3</sup>

Los cambios políticos recientes, orientados sobre todo por fuerzas de izquierda y de centro-izquierda que gobiernan la mayoría de los países del área —donde el Estado se ha constituido en un actor socioeconómico

más relevante que el establecido bajo las normas del Consenso de Washington— han tendido, con medidas y ritmos diferentes, a disminuir y/o a paliar la pobreza en sus distintas manifestaciones. Medidas inclusivas como el aumento de las matrículas de educación básica, la política de Hambre Cero, implementada con éxito en Brasil, iniciativas en salud pública llevadas a cabo en Venezuela, o el programa «Chile solidario» de la presidenta Michelle Bachelet en Chile, son indicativas de esa tendencia.

La seguridad ciudadana se ha constituido en uno de los temas más relevantes en toda la región. Aparece por doquier, ya sea levantado con finalidades políticas coyunturales, ya porque organismos de alta credibilidad lo señalan. El problema tiende a establecerse en la agenda pública de manera persistente. La delincuencia, entendida como una de las manifestaciones más expresivas de este fenómeno, medido según su «percepción» ha variado negativamente en toda el área. Según Latinobarómetro

Desde el año 2004 aumenta sin interrupción la percepción de la delincuencia como problema principal de la región, pasando de 9% a 27% en 2010, el punto más alto que ha tenido desde que empezáramos a medir.<sup>4</sup>

Según este mismo Informe, el número de países donde la percepción de la delincuencia se ha constituido en el tema más importante para la opinión pública ascendió de siete en el año 2009, a diez en 2010; paralelamente, se redujo el número de países donde el principal problema es el desempleo. En efecto, mientras en seis de ellos se sostenía, en 2009, que ese era su principal problema, al año siguiente solo tres lo mantenían en la primera línea. En Brasil, la mayor inquietud para la población sigue siendo la salud. En otros tres países, son genéricamente «los problemas económicos».<sup>5</sup>

Asociado con el tema de la delincuencia, en los últimos años un número considerable de países del continente han visto instalado el problema del narcotráfico y de la violencia relacionada con este. A pesar de los convenios internacionales que buscan frenar el tráfico de estupefacientes y de las medidas policiales llevadas a cabo, todo indica que la tendencia al aumento del consumo interno —observado sobre todo en los Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos— seguirá constituyendo un factor asociado íntimamente a la violencia delictiva. El fracaso de ciertas políticas de lucha frontal contra este flagelo ha llevado a importantes personalidades —como César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, entre otros— a plantear la necesidad de legalizar la venta y el consumo de drogas blandas como la marihuana. Sin embargo, tal iniciativa no es compartida ni por organismos internacionales ni por

gobierno regional alguno del continente. Distinta es la situación respecto al cultivo de la hoja de coca. De ella vive un número considerable de campesinos colombianos, peruanos y bolivianos, de los cuales se intenta que modifiquen su cultura agrícola mediante cultivos alternativos. Tal pretensión no ha sido todo lo exitosa que se esperaba entre los actores hacia los que se ha orientado, salvo entre pequeñas comunidades con escasa incidencia en la producción total.

Lucía Dammert agrega otro ingrediente vinculado al tema, al señalar que

todo esto [está] en un contexto marcado por instituciones aún débiles, que muchas veces se ven infiltradas por el poder corruptor de los carteles vinculados con el tráfico de drogas, ante la incapacidad de enfrentar su poderío tecnológico y económico e incluso su capacidad de fuego.<sup>6</sup>

Solo en el año 2008, al inicio de la guerra contra los carteles mexicanos por el presidente Felipe Calderón, se estima que se produjeron alrededor de cinco mil narcoejecuciones, y a la fecha se calcula que ha alcanzado la escalofriante cifra de 35 000.

El desempleo aún constituye un factor de malestar social en los países del área. Su intensidad depende de las políticas que cada país implemente en el ámbito económico-social para enfrentar los vaivenes del mundo financiero internacional. Según los datos de CEPAL, a pesar de que el PIB regional ha aumentado de manera significativa en los últimos años, es evidente que no necesariamente ello ha implicado la disminución del desempleo tanto en el ámbito público como en el privado. Las cifras indican que en los sectores informales este tiende a mantenerse e incluso incrementarse. Solo en el terciario se muestra un mayor dinamismo en la absorción de mano de obra, aun cuando no logra debilitar dos rasgos preocupantes: por un lado, el desempleo es crecientemente femenino y, por otro, tiende a afectar de forma significativa a la porción más joven de la población, incluyendo aquellos que buscan empleo por primera vez.

El desempleo requiere ser analizado con cuidado. Según cifras de CEPAL, mientras tuvo una disminución relevante durante el quinquenio virtuoso (2003-2007) —período de estabilidad económica que no se había observado desde hacía mucho tiempo— no produjo el mismo impacto que en la llamada crisis asiática. En efecto, el desempleo tuvo un incremento promedio de 7,5% en el año 2008 a 8,3% en 2009, luego de la crisis generada a partir de finales de 2007 con la caída del grupo LehmanBrother de fuerte repercusión en toda la economía mundial, en especial la de los países más desarrollados. Para 2010, el promedio de desempleo tendió a bajar, aunque no significativamente. Por otra parte, como todo promedio, este puede ser engañoso si se observa la realidad de cada país.

A propósito del modo como el desempleo incide en el campo laboral, el estudio realizado por CEPAL, en conjunto con Latinobarómetro, titulado *América Latina frente al espejo*<sup>7</sup> abre interesantes perspectivas de análisis. Su metodología permite conocer —con grado mayor de certeza— la percepción, los sentimientos, los miedos o temores que de sus problemas tienen las poblaciones del continente. Para lo anterior, el mencionado estudio cruza variables objetivas de carácter económico social y percepciones subjetivas. En relación con el tema que nos preocupa plantea que las percepciones de la economía varían según el tipo ocupacional de que se trate. Por ello

los altos ejecutivos y los profesionales independientes, así como los ejecutivos de mando medio, suelen manifestar un mayor optimismo económico y muy poco malestar. Esto último significa que son menos sensibles a la inflación y al desempleo. Por otro lado, los agricultores y los pescadores, así como los trabajadores por cuenta propia y los empleados en el sector informal son menos optimistas y expresan un mayor grado de malestar. Es factible que la inflación y el desempleo tengan un mayor impacto en estos estratos, según estos indicadores subjetivos.<sup>8</sup>

Un dato interesante ha sido la evolución del crecimiento económico de la región. Hasta 2008, con 4,9% se completaron cinco años consecutivos de crecimiento positivo. Sin embargo, para todos no fue lo mismo. América del Sur creció a razón de una tasa de 5,5%; Centroamérica, 4,1%; el Caribe, 2,3% y México, 1,3%. Solo en 2009 esta tendencia se revirtió, debido a la crisis económica mundial. Ese año, el PIB de la región ascendió 1,9% y, debido a las medidas contra-cíclicas, en 2010 presentó un incremento cercano a 5,2%. Para el presente año, debido a la incertidumbre económica internacional, CEPAL prevee un crecimiento de alrededor de 4,1%.

Estas cifras colocan a la región en un alto grado de dinamismo económico, solo superado por Asia. Ello explica por qué, a pesar de la crisis financiera mundial que se arrastra por varios años y la incertidumbre que se observa en los mercados globalizados, la región recibió, en 2008, 128 301 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) y superó en 13% la cifra récord observada en 2007. El comportamiento de la IED no fue homogéneo en la región. Mientras en América del Sur esta aumentó en 24%, debido a la inversión en recursos naturales, como petróleo, minería, etc. —cuyos mercados se encuentran bajo una fuerte demanda por parte de China— en la cuenca de México y el Caribe sufrió una disminución de 5%.

Tras todas estas cifras, algunas de ellas alentadoras, (si se las mira con cierta benevolencia y sin voluntad transformadora), no se oculta el hecho de que América Latina y el Caribe sigue siendo la región del mundo más

**La pobreza ha acompañado a esta parte del mundo desde que las naciones se independizaron del imperio español. La diferencia con ese momento y con los ciclos posteriores del capitalismo dependiente radica en que existe un cambio cualitativo en los diversos nudos en los que se manifiesta, y en que aumenta en zonas donde el Estado evidencia su máxima debilidad, a pesar de las medidas implementadas para mitigarla.**

desigual del planeta. Es la que tiene la peor distribución de la riqueza comparada con otras regiones del mundo (según el índice de Gini). En el documento de CEPAL, ya citado, se lee:

Defender hoy el valor de la igualdad es recrearlo a la luz del aprendizaje histórico y de las actuales condiciones de ser en el mundo, vale decir, de vivir la globalización en todos sus ámbitos. El valor de la igualdad junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad.<sup>9</sup>

Los esfuerzos realizados por distintos gobiernos para disminuir las desigualdades han tenido resultados diversos. Condicionados por la crisis financiera mundial —especialmente agudizada por la burbuja inmobiliaria cuyos efectos aún sufre la economía norteamericana—, la grave situación que atraviesan algunas economías europeas como Grecia, Irlanda y España, las contracciones en el gasto social y, en definitiva, por la crisis del modelo de desarrollo aplicado hasta ahora, no resulta fácil esperar logros espectaculares de las políticas implementadas. La diferencia de ingresos entre las personas de mayor calificación y aquellos que no la tienen se expande de manera creciente; la acentuación de la tendencia a la concentración de la riqueza y la escasa movilidad social de algunas formaciones económico-sociales ponen obstáculos que se acentúan cuando se observan débiles voluntades políticas para enfrentarlas.

Las desigualdades no solo se evidencian en términos de los ingresos percibidos por los grupos familiares o en los escasos resultados de las políticas de salarios mínimos que se han puesto en práctica en las últimas décadas en diversos países de la región, sino que abarcan otras dimensiones, que estudios como los mencionados antes han logrado distinguir rigurosamente. Desde luego la desigualdad territorial, la falta de políticas descentralizadoras de los aparatos públicos, la inequitativa distribución de la productividad de los factores, el disímil acceso a las nuevas tecnologías y a la energía agravan aún más el panorama de la desigualdades que afligen, en grados diversos, a todo el continente.

Dentro de las manifestaciones preocupantes que se observan en la sociedad latinoamericana —resabio propio de un neoliberalismo extendido y aceptado por gran parte de los países de América Latina y el Caribe—, está el aumento de mecanismos marcados por el individualismo para combatir los problemas que afectan a vastos sectores de su población. Con escasas excepciones, como Brasil, Argentina y Uruguay, las fórmulas comunitarias de lucha reivindicativa no cuentan con sindicatos fortalecidos en el área del trabajo, organizaciones estudiantiles capaces de romper las inequidades del sistema educativo en todos sus niveles, ni con asociaciones campesinas que puedan enfrentar el deterioro de las relaciones de intercambio de sus productos, sean estos orientados a los mercados internos o a los externos. Con las excepciones anotadas, se trata de sectores que han sido afectados por los cambios en la actividad productiva, las reorientaciones impuestas por «la mano invisible del mercado», una cultura de extremado individualismo, y el deterioro de la educación pública en donde la capacidad asociativa y las movilizaciones sociales empiezan a expresarse por caminos distintos a los conocidos tradicionalmente.

En este dinámico proceso de transformación de las estructuras sociales, la aparición de «nuevas clases medias» constituye uno de los fenómenos sociales más relevantes. No se trata de un cambio estructural en el cual estas asumen un papel conductor y determinante del modo en que se desenvuelve la sociedad política, sino más bien de una creciente influencia en varios hechos que han estado presentes en la vida del continente. Es obvio que, a pesar de las dificultades para cuantificarlas, ellas se han incrementado notoriamente, bajo el influjo del crecimiento económico de la región. Tienden a transformarse en actores políticos decisivos en procesos y hechos diversos, como los ocurridos en Argentina, Ecuador, Venezuela —al principio del gobierno de Chávez— y muy recientemente en el triunfo electoral de Ollanta Humala, en Perú, que habría recibido un fuerte apoyo de las «capas medias de provincia», según los primeros análisis. En Brasil, entre 2004 y 2007, «a consecuencia de la expansión económica y de las



políticas públicas, la clase C pasó de 39,85% a 47,6%», fuertemente inclinada al apoyo político del Partido del Trabajo de Lula.<sup>10</sup>

El papel estabilizador de los sistemas políticos que tuvieron en el pasado, debido a un cierto compromiso histórico con la democracia, quedó en entredicho a propósito de su comportamiento durante las dictaduras militares del cono sur de América Latina. Sin embargo, en el proceso de rencuentro democrático vivido por la mayoría de los países de la región, está claro que ellas, y muy especialmente la llamada «clase media baja» —proveniente de las políticas redistributivas y de la ampliación de las coberturas educacionales— han logrado variar su papel de clase oscilante y dependiente, a una con mayor conciencia de su poder político e influencia.

Por cierto, están lejos de ser homogéneas. Mientras estas nuevas clases medias se encuentran básicamente en los sectores dinámicos de la economía, los sectores medios tradicionales están ligados a las actividades menos favorecidas por el modelo exportador. Es lo observado en países del Caribe, Centroamérica y en especial México, donde el Tratado de Libre Comercio (TLC) ha generado una fuerte contracción de su economía agraria, debido a los subsidios que los Estados Unidos destinan a sus productores agrícolas, en perjuicio directo de los pequeños productores mexicanos que no poseen las ayudas necesarias que les permitan llegar a otros mercados.

Desde el punto de vista político, lo que sigue distinguiendo a las llamadas clases medias de las populares es la inclinación a poseer «proyectos de futuro», que trascienden la mera supervivencia y el consumo inmediato.<sup>11</sup> Sus aspiraciones de ascenso social son un rasgo determinante de sus conductas. Se hallan lejos de los modos de vida de las oligarquías; pero, como en toda sociedad de consumo, tienden a imitar sus patrones y a incorporarse masivamente a un mercado dominado por los sectores de más altos ingresos. El efecto inmediato de este fenómeno es su alto endeudamiento. En países de crecimiento acelerado, como Colombia, Perú, Uruguay o Chile, tal fenómeno adquiere dimensiones preocupantes.

Como señalara al inicio, América Latina y el Caribe viven un contradictorio ciclo de su historia social y económica. El aumento del PIB no oculta ni la pobreza en sus distintas manifestaciones, ni el desempleo estructural que afecta a las grandes masas de trabajadores, ni los desiguales accesos a los derechos sociales. Se trata de un continente en expansión en rubros importantes relacionados con el desarrollo, que aspira legítimamente, dado su potencial en riquezas naturales y el mejoramiento de las capacidades y formación técnico-profesional de amplias capas de

trabajadores —lo que los economistas neoliberales denominan «capital humano»— a asumir tareas y responsabilidades importantes a nivel mundial.

En esa perspectiva, resulta obvio que esta parte del mundo se quiera sentir representada en las más altas instancias de los organismos políticos y financieros internacionales. Esta pretensión justa no es escuchada aún por las grandes potencias, que viven atrincheradas en los efectos de la Segunda guerra mundial y la Guerra fría. El Consejo de Seguridad de la ONU no logrará la efectividad y legitimidad que sus resoluciones requieren mientras no incorpore como miembro permanente a algún país latinoamericano o del Caribe. Brasil, México o Argentina, por nombrar algunos de los mayores, tienen el respaldo necesario para hablar en nombre de este continente, en esa instancia. Para que ocurra, depende de que ese «club» de potencias con derecho al sagrado veto, sobre todo los Estados Unidos, se dispongan seriamente a modificar y actualizar tanto sus funciones y atribuciones como su composición, a fin de que refleje, sin exclusión ni discriminación de ninguna naturaleza, los intereses de toda la humanidad.

Lo mismo se puede decir en relación con los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio del escándalo protagonizado por su expresidente, se tiende, en este último organismo, a imponer la política según la cual este solo puede ser encabezado por un europeo; cuestión absurda en los momentos en que existe un coro universal de críticas al fracasado papel que ambas instituciones han desempeñado a propósito de la crisis del mundo financiero.

Este nuevo ciclo caracterizado, en lo esencial, por la desaparición de las dictaduras militares, la restauración de regímenes democráticos, un cierto consenso en cuanto a la necesidad de gobernabilidad de los sistemas políticos, y una demanda creciente de mayor participación de todos los ciudadanos en los asuntos que les conciernen, constituye, en los hechos, un estadio que exige mirarlo con nuevos prismas y conceptos en los que la política tiene una responsabilidad principal.

Lo anterior tiene sus efectos concretos en la vida política del continente. Desde hace varias décadas, se ha inclinado a la izquierda en casi todos sus rincones. Chile, Panamá, Colombia, y el precario gobierno de México, entre otros, son una excepción en un cuadro donde las derechas, con sus distintos matices, no están en condiciones de resolver las contradicciones del modelo de acumulación. En naciones como Argentina y Chile, esos sectores aún poseen lazos indisolubles con las experiencias dictatoriales de la cual formaron parte. Las izquierdas políticas, con matices y diferencias propias del modo como cada una de ellas se ha constituido en las diversas formaciones económico-sociales, son las

llamadas a encontrar los disímiles caminos que permitan generar condiciones destinadas a superar las dificultades propias de un desarrollo centrado en el Estado mínimo y en el mercado, entendido como único asignador de recursos.

El desafío para estas fuerzas, por tanto, es trascendental. Ellas están llamadas a hacer de este ciclo histórico un momento de superación y transformación. Las condiciones del desarrollo democrático, con todas sus imperfecciones y carencias, es una gran oportunidad que puede frustrarse, como ha ocurrido en otras etapas de la vida política continental. Los militares, permanentes agentes de las fuerzas conservadoras, se encuentran en sus espacios institucionales en la mayoría de los países de América Latina. En otros, como Venezuela, Nicaragua y recientemente en Perú —con la elección de un exoficial del ejército—, se comprometen con experiencias progresistas.

De ahí que sean preocupantes las divisiones y desencuentros existentes entre las fuerzas de izquierdas. México y Chile dan cuenta de este hecho de manera más evidente. Las organizaciones políticas regionales en las que participan desde partidos de la izquierda tradicional hasta aquellos surgidos al calor de procesos sociales y políticos recientes, no logran aún concordar caminos —si no únicos, al menos similares— para enfrentar el deterioro de un modelo de desarrollo que ha hecho crisis, ya de carácter global, a partir de la situación que sufren varias economías europeas y los Estados Unidos, y que, salvo cambios que no se avizoran, tenderá a afectar indefectiblemente a los países del subcontinente. Con independencia de que existan economías que están en mejores condiciones que otras —como Brasil, Uruguay o Colombia— para enfrentar los desajustes del Sistema Monetario Internacional (SMI) o la crisis del mundo financiero, los datos indican que el conjunto de América Latina y el Caribe puede verse seriamente afectado por una situación que sabemos cómo empezó (el caso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos es elocuente), pero no cómo terminará.

Los órganos de integración de América Latina y el Caribe no avanzan con la rapidez necesaria para evitar la fragmentación y hacer frente al preocupante panorama económico mundial. El ALBA y MERCOSUR son iniciativas extraordinariamente prometedoras. Han sido una respuesta contundente a las pretensiones del ALCA. Poseen, en potencia, la capacidad de levantar alternativas viables y sustentables ante aquellos aspectos negativos de la globalización, sin reglas legitimadas por toda la comunidad mundial. Lamentablemente, las contradicciones observadas, en particular en MERCOSUR, la diferencia de desarrollo entre sus países miembros y la tendencia de Brasil de privilegiar el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), son

dificultades que le hacen perder el empuje que le dio vida. El agudo diferendo entre Argentina y Uruguay debido a la decisión de este último de autorizar la construcción de una empresa de celulosa altamente contaminante a orillas del Río de la Plata es una penosa señal de las dificultades de este esfuerzo integrador. Por otra parte, la reciente reunión entre autoridades económicas de Brasil y Argentina, para resolver el tema de los aranceles que afectan a productos industriales, concluyó sin resultado alguno.

Todo indica que la fuerte demanda de establecer modelos de desarrollo que provean estabilidad, empleo seguro y de calidad, y mayor seguridad, requiere de compromisos políticos mayores a los observados hasta ahora. Es condición básica para conferirle de nuevo al esfuerzo integrador un salto cualitativo de gran magnitud. En tal sentido, la decisión de establecer la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como ente político que vele por el desarrollo democrático de los países del área, es un paso positivo.

Por otro lado, los partidos de izquierda y centro-izquierda en el gobierno se ven enfrentados a situaciones inéditas. La lucha por un crecimiento económico que implique equidad, integración, inclusión y mayor participación social, exige un esfuerzo adicional de todas estas fuerzas. En todo caso, según el politólogo chileno Paulo Hidalgo,

la estabilidad macroeconómica y monetaria parece haberse incorporado al sentido común y a las políticas de los gobiernos latinoamericanos, aun en los que más criticaron el neoliberalismo de los 90.<sup>12</sup>

La capacidad de interpretar de modo adecuado las demandas de vastos sectores sociales a los cuales el modelo de desarrollo tiende a marginar, requiere innovar ciertas prácticas políticas que, ante los cambios operados en la sociedad, se perciben como obsoletas. La tendencia, observada en las nuevas generaciones, de privilegiar movimientos sociales u organizaciones nacidas en el seno de la sociedad civil es un reto para el sistema de partidos políticos. La experiencia está indicando que dichas organizaciones tienden a interpretar de mejor manera sus demandas más inmediatas. El uso de medios tecnológicos destinados a construir extensas redes sociales —a partir del uso masivo de Facebook, Twitter, etc.— está logrando una convocatoria ciudadana que los partidos políticos tradicionales no son capaces aún de asimilar.

Instituciones democráticas, como los partidos políticos, el Congreso y el poder judicial, cuentan con un bajo prestigio. Por ejemplo, en 1996, los partidos contaban con 20% de confianza; en 2001, con 19%, y en 2010, con 23%. Por su parte, el Congreso, en los mismos años, computaba 27% de confianza, luego 24%, con un alza relativa, en 2010, de 34%. El poder judicial, por su parte, aparecía, en 1996, con 33% de

confianza, 27% en 2001 y 32% en 2010. Finalmente, cuando se considera la afirmación, «las decisiones del gobierno buscaban privilegiar a algunos pocos», en 2002 78% de latinoamericanos así lo creía, y se modificó esta tendencia a 60%, en 2010.<sup>13</sup>

Tal fenómeno obliga a estas fuerzas políticas a asumir con mayor compromiso los nuevos temas que surgen en sociedades en desarrollo, como las latinoamericanas. Desde luego, la lucha por terminar con el capitalismo depredador del medio ambiente y por enfrentar el cambio climático y sus alarmantes consecuencias son algunos de ellos; asimismo, la de los pueblos aymaras por detener la instalación de faenas mineras en la zona de Puno, Perú; o la de millares de chilenos, sobre todo jóvenes, por impedir la destrucción de la Patagonia chilena por parte de poderosas empresas generadoras de energía; o la de los pueblos aborígenes del Brasil para detener la destrucción de las riquezas forestales de la Amazonia. Todas son expresión de las nuevas demandas, que obligan a cambiar el modo de hacer y entender la política en los inicios del presente siglo.

## Notas

1. Latinobarómetro, *Informe 2010*, Santiago de Chile, 2010, pp. 5-6. Véase también Alicia Bárcena, coord., *La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir*, CEPAL, Brasilia, 2010, pp. 19-20.

2. CEPAL, *Panorama social de América Latina*, CEPAL, 2009, p. 9.
3. Véase Alberto Minujin y Gabriel Kessler, *La nueva pobreza en Argentina*, Planeta, Buenos Aires, 1995.
4. Latinobarómetro, ob. cit., p. 12.
5. *Ibidem*, p. 16.
6. Lucía Dammert, «Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja», *Nueva Sociedad*, n. 222, Santiago de Chile, julio-agosto de 2009, p. 112.
7. CEPAL, *América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región*, CEPAL-Latinobarómetro-AECID, 2010.
8. *Ibidem*, p. 74.
9. Alicia Bárcena, ob. cit., p. 42.
10. Véase María H. Tavares de Almeida y Edson Nunes de Oliveira, «Nuevas capas medias y políticas en Brasil», en Ludolfo Paramio, *Clases media y gobernabilidad en América Latina*, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2010.
11. Ludolfo Paramio, «Economía y política de las clases medias en América Latina», *Nueva Sociedad*, n. 229, Santiago de Chile, septiembre-octubre de 2010, p. 62.
12. Paulo Hidalgo, «América Latina en los inicios del siglo XIX», Universidad Complutense de Madrid, 2011, [inédito].
13. Latinobarómetro, ob. cit.

## Controversia

# ¿Qué dicen los textos escolares?

Georgina Arias  
Guillermo Bernaza  
Enrique Pérez Díaz  
Ricardo Quiza  
Denia García Ronda

**Denia García Ronda** (moderadora): Este panel de Último Jueves desarrollará un tema que considero muy importante, porque se trata justamente de la formación de los futuros hombres y mujeres de nuestro país: los textos escolares. Para ello contamos con una diversidad de profesiones y de intereses en este caso, para que las discusiones sean multilaterales.

La primera pregunta, o la primera serie de preguntas, para ser exacta, sería: ¿Cuáles deben ser los objetivos de un libro de texto? ¿Cómo es o debe ser su relación con el maestro y con el estudiante? ¿Es una guía para la acción o es el elemento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ¿últimamente cada qué tiempo se deben actualizar los libros de texto de las diferentes asignaturas?

Preferimos focalizar estos temas más bien en la enseñanza de las humanidades para no hacer demasiado amplio el espectro, pero si tienen alguna idea sobre otras materias también la pueden desarrollar.

**Guillermo Bernaza:** Voy a tratar de dar mis propias ideas, mis propias visiones sobre este importante medio de enseñanza, que ya tiene su historia, sus siglos, desde Comenius, el primero que denominó de esa manera al libro de texto.

Son pocas las investigaciones teóricas, los resultados empíricos sobre este tema en el mundo. Pudiera ser hasta una contradicción. Conocemos investigadores en Francia, en Polonia, en la ex Unión Soviética, en la ex República Democrática Alemana, y también en nuestro país, pero son muy puntuales. Tal parece que el libro es una creación consistente consigo misma, que no requiere un tratamiento teórico, una

---

\* Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 28 de octubre de 2010.

profundización de su origen, su desarrollo, etc.; esto no excluye, por supuesto, que haya clásicos en esta área, como por ejemplo Zuev, un investigador soviético.

Sobre cuáles deben ser los objetivos de un libro, el primero que puedo visualizar es el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, en todo el sentido de la palabra, o sea, educar, contribuir a que esa persona, desde que comienza en la escuela hasta los niveles superiores, e incluso el posgrado, tenga en sus manos un instrumento para su desarrollo personal, para su crecimiento, para el enriquecimiento de su cultura, de sus puntos de vista, y no lo vea como una amenaza, como en ocasiones ocurre. El libro puede convertirse en ese aliado fundamental del estudiante para poder aprender cada día más y profundizar en lo que estudia, algo que le posibilita tener una mejor comprensión del mundo, y de sí mismo. Por supuesto, esto está muy unido al desarrollo de determinados valores en los estudiantes, muy relacionados, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, la conservación del patrimonio nacional e internacional, el respeto, la honestidad, la independencia, la responsabilidad, y otros, que deben ser formados a través de la lectura, en especial del trabajo diario con el libro de texto.

Una necesidad actual, y podríamos decir que cada vez mayor, es que los niños y los jóvenes aprendan a aprender, sepan, por sí mismos, hacer las búsquedas, profundizar en lo que les interesa de forma independiente, con autonomía y creatividad. El libro debe proporcionarles las herramientas para hacerlo.

Uno de los problemas que detectamos es que los estudiantes llegan a nuestras universidades sin el suficiente conocimiento, o más bien el dominio de las habilidades lógicas del pensamiento. Esto parece increíble, pero se produce con mucha frecuencia; y no es un problema solo de Cuba. Por lo tanto, el libro de texto debe contribuir al desarrollo de esas operaciones lógicas del pensamiento, al desarrollo psíquico del niño, y del joven, no aisladas de los contenidos que tienen que aprender en cada objeto de estudio. Ello tiene un fundamento psicológico, a partir del enfoque histórico y cultural de Lev S. Vygotski, quien hizo grandes aportes al campo de la psicología. El ve en estas funciones lógicas el desarrollo del estudiante a través de la enseñanza. En definitiva, creo que una de las cosas más importantes es considerar el libro como un medio de enseñanza que moviliza y desencadena todas las riquezas afectivo-cognitivas de los estudiantes.

**Ricardo Quiza:** Quiero advertir que yo recién comienzo en la docencia, me he dedicado mayormente a la investigación histórica, o sea, que me referiré sobre todo a los libros de Historia de Cuba realizados en nuestro país.

Diría que los dos grandes objetivos de un libro de texto de historia están, de hecho, trazados de antemano: son básicamente culturales-instructivos y políticos. La gente siempre ha tendido a buscar en el pasado para entender su presente y de algún modo planificar su futuro. Hay una necesidad gnoseológica que está ahí, que se había intentado explicar por otras vías, incluyendo las hagiografías, las historias de santos, pero no es menos cierto que con el arribo de la modernidad estos intentos de reinterpretación del pasado van a seguir el caudal de la objetividad científica y a acudir a la cuestión nacional. Creo que los pilares son esos dos grandes credos de la modernidad: la nación y la ciencia.

Los textos de historia forjan valores, tradiciones, y contribuyen a cuajar las identidades nacionales; en ese sentido es interesante cómo el surgimiento de los libros de texto de historia está muy vinculado con la emergencia y consolidación de los Estados nacionales, por lo que, referente a Cuba, hay un proceso que se ha llamado de invención de tradiciones o de creación de una cubanidad imaginada, parafraseando a Benedict Anderson. Por otro lado, también los libros de historia desempeñan un papel fundamental en la forja de lealtades políticas, que por lo general legitiman el presente económico-político, imperante en un momento determinado.

Quisiera leerles un fragmento de los lineamientos oficiales sobre la enseñanza de la historia, en 1914, cuando se produce una gran renovación de los estudios en Cuba, especialmente los de la escuela primaria: «La enseñanza de la historia en la escuela primaria debe tener como principal objeto que el niño adquiera el conocimiento de la vida de su país en el pasado, y del lugar que ocupa como entidad histórica, a fin de ir vigorizando el alma del pueblo con altos y nobles ejemplos, formando la conciencia nacional y preparando en cada alumno al ciudadano del porvenir, que coopere al sostenimiento de las instituciones, laborando por la felicidad y por la grandeza de la Patria». Me parece que hay una serie de rasgos que comparten todos los libros de texto de historia.

**Denia García Ronda:** ¿Se refiere a los de Cuba?

**Ricardo Quiza:** Sí, aunque generalmente en el mundo también pasa así, sobre todo con los de la primaria, que son de obligatoria consulta aun para los alumnos de colegios privados. Están presentes en casi todos los niveles de enseñanza y ofrecen una versión casi siempre simplificada y muchas veces maniquea del pasado. En ello es posible que esté influyendo una subvaloración del educando, quizás también las necesidades de un rápido aprendizaje y hasta exigencias de corte político. Digo el pasado siguiendo la clásica idea del progreso lineal y ascendente, en la que la historia se remonta a un pasado oscuro y lleno de contradicciones, y termina en *happy end*; eso me recuerda una canción de Vanito y Alejandro Gutiérrez en el CD *Vendiéndolo todo*, que dice: «Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza». Hay un predominio de la historia de los procesos políticos, últimamente sazónada con la impronta del marxismo y los procesos económicos, que promueve una visión demasiado estructuralista de la sociedad, enmarcada en cifras y datos; y salpicada con la épica y la actuación de grandes héroes y de grandes hazañas que supuestamente contribuyen a crear valores positivos, pero, a veces, en demasía.

A pesar de su carácter normativo y de su estilo compacto, creo que el libro de texto es necesario y debe ser una guía, y no una *Biblia* para el educando. Por supuesto, este tiene que acudir a materiales extras, no solo conformarse con los textos básicos. En este sentido, el profesor tiene un papel esencial; usted puede tener los mejores ingredientes del mundo, pero si el cocinero es malo, el plato no sale bien. Muchos padres —sobre todo los que tienen hijos más o menos en las edades de la primaria, la secundaria, el preuniversitario, como me acaba de pasar a mí— hemos tenido que sufrir por la baja calidad de la enseñanza, y convertirnos en profesores en la casa, ayudar a los muchachos con los trabajos docentes. Un buen profesor puede incentivar al educando a utilizar las lecturas adicionales y otros métodos de aprendizaje, e incluso a manejar las nuevas tecnologías, que a veces creo que se subutilizan. El libro de texto no debe ser el único ingrediente fundamental en la enseñanza. Pienso que la actualización de los libros de historia tiene que ver con las dinámicas histórico-sociales de cada país. En el caso de Cuba los libros están viejos, son de los años 90 del siglo xx, referidos a los 80 y a las etapas que le preceden, y ya se sabe cuánto ha cambiado nuestro país en los últimos veinte años. El último libro que acaba de salir es el de nivel preuniversitario, que constituye una versión bastante amplia de la historia nacional. A pesar de las objeciones que se le pueden hacer, es un excelente texto. Pero la mayoría de los libros de texto, incluso los de primaria, son del 89 o del 91, y los de secundaria del 94, si mal no recuerdo.

**Denia García Ronda:** Más o menos los dos panelistas han coincidido en que tan importante es el libro de texto como el que lo usa: el maestro, el estudiante, la familia. Vamos a ver qué piensa Georgina, que trabaja en la esfera de la enseñanza primaria, justamente en estos aspectos.

**Georgina Arias:** Quiero decirles que vengo aquí, más que como especialista de enseñanza primaria, como una persona con muchas expectativas sobre lo que se va a discutir. Voy a empezar por el final: los libros, tanto de primaria y secundaria, como de preuniversitario, están próximos a una nueva revisión y elaboración. Entonces, los criterios que se den en este panel van a ser muy útiles para nosotros, sobre todo para que los tengan en cuenta aquellos que los van a elaborar. Aquí hay personas que también han participado —las profesoras Martha Batista y Emilia Gallego; Denia García Ronda, que escribió para los primeros libros. Yo soy coautora de los libros de Lengua, de Lectura y Español, todos los de lengua materna de la educación primaria, y además he colaborado en los de secundaria, pero en materiales para los maestros.

Estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Para mí, el libro de texto sí es un elemento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje, que integra un sistema de materiales que hay en la escuela, con objetivos que se trazan para toda la educación, no solo la primaria. Pretendemos un fin, que es formar al individuo que va a integrar la sociedad y que tiene que estar desarrollado de manera integral. Todo eso forma parte de un gran ciclo de objetivos que suponen el logro de un graduado que vaya a la educación superior con una serie de habilidades. Sabemos que, por desgracia, no está pasando así, por razones que todo el mundo conoce.

Concuerdo con lo que dijo el profesor Quiza, sobre si tengo todos los ingredientes y no tengo un buen cocinero, no puedo lograr los objetivos que me propongo. Pero ahora hablamos de un ingrediente principal.

Indiscutiblemente, los libros tienen muchas deficiencias; son de finales de los 80 y principios de los 90. En el mundo se actualizan casi cada diez años. Nosotros, por razones obvias, no lo hemos podido hacer, el ministerio no ha podido afrontar de nuevo ese trabajo. Ya se sabe que no puede esperar más, porque han pasado veinte años.

Acabamos de revisar el libro de primer grado, *A leer*, porque las cintas se deterioraron de tantas reimpressiones y hubo que volverlo a hacer; lo actualizamos un poquito, le pusimos parches de mercurocromo, como diría una colega mía; pero ya es necesario un perfeccionamiento general, como se hizo al principio, dirigido por la doctora Vicentina Antuña, que era la presidenta de la Subcomisión de Español.

El libro de texto es una guía para el maestro, pero para el alumno es esencial, y más con la situación actual del profesorado, que no es lo suficientemente idóneo. Entonces el alumno tiene que apoyarse mucho en los libros.

**Denia García Ronda:** Enrique, desde el punto de vista de un escritor de literatura para niños, de un editor, ¿qué piensas de todas estas cosas?, ¿qué relación puede tener la literatura con los contenidos de los libros de texto, sobre todo de humanidades?

**Enrique Pérez Díaz:** En realidad ellos son los especialistas, yo vengo a ser como la oposición; porque, tradicionalmente, el tipo de libro de la editorial donde yo trabajo es el que se opone a los libros de texto. Es el que los niños llevan escondido a la escuela para leer y evadirse de las clases, es el de bellas letras, de pasatiempo, de crucigramas, de muñequitos, y es el que lógicamente los muchachos prefieren; y el libro de texto, como han dicho los especialistas, es el que guía a los profesores.

Cuando se vaya a hacer libros de texto, tiene que haber un consenso sobre a quién está destinado: si es al maestro que va a trabajar con él para introducir al niño en el conocimiento, o al alumno, porque me parece que se produce una dicotomía. El libro de texto tiene un discurso, está más dirigido al profesor, al enseñante, y no al supuesto enseñado. Sería lo primero que habría que ver para perfeccionar los libros de texto, que están absolutamente desactualizados, no solo en la información, sino en el tono y el lenguaje que muchas veces utilizan para dirigirse a sus lectores. Me parece que ese sería un primer distingo.

Desde el punto de vista de una editorial que hace libros que no tienen que ver con el texto escolar de manera directa, que pueden contradecirlo o complementarlo, creo que el libro de texto, y el modo en que se haga llegar a los muchachos, puede ser una vía magnífica para fomentar la lectura, o sencillamente, si el cocinero no es bueno, una vía para que la gente la odie por completo. Creo que los libros de texto deben apoyarse en las lecturas complementarias, y me parece que ahí estaría su riqueza.

Tengo la impresión de que los libros de texto tienen un tono a veces demasiado académico, historicista, y están muy centrados en visiones muy enquistadas de ese discurso mismo que se le quiere transmitir a los muchachos. Habría que crear un libro de texto intermedio entre la gente que lo va a usar y adecuar más el tono. Así potenciaríamos la lectura extra-clase y la lectura en clase, que creo que es lo principal en todas las materias: en Literatura, en Física, en Química, en Matemáticas. Uno de los libros más vendidos en la Feria es *Malditas matemáticas*, del italiano Carlo Frabetti. A los muchachos les llama la atención y, sin embargo, propone ejercicios matemáticos. Hay otro, de un autor soviético, Jakov Perelman, que se llama *Matemáticas divertidas*, que está en el mismo caso, ¿por qué?, porque aplica el conocimiento para que los muchachos lo vean de otra manera, no de esa forma «sacra» que se suele dar en la escuela, a veces como un castigo. De todos modos, estoy de acuerdo en que podemos tener los mejores libros de texto, pero si no tenemos personas que los sepan usar, no hemos hecho nada. Todos los recursos que pueda invertir el país en eso, se quedan en nada.

**Denia García Ronda:** Hemos visto lo que pudiéramos decir que está dentro del aula, del sistema educacional. Vamos a ver ahora ese sistema en relación con el conjunto de la sociedad cubana. En ese caso, ¿en qué sentido creen ustedes que los libros de texto, en especial los del área de humanidades, pero no necesariamente ellos solos, contribuyen a la formación de niños y jóvenes para que participen activamente en la sociedad en que viven y en el mundo contemporáneo, el mundo en que les tocó vivir? ¿Recogen esos libros, tanto en sus textos como en sus ilustraciones, la diversidad social cubana: raza, género, generaciones, etc.?

**Ricardo Quiza:** En los últimos años he visto más este tipo de discurso en *spots* publicitarios de la televisión que en los libros de texto, y me parece bien porque la imagen también debe fundar esta clase de alianzas sociales y de participación activa. Pero el libro de texto se ha creado básicamente para construir legitimidades; por lo menos el de historia presenta una imagen de conflicto resuelto; por tanto, no ayuda a repensar, a disentir, a discutir; no es capaz de formar esos ciudadanos activos que pretendemos. Creo que así ha sido siempre; les voy a leer lo que dice un editorial de 1899 de la escuela cubana: «El porvenir de la Patria se halla en nuestras manos, y la Patria exige que le demos no hombres peligrosos, sino buenos ciudadanos amantes de su país y de su familia»; parece que ser buenos ciudadanos es no disentir. Independientemente de todas las virtudes que puede tener nuestro proceso, y que pueda haber tenido la República, el individuo tiene que desempeñar un papel activo. Siempre hubo críticos de este tipo de relatos impuestos por un sistema educacional poco creativo; el gran pedagogo cubano Arturo Montori decía: «Pero todavía la clásica organización basada en la sumisión, la quietud y el silencio —hablaba en este caso de la enseñanza en cuerda católica—, en la lección escuchada y aprendida, es la establecida oficialmente en las instituciones escolares, y los millones de niños que se educan en todas las escuelas públicas o privadas del mundo se hallan sometidos a esta forma de disciplina autocrática, buena incubadora de súbditos aunque después hayan de llevar el falso rótulo de ciudadanos». Entonces, los manuales escolares están para crear una suerte de mentalidad binaria, de oposición pasado/presente, buenos y malos, los de adentro y los de afuera, tristeza/felicidad, y ese no debe ser el proyecto.



Por otro lado, creo que la inclusión en los textos escolares de Historia de Cuba de la cuestión de género, de raza, aún es deficiente. Por ejemplo, estoy notando en el mencionado libro de preuniversitario, que se trabaja de forma sistemática el tema del desarrollo cultural, científico y educacional; pero el tratamiento de la cuestión de género sigue siendo a través del reconocimiento de las grandes mujeres que participaron en grandes hazañas; y lo mismo sucede con los negros. Los libros de texto empezaron en una cuerda de historia política, se les añadió luego la visión de la historia y de las estructuras económicas, pero les sigue faltando la historia social. Y son historias habanero-centristas básicamente, salvo en los períodos de convulsión política, donde entonces son oriental-centristas.

Este afán de crear sujetos integrados más que apocalípticos, no solo se ve en el texto como tal. Hasta los propios exámenes condicionan este tipo de esquematismo, por ejemplo, en las claves de evaluación. Lo digo por experiencia.

**Guillermo Bernaza:** Voy a hacer una pequeña reflexión sobre los libros de ciencia porque soy profesor de Física. Yo he visto en ellos una intención de que el estudiante se relacione con la sociedad, con los problemas del medio ambiente, que conozca el porqué de cada uno de los fenómenos físicos que lo rodean. Veo una elaboración muy bien pensada desde el punto de vista pedagógico y psicológico del aprendizaje de la Matemática, de la Biología, para lograr esto desde las etapas iniciales.

Ahora bien, estos libros —como han dicho Georgina y Enrique—, por muy buenos que sean, si no tienen un profesor que sepa utilizarlos, no funcionan. Usted puede tener la mejor obra, pero si no hace con ella un trabajo correcto con los estudiantes, pedagógicamente bien fundamentado, no obtiene ningún resultado.

Y voy a decir algo un poco atrevido: considero que, a veces, el libro de texto no hace falta; quizás en la primaria es muy necesario; pero en el nivel superior, no. Soy de la idea de que, atendiendo a las necesidades, a las particularidades de los estudios, a un estudiante universitario, y aun de preuniversitario, le sería más interesante recibir una guía de estudios para acceder —digamos, en el ámbito literario— a las obras de escritores tal como las escribieron los autores, sin ningún tipo de procesamiento pedagógico ni didáctico. A veces se dan fragmentos, comentados después por una persona que puede estar muy preparada en el tema, pero eso no significa que sea ese el pensamiento, la única interpretación. En el nivel superior no debe haber un libro de texto. Por ejemplo, sería muy interesante que un estudiante trabajara con artículos científicos, literarios, obras literarias; podría consultar tesis de maestría o de doctorado, etc. En definitiva, es un sistema que responde a una tarea docente que el estudiante tiene que cumplimentar con una orientación precisa del profesor, bien preparada desde el punto de vista metodológico; y esto, para que el estudiante pueda desarrollarse y desarrollar su independencia.

**Georgina Arias:** Me interesaría intercambiar con ustedes una serie de cuestiones muy importantes para mí como persona y para la institución que represento, que es el Ministerio de Educación.

Por supuesto que la intención fue que los libros de texto contribuyeran a formar niños y jóvenes para que participaran de manera activa en la sociedad, e indiscutiblemente eso no se ha logrado del todo. No se puede tapar el sol con un dedo, no lo hemos logrado en un modo suficiente y efectivo, porque han fallado muchas cuestiones. Pero tampoco soy tan negativa como para decir que no se logró del todo, creo que sí se han logrado muchas cosas, aunque hay todavía deficiencias en ese sentido.

Sobre si recogen los libros, tanto en las ilustraciones como en los textos, la diversidad social cubana, todo lo relacionado con la raza, los géneros, las generaciones, comparto lo que dice Quiza. Recientemente participamos en un proyecto de la

UNEAC sobre ese tema que seguro ustedes conocen, y con la doctora Lidia Turner tuvimos que recopilar información de cómo se recogía la temática racial en los libros de todas las asignaturas y de todos los grados. Llegamos a la conclusión de que era por completo insuficiente. Los libros de Lectura y de Literatura, concretamente de primero a sexto, son como antologías donde hay una representatividad de los escritores que habían publicado hasta la década de los 90; por eso no todas las generaciones están presentes. Tenemos un desarrollo tremendo de la literatura infantil y juvenil en las últimas décadas, y esos autores no están en los libros nuestros porque en aquel momento no tenían obras publicadas. Es un déficit, una dificultad grande en los libros de texto.

En relación con la raza, ya dije que hicimos un conteo de qué autores había, qué temáticas se trataban, y vimos que hay pinceladas; en los de primaria hay anécdotas de Maceo y de Martí relacionadas con la raza; en secundaria se estudia con profundidad la obra de Guillén y se repasa su temática social, negrista; se estudian obras como *Cecilia Valdés*, donde está presente todo ese problema; pero tampoco fue un objetivo que se planteó sistemáticamente en todos los grados; hay algunos donde no se aborda el tema en ningún tipo de material.

Con los géneros ocurre más o menos lo mismo, aunque esto no ha sido estudiado lo suficiente por nosotros. En general, son pocos los trabajos investigativos relacionados con los libros de texto, tenemos poco material recogido sobre la experiencia de los maestros que los han utilizado en la base.

**Denia García Ronda:** Vamos a oír entonces a Enrique sobre este tema, para pasar a la última pregunta y darle la palabra al público.

**Enrique Pérez Díaz:** Tengo que ser breve, no por el tiempo, sino porque el tema casi se ha agotado. Los libros de texto se hacen, en definitiva, para que choquen con un público que uno quiere educar de una manera, enseñar, instruir, y legitiman determinados valores. Si los libros de texto que estamos utilizando son de los 80, estamos transmitiendo los valores que tenía nuestra sociedad en esa década y no los que pudo tener en los 90 o los que tiene en el siglo XXI. Hay países donde se actualizan estos libros todos los años, y están encaminados a fomentar un mercado. Además, en muchos lugares no son estatales, sino de empresas privadas o de la Iglesia, lo que les da otro carácter. Aquí estamos hablando de la experiencia cubana, de un país con determinadas características, pero en otras partes los libros de texto son muchos, están los de Santillana, los de SM, los de Norma, los de EDEVE, todas grandes transnacionales de la edición de libros de texto y de literatura. No ocurren los problemas que tenemos nosotros, pero sí algo peor: se potencia un mercado y todo lo alternativo a él queda fuera de ese gran sistema. En definitiva, legitiman lo que alguien quiere; si nosotros, por insuficiencias de recursos no podemos actualizarlos, ya no estamos legitimando lo que queremos en este momento; es decir, cómo queremos que piensen los niños del siglo XXI. A lo mejor estamos hablando de procesos elementales que ya hoy han dejado de serlo para los muchachos, porque están conectados con las computadoras, con la web; sus padres tienen Internet o les bajan cosas de Internet. Nosotros estamos hablando del libro de texto, y ellos están haciendo la tarea por Wikipedia o por la famosa Encarta. En conclusión, no tenemos, ya lo dijo Georgina, los libros de textos que quisiéramos.

**Georgina Arias:** Algo muy cortico. No comparto el criterio de que están absolutamente desactualizados; porque Mirta Aguirre es Mirta Aguirre y va a serlo siempre, y Guillén igual, o Martí, y eso está en los libros de texto. Acabo de revisar el de quinto grado y eliminamos algunas lecturas porque eran algo extensas, y en la práctica habíamos visto que el muchacho rechaza las lecturas cuando son extensas; pero las temáticas

que se abordan y los autores incluidos no están siempre desactualizados. Habría que incluir cosas nuevas para que se actualicen más, pero no todo.

Lo del acceso a Internet y a otros medios habría que ver. La experiencia en La Habana puede ser así; pero en otros lugares del país es diferente. No todo el mundo tiene acceso a Internet. Creo que hay que volver a hacer los libros, estoy de acuerdo con eso, para que sean más atractivos. Me da un dolor tremendo cuando veo libros de otros países que tienen una presentación, un colorido, unas ilustraciones bellísimas; las nuestras son buenas en su mayoría, porque hemos tenido buenos ilustradores, pero el papel no siempre fue el mejor, ni todos esos aspectos que se deben mejorar para que compitan. A veces me pasa como con los libros cubanos, cuando voy a la Feria, que digo: qué lástima, el público va a buscar esos libros bellos, que tienen el colorido, el brillo, la carátula, y que, a veces, no se pueden ni siquiera comparar con los nuestros, de Unión, de Gente Nueva, en cuanto a contenido. Y eso sucede también con los libros de texto.

**Denia García Ronda:** Es cierto que la actualización sistemática resuelve problemas; pero la diversidad social cubana ha existido siempre y lo mismo podía haber sido reflejada en los libros de los 80, y no se hizo. Son errores que es preciso subsanar con nuevas ediciones; pero no se puede decir que es algo que no pasaba antes y ahora sí. Ahora la realidad es diferente, pero en otro sentido. La diversidad, desde el 59, se pudo haber reflejado en los libros de texto. Evidentemente, hay que resolver eso en las ilustraciones y en los textos.

Antes de continuar, vamos a ver cómo piensa el público sobre la encuesta que le pasamos. En la pregunta: ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje considera que los libros de texto son suficientes, complementarios o innecesarios?, 63,7% de las mujeres y 94,7% de los hombres consideran que son complementarios, o sea, que también estuvieron de acuerdo en que el maestro y el estudiante son importantes y, por lo tanto, el libro de texto complementa, según la mayoría de ustedes, todo ese trabajo.

La segunda pregunta decía: ¿Ha leído los libros de texto vigentes en los niveles de primaria y/o secundaria? 37,5% de las mujeres confiesa que han leído algunos; todos, solamente 6,2%; la mayoría, 25%; y muy pocos, 25%. En cuanto a los hombres, ninguno los ha leído todos; la mayoría, 15,7%; algunos, 57,8%; y muy pocos, 15,7%. Hay que leer los libros de nuestros hijos, hay que actualizarse leyéndolos, porque no solo se trata de las tareas de los niños, es que con los libros de texto se tiene una noción también de lo que es y lo que debe ser la sociedad cubana; nos da ideas de cómo pensar sobre estas cosas, de cómo se están instruyendo nuestros descendientes. Ese es uno de los objetivos de este panel. Consideramos que es algo muy importante, porque se trata del futuro del país.

En cuanto a: ¿Cree que esos libros de texto reflejan la diversidad cultural y social cubana? Nadie piensa que la reflejan mucho; 56,2% de las mujeres y otro tanto de los hombres considera que lo hacen poco; bastante, 18,7% de las mujeres y 10,5% de los hombres; ninguna mujer cree que no la reflejan en absoluto, y entre los hombres, 15,9%; mientras que 25% de las mujeres y 21% de los hombres dicen que no saben.

Ese es el resultado de la pequeña encuesta que pasamos al principio. Y así las cosas, vamos entonces a la tercera pregunta: ¿Cómo deben contribuir los especialistas no docentes, o sea, los científicos, escritores, artistas, historiadores, etc., en la definición de los contenidos y las ilustraciones de los distintos libros de texto?

**Guillermo Bernaza:** En todo este debate nos ha faltado un elemento importante, al cual deberíamos preguntarle siempre y que casi nunca lo hacemos, que es quien recibe el texto: el estudiante. Por lo general, no se le pregunta qué opinión tiene sobre el libro que está estudiando. El futuro libro de texto debe abrir esos espacios

de debate, donde el estudiante exprese cuáles son sus inquietudes y motivaciones. Las tecnologías de la información y las comunicaciones potencian mucho el conocimiento de los estudiantes; estos necesitan respuestas a muchas cosas que encuentran en Internet y que a veces no son científicas; son banales, simplemente. Por lo tanto, a la hora de elaborar un libro deben intervenir muchos: grupos de profesores con mucha experiencia, pero también psicólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, y hacer un equipo de trabajo donde se incluya a los propios estudiantes, o quizás aquellos que de forma más vivaz expresen lo que les preocupa.

Creo que el diseño del libro es muy importante. Soy un fiel asistente a las Ferias del Libro, he tenido en mis manos ejemplares extranjeros de una calidad altísima, buen papel, ilustraciones muy bellas, que invitan a la lectura. Incluso sin tener la intención de abrir el libro, uno lo ve y le llama la atención, y a mis hijos también. Sin embargo, cuando abro el libro y empiezo a leer, he encontrado faltas de ortografía, errores de Matemática y de Física en lo que se está explicando, etc. Nuestros libros pueden tener algunos errores, pero son muy rigurosos con lo que se escribe. Los escritores y toda la intelectualidad cubana tienen que desempeñar un papel más decisivo en lo que se escribe para la juventud; porque ahí tenemos un déficit.

Es verdad que hemos tenido problemas, el país ha afrontado dificultades que afectan la edición; pero es bueno que se piense en escribir un poquito más para los niños y jóvenes, me refiero también al joven universitario, que él disfrute un buen libro en su tarea docente. O sea, se ve como si la literatura fuera por un lado y los libros de la escuela por otro, eso es un craso error. Además del libro de Matemáticas con las cosas que tiene que estudiar, que tenga un libro de consulta relacionado con los aportes que han hecho los matemáticos, y quizás con la historia de algunos de ellos, quitar un poco la nieve a lo que estamos llevando a los muchachos.

**Ricardo Quiza:** Además de los esfuerzos concertados que se pueden hacer desde diversas instituciones, como la UNEAC, el propio Ministerio de Educación o la Unión de Historiadores, hay una producción cultural que está interpelando a la historia constantemente, y que no se tiene en cuenta: desde la obra plástica de José Ángel Toirac, las novelas de Padura o de Reinaldo Montero, las fabulosas canciones de Frank Delgado como «Veterano» o «Quinto centenario», hasta documentales como *En primera persona* y *Guardados en un cristal*. Hay que ver ese otro lado importante del asunto que es la recepción. Nos esforzamos, hacemos libros de texto y hay quien sigue pensando que entre Australia y los Estados Unidos hay un muro fronterizo. Eso no es excepcional de Cuba, quiero decirlo, hay un documental que se llama *Los americanos son tontos*, en que se observa lo mismo, pero nosotros no tenemos por qué caer en eso. Hay una producción cultural importante que está ahí y que está cuestionándose muchas cosas; los historiadores, incluso, están todo el tiempo brindando nuevas informaciones, nuevas interpretaciones del pasado, y a veces no se tienen en cuenta.

**Georgina Arias:** Por supuesto, yo no concibo la elaboración de los libros sin la participación de la UNEAC, de IBBY, de Gente Nueva, y de todos los escritores, así se hizo en etapas anteriores y así está en los créditos de todos los libros. Tenemos cartas de Eliseo Diego guardadas, donde nos daba criterios de todas las lecturas, de los textos que incluíamos. No concibo la elaboración de un libro por un especialista del Ministerio solamente, tienen que participar todos los que tienen que ver con eso, porque la educación no es una tarea exclusiva del Ministerio de Educación, es de todos, así como la formación del hombre nuevo. Afortunadamente, esa primera vez tuvimos el concurso de una Comisión de Literatura, creada al efecto, presidida por Mirta Aguirre, con Onelio Jorge Cardoso, Dora Alonso, y una cantidad de figuras tremendas que escribieron para los niños cosas muy bellas. Y pienso que en esta

nueva etapa vamos a tener también la colaboración de los escritores actuales. Hay que contar también con el alumno, estoy de acuerdo con Guillermo.

**Denia García Ronda:** ¿Eso pasa también con las ilustraciones?

**Georgina Arias:** Bueno, no tanto. Las ilustraciones serían tema de otro jueves. Contamos con los ilustradores de la editorial que nos publica los libros, que los hay buenos; pero hubo una etapa en que quisimos que los artistas plásticos colaboraran con nosotros y no todos tenían tiempo para dedicarse a hacer ilustraciones para los libros, o no quieren hacerlo, porque tienen un concepto discriminatorio de la ilustración. Quizás se pudiera sugerir que se contrataran otros ilustradores, sobre todo para que el estudiante no vea siempre el mismo tipo de imagen. Quiero aclarar una cosa: la ilustración de un libro de textos es un elemento paratextual, apoya al texto. A veces hemos tenido que eliminar lecturas, porque la ilustración no apoyaba para nada el texto. Es complejo, y tampoco quiero profundizar porque no soy una conocedora, pero sí hay algunas anécdotas de cosas que sufrimos con las ilustraciones.

**Enrique Pérez Díaz:** Coincido con los colegas en que el libro de texto mientras más colegiado es más integral, tiene más visiones y se hace algo mejor. En cuanto a las ilustraciones, creo que entre nosotros, sobre todo para esta área más juvenil, hay mucho preconceito. En la editorial sufrimos a diario severas críticas porque existen estilos que se apartan un poco del texto —estoy hablando del texto literario, no del escolar—, y además, hay un imaginario ilustrativo en el pueblo, que prefiere el estilo Disney y el de las editoriales extranjeras, que disponen de imágenes más representativas de las cosas.

Actualmente tengo enfrentamientos con los distintos departamentos, del Instituto del Libro, de la librería, porque me dicen: «Esos libros les dan miedo a los niños, esos libros son horrorosos», y están hechos por grandes artistas. Hay algo de verdad en lo que dice Georgina, existe un matiz que no se puede transgredir: que realmente *ilustre*. Para muchos ilustradores, la ilustración es otro camino del texto; es otra lectura del texto; para otros, más serviles, debe calcar gráficamente lo que está diciendo el texto, pero para algunos no, porque si está dicho todo en el texto, ¿qué sentido tiene la ilustración?, ¿cómo enriquece ese texto? Ahí hay mucha tela por donde cortar, lo que no se deben apartar diametralmente.

**Denia García Ronda:** Le toca al público.

**Rolando Rogés:** No voy a analizar el libro de texto en sí, sino dentro de un proceso educativo. El libro de texto no puede ser hegemónico, puesto que está el estudiante, el profesor, el cuaderno de trabajo y la familia. Debe haber una armonía, porque si el proceso docente-educativo es amplio, como lo es una sociedad, el centro no puede ser el libro de texto; este tiene que confrontarse con el profesor y con la familia. Es preciso explicar al educando que hay una diversidad que puede ser social, religiosa, racial, etc., de forma que no haya una discrepancia, que haya una armonía y no una dicotomía.

Conozco los libros de texto porque tengo hijos que tienen diferencias de veinte años. Conozco los de todas las etapas, incluyendo los libros escolares soviéticos para la historia antigua, donde a veces yo tenía que explicarle más a mi hijo la batalla de Las Guásimas que la de Grunwald.

Debemos ver los justos límites de ese libro de texto. Hay que tener en cuenta hasta las teleclases, que es un complemento, pero a veces funcionan como «divergentes», por decirlo así; y hay que recordar que la realidad es implacable, y hay que aplicarse a la realidad.

**Rosa Álvarez:** En realidad, quiero hablar más de las consecuencias que de los factores que inciden en todo esto. Soy profesora universitaria; imparto clases de Historia de la Filosofía a alumnos de primero y segundo años, y los que hemos dado clases en esos cursos nos encontramos que toda la enseñanza anterior es extremadamente deficiente.

El compañero Bernaza decía que el libro debe proporcionar el pensamiento lógico, racional, el nivel de abstracción del niño; igualmente la imaginación, la autonomía, porque es importante que los individuos tengan autonomía. A veces les digo a mis alumnos: «Ustedes pueden estar en contra de lo que yo les diga; quiero que polemiquen, pero que tengan elementos para decir “estoy en contra por esto y por lo otro”»; por ello me parece que el sistema educativo está, de alguna manera, dirigido a crear personas que repitan *slogans* como loros, y eso no es lo que debe ser. Los mando a leer un pedazo quizás de Platón, y tengo que ser muy cuidadosa, que no sea muy largo, porque a veces no saben ni sacar la idea central y su vocabulario es muy pobre. Digo, como Bernaza y Enrique, que no puede ser que el libro de texto y el profesor sean lo único. Pero, además, ¿qué es la incitación a leer? Incentivar en el niño el sentimiento de búsqueda independiente, autónoma. Podemos hacer libros perfectos, pero no creo que eso solucione el problema.

**Enrique López Oliva:** Voy a hablar a partir de mi experiencia. Yo no estudié pedagogía pero fui veintisiete años profesor de la Universidad de La Habana, de Historia de América Latina y de Historia de las Religiones en América. A mí me preocupan mucho los libros de texto. Soy su enemigo porque me recuerdan un poco los catecismos de la Iglesia católica, los manuales que me dan verdades que tengo que aprenderme de memoria y aceptar.

Comparto el criterio de la compañera que habló anteriormente; hay que enseñar a los muchachos a estudiar y a aprender; por lo tanto, soy partidario de una bibliografía amplia, con criterios contrapuestos. Eso de dar una sola visión de las cosas me parece sumamente negativo y peligroso. Así no desarrollamos verdaderos ciudadanos.

En el campo de la religión, imagínense los problemas con su enseñanza en Cuba. Los libros cubanos, por regla general, dan una visión muy esquemática y poco científica del fenómeno religioso, que es sumamente complejo y que hay que abordar con mayor rigor.

Por ejemplo, ¿por qué estos debates de *Temas*, que tanto pueden ilustrar a profesores y estudiantes, no circulan en el nivel educacional? Mis alumnos, por regla general, leen poco. Cuando formé parte del equipo que hizo las entrevistas de admisión a la Universidad, me di cuenta de que la mayoría de los estudiantes que ingresaban en la Escuela de Historia no leía ni el periódico.

**Martha Batista:** Me voy a basar sobre todo en una doble experiencia, desde dos sentidos, como coautora de algunos libros de Español y Literatura para la enseñanza preuniversitaria, y mi trabajo docente en la educación media superior; hoy trabajo en la Universidad.

Cuando concebimos los libros de preuniversitario quizás fuimos muy soñadores, pero estoy todavía muy orgullosa de aquellos textos. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, podríamos decir que están desactualizados; pero aún puedo trabajar con ellos, igual que trabajo Redacción y Estilo con el libro de Evangelina Ortega, que tiene unos cuantos años. Concebimos ese libro para un profesor creador, permanentemente actualizado. Yo no concibo trabajar con ningún texto sin hacer alusiones constantes a la dinámica de nuestra vida, a la cultura, a las noticias, porque el libro da para eso: tiene secciones como «Interésate en saber», crucigramas, pasatiempos, informaciones, casi sobre todos los aspectos de la vida. Todos los libros son viejos en esta era tan dinámica que vivimos, incluso los acabados de hacer. La dinámica dice que los descubrimientos científicos se hacen viejos de la noche a la mañana. Pero el artífice debe ser el maestro,

que debe estar siempre muy actualizado, tener la habilidad constante de relacionar ese texto con la vida, incluso para discrepar. Es así como concebimos el libro.

Quiero hacer justicia al asunto de los ilustradores. El último texto que hicimos, el de sistematización, para duodécimo grado, tiene tres ilustraciones de grandes artistas cubanos que gratuitamente hicieron obras preciosas para textos de Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Federico García Lorca. Pero esos originales bellísimos nos los echó a perder el Período especial, porque cuando se imprimieron en el papel que había, se corrió la tinta.

**Yoss:** Una famosa cuarteta de Álvaro Yunque, pedagogo y escritor para niños argentino, decía: «Qué enseñanza puede haber/ en esta escuela inhumana,/ si el libro se escribe ayer/ para el hombre de mañana». Los libros no nacen obsoletos, lo son desde el mismo momento en que se decide escribirlos, y hoy cada día más. El libro es un intento de fijar en papel, que es algo que no varía, algo que hoy por hoy con Internet, se actualiza constantemente. Ya no son solo los niños de La Habana los que buscan Wikipedia; muchos de lugares tan increíbles como Palma Soriano o Quemado de Güines, lo hacen. Un niño que tenga una madre o un padre con acceso a Internet tiene la fuente para hacer la tarea. Los maestros saben que se copia de Wikipedia, pero qué van a hacer.

A mí me preocupa que después de veinte años sin tener libros de texto nuevos, cuando al fin se escriban van a seguir apareciendo Mirta Aguirre, Eliseo Diego y Dora Alonso, y no los de Enrique Pérez Díaz, ni los problemas cotidianos; van a seguir siendo textos en los cuales no se aborda la realidad actual. No sé cómo cabrá la iniciativa del trabajo por cuenta propia en un libro para primer grado, cómo cabrá la homosexualidad o la drogadicción en uno de tercero o de cuarto. Son temas reales hoy en día.

Por otro lado, quisiera ver qué comisión pudiera escribir un libro de texto para ser usado por un maestro emergente o por alguien que en realidad es un técnico de video. ¿Cómo es posible que el libro tenga una preparación superior a la del maestro, que el maestro no sepa trabajar con él? Cuando podamos lidiar con ese tipo de situaciones, nuestra educación volverá a ser lo que era hace un tiempo: el orgullo del país.

**Luis Hernández:** Soy profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana; por lo tanto, me voy a centrar en los aspectos que domino, es decir, las Matemáticas y la Física, y a resaltar la importancia que tiene el libro de texto en nuestra educación. ¿Qué tienen de bueno los de Física y de Matemáticas que enseñan previo a la Universidad? Bernaza lo dijo: tienen muy pocos errores; podrán tener algún dislate, pero errores garrafales no tienen. Segundo, tienen un buen nivel; es decir, un estudiante que aprovecha ese libro está preparado; por lo tanto, esos son dos méritos que tienen los libros, me refiero al de Matemáticas y al de Física.

¿Qué les falta para trascender, para convertirse en un Mario González, en un Fiterre, en un Alonso y Acosta, que después de cincuenta años utilizándolos todavía son por donde se preparan los estudiantes? Creo que uno de sus problemas centrales es que, en su mayoría, están hechos por colectivos de autores y no por un autor. Cuando se trata de un colectivo no hay una unidad establecida dentro del libro, y eso se nota. Otra cosa importante que no existe es la reedición. Tenemos un libro hoy y mañana vamos a elaborar uno nuevo porque es muy difícil que el colectivo de autores anterior se vuelva a reunir. Además de otros problemas de tipo político, laboral, etc. Los autores son compañeros muy bien preparados, pedagogos y metodólogos la mayoría de ellos, pero les falta algo esencial: el vínculo con el aula, lo han perdido o no están actualizados, y eso es esencial a la hora de llevar adelante un libro.

Quiero señalar otra cuestión: el problema de la edición; hay que recordar que el libro de Baldor ya lleva setenta años, pero anualmente se va modificando, desde la época del radio hasta la de Internet, y eso es vital.

**Rodrigo Espina:** Hemos hablado del libro, pero hay una relación con los programas, que es donde me parece que se pueden introducir cambios más ágiles que en el libro, y no siempre eso se hace.

Por otro lado, un alumno que se gradúa de preuniversitario —si se leyó los libros de Literatura y no hizo solo una fichita— leyó a Franz Kafka, James Joyce y Marcel Proust, Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez y quizás Nicolás Guillén, pero no lee, por ejemplo, literatura africana ni asiática, no lee una novela como *El bebedor de vino de palma*.

En cuanto al libro de texto como reflejo de la sociedad; creo que no puede cubrir que seamos participativos en nuestra sociedad; hay otros factores.

Y otro elemento: los abuelos y padres ya no conocemos la literatura infantil, tan abundante hoy día; habría que intercambiar más con nuestros hijos y nietos.

**Berta Álvarez:** Quiero solamente hablar del gran problema que tiene la historia en los textos, y no en todos; por ejemplo, el de noveno grado es aceptable; pero el de duodécimo grado es terrible. Los estudiantes colocan a Fidel Castro en 1868 junto con Céspedes, a Agramonte asaltando el cuartel Moncada, y ese es el resultado de ese libro.

La historia de los libros de Historia es muy triste. La Universidad de La Habana hizo el esfuerzo de un trabajo colectivo y solo salieron fascículos que dieron origen, añadidos con otras cosas, al libro *Historia de Cuba* del Instituto de Historia, que es un libro respetable.

Antes de Historia, la otra materia desgraciada fue Filosofía, pero tuvo la ventaja de que lo único que hizo fue traducir y traer libros de Moscú o de la RDA; entonces no tuvo la desdicha que ha tenido la de Historia, de tratar de dar la versión determinista, trascendental, mesiánica, emotiva y patriótica entre comillas. De todas maneras, los libros no son tan malos, depende mucho de lo que uno logra hacer con el libro.

Yo respeto mucho a los pedagogos. De Mirta Aguirre conocimos que cuando se es una buena profesora de Literatura, se desprende de ahí valores, ética, etc., pero primero tengo que ser científica. Este ejemplo se los puse con los libros de Historia del preuniversitario, porque los estudiantes llegan a la Universidad y me dicen: «Profesora, la Historia que usted nos enseña es completamente distinta a la que hemos aprendido hasta ahora», y les empieza a gustar, porque entre otras cosas es problemática, alternativa, diversa; y si no se buscan tendencias, no se logra nada con una explicación solo emotiva.

Lo más importante aquí es que la educación, lo mismo que las fuerzas armadas, es el sostén del poder revolucionario; pero no hay prioridad, como es debido, para ella. En Suiza, el maestro mejor pagado es el de primer grado, y de ahí para adelante, lo demás. Además, a nivel de la tecnología mundial, no podemos quedarnos atrás. Si se priorizara la educación, otro gallo cantaría.

**Daybel Pañellas:** Quizás pudieran cambiarse las preguntas, porque hay algunas asunciones en las respuestas y en las interrogantes, como por ejemplo el propio papel del libro de texto, y me queda ausente el papel de la lectura: en qué medida el libro de texto puede promover, desde etapas tempranas, la lectura activa.

El libro de texto también es un producto comunicativo, y como tal me pregunto qué tipo de ciudadano queremos formar; más allá de si el libro está actualizado o no. ¿Qué tipo de valores queremos promover, como ciudadanos y como personas; qué tipo de enseñanza estamos promoviendo?

No creo que las ilustraciones sean accesorias. En nuestra Facultad (Psicología) se han hecho varias investigaciones con libros de texto de primero y segundo grado, y se ha encontrado que las ilustraciones reproducen los roles de género tradicionales. Por el poder de la imagen en esas etapas del desarrollo, los niños son capaces de



identificar en esos libros que la mujer es la que se queda en casa, la que friega, la que tiene que cocinar, lavar los trastos, etc., y que al hombre le corresponde el papel de triunfador dentro de la sociedad. O sea, que el tema de las ilustraciones no es accesorio en medio de todo esto.

Cuando hablaban de la complementariedad del libro de texto, creo que debe ser con todo el sistema educativo, de manera general; y, además, con el mundo de la tecnología. Entonces, ¿qué papel tiene el libro de texto en la interacción con el maestro, con la familia, y con la tecnología educativa? Por qué no pensar, si se están poniendo televisores y videos en el aula, al libro de texto en conjugación con una multimedia o con otros materiales educativos que puedan enriquecer la formación general del niño; incluso con Internet, que en algún momento espero que no sea un sueño.

Por otra parte, ¿qué papel está desempeñando el libro de texto en relación con el discurso de los otros medios que los niños también consumen?

**Raúl Morón:** Tenemos un vacío editorial, no de ahora, sino de hace años, que está repercutiendo sobre la formación de los muchachos que están ahora en las universidades y en la enseñanza secundaria. Al no tener la capacidad de reponer textos importantes y editar nuevos, que estén a la altura de las necesidades de estos momentos, se va a caer en una gran carencia formativa en esos períodos.

Cintio Vitier en su libro, *Existencia de libertad*, de 1999, llamaba la atención sobre eso y decía que hay una ausencia, un vacío de voces jóvenes en el medio intelectual, una notable fuerza pujante que se estaba desconociendo y que estaba pasando inadvertida en el panorama intelectual cubano. Eso todavía tiene vigencia.

Sobre los libros y la enseñanza, quiero poner un ejemplo de carácter histórico y político: en un noticiero de la televisión, con motivo del aniversario del nacimiento de Carlos Marx entrevistaron, en la escuela Lenin, a unos muchachos y les preguntaron cómo iba su aprendizaje del marxismo. Ninguno dio una buena opinión. Decían que no comprendían el marxismo y que no entendían lo que les decían los profesores.

**Rafael Hernández:** Igual que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los médicos; que la comida no atañe solo a los agricultores, los textos escolares son algo demasiado importante como para pensar que es atributo y responsabilidad solo de un organismo o de un departamento; es algo que nos pertenece a todos. Creo que muchos de los problemas de los textos escolares tienen que ver con nosotros en el siguiente sentido: primero, la cuestión del canon. Responden a más de un canon, igual que la cuentística de los años 90 y de los 2000 responde a otros. En ellos hay cantidad de jineteras, drogadictos, policías abusadores, balseros, porque así se construye el canon. Mi pregunta es: ¿cuál es el canon de nuestros libros de texto? Y no es una pregunta teórica. Me ha llamado siempre la atención que, en ninguna parte del mundo, las imágenes de esos libros se parecen a la manera en que los niños representan y construyen sus propios problemas, sus propias vidas. No estoy diciendo que eso se resuelve quitando las ilustraciones de los artistas y poniendo dibujos infantiles, sino que los artistas deberían considerar, junto con los psicólogos y todas las demás especialidades, cómo los niños, que tienen una capacidad de autorrepresentación, se ven a sí mismos y ven las relaciones sociales, mediadas por la discriminación de género o de raza. Creo que eso nos ayudaría a construir un canon alternativo, desde lo visual, por ejemplo.

Asimismo, no creo que el tema de la diversidad, se resuelva simplemente con la fórmula de «vamos a llenar los libros de texto de negros, de mujeres, de guajiros», porque que haya —lo cual es deseable— más presencia de figuras como Martín Luther King, Jr. o Nelson Mandela en nuestros libros de texto, no hace que los problemas del racismo disminuyan un milímetro. Hay lugares donde los libros de texto tienen a héroes como estos, y son muy racistas; entonces, se trata de en qué medida dichos

libros son capaces de recoger esos problemas; y, por supuesto, los problemas tratados en los libros de texto para niños de ocho años, no pueden ser los mismos que aborda, por ejemplo, Leonardo Padura en sus novelas.

**Denia García Ronda:** Pasamos al panel para que conteste y comente.

**Ricardo Quiza:** Respecto a la enseñanza repetitiva, me llama la atención que de Luz y Caballero para acá hay una eterna polémica, que sigue apareciendo, entre la escolástica y los métodos avanzados de educación. ¿Por qué se mantiene la polémica? Porque el problema se mantiene, en definitiva. Nuestros libros de Historia, efectivamente, no pintan la realidad tal y cual es ahora, incluso el que acaba de salir en 2010, solo llega hasta el Período especial.

Cuando ese libro analiza el trabajo por cuenta propia, en el contexto del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, se dice que una de las medidas acertadas fue eliminarlo. Mientras que cuando aborda la nueva política del Período especial, en el año 94, se dice que, por el contrario, fue una medida acertada estimularlo. Entonces, cuando el alumno recibe esta visión incongruente de nuestra realidad más inmediata, se pregunta: ¿el cuentapropismo es positivo o negativo? Recuérdese que esta problemática socioeconómica se halla ahora mismo sobre el tapete. Por tanto, lo importante no es solo que el libro esté actualizado en el sentido cronológico, sino que haya una crítica racional del problema. ¿Qué ciudadanos estamos formando? Ciudadanos totalmente pasivos, que repiten consignas simplemente.

Creo que la visibilidad de los sujetos es importante, con independencia de la orfandad que tienen estos libros de la historia social, de la vida cotidiana, de las mentalidades, elementos que de algún modo deben estar incorporados porque en definitiva esa es la carne y la sangre de cualquier realidad; la historia de la gente, cómo viven y cómo se comportan día a día.

Cuando me refería a la producción artístico-literaria, lo hacía en términos de que eso tiene que ser metabolizado, rumiado y adaptado de algún modo, porque todas estas personas relacionadas con los procesos educativos viven en la misma realidad que todos, entonces ¿por qué unos se pueden percatar de eso y otros no?

**Georgina Arias:** Quiero agradecer la posibilidad que he tenido de estar y de intercambiar con ustedes. Lamento que no haya habido mucha presencia de profesores de otros niveles no universitarios. Hubiera sido muy interesante. Pero de todas maneras me voy enriquecida con todo lo que he oído hoy, y voy a seguir pensando; y vamos a ver qué se puede hacer.

**Guillermo Bernaza:** Estoy muy satisfecho con las intervenciones, porque todas tienen un mensaje muy bien definido, dado por las vivencias que tienen los profesores que han participado. Tengo el convencimiento de que los libros forman valores también; o sea, no se trata de que se resalten los valores de un personaje histórico, sino de que el estudiante piense, reflexione, sobre qué hizo ese personaje histórico, y esté en constante discusión con el profesor, con los demás estudiantes, basados en los textos; que el estudiante reflexione sobre cuáles son realmente los valores auténticos de nuestra Patria, de nuestra Revolución.

**Enrique Pérez Díaz:** Yo diría —y es una conclusión que he extraído de las palabras del público, tan o más especializado que muchos de los que estamos aquí— que quizás estemos en el momento no solo de actualizar los libros de texto, sino de actualizar nuestra visión sobre los libros de texto y qué deben constituir.

**Denia García Ronda:** Agradezco de nuevo la presencia y las intervenciones de los panelistas y el público, que nos convencen cada vez más de que hay que tener una visión holística, donde el libro de texto y, en definitiva, las enseñanzas primaria y

secundaria, tengan un papel fundamental. Efectivamente, como se dijo, comprender lo complementario del libro de texto dentro de ese sistema generalizado, intercomunicado, que es la educación: un proceso de por vida, pero que tiene sus raíces y quizás la posibilidad del éxito en esos niveles, es decir, en la enseñanza elemental.

***Participantes:***

**Georgina Arias.** Pedagoga. Especialista de la Dirección de Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación (MINED).

**Guillermo Bernaza.** Profesor de Física y Pedagogía. Asesor Técnico Docente de la Dirección de Posgrado del Ministerio de Educación Superior (MES).

**Enrique Pérez Díaz.** Escritor, ensayista, crítico. Director de la editorial Gente Nueva.

**Ricardo Quiza.** Historiador. Profesor de la Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de La Habana.

**Denia García Ronda.** Ensayista y narradora. Subdirectora de la revista *Temas*.

# Saco y Martí. Coincidencias y divergencias

**Ibrahim Hidalgo Paz**

*Historiador. Centro de Estudios Martianos.*

Las escasas menciones a José Antonio Saco en la obra de José Martí es una de las causas de que pocos autores se hayan referido a la relación del pensamiento político de aquel con el del Apóstol. Otro motivo pudiera hallarse en la tendencia, presente en algunos estudiosos del ideario martiano, de solo establecer sus vínculos con personalidades históricas que alcanzaron en su época un reconocimiento similar al del Maestro, por el carácter progresista o revolucionario de sus concepciones. Este proceder conduce a lamentables errores de interpretación, pues en la evolución de las ideas de la generalidad de los seres humanos inciden múltiples tendencias, criterios, opiniones que el individuo asimila o rechaza, total o parcialmente, en correspondencia con su formación política e ideológica. En el caso cubano, son innegables las contribuciones del pensamiento reformista a la cultura política de los habitantes de la Isla, pues sus representantes, en diversas épocas, lograron abrir espacios en la prensa y la tribuna para la crítica y el debate de múltiples temas

—culturales, sociales, económicos— que contribuyeron a la formación del sentimiento nacional ante la actitud de una metrópoli que ni siquiera concedía los cambios sugeridos por quienes pretendían condiciones más favorables bajo el dominio de España.

Debe tenerse en cuenta, por una parte, que la utilización del método electivo le permitió a Martí incorporar a su ideario elementos del conocimiento de diversas procedencias, sin negar sus propios principios éticos y revolucionarios; por el contrario, fortaleciéndolos y confiriéndoles una magnitud y profundidad que hicieron, en muchos sentidos, que generara concepciones de alcance universal. Señaló que «no hay manera de salvarse del riesgo de obedecer ciegamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos».<sup>1</sup> Las fuentes más cercanas de su ideario y actuación se encuentran en los hombres de la Guerra de los diez años, que fueron sus contemporáneos, en la tradición patriótica legada por ellos, con quienes coincidió en la convicción de la posibilidad de fundar una Cuba libre, independiente. Además, como ha sido estudiado por múltiples autores, recibió el legado intelectual del pasado, cuyas figuras cimeras fueron

\* Primera Mención en el Premio *Temas* de Ensayo 2009, en la modalidad de Ciencias sociales.

Félix Varela y José de la Luz y Caballero. Comparto la opinión de quienes sostienen que un pensamiento orgánico como el de Saco también debió incidir de algún modo en su formación.<sup>2</sup>

Sustento la hipótesis de que Martí conoció parte sustancial de la obra saquista. Debemos reparar en que, cuando nació, en 1853, ya el ilustre bayamés, de cincuenta y seis años, había publicado textos tan relevantes como *Memoria sobre la vagancia en Cuba*, en 1831, y su trascendental *Análisis por don José Antonio Saco sobre el Brasil, intitulado, Notices of Brazil in 1828 and 1829, by Rev. R. Walsb, autor of a journey from Constantinople*, que lo habían dado a conocer como un brillante intelectual, estudioso profundo de su país, y un polemista osado, capaz de defender sus criterios con argumentos demoledores, incluso en temas como la trata y la esclavitud, sensibles para los intereses de la oligarquía cubana y española; y se había enfrentado a la tendencia anexionista y aportado profundos razonamientos sobre las consecuencias para la nacionalidad cubana si la Isla fuera absorbida por los Estados Unidos. A esto se suma su crítica a las instituciones coloniales y a los despóticos procedimientos empleados por España en la mayor de las Antillas, con lo que evidenciaba las deficiencias de aquel sistema de dominación.

Cuando Martí tenía solo cinco años de edad, Saco comenzó la edición de su *Colección de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos*. En los momentos en que el adolescente habanero manifestaba por primera vez, en forma escrita, su posición ante los acontecimientos políticos de su patria, en 1869, el anciano bayamés tenía en su haber más de siete lustros de labor divulgativa en libros, folletos y periódicos; al morir, en Barcelona, el 26 de septiembre de 1879, hacía cuatro años que había comenzado a publicar los tomos de la obra monumental que se conocería como *Historia de la esclavitud*.<sup>3</sup>

El joven independentista llegó a España, deportado por segunda ocasión, pocos días después del deceso del prolífico escritor, pero el hecho no aparece consignado en sus anotaciones y textos del período. Tampoco hallamos en sus escritos posteriores comentarios críticos o reseñas de obras de Saco, o artículos que reflejen la trayectoria política de este. Tal escasez de evidencias hace difícil establecer vínculos entre ambos pensadores; no obstante, algunos autores los han advertido, como Raimundo Menocal y Josef Opatrný, tema analizado anteriormente por Paul Estrade.<sup>4</sup> Otros han hecho mención de los vínculos de ambas personalidades al considerar los antecedentes del ideario martiano, como Medardo Vitier, Roberto Agramonte y Fernando Ortiz.<sup>5</sup>

Los vínculos entre ambos se encuentran mediados por múltiples elementos. El revolucionario radical, a

pesar de las escasas alusiones al gran polemista, lo sitúa acertadamente en la época formativa de la conciencia cubana, entre las mentes más lúcidas de las primeras décadas del siglo XIX que elaboraron concepciones autóctonas para la interpretación de la sociedad y la búsqueda de soluciones propias, beneficiosas para los sectores clasistas que representaba, y que podrían conducir a la modernización del país. De este modo, valora el Apóstol la etapa en que Antonio Bachiller y Morales estudiaba en el colegio San Carlos, cuando el padre José Agustín Caballero declaraba «campo propio y cimiento de la ciencia del mundo el estudio de las leyes naturales; cuando salidos de sus manos, fuertes para fundar, descubría Varela, *tundía Saco*, y La Luz, arrebatada» (t. 5, p. 145).<sup>6</sup> Era una época de creadores de un mundo intelectual y disputaban con todas las formas de oscurantismo, intolerancia y fanatismo. La frase «tundía Saco» revela, con la admirable síntesis martiana, uno de los rasgos definitorios del que hasta los últimos días de su vida mantuvo la polémica ardiente como un arma del accionar político.

En la obra del Maestro apreciamos el respeto por quien generó juicios contradictorios, hasta el punto de ser acusado, como expresara el propio Saco, «no ya de *independiente*, sino de *predicador de independencia*, y lo que es más criminal todavía, de *admirador de los Estados Unidos, en cuyos brazos deseo que se arroje la Isla de Cuba*».<sup>7</sup> No hallamos en Martí expresión alguna que induzca a pensar que compartiera tales falsedades; valoró positivamente, desde su concepción independentista, el rechazo al anexionismo del reformista, que «no creía en parches andaluces ni postizos rubios para las cosas del país» (t. 5, p. 282).<sup>8</sup> Tan breve juicio no permite una elaboración compleja de la visión martiana sobre aquel, pero es suficiente para afirmar que el Apóstol conoció los aciertos de su argumentación al rechazar la absorción de Cuba por el vecino poderoso y exponer la imposibilidad de encontrar soluciones a los problemas cubanos mientras España no aceptara profundas reformas.

Martí admiró la dignidad intelectual de quien optó por vivir modestamente, hasta el límite de la pobreza, antes que hacer concesiones, incluso a quienes sufragaban económicamente sus necesidades. Ofreció indicios del conocimiento de la obra saquista en un breve párrafo en que invitaba a brindar ayuda a la hija de aquel hombre honesto, María Ana Cristina Saco y Frías, urgida del apoyo material de sus coterráneos:

Con el corazón amargo y su casquete de terciopelo, murió, como único caudal, el autor de la *Historia de la Esclavitud*, y de los *Papeles sobre Cuba*. Para su hija es un buen concierto, en el salón elegante de Brunswick, el día 22. Ir a él será prueba de gratitud y patriotismo.<sup>9</sup>

Tengamos en cuenta que esta nota fue escrita en septiembre de 1894, cuando los preparativos de la guerra emancipadora casi tocaban a su fin. El Apóstol era consecuente con uno de sus principios cardinales: «Honra y respeto merece el cubano que crea sinceramente que de España puede venir un remedio durable y esencial» (t. 4, p. 240).

Un pensador como Martí, estudioso infatigable de todo cuanto contribuyera a la formación del sentimiento y las convicciones de sus compatriotas, conoció lo esencial de los escritos saquistas, en particular los mencionados, pues lo más importante de la obra del bayamés ya estaba publicado cuando el joven revolucionario realizaba estudios en La Habana y en Madrid, y continuó editándose aun después de su muerte.<sup>10</sup> Esta afirmación no se sustenta en las referencias directas a la obra de Saco, sino en el modo de abordar algunos de los temas tratados por el Maestro, en cuyos textos afloran argumentos donde se percibe la huella de aquel, aspectos de la lógica expositiva en las que se hallan semejanzas, en el modo de estudiar asuntos en los que habían variado las circunstancias, pero no la validez de la forma de plantearse el enfrentamiento y el despliegue de los recursos de la polémica, para los que pudo hallar ejemplos sobrados en el bayamés.

Sería un error metodológico e ideológico considerar que Martí, fundador de una organización político-militar para preparar la guerra independentista, asumió como propios los criterios de Saco, sus fundamentos y objetivos políticos, pero no lo es apreciar, por una parte, coincidencias entre algunos de los temas tratados por él en su extensa obra y asuntos elaborados por el reformista, como en el caso del anexionismo y el expansionismo estadounidense; y, por otra, percibir el tratamiento explícito o implícito de determinadas ideas que si bien eran expuestas por diversos políticos o estudiosos del momento, en nuestro país fueron enfocadas de modo amplio y profundo por el agudo polemista, como los que fundamentaban la nacionalidad y rechazaban la esclavitud.

En las páginas siguientes intentaré analizar estas coincidencias y rechazos temáticos y argumentales por parte de quien buscaba afanosamente, y con plena conciencia crítica, en las áreas más diversas del saber, con su mente abierta, sin absurdas limitaciones, lo que le permitió incursionar en los textos de Saco. Este, aunque defendió la continuación de la dependencia del régimen colonial español y de una élite económica y social de la que esperaba el apoyo a sus solicitudes de reformas, reveló como pocos en su tiempo las deficiencias del sistema de gobierno imperante. Con sus críticas a las instituciones coloniales y su denuncia de las arbitrariedades del despotismo y de los abusos sistemáticos de la metrópoli contribuyó, a pesar suyo,

a crear condiciones subjetivas que favorecieron el desarrollo de las ideas revolucionarias.<sup>11</sup>

Constituye una tarea sumamente compleja establecer una relación cronológica de este proceso. Solo podemos observar los vínculos entre Saco y Martí en sentido general, valorando de conjunto la obra de ambos, los que, además, fueron consecuentes con sus ideas esenciales desde sus etapas iniciales hasta el final de sus vidas. En ambos está ausente la pretensión de elaborar sistemas filosóficos; pero sus criterios se exponen con sistematicidad y, como pensadores políticos de vasta cultura, pueden rastrearse en sus criterios las influencias de autores clásicos y contemporáneos, con mayor incidencia en el revolucionario independentista, quien, sobre todo en sus cuadernos de apuntes y fragmentos, manifestó sus meditaciones sobre el sentido de la vida y el lugar del hombre en el universo; no obstante, predominó en todo momento, sobre la reflexión pasiva, la actuación congruente con los principios sustentados.<sup>12</sup> Estas características determinan la consideración de los *corpus* de textos saquista y martiano como totalidades, de modo que la aplicación del método comparativo omite, para este trabajo, la evolución que distingue a todo pensador. Advierto, además, que no pretendo realizar el estudio paralelo del ideario de ambos pensadores, sino solamente de aquellos aspectos que posibiliten demostrar la relación señalada en los párrafos precedentes.<sup>13</sup>

## El anexionismo

Es este el tema en que se hace más evidente la relación de los razonamientos del Maestro con los de Saco; y es, al propio tiempo, el que muestra más diáfananamente los objetivos diferentes y la superación de las limitaciones del reformista por el revolucionario. Ambos expresaron su admiración por las instituciones democráticas y por el avance tecnológico y económico de los Estados Unidos, pero sin el deslumbramiento acrítico propio de quienes apreciaban superficialmente la realidad circundante. Saco afirmaba que «esta admiración no es fanática ni sin límites, y entre las eminentes cualidades que distinguen al pueblo norteamericano, no dejo de percibir los defectos de que en mi concepto adolece» (t. 3, p. 233). Y concluyó: «Por brillante y seductora que sea la perspectiva de los Estados Unidos, debo confesar con toda la franqueza de mi carácter que no soy de los alucinados ni seducidos» (t. 3, p. 234).

De modo similar apreció Martí aquel país. A su llegada, en 1880, dominaba una amplia información sobre él; se había formado sólidos criterios acerca de sus características, observadas desde México, donde había radicado durante casi dos años, y en cuya prensa

combatió los intentos expansionistas del prepotente vecino,<sup>14</sup> al cual calificó con los rasgos del antiguo imperio romano: «México crece. Ha de crecer pa[ra] la defensa, cuando sus vecinos crecen pa[ra] la codicia [...] ¿Qué va a ser América: Roma o Espartaco? ¿Qué importa que el César no sea uno, si la nación como tal una, es cesárea?» (t. 19, pp. 21-2).<sup>15</sup> Los antecedentes de tal apreciación se encuentran en uno de sus apuntes escritos en España en 1871: «Y si hay esta diferencia de organización, de vida, de ser [...] ¿cómo queréis que nosotros nos legislemos por las leyes con que ellos se legislan?» (t. 21, pp. 15-6).<sup>16</sup>

Repercutía en estas anotaciones la indignación de los cubanos de las emigraciones, quienes se manifestaban contra la actitud de la supuesta democracia nortea, que había vendido barcos artillados y armamento a la Corona ibérica mientras invocaba la «ley de neutralidad» para impedir a los cubanos efectuar compras similares.<sup>17</sup>

Los primeros artículos martianos publicados en el periódico neoyorquino *The Hour*, bajo el título «Impresiones de América (por un español muy fresco)», revelan la intención del autor, al expresar que se hallaba en un país «donde cada uno parece ser su propio dueño» (t. 19, p. 106).<sup>17</sup> Mostró que tras las apariencias la realidad era otra, ignorada por los observadores ligeros. En el último de los artículos caló con profundidad las falsedades que se divulgaban en la prensa y preguntó: «¿[¿] tienen los Estados Unidos los elementos que se supone que poseen?» (t. 19, p. 117). Esta suposición incluía la distorsionada creencia de que aquel país era «hogar seguro» de «la verdad, la libertad y la dignidad» (t. 19, p. 124).

Aquella era la nación a la que los anexionistas pretendían que se uniera la patria cubana. El Maestro volcó sus preocupaciones más íntimas en apuntes personales que continuaban el análisis histórico-político iniciado desde su estancia en España: consideró que quienes «a la par que se oponen a la Revolución, admiran este pueblo» (t. 21, p. 165),<sup>18</sup> si desean imitarlo deben comenzar por hacer lo que los estadounidenses para lograr su prosperidad, independizarse.

Saco, que estimaba en todo su valor las peculiaridades de los cubanos, consideró que «[p]oseídos estos [los ciudadanos estadounidenses] del orgullo más exagerado, créense superiores a todas las naciones» (t. III, p. 382). Martí, en su labor desmitificadora, apeló a sus conocimientos de la realidad que apreciaba directamente, así como a los orígenes del pueblo que algunos consideraban superior, basados en falaces hipótesis pseudocientíficas. En uno de sus fragmentos, expuso: «¿Superiores los sajones, y tardaron 6 000 años desde su venida de la India sin adquirir civilización propia?» (t. 22, p. 98).<sup>19</sup>

La nación que conoció el bayamés durante sus visitas en 1824 y 1828 se caracterizaba por el predominio del sistema esclavista y una política expansionista solo refrenada por las circunstancias internacionales, pero siempre amenazante, en respuesta a los requerimientos de un capitalismo aún sin pleno desarrollo industrial, aspirante a la apropiación de territorios donde ampliar mercados para sus mercancías. Su larga existencia le permitió apreciar cambios notables en la parte norte del continente, pero sin que la vida le alcanzara para conocer el desarrollo del sistema luego de la abolición oficial de la esclavitud como consecuencia de la Guerra de secesión, el ascenso del incipiente capital financiero y las primeras manifestaciones del imperialismo moderno, características reflejadas en la obra martiana.

En épocas diferentes, coincidían en el cuestionamiento de quienes afirmaban que aquel país era un ejemplo que debía imitarse, por la perfección de su vida política. Saco observó que aquella era una «democracia desenfrenada», y que el gobierno de los Estados Unidos «frecuentemente se deja intimidar o arrastrar por el grito de la democracia. Esta se va desmoralizando cada día, a lo menos en ciertos Estados; las leyes ya no infunden aquel respeto que en tiempos anteriores». Luego enjuiciaba el deterioro moral de los políticos: «la ambición de alcanzar el poder, o de mantenerse en él, obliga aun a los ciudadanos más distinguidos a cortejar los votos de la multitud, pues esta es la que concede los empleos y los favores» (t. III, p. 381).

En la segunda mitad del siglo XIX, como expuso Martí, el fenómeno se había recrudecido: «En verdad, no presentaba esta tierra a los observadores de su máquina política menos deplorable espectáculo que el de los más viejos y corruptos países» (t. 9, p. 100). Su estudio cotidiano del accionar de los políticos de oficio y de los partidos lo llevaron a afirmar que «en vez de robustecerse la democracia y salvarse del odio y miseria de las monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen, amenazantes, el odio y la miseria» (t. 28, p. 292).

Conocedor de las aviesas intenciones del país vecino con respecto a nuestra patria, Saco alertó a los cubanos sobre las declaraciones oficiales de los gobernantes del Norte, cargadas de falsedades:

Yo quisiera infundir mis ideas a todos mis compatriotas; quisiera que desconfiasen de todas las promesas, aunque saliesen de la boca del mismo Presidente [de los Estados Unidos] y quisiera que ninguno se prestase incautamente [sic], a pesar de la mejor intención, a ser juguete de planes e intrigas, que si se frustran, solo perjudicarían a Cuba y a sus hijos; y si se realizan aprovecharán a los que nada pierden, ni arriesgan (t. III, p. 276).<sup>20</sup>

A uno de sus amigos que lo inducía a abrazar la causa antinacional le preguntó: «¿Conviene a Cuba

reunirse a los Estados Unidos?» (t. V, p. 253). Es notable la semejanza formal de una interrogante martiana: «¿Conviene a Hispanoamérica la unión política y económica con los Estados Unidos?» (t. 6, p. 160).

## El expansionismo

Las valoraciones saquistas sobre el carácter de la nacionalidad norteaña y de los propósitos del gobierno estadounidense no dejan lugar a dudas sobre su conocimiento de la trayectoria histórica y los peligros que representaba el expansionismo yanqui para la América hispana, y para Cuba en particular:

En años anteriores, todas las esperanzas de muchos hijos de la república americana se cifraban en adquirir el hemisferio en que habitaban desde el Polo Norte hasta el istmo de Panamá; pero no contentos ya con tan vasto territorio, hoy proclaman en sus periódicos y juntas públicas que conquistarán todo el Nuevo Mundo. Un país donde se propagan ideas tan peligrosas, es una amenaza inmediata a todos los pueblos vecinos. (t. III, p. 381)

Más de tres décadas después, según denunció el Apóstol, continuaba presente aquella amenaza, incrementada y con nuevas motivaciones:

De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia coronación a regir, por moralidad geográfica, en el continente, y anuncia, por boca de sus estadistas, en la prensa y en el púlpito, en el banquete y en el congreso, mientras pone la mano sobre una isla y trata de comprar otra, que todo el norte de América ha de ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial del istmo abajo. (t. 6, p. 56)

Había comprendido que la tendencia predominante entre los políticos norteaños era transformar el país en «un poder continental», para lo que se argumentaba la necesidad de un gobierno fuerte y de grandes fondos «para vaciarse en la hora precisa sobre el continente» (t. 9, p. 342). Reveló la pugna entre quienes representaban la tendencia a atender preferentemente los asuntos domésticos y los que «hacían gala de ultraaguilismo, y de extender por sobre gran parte de la tierra las alas del águila», conocidos como «los imperialistas, los “mejores”» (t. 9, p. 345). Y llamó a enfrentar al imperio, para bien de su América y de Cuba.

A mediados del siglo XIX, el ilustre bayamés analizó los procedimientos empleados por aquella voraz nación para ampliar su territorio con la compra de la Louisiana a Francia y de las Floridas a España, y enjuició severamente cómo «de Tejas se apoderaron de un modo infame [...] por una de las guerras más inicuas le despojaron [a México] de gran parte de su territorio» (t. III, p. 381). Relató los métodos usados por el poderoso país contra su débil vecino, que poseía «una dilatada e indefensa frontera que no podía contener el

torrente de aventureros que pérfidamente se preparaban a precipitarse sobre ella» (t. III, p. 189). Y concluyó que «la injusta guerra que la confederación americana declaró a Méjico en aquel año [1846, tuvo un] triste desenlace [...] pues que perdió una porción considerable de su territorio» (t. III, p. 265).

En los años 80, Martí tuvo a su disposición un caudal de información que le permitió valorar de manera exhaustiva las causas del fenómeno descrito, provocado por los esclavistas del sur, responsables de la anexión de Texas como un Estado más en el que implantarían la despiadada explotación de la mano de obra negra. «Los colonos americanos inundaron a Texas y se alzaron con él», escribió. Electo presidente James K. Polk, defensor del expansionismo, entraron al territorio mexicano «so pretexto de defender a sus conciudadanos de Texas» (t. 13, p. 386). La guerra, sangrienta, culminó con la pérdida de aquella enorme extensión del país, que «un día fue invadida por ellos y quedó entre sus garras» (t. 7, p. 46).

Los propósitos yanquis no eran menos amenazantes para Cuba, consideró Saco en su época, y calificó de «muy inocente» a quien «se figura que un pueblo como el norteamericano está animado del sentimiento quijotesco». Todo lo que los Estados Unidos hicieran con respecto a nuestra patria «no será por simpatías de libertad ni por afecto a los cubanos, sino solo por su propio engrandecimiento» (t. III, p. 315). En momentos históricos diferentes, Martí enjuició de modo similar a la nación que poco había variado en sus características: «No fue nunca la de Norteamérica, ni aun en los descuidos generosos de la juventud, aquella libertad humana y comunicativa que echa a los pueblos, por sobre montes de nieve, a redimir un pueblo hermano, o los induce a morir en haces, sonriendo bajo la cuchilla, hasta que la especie se pueda guiar por los caminos de la redención con la luz de la hecatombe» (t. 6, p. 47).

Según Saco, tampoco era cualidad del Norte la lucha por la libertad humana, pues allí «gimen bajo el yugo de la esclavitud personal más de dos millones y medio de criaturas humanas; y si tanto le *desagrada* la opresión política de los cubanos, empiece antes por purgar su propia tierra, y no por apoderarse de la mía». Recordó a sus lectores que los norteamericanos apoyaron a su gobierno en la frustración de «la proyectada invasión de Cuba por las armas combinadas de Méjico y Colombia, que querían libartarla de España», en 1826, tema abordado en el Congreso Anfictiónico. Entonces «no consultaron sino su interés» (t. III, p. 315). El Apóstol, muchos años después, señaló, con similar esclarecimiento, la actitud del gobierno estadounidense ante los intentos latinoamericanos de contribuir a la libertad cubana: «cuando el sud, libre por sí, lo convidó a la mesa de la amistad [...] exigió que los ejércitos



**Sería un error considerar que Martí asumió como propios los criterios de Saco; pero no lo es apreciar coincidencias entre algunos de los temas tratados por él en su extensa obra y asuntos elaborados por el reformista, como en el caso del anexionismo y el expansionismo estadounidense.**

del Sur abandonasen su proyecto de ir a redimir las islas americanas del golfo, de la servidumbre de una monarquía europea» (t. 6, p. 47).

Saco afirmó que ningún cubano debía creer que hubiera, por parte de los Estados Unidos, intención alguna de contribuir a la abolición de la esclavitud, sino que

es una vergüenza, sí, que en la patria de Washington y Franklin, en la tierra clásicamente llamada de libertad, al cabo de 75 años de independencia la esclavitud personal, antes de haber cesado o disminuido, se haya propagado a regiones donde no existía, y que hoy mismo se está trabajando para introducirla en el Nuevo Méjico y la California.

Advirtió que la estabilidad de Cuba en el futuro «debe consistir en irse deshaciendo poco a poco de la esclavitud, y no injertarse en un tronco enfermo como el suyo» (t. III, p. 328). Y juzgó severamente a quienes se mostraran partidarios de unirse a un país como aquel, pues tendrían «la gloria de trabajar por convertir a Cuba en una sentina donde los Estados Unidos vayan a depositar las inmundicias de su esclavitud, y a purificarse de ellas por medio de la anexión» (t. III, p. 313). De forma similar a la previsión saquista, Martí mencionó aquella intención, con la que se tentó a Lincoln, que «pudo oír sin ira que un demagogo le aconsejara comprar [la Isla], para vertedero de los negros armados que le ayudaron a asegurar la unión» (t. 6, p. 48). Esta idea aparece expuesta de modo más descarnado en unas notas no publicadas, donde expresa que dicho presidente creyó que nuestro territorio era «propio solo para echar como en un vertedero, toda la hez de la guerra de la esclavitud» (t. 4, pp. 341-2).

### **Anexionistas. Expansionistas**

No obstante sus severas críticas, Saco no enjuiciaba a todos los partidarios del anexionismo de modo similar, pues eran seguidores de una corriente heterogénea: «Compónese de elementos contrarios, pues los individuos que lo constituyen, unos desean la anexión, solo por el sentimiento generoso de gozar de la libertad de los Estados Unidos»; mientras a otros los motiva «el interés de tener esclavos, pues juzgan que

así podrán comprar cuantos necesiten, y conservarlos indefinidamente». Un tercer grupo participaba «simultáneamente de este deseo y del primero» (t. III, p. 291).<sup>21</sup>

Los matices de la tendencia anexionista eran del dominio de quienes se preocupaban por los destinos de la Isla, y en varias ocasiones Martí se refirió al tema. Sus razonamientos revelan un profundo conocimiento de la evolución histórica de esta corriente antinacional: «En Cuba la idea de anexión, —que nació para acelerar el goce de la libertad, ha mudado intento y motivo, y no es más que [...] el deseo de evitar la Revolución» (t. 21, p. 166). En sus orígenes fue alentada por una minoría, por lo general no vinculada al tráfico ni posesión de esclavos, inspirada en el loable deseo de evitar una guerra devastadora para libertar a la Isla del dominio hispano mediante la unión al país vecino; pero sus manifestaciones más generalizadas tendían a evitar las transformaciones profundas que requería la sociedad en su conjunto, cuyo primer paso se hallaba, como condición esencial, en el logro de la independencia.

Convencido de la necesidad de la unión de las grandes mayorías del pueblo en el enfrentamiento al colonialismo y en el previsible choque con la tendencia expansionista de los Estados Unidos, el Maestro situó en su justo lugar a quienes buscaban de modo sincero, aunque erróneo, la solución del problema cubano en las promesas de la poderosa nación nortea. Es por ello que en varios de sus escritos, a la vez que condenó a «los cubanos arrogantes o débiles o desconocedores de la energía de su patria», a la «clase oligárquica e inútil» (t. 4, p. 156), calificó a otros de «anexionistas sinceros» y expresó que estos debían ser tratados «con el respeto que toda opinión franca merece, porque la sustenta de buena fe más de un cubano sincero» (t. 2, p. 49) que desconfía de la aptitud de nuestro pueblo para alcanzar su propia redención y darse un gobierno firme y democrático que preservara a la nación de la inestabilidad y la encauzara hacia el desarrollo económico y social.

Eran múltiples las causas por las que en algunos cubanos honestos había arraigado aquella errónea forma de concebir la solución de los problemas que afrontaba el país; Martí enumeró algunas de ellas:

De confianza y gratitud excesivas fue el error principal [...] por el Washington de la leyenda [...] por el amor de

aquel Lincoln de quien llevamos luto los cubanos [...] por el cansancio de la incuria y tiranía de España [...] por la ciega pasión de las libertades yanquis, forma natural de toda alma ordenada del aborrecimiento a la opresión y desidia españolas (t. 3, p. 48).

Y por el temor de que, como consecuencia «de la ineptitud radical en que a su juicio nos deja la colonia [...] no sabremos [...] gobernarnos como nación» (t. 2, p. 49), confundidos, o atrapados por ilusiones, una pequeña parte de los cubanos llegó a poner la suerte de su país en manos de elementos foráneos. El Apóstol confiaba en atraer a estos a las filas independentistas, en una muestra más de confianza en la certeza de sus concepciones y en el poder de persuasión sobre quienes no compartían sus criterios.

Definidas las posiciones y esclarecidos los objetivos, Martí reiteró en múltiples ocasiones que solo mediante la revolución independentista podría alcanzarse la verdadera libertad de nuestra patria: «¿Por qué quieren anexarse? Por lo grande de esta tierra. Y ¿por qué es esta tierra grande, sino por la revolución?». Reprodujo en un apunte el razonamiento de un antagonista, imaginario o real, que pretendía disfrutar con la anexión «de los beneficios de la Revolución sin exponernos a sus peligros»; lo refutó, calificando de irracional tal argumento y señaló a continuación que si los políticos estadounidenses hicieran alguna concesión «será porque les viene beneficio», pues: «Nadie compra para beneficio de otros» (t. 21, p. 166) Ya había expresado que «es ley en política [...] que nadie goce de un beneficio cuyo precio no ha pagado» (t. 21, p. 165). La libertad de un pueblo no podía ser una dádiva, sino una conquista, como sentenció en su primer discurso dirigido a los compatriotas emigrados en Nueva York: «La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio».<sup>22</sup>

En las altas esferas del país norteamericano no eran coincidentes las opiniones sobre la forma de apoderarse de Cuba. Saco explicó que «lejos de haber en los Estados Unidos la *unanimidad* que supone el *Amigo*, hay *tres* partidos sobre la adquisición de Cuba: uno que la desea por la guerra, otro por la compra, y otro que no la quiere» (t. III, p. 315). La adquisición de la Isla mediante una transacción de carácter puramente comercial era promovida por la administración yanqui, pero se enfrentaba a la resistencia de España, que contaba con el respaldo de Inglaterra y Francia, opuestas al dominio de aquel país sobre la mayor de las Antillas porque:

Los grandes intereses políticos y mercantiles q[ue] tienen en América, se venían muy comprometidos, si Cuba cayese en poder de los Estados Unidos; y como el gob[er]no de esta, lejos de hacer causa común con los invasores, los repudia y denuncia al mundo como criminales, Inglat[erra] y Francia pueden operar librem[ente], pues q[ue] ningún[un]o compromiso los liga con el gob[er]no de la Confederac[ión] (t. V, p. 81).

Dada la imposibilidad de enfrentar el poderío inglés y francés, algunos sectores del norte pretendían provocar un enfrentamiento bélico de los sectores más osados dentro de la Isla contra el dominio ibérico. Fomentarían la guerra con miras propias, advertía Saco, pues una vez que estallara se mezclarían en ella «a fuer de auxiliares», para lograr sus propios fines, porque

saben que esos trastornos debilitan la dominación española en Cuba; porque aspiran en medio de las revueltas a la posesión de la Antilla que tanto codician; y porque aun cuando no lo alcanzasen, con tal que Cuba lograra su independencia, ellos siempre ganarían, pues alejarían de América a una de las potencias europeas, que tiene colonias en ella. (t. III, p. 452)

Una invasión estadounidense equivaldría a «la destrucción de Cuba... *para los cubanos*» (t. III, pp. 276-7), señaló, pues las riquezas del país pasarían de sus poseedores a manos de los supuestos benefactores que, luego de promover las perturbaciones que conducirían a una contienda de resultados imprevisibles para quienes vivían en territorio cubano, «brindarían» su apoyo al bando que mejor les conviniera y siempre saldrían gananciosos, como aves de rapiña.

De nuevo se planteó esta amenaza, siempre latente, en los momentos en que la naciente potencia imperialista diseñaba la puesta en práctica de su política de dominio continental. Martí advirtió que con respecto a nuestro país

hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos, y es el inicuo de forzar a la Isla, de precipitarla, a la guerra, —para tener pretexto de intervenir en ella, y con el crédito de mediador y de garantizador, quedarse con ella. Cosa más cobarde no hay en los anales de los pueblos libres:—ni maldad más fría.

Y concluía, con el dolor de constatar que algunos de sus coterráneos promovían aquella acción criminal:

¿Morir, para dar pie en qué levantarse a estas gentes que nos empujan a la muerte para su beneficio? Valen más nuestras vidas, y es necesario que la Isla sepa a tiempo esto. ¡Y hay cubanos, cubanos, que sirven, con alardes disimulados de patriotismo, estos intereses!<sup>23</sup>

## Coincidencia y ruptura

No obstante las numerosas coincidencias señaladas, el legado saquista de análisis y prevenciones estaba orientado en una dirección distinta a la que sustentaba Martí, lo que constituye una evidente ruptura ideológica. Para Saco, la tendencia anexionista representaba una amenaza para «la clase alta de criollos y de peninsulares», que podrían perder el poder político y las riquezas a manos de elementos foráneos que a corto o mediano plazos sustituirían a «la *élite* blanca que gobierna».<sup>24</sup> En sus textos, constatamos que su objetivo final era

mantener a Cuba dentro del área de influencia de España. Consideró que su *Réplica* a los anexionistas «valía en Cuba más que 50 000 bayonetas» (t. III, p. 377), dispuestas a defender el sistema colonial.

En sentido opuesto, la concepción martiana forma parte consustancial de su proyecto de liberación nacional, cuyos objetivos eran la independencia absoluta de Cuba, las Antillas, Nuestra América y alcanzar la emancipación humana. Sus propósitos tenían un indiscutible carácter popular, pues no se orientaban a la defensa de los intereses de las clases más favorecidas, sino del conjunto de la sociedad, de la que eran mayoría quienes producían las riquezas con su trabajo, talento y esfuerzo. Señaló entre los partidarios de la unión a los Estados Unidos a «un grupo importante de hombres cautelosos, bastante soberbios para abominar la dominación española, pero bastante tímidos para no exponer su bienestar personal en combatirla»; y condenó a quienes apoyaban esta solución por creer que les facilitaría «gozar de los beneficios de la libertad sin pagarlos en su sangriento precio». Entre ellos se encontraban: «Todos los tímidos, todos los irresolutos, todos los observadores ligeros, todos los apegados a la riqueza».<sup>25</sup>

El Apóstol hizo evidente que la idea anexionista era alentada por sectores no representativos de las grandes masas de la población. Sin embargo, la situación de Cuba, sumida en una crisis económica que avanzaba, y sometida a la humillación constante de los integristas, podía conducir al país por vías insensatas. Los miembros de la oligarquía, aquellos «soberbios», «apegados a la riqueza», y los grupos seguidores de estos, favorecían la anexión, porque aspiraban ante todo a preservar sus intereses materiales, y en algunos pervivía la ilusión de recibir ayuda desinteresada de la vecina potencia. Era una minoría, pero podía arrastrar tras de sí a considerables sectores de la pequeña burguesía y de las capas medias, pues gozaba de influencia ideológica, poder económico y formación cultural, así como experiencia en la conducción de los diversos grupos sociales desde las direcciones de las organizaciones políticas existentes en la Isla. A este peligro se enfrentó Martí con la concepción unitaria que permitió al Partido Revolucionario Cubano consolidar el bloque multiclasiista, integrado por amplios sectores en los que primaba la conciencia antioligárquica, y que aspiraban a la independencia absoluta y la instauración de un régimen democrático.<sup>26</sup>

### «Nacionalidad blanca». Nacionalidad cubana

Pero desviaría los objetivos del análisis histórico de los argumentos del reformista bayamés la adopción de un criterio simplificador que lo reduzca a la categoría

exclusiva de defensor de los intereses materiales de las clases poseedoras. En su pensamiento hallamos una dimensión cultural y sociológica de gran alcance, aunque lastrada, como veremos, por sus prejuicios contra los negros y mulatos. Advertía que si los Estados Unidos lograban apoderarse de Cuba, «víctima sería de la rapacidad americana, en cuyas garras perecerían sus tradiciones, su nacionalidad y hasta el último vestigio de su lengua» (t. III, p. 398). Como parte de sus valoraciones, estableció un paralelo entre lo ocurrido a los pobladores originarios de la mayor de las Antillas y «en casi toda la América, porque las nacionalidades indias, que en ella existían, fueron absorbidas o aniquiladas por las nuevas razas conquistadoras»; y lo que sucedería a la nacionalidad cubana, «si nuestra Isla cayese en las garras del águila del septentrión, ora conservase el nombre de Cuba, ora se le diese otro distinto» (t. III, p. 358).

El logro de los propósitos anexionistas equivaldría a la pérdida de la nacionalidad, pues la Isla sería *absorbida* por los Estados Unidos, no agregada a estos en condiciones de igualdad, como una de sus partes componentes. Previó que la emigración estadounidense a Cuba sería muy abundante, y en pocos años los *yankées* serían más numerosos que nosotros, «y en último resultado no habría reunión o *anexión* sino *absorción* de Cuba por los Estados Unidos». Y concluía: «Verdad es que la isla siempre existiría; pero yo quiero que Cuba sea para los cubanos y no para una raza extranjera» (t. V, p. 253).

Si sobre su país tremolase «el pabellón americano», afirmó «que no inclinaría mi frente ante sus rutilantes estrellas, porque si he podido soportar mi existencia siendo extranjero *en el extranjero*, vivir extranjero en *mi propia tierra* sería para mí el más terrible sacrificio» (t. III, p. 372). Eran ideas que reflejaban un hondo sentido de pertenencia a un grupo humano con rasgos distintivos que no debían arriesgarse por defender la errónea aspiración de separarse del dominio hispano para someterse a otro poder, aun peor que el existente, porque conllevaba la desaparición de lo más preciado, la nacionalidad cubana, cuya defensa constituye «el punto central de coherencia del pensamiento de Saco».<sup>27</sup> Su posición contra el anexionismo y su lucha por abolir la trata son dos expresiones del enfrentamiento a todo cuanto la amenazara.

Hasta este punto, cualquier patriota de la segunda mitad del siglo XIX podría suscribir las argumentaciones expuestas. Pero la definición del concepto saquista de nacionalidad revela la enorme divergencia con el ideario martiano. Aquel expresó que «todo pueblo que habita un mismo suelo, y tiene un mismo origen, una misma lengua, y unos mismos usos y costumbres, ese pueblo tiene una *nacionalidad*». Y continuaba:

Ahora bien; ¿no existe en Cuba un pueblo que procede del mismo origen, habla la misma lengua, tiene los mismos usos y costumbres, y profesa además una sola religión, que aunque común a otros pueblos, no por eso deja de ser uno de los rasgos que más le caracterizan? Negar la nacionalidad cubana, es negar la luz de los trópicos en punto de mediodía (t. III, p. 355).

Pero al precisar los componentes humanos de esta afflora la base racista de su concepción: «La nacionalidad cubana, de que yo hablé, y de la única que debe ocuparse todo hombre sensato, es de la formada por la raza blanca, que solo se eleva a poco más de 400 000 individuos» (t. III, p. 355). Su racismo no le permitió discernir entre los individuos desarraigados, negros o blancos, sino que excluyó a los primeros de la nacionalidad cubana sin tener en cuenta que su mayoría formaba parte intrínseca del pueblo de la Isla, mientras gran número de personas de tez clara llegaba de la Península solo con el afán de enriquecerse desde sus puestos en la administración, los negocios fraudulentos o el ejército, para luego de pocos años de saqueo volver con sus fortunas espurias al territorio de donde provenían. En su aspiración de que Cuba fuera parte, en igualdad de condiciones, del Estado multinacional español, pretendía mantener la supuesta pureza racial mediante la exclusión de los seres de piel oscura, que entonces sobrepasaban considerablemente a los denominados blancos: hacia 1841, el número de esclavos alcanzaba la cifra de 436 495 y los libres «de color» eran 152 838, de modo que los «no blancos» ascendía a 589 333 individuos, de un total de 1 007 624 habitantes.<sup>28</sup> Tal magnitud de población no podía ser marginada, suprimida, en un análisis imparcial y objetivo de la realidad del país.

No admitió que los negros y mulatos criollos eran parte consustancial de la nacionalidad que se iba formando con los disímiles aportes de todas las culturas que arribaban a la Isla.<sup>29</sup> No obstante, concibió la idea, compartida por otros racistas, de lograr a toda costa el predominio de la población blanca sobre la negra no solo a través de un paulatino «blanqueamiento» de la Isla, garantizado por la inmigración europea y el «cruzamiento» racial, sino también con la gradual desaparición física de los «hombres de color» del territorio cubano, como una necesidad política de seguridad y estabilidad, para lo que se acudiría a la deportación o a la emigración voluntaria o compulsada hacia África.<sup>30</sup>

Su posición tenía hondas raíces en el temor a una posible sublevación de los esclavos, quienes unidos a los negros y mulatos libres, consideraba un peligro latente para los únicos que estimaba como cubanos, los blancos:

es cierto y muy cierto es, que deseo ardientemente, no por medios violentos ni revolucionarios, sino templados y pacíficos, la disminución, la extinción, si posible fuera,

de la raza negra; y la deseo, porque en el estado político del archipiélago americano, ella puede ser el instrumento más poderoso para consumir la ruina de nuestra Isla (t. III, p. 222).

De hecho, planteó la existencia de dos nacionalidades irreconciliables, al considerar que los negros eran elementos ajenos y contrarios a los blancos, y llegó a afirmar: «Cuba nos ofrece un triste ejemplo de esta verdad, pues allí habitan por nuestra desgracia, dos razas enemigas» (t. III, p. 357). De este modo se hacía eco, de manera consciente o no, del tan manido argumento colonialista del «terror negro», sustentado en los sucesos de la Revolución haitiana, que invoca en una de sus obras fundamentales:

Ante sus ojos tienen los cubanos esa terrible lección, y el día en que la olvidaren, una catástrofe sangrienta vendrá a recordarles las desgracias de un pueblo vecino. *No revolución ni guerra civil, sino paz y unión en Cuba*. Es la gran enseñanza que los cubanos deben sacar del ejemplo de Santo Domingo (t. III, p. 321).

Martí tenía como uno de los pilares de su concepción unitaria la negación de aquellas tendencias inculcadas y estimuladas por el colonialismo: «En Cuba no hay temor alguno a la guerra de razas. Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro» (t. 2, p. 298). Durante la Guerra de los diez años se habían establecido las bases legales de aquella confluencia: «la primera constitución de la independencia el 10 de abril en Guáimaro, no habló nunca de blancos ni de negros» (t. 2, p. 300). Calificó aquellos falsos temores de cobardía y mascarada contrarrevolucionaria: «la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuaamente levantar, por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la revolución».<sup>31</sup>

Como en múltiples ocasiones, durante la realización del Congreso Internacional Americano, advirtió los peligros que representaban las aspiraciones yanquis para la nacionalidad cubana, no por el vínculo inevitable con aquel país, sino porque sin el logro de la independencia los Estados Unidos impondrían una transformación «que es como la pérdida, de nuestra nacionalidad» (t. 1, p. 255). Pero su concepción se hallaba en las antípodas de la defendida por Saco, pues incluía todos los elementos, heterogéneos y diversos en pigmentación y características espirituales que habían ido conformando lo cubano, en un complejo proceso cultural, del que formaban parte consustancial, inseparable, junto a los denominados «blancos», los «hombres de color». Sin embargo, más que a la nacionalidad se refirió a la patria, que definió en uno de sus primeros textos: «Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas».<sup>32</sup>

Esta unión estaba amenazada por los prejuicios raciales y la discriminación, presentes en amplios sectores de la sociedad cubana, y que minaban el movimiento revolucionario; esto hizo de su enfrentamiento parte esencial de su estrategia política. Desenmascaró las falsedades de las supuestas demostraciones «científicas» de la existencia de razas inferiores, que tenían acogida en determinados círculos intelectuales y se divulgaban masivamente, y luchó de modo sistemático contra quienes enarbolaban las diferencias externas para provocar temores, prevenciones y suspicacias. Insistió en que el hombre de piel oscura no aspiraba a la libertad, la felicidad y la independencia de nuestro país «como negro, sino como cubano» (t. 3, p. 1),<sup>33</sup> idea que constituía, y constituye, un sólido pilar del enfrentamiento a cualquier género de racismo, pues en la defensa de la unidad nacional no pueden concebirse facciones que se propongan objetivos aislados de los intereses de las grandes mayorías.

## Saco-Martí

Los señalados son algunos de los ejemplos de las coincidencias y divergencias entre ambos pensadores, separados no tanto por el tiempo, dada la longevidad de Saco, como por los objetivos propuestos, los intereses que representaban y el carácter de su accionar en las sociedades en que vivieron.

El análisis realizado, y otros similares, demuestra la necesidad del estudio de las obras de los más disímiles creadores, que pueden constituir fuentes de enriquecimiento intelectual tanto para el perfeccionamiento de la argumentación propia, ya formada, como de incitación a la búsqueda de nuevas áreas del saber y del hacer.

## Notas

1. José Martí, «Oscar Wilde» (*El Almendares*, La Habana, enero de 1882 y *La Nación*, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882), *Obras completas (OC)*, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963-1973, t. 15, p. 361. Si no se advierte lo contrario, todas las citas martianas son de esta edición. Se señalarán el tomo y la página en el cuerpo del texto.

2. Sobre las influencias en el pensamiento del Maestro, véase Medardo Vitier, *Martí. Estudio integral*, Publicaciones de la Comisión Nacional Organizadora de los Actos y Ediciones del Centenario y del Monumento a Martí, La Habana, 1954, pp. 27-34. Un panorama de las relaciones del pensamiento martiano con el de Varela, Luz y Saco se encuentra también en la obra de Roberto D. Agramante, *Martí y su concepción del mundo*, Editorial Universitaria, San Juan de Puerto Rico, 1971. Los estudios de mayor profundidad sobre estos vínculos, a la vez que indican la continuidad con Luz y Caballero y Rafael María de Mendive, son: Cintio Vitier, «El padre Félix

Varela como precursor del ideario martiano»; Julio Le Riverend, «La conciencia histórica cubana», Olivia Miranda, «Varela y Martí: origen y culminación del pensamiento revolucionario cubano en el siglo XIX», todos en *Anuario del Centro de Estudios Martianos*, n. 12, La Habana, 1989.

3. La información ha sido tomada de «José Antonio Saco y su época. Vida y obra», en José Antonio Saco, *Acercas de la esclavitud y su historia*, (sel. e introd. de Eduardo Torres Cuevas y Arturo Sorhegui), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982, pp. 117-26.

4. Raimundo Menocal, *Conflicto de orientaciones: Saco y Martí*, Editorial Aquiles, La Habana, 1950; Josef Opatrný, «La cubanidad y la nación cubana: José Antonio Saco y José Martí», *Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura*, Fuerteventura, 2004, pp. 93-107; Paul Estrade, *José Martí. Los fundamentos de la democracia en Latinoamérica*, Ediciones Doce Calles, Madrid, 2000, pp. 359-64.

5. Medardo Vitier, ob. cit., p. 34; y Roberto D. Agramonte, ob. cit., pp. 129-30 y 748-50; Fernando Ortiz, «Últimog», en José Antonio Saco, *Contra la anexión*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974, p. 407.

6. El énfasis es mío. I.H.P.

7. José A. Saco, *Contra la anexión*, ed. cit., p. 83.

8. Breves menciones a Saco, además de las señaladas, se hallan en *OC*, t. 5, p. 145-6, 281-2 y 344; y t. 22, p. 44 y 167.

9. José Martí, «Por la hija de Saco» (*Patria*, 15 de septiembre de 1894), en Carlos Ripoll, comp., pról. y notas, *Escritos desconocidos de José Martí. Cuba. Puerto Rico. Propaganda revolucionaria. Jamaica. Crítica. Estados Unidos*, Eliseo Torres & Sons, Nueva York, 1971, p. 95. María Ana Cristina estuvo amparada por su hermano, Narciso López Frías, hasta su deceso en París el 18 de octubre de 1898. (Véase Olga Portuondo Zúñiga, *José Antonio Saco, eternamente polémico*, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2005, p. 131).

10. Sobre la publicación de las obras de Saco véase Eduardo Torres Cuevas, «Ensayo introductorio. José Antonio Saco. La aventura intelectual de una época», en José Antonio Saco, *Obras*, v. I, Imagen Contemporánea, La Habana, 2001, p. 65. Si no se indica lo contrario, las citas de Saco han sido tomadas de esta edición. Se señalarán el volumen y la página en el cuerpo del texto.

11. *Ibidem*, pp. 74-5; Olga Portuondo, ob. cit., pp. 183-4; y Jorge Ibarra Cuesta, *Varela el precursor. Un estudio de época*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004, pp. 252-3.

12. Sobre la formación filosófica inicial de Saco, véase Olga Portuondo, ob. cit., pp. 46-50 y 60-62; y Eduardo Torres Cuevas, ob. cit., pp. 14-22. Para una visión general del pensamiento filosófico martiano, véase Manuel Isidro Méndez, Martí. Estudio crítico-biográfico, Comisión Nacional Pro-monumento a Martí, La Habana, 1941, pp. 205-27; Medardo Vitier, ob. cit., pp. 279-99; y Pablo Guadarrama González, «Martí y el positivismo *sui generis* latinoamericano», *Por el equilibrio del mundo*, Taller Vargas Impresores, S.A., México, DF, 2003, pp. 153-68.

13. Véase Eduardo Torres Cuevas y Arturo Sorhegui, «Introducción», en José Antonio Saco, *Acercas de la esclavitud...*, ed. cit., pp. 32-3 y ss; Cintio Vitier, «Etapas en la acción política de Martí», *Temas martinianos*, Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, 1969, pp. 18-66.

14. Véase Ibrahim Hidalgo Paz, «Incursiones en los orígenes del antimperialismo martiano», *Incursiones en la obra de José Martí*, Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989, pp. 57-61.

15. Al ser apuntes, Martí utilizó abreviaturas.

16. El texto ha sido rectificado mediante el cotejo con el original.
17. Véase Luis Toledo Sande, «*A very fresh spaniard*: personaje literario de José Martí», *José Martí, con el remo de proa*, Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990, pp. 139-55.
18. El énfasis es mío. I.H.P.
19. Véase Olga Portuondo, ob. cit., pp. 62-3 y 67-71.
20. Un ejemplo de la recepción creadora de la obra de Saco puede apreciarse en la reproducción de las palabras citadas por *La Doctrina de Martí*, en medio de la campaña antianexionista llevada a cabo por este periódico en abril de 1898. (Véase Ibrahim Hidalgo, «Defensa de *La Doctrina*», en *Anuario del Centro de Estudios Martianos*, n. 20, La Habana, 1997, pp. 33-5).
21. Sobre las distintas corrientes del anexionismo, véase Eduardo Torres Cuevas, «Ensayo introductorio...», ed. cit., pp. 58-60.
22. Véase José Martí, «Asuntos cubanos. Lectura en Steck Hall, Nueva York, 24 de enero de 1880», *Obras Completas. Edición Crítica*, (OCEC), t. 6, p. 145, 2000-2007.
23. José Martí, «Carta a Gonzalo de Quesada» (Nueva York, 14 de diciembre de 1889), *Epistolario*, t. II, Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1993, p. 170.
24. Olga Portuondo, ob. cit., pp. 153 y 154.
25. José Martí, *Epistolario*, ed. cit., t. I, p. 238.
26. Véase Ibrahim Hidalgo Paz, «Antianexionismo y antimperialismo en *Patria*», *IncurSIONES...*, ed. cit., pp. 212-6.
27. Eduardo Torres Cuevas y Arturo Sorhegui, ed. cit., pp. 48 y 61-2.
28. Saco debió basarse, para su afirmación sobre los «poco más de 400 000 individuos» blancos, en el censo de 1841, como puede apreciarse en *Las estadísticas demográficas cubanas*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 22-3. Véase María del Carmen Barcia, *Burguesía esclavista y abolición*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987, p. 177.
29. Véase Eduardo Torres-Cuevas, «Ensayo introductorio...», ed. cit., pp. 90-2; Jorge Ibarra, ob. cit., pp. 233-5 y 257-8, y Olga Portuondo, ob. cit., pp. 161-9. Una opinión diferente sobre el racismo de Saco en Fernando Ortiz, «Prólogo», en José Antonio Saco, *Contra la anexión*, ob. cit., pp. 72-3.
30. Jorge Ibarra (ob. cit., pp. 217-8) resume el plan concebido en 1864. Véase un análisis sobre la adopción de este criterio en Eduardo Torres Cuevas y Arturo Sorhegui, ed. cit., pp. 81-2.
31. José Martí, *Manifiesto de Montecristi. El Partido Revolucionario Cubano a Cuba*, edición facsimilar, Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 12 y 14.
32. José Martí, *OCEC*, ed. cit., t. 1, p. 106. Véase Paul Estrade, ob. cit., pp. 359-69; y Eduardo Torres Cuevas, «Patria, pueblo y revolución: conceptos bases para la historia y la cultura en Cuba», *Nuestra común historia. Poblamiento y nacionalidad*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1993, pp. 1-22.
33. Véase Israel Escalona Chávez, *Lo social en lo político. Revolución y lucha social en José Martí*, Ediciones Santiago, Santiago de Cuba, 2001, pp. 41-6; y Jean Lamore, «Historia y “biología” en la “América mestiza” de José Martí», *Anuario del Centro de Estudios Martianos*, n. 2, La Habana, 1979, pp. 92-110.

# La burocracia en la dimensión compleja de la emancipación humana. Los retos del socialismo

**Ovidio D'Angelo Hernández**

*Investigador. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).*

*El futuro es espacio;  
espacio negro para muchos sueños;  
espacio blanco para toda la nieve;  
para toda la música.*

Pablo Neruda

El tema de la burocracia, entendida esta como fenómeno de la institucionalidad compleja de la sociedad, más que como un efecto efímero de sus deformaciones posibles y analizadas sus consecuencias en los procesos de alienación o emancipación humana de los individuos concretos, resulta de gran actualidad.

Hay que tener en cuenta que tanto la maquinaria corporativa de los Estados y las transnacionales del capitalismo desarrollado como las potentes instituciones sociopolíticas y empresas estatales en la historia de los socialismos, se han erigido como poderes hegemónicos frente a los cuales se ubica muchas veces una sociedad civil, en gran medida corporativizada y disciplinada, o individuos-masa que pueden quedar reducidos a su condición primaria más elemental.

Hasta el presente no ha sido posible obtener una sólida orientación hacia la plenitud de la emancipación humana en el socialismo, no obstante sus logros sociales

—sobre todo en el plano distributivo—, en términos de equidad y justicia social de diferentes alcances.

Carlos Marx —a pesar de sus críticos— abordó la sociedad como una totalidad, en la que si bien profundizó en un conjunto de relaciones esenciales derivadas principalmente del funcionamiento de la base económica, logró asimismo desentrañar mecanismos importantes de opresión, dominio y alienación social en la sociedad capitalista. Desde sus primeras obras, hasta las de madurez,<sup>1</sup> se puede seguir sus intenciones de develar las causas de la explotación, sus derivaciones políticas e ideológicas, con el interés de propiciar los marcos de acción necesarios para una praxis de la emancipación social que lograra el despliegue múltiple de las potencialidades humanas en todos los campos, en condiciones de libertad y autorrealización plenas. Su teoría no podía ser, de conjunto, ni infalible ni completa, aunque reveló una visión compleja del proceso social, de gran envergadura y alcance político.

Correspondió a Max Weber —desde una perspectiva distinta y, en parte, opuesta a la de Marx— analizar las características de los mecanismos de la organización social y explorar el papel de ciertas ideologías —como

la ética protestante— en el surgimiento de los sistemas sociales. Una de sus incursiones tiene que ver, precisamente con el papel de la burocracia y las formas de dominio que se le asocian en la sociedad moderna, aunque su análisis no estaba orientado a un propósito liberador.

En el sentido clásico, formulado por Weber, la burocracia es una forma corporativa de organización social caracterizada por un conjunto de rasgos que la convierten en una maquinaria de ejercicio del poder absoluto y opresivo, en la cual sus miembros son solo piezas necesarias para conseguir sus objetivos ideológicos o económicos.

De ahí que, como veremos, la concepción burocrática del funcionamiento social coarte las expresiones de la subjetividad individual y colectiva, y convierta la práctica social en patrones rutinarios y, con frecuencia, litúrgicos, cuyo propósito es generar una creencia de legitimidad de la autoridad burocrática para la consecución de sus fines de dominación.

La configuración de relaciones sociales a través de estructuras e instituciones, en condición de vincular las personas con sus diferentes posicionamientos, conforma la construcción de imaginarios sociales complejos en los que las elaboraciones simbólicas (ritos, mitos, normas y valores emergentes), arquetípicas y actuales, se asocian a patrones de interacción cotidiana y generan una diversificación natural de la trama social objetivo-subjetiva en la que se insertan. De esta manera, la realidad social se constituye como *contextualidad compleja*<sup>2</sup> que, tanto en los sistemas capitalistas como socialistas, han producido, en cada caso, la emergencia de burocracias dominadoras, con sus respectivas peculiaridades, como mecanismos «naturales» de gestión económica, social y política.

Promover la participación y la autogestión para afrontar problemas sociales complejos, en presencia de esquemas de organización de la sociedad caracterizados por la visión corporativo-burocrática, resulta un asunto de primer orden para las ciencias sociales y la práctica política; ello con el fin de encontrar caminos para una real emancipación humana, tanto más importante para Cuba en tanto ese objetivo es afín con los ideales socialistas.

## Burocracia y sociedad

### La burocracia instituida

El moderno modo corporativo de organización de la vida social y empresarial surge, probablemente, de las demandas de la administración masiva de los recursos en siglos anteriores, sobre todo a partir de la explosión

tecnológica de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo.

El sistema de administración en los Estados-nación y, más tarde, en el nuevo sistema-mundo globalizado, configura un conjunto de organizaciones articuladas, con fines de control, normativos, represivos, etc., que tomaron vida propia al convertirse en un monumental aparato institucionalizado, de alcance nacional o universal, con consecuencias tremendas para el despliegue de las libertades, y la vida personal y colectiva de los ciudadanos en cada lugar del mundo.

Es en este marco histórico que surge y se despliega la institucionalidad burocrática. Con sus modalidades propias en cada sistema social, ya sea a través de corporaciones transnacionales capitalistas o, curiosamente en empresas estatales del socialismo real; o bien en el Estado liberal o —¿paradójicamente?— en los modelos de Estados socialistas conocidos, su naturaleza y *modus operandi* posee rasgos comunes y perniciosos si, más allá de eficientismo, estamos hablando de plenitud humana para el despliegue de la acción social desarrolladora.

Ya Max Weber había identificado algunos rasgos de la institucionalidad burocrática como fenómeno social ineludible: carácter de mecanismo supraindividual y supracolectivo; despersonalización, o descolectivización, del modelo de racionalidad instrumental que asume, ya sea con fines de maximizar la ganancia capitalista o de interés social; normatividad organizacional como conjunto de reglas y orientaciones de comportamiento que pautan rígidamente el cumplimiento de las actividades. Ello, unido a la extrema jerarquización de las cadenas de mando, entre otros atributos, coloca a esta institucionalidad como un «ente» dotado de vida propia con una dinámica inherente que debe ser autosatisfecha.<sup>3</sup>

La extrema voracidad que puede generar la institución burocrática —genialmente ilustrada en *El proceso*, de Franz Kafka— y que resulta «funcional» a ciertos estados o «momentos-situación»<sup>4</sup> del sistema social, remite al carácter de la alienación contemporánea algunas, si no todas, de sus dimensiones importantes que afectan la cotidianidad de las personas, incluido el grupo social del funcionariado como agente ejecutor de la funcionalidad corporativa.

La problemática planteada no es ajena al socialismo. Como sistema social que aspira a la eliminación gradual de las condiciones de explotación y opresión (económicas, sociales, culturales y políticas), no escapó, sin embargo, a las concepciones y tradiciones del anterior modo de organización y gestión social. La experiencia histórica de configuración de los Estados, la administración económica a través de las empresas, las relaciones de autoridad, la normatividad y el control de la vida social,



etc., marcaron la instauración de mecanismos sociales que, apuntando al ideal participativo, mantuvieron, en una hibridación tal vez inevitable, el carácter esencial de una institucionalidad burocrática que puso en riesgo los ideales originarios.

## Burocracia y burocratismo

En ocasiones se iguala la manifestación superficial y fenoménica del evento burocrático con su esencia constitutiva.

La burocracia, entendida como fenómeno estructural propio de una forma de institucionalidad corporativa, tiene un alcance mayor que la referencia a los sujetos sociales que la conforman (el funcionariado en sus diferentes capas, desde los de alta y mediana jerarquía, hasta los empleados de apoyo), y a las deformaciones conocidas como expresiones de «burocratismo».

Si bien estas son derivaciones del carácter esencial de la propia institucionalidad burocrática, no necesariamente coinciden con ella, en el sentido de que pueden manifestarse o no de manera abierta y con mayor o menor intensidad.

Asimismo el significado peyorativo habitual del término no remite a sus características definitorias, sino a ciertas manifestaciones externas, en condiciones dadas. Por ejemplo, las coyunturales «batallas contra el burocratismo», en diferentes etapas del período revolucionario en nuestro país, han intentado aminorar los efectos paralizantes de esas manifestaciones fenoménicas que tanto irritan a los usuarios de los servicios sociales (demoras innecesarias en los trámites, papeleo, exceso de niveles de aprobación en gestiones simples, apego inflexible a la norma instituida, inflación de plantillas de personal no productivo, etc.).

Al reducir la interpretación de la institucionalidad burocrática al efecto deformante del burocratismo, se puede actuar sobre algunos síntomas, pero no sobre las causas del fenómeno social y sus efectos perdurables.

Por otro lado, con la intención antiburocrática también pueden negarse funciones, procedimientos y mecanismos de control necesarios en la gestión moderna, tanto empresarial como estatal. Algunos de esos efectos fueron constatables en períodos de lucha contra el burocratismo en nuestro país, cuando se subestimó, por ejemplo, la función social de los economistas y contadores, o del personal administrativo en general, lo que generó un descontrol de los bienes de producción y servicios con consecuencias caóticas.

El problema que se plantea a la gestión social es cómo lograr un funcionamiento eficiente de las organizaciones del país reconociendo que su modo corporativo actual provoca efectos múltiples de normatividad y alienación combinados, con consecuencias sociales importantes, por

lo que requeriría análisis especiales y sistemáticos para propiciar contramedidas, que pasan por la profundización del control y gobierno populares.

Como afirmamos, el fenómeno no es exclusivo de Estados liberales o monopólicos capitalistas y se presenta en la formación socioeconómica socialista en cualquiera de sus modalidades conocidas. Ya Lenin se había referido en su tiempo a este problema en el ámbito económico-empresarial, al manifestar que la empresa socialista adoptó el modo corporativo heredado del capitalismo como su forma natural de existencia y funcionamiento, mientras que el cooperativo quedó relegado, o limitado en sus atribuciones reales, a una modalidad de gestión colectiva, por lo que no se logró una articulación conveniente entre ambas formas de conducción de los procesos empresariales a los efectos de la construcción socialista.

Por otra parte, la propia conceptualización de burocracia nos llevaría a una reflexión polemizadora, que trasciende el alcance de este trabajo, acerca del papel y los momentos de fortalecimiento del Estado revolucionario en las distintas etapas sociopolíticas, así como a la creación de las condiciones necesarias para su progresiva «extinción» en aras del gobierno popular.

## La institucionalidad corporativo-burocrática

Cualquier organización constituida desde el esquema corporativo tiene varias dimensiones estructurales y funcionales de carácter general: formalización estructural-funcional, jerarquía de mando, separación dirigentes-subordinados, dirección de arriba a abajo, normatividad-legalidad, y objetivos-metas organizacionales, entre otras.<sup>5</sup>

La concepción de la institucionalidad burocrática en las organizaciones empresariales descansa en varios supuestos tradicionales. Estos se fueron gestando a partir de la experiencia organizativa de los modelos corporativos capitalistas, que enfatizaban el logro de una eficiencia necesaria para la obtención de ganancias. A estas concepciones contribuyeron las formas de organización del trabajo asociadas, como el taylorismo y otras, que después han dado lugar a modos más modernos de humanización del trabajo, para hacer que el trabajador se sienta parte de la empresa a través de mecanismos de estimulación y participación.

La tendencia a empresas «más humanas y sociales» en el capitalismo contemporáneo, si bien se separa bastante de la tradicional corporación burocrática, persigue extraer de la fuerza productiva humana un mayor nivel de satisfacción y compromiso a fin de aumentar el rendimiento y la eficiencia empresarial, aunque puede derivar en mejoras de condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores.

En las empresas estatales socialistas existen situaciones parecidas a la alienación, aunque su resultado tiende a revertirse, en parte, en beneficio social: a) el productor —individual y colectivo—, al final, continúa siendo un instrumento de la producción y, en su condición de asalariado, constituye un recurso para el capital o el Estado, y no un actor social definitorio de los procesos de producción y de vida; b) sigue separado de los medios de producción, sin control de los resultados productivos y, en gran medida, formalmente representado en pequeñas decisiones empresariales, pero ajeno al proceso de toma de decisiones fundamentales.

No es mejor su situación en el ámbito de la «sociedad total», al estar sometido a poderes superiores de ordenamiento de la vida social. Aun en los episodios electorales y otras acciones de organización de la actividad colectiva, que tienen sus diferentes modalidades en países capitalistas o socialistas, se mantiene su supeditación a las normas generales más o menos incontrolables del Estado.<sup>6</sup>

Sin pretender una teoría del Estado moderno, baste decir que sus instituciones, a pesar de significar una ruptura con los modelos monárquicos del siglo XVIII, y basarse en principios de democracia formal reconocidos, no han dejado de ser mecanismos de control al servicio de las clases hegemónicas.

Al igual que la corporación económica, la institucionalidad burocrática se expresa en todas las instancias del poder político, acuciada en muchos países por la presencia de otros males consustanciales e históricos, como la corrupción de alto nivel, prebendas y privilegios. En el mejor de los casos, el ejercicio de ciertas normas democráticas del Estado no exime a los mecanismos y organizaciones del poder administrativo y político de la manifestación de su esencia burocrática.

La polémica actual sobre el carácter del Estado socialista también plantea problemas interesantes para el desarrollo futuro de este sistema social. Creado con la intención declarada de promover la libertad, el progreso y el bienestar de los ciudadanos —en especial de los socialmente explotados y excluidos—, no se entiende que no logre configurar el poder de todos sobre bases consensuadas; y, por el contrario, se convierta en un mecanismo de restricción de la participación social en los asuntos importantes del país, con un carácter representativo y participativo formalista, condicionado por las orientaciones ideológicas centrales.

No se trata de desconocer el carácter corporativo de las organizaciones productivas y políticas, sino más bien de enfatizar en su necesaria transformación para adecuar su concepción burocrática originaria a las necesidades del desarrollo humano. Por eso, no sería pertinente entender el análisis de la institucionalidad

burocrática como una provocación demonizadora de la conformación del sistema socialista. Más bien se trata de la necesidad del desmontaje de sus estructuras y superestructuras sociales para visualizar claramente el contenido emancipatorio u opresor que en ellas subyace.

Si, bajo estas premisas, analizamos el funcionamiento de dicha institucionalidad en la historia de los socialismos reales, tendremos mayor claridad del alcance alienante de muchas estructuras organizativas, creadas, sin embargo, con la intención de gerenciar la voluntad popular o propiciar la desaparición de injusticias sociales propias del orden clasista del capitalismo. Cabría preguntarse: ¿quién ejerce la hegemonía en la institucionalidad burocrática? Este es uno de los aspectos más apasionantes de la indagación organizacional de la sociedad. Por sus multicausalidades, el fenómeno es tan diverso y sujeto a expresiones no lineales, como inesperado e incierto en sus resultados.

«El centro de la soberanía es el pueblo» es la máxima que reza en cualquier concepción del Estado moderno. Tanto más en las declaraciones de principios socialistas. Sin embargo, las limitaciones de la democracia liberal —aun con sus aportaciones interesantes— y la concepción restringida sobre la relación vanguardia (élite)-masa, predominante en las configuraciones de los Estados socialistas, reducen de manera considerable la noción ideal de un Estado para el bien de todos.

## Esquemas mentales de la burocratización

En su acepción ideal, la burocracia como institucionalidad es sobre todo normativa, centralizadora, impersonal y directivista. Los procesos de relacionamiento y funcionalidad están marcados, básicamente, de arriba hacia abajo. Más allá de las necesidades de los miembros de la organización, o de los ciudadanos del Estado, las expectativas del papel de cada miembro son prescritas desde las altas instancias directoras. Para asegurar la menor desviación posible de los objetivos trazados desde dicha élite —no importa a nombre o en los intereses de quiénes se proclamen—, se exige un estricto cumplimiento y disciplinas rigurosas con la norma, aseguradora de por sí de la eficiencia imaginada. Esto hace que el funcionariado tenga intereses afines a sus atribuciones de poder; estos no son idénticos a los de las masas subordinadas, en las distintas instancias de su ubicación en el aparato burocrático nacional.

En la medida en que esta capa focaliza y prioriza sus necesidades funcionales y existenciales, se crean modos de vida acomodaticios, con prebendas fuera del control de los subordinados y alejados de las instancias centrales de la institucionalidad burocrática. Ejemplos

sobran a lo largo de la historia, a pesar de las campañas dirigidas a eliminar la corrupción o mantener un orden de vida más ascético.

Por otro lado, el funcionariado que se configura alrededor de los objetivos de la organización —sea una empresa o el Estado— exige cumplimiento irrestricto, elabora y aplica un código de sanciones y queda investido de «legitimidad» en el uso de la autoridad de mando, por sobre todos y sobre todas las cosas. Cuando estas operaciones «normales» de control y disciplinamiento se ejercen de manera omnímoda, el poder se convierte en dominio hegemónico, con efectos de sometimiento y alienación en los subordinados. Tal funcionariado va conformando una subjetividad hegemónica, cuando no de opresión, y queda exento de la crítica o la acción de control de los miembros de la organización o de los ciudadanos de un país.

Los individuos realmente actuantes en la institución, los subordinados, están sujetos al cumplimiento de dichas normas, con innumerables barreras para su iniciativa creadora y la diversidad de sus inquietudes existenciales u organizacionales. Muchas veces, aun en espacios de coparticipación, la incidencia real de sus voces queda reducida a la mínima expresión, debido al extremo grado de formalización y centralismo de las normas y orientaciones o al culto hacia el liderazgo establecido. En determinadas situaciones, el recurso de estimulaciones adicionales a los subordinados —bonificaciones económicas u otros— se emplea para impulsar la organización hacia nuevos escalamientos de efectividad, pero manteniendo las condiciones alienantes de sujeción, como su separación del poder real y del curso de los acontecimientos centrales.

En este contexto, se producen tramas religadoras a nivel de la subjetividad, con carácter simbólico, reforzador del sometimiento. Así, los individuos son movidos por la fuerza de estímulos y castigos en un afán de búsqueda de docilidad o, al menos, de garantía de la «disciplina» organizativa. Los estímulos son unas veces tangibles (premios a la buena conducta, a los logros, etc.) y otras, virtuales y escurridizos, como el reconocimiento a la lealtad a la jerarquía de mando, o a la evaluación positiva del desempeño de la institucionalidad o del jefe, lo que comporta ver solamente lo bueno, según la percepción de la dirección.

Igualmente, el repertorio de sanciones posibles se asocia a la desviación de la norma, con lo que se mantiene el carácter entrópico (autodestructor de su potencial energético) del funcionamiento del sistema, con el fin de conservar su *statu quo*, sin flexibilizaciones para atemperar los cambios del entorno y del sistema por los propios actores.

El tema de la entropía institucional burocrática, o tendencia al agotamiento de su eficiencia posible, se

relaciona con el hecho de que los elementos que la componen se van rutinizando, hasta perder su carácter creativo y convertirse en objetivos de supervivencia de la organización. Este hace que involucone hacia estados de frustración, evasión o cierto sometimiento adaptativo y justificativo, al mantenerse, en el mejor de los casos, en el límite de las disensiones intrascendentes y sin consecuencias, lo que convierte a los individuos en simples piezas o autómatas, sin sentido real de su desempeño y existencia, como no sea el de alimentar el carácter autista y autosuficiente de la organización.

Según Adolfo Sánchez Vázquez,<sup>7</sup> refiriéndose al tema de la fenomenología de la obediencia, de un lado, esta solo existe como término de una relación, en la que el otro es el poder. La relación obediencia-desobediencia se resuelve —para el poder— no por lo que se experimente internamente una individualidad o pluralidad de sujetos, sino por lo que hace, que es lo que demuestra, de manera objetiva, su obediencia. Esta cuestión permite profundizar en las conductas ambiguas, de doble moral, en las que las autosatisfacciones y autojustificaciones del comportamiento obediente muestran sus inconsistencias y su ineffectividad relativa. De modo que una institucionalización no burocrática tendría que mantener la vigilancia sistemática sobre estos procesos.

### Burocracia y formas de autoridad en las sociedades de estructura piramidal

Max Weber estudió y clasificó las formas de autoridad que se ejercen en diferentes condiciones sociales. Así, definió la *autoridad tradicional* como el tipo de relación de servidumbre y dominio del señor feudal o la patriarcal en la familia; la *carismática*, ejercida por las cualidades de personalidad del líder; y la *legal* o *burocrática*, planteada en términos de aceptación de normas supraindividuales.<sup>8</sup>

En la práctica, estas características pueden combinarse en cualquier nivel de ejercicio de la autoridad y tipo de actividad. La legitimidad resultante de cualquiera de las tres puede ser considerada un instrumento poderoso de dominio y manipulación de la subjetividad individual y colectiva cuando no es armonizada con una postura crítica reconocida a los sujetos receptores de los comportamientos de autoridad, o cuando el sujeto de la autoridad es impermeable a la autocrítica de sus acciones.

Como ha expresado Michel Foucault, el poder es una relación asimétrica entre dos o más personas y conforma una vinculación de toma y daca entre ambas partes.<sup>9</sup> Ahora bien, cuando este poder se ejerce desde una posición de influencia sobre los otros, estamos en presencia de una relación hegemónica o de dominio.

**La organización burocrática puede crear las condiciones para el surgimiento de liderazgos irrefrenables. A la aureola de legitimidad conferida por las condiciones personales y la actuación histórica del líder, se añade un conjunto de rasgos y virtudes que, si son aprovechados por la élite e incorporados a la institucionalidad burocrática, se magnifican y se convierten en códigos de conducta, en tabúes o en pautas de sanción moral.**

La dominación significa que la orden influencia a los dominados de tal manera, que el contenido de la orden se transforma en obediencia para los subordinados. La dominación es una relación de poder en la cual el dominador tiene derecho a ejercer poder y el dominado considera que su obligación es obedecer sus órdenes.<sup>10</sup>

Sus efectos son así reforzados por las condiciones de seducción-sujeción y opresión que cada una de las tres formas de autoridad puede hacer posible. Este es uno de los problemas no tenidos suficientemente en cuenta en el diseño y reconstrucción del poder político en las sociedades socialistas históricas y que, a mi juicio, erosiona las bases de legitimidad del poder con el transcurso del tiempo.

¿Cuáles podrían ser algunas soluciones eficaces a este problema? Podría suponerse que la organización burocrática, dado que traza sus pautas de funcionamiento con un carácter impersonal y genera una normatividad extrema, enfatiza el mecanismo, más que la conducción liderada. Esto puede ser cierto en contextos donde la actividad que realiza la organización tiene un carácter técnico o subordinado a poderes más generales. Por ejemplo, un ministerio no tiene que tener un líder a la cabeza, sino que habitualmente es una persona designada de entre las capas del funcionariado, a veces no muy conocida ni popular en el campo de su acción. Otra cosa puede ocurrir en organizaciones movilizadoras de grupos sociales en funciones de gobierno —trátese de la nación u otro nivel importante de la gestión pública—, en los que se entrelaza el carácter de la burocracia institucional con el liderazgo carismático o coyuntural.

La organización burocrática, frecuentemente piramidal, puede crear las condiciones para el surgimiento de liderazgos irrefrenables. A la aureola de legitimidad conferida por las condiciones personales y la actuación histórica del líder, se añade, desde el imaginario popular, un conjunto de rasgos y virtudes que, si son aprovechados por la élite e incorporados a la institucionalidad burocrática, se magnifican y se convierten en códigos de conducta, en tabúes o en pautas de sanción moral.

No puede pensarse que la frecuente transmutación del liderazgo en divinidad intocable solo se realiza bajo los designios de una voluntad maléfica que opera desde el centro hacia las bases sociales. También se basa en el propio orden de relaciones recursivas entre el liderazgo, la institucionalidad burocrática y la subjetividad social en contextos especiales; en los que, además del ejercicio directo del poder de la élite, intervienen efectos de su real eficacia social, así como de la seducción que ejerce el poder; es decir, como mecanismos de la subjetividad legitimadora y sustentadora de las propias condiciones de opresión a la que es sometida.<sup>11</sup>

Muchos de estos aspectos son marginados del análisis de los procesos sociales concretos, a veces reducidos al inventario escueto y simplificador de las «condiciones objetivas y subjetivas» del momento, mientras que lo que se requeriría es una actitud de vigilancia, análisis y acción permanentes.

### Preeminencia de la organización o del liderazgo

Para el tema que nos interesa analizar, relacionado con el Estado en una sociedad socialista, es necesario un análisis de las formas de ejercicio de la hegemonía y el papel de los liderazgos históricos.

En algunos casos —por ejemplo, los Estados socialistas de Europa del Este en el siglo xx—, la realidad instituida distó mucho de representar el modelo que proclamaba. La apariencia de gobierno popular resultó una manera coactiva de controlar las expectativas y necesidades de las masas populares, a través de la instauración de mecanismos sutiles de elecciones manipuladas, creación de instancias de representatividad aparente, e imposición de las líneas centrales y cauces de políticas definidas de antemano por una pequeña élite que actuaba en nombre de los intereses de los trabajadores y del pueblo, aun cuando, en ocasiones, tuvieran esa intención real.

Desconocer o minimizar el papel del líder en la historia, sobre todo en procesos y transformaciones revolucionarias, resulta difícil. Trátese de una figura o de un equipo de personas nucleadas en torno a un

programa o un ideal, es evidente que han desempeñado un importante papel en el devenir histórico.

La historia recoge evidencias del tránsito de un proceso que en sus inicios descansa en la legitimidad del líder (o líderes) a otro de institucionalización a través de organizaciones que encarnan, corporativamente, el ideal elaborado tanto por partidos como por organizaciones sociales. No obstante, a la preeminencia del líder, sea de una organización o del Estado, se asocian comportamientos de los subalternos, que habría que atender por su carácter potencialmente deformante o corruptivo, aun a expensas de las manifiestas precauciones del liderazgo al respecto. Entramos aquí en una amplia gama de conductas humanas que van desde el compromiso total y desinteresado hasta el oportunismo más ramplón, a veces enmascarado de lealtad revolucionaria, que deviene lealtad a la persona, sin importar sus errores o insuficiencias.

La sacralización del liderazgo, tanto por las propias instituciones oficiales, el séquito de seguidores o la seducción redentora o mesiánica que ocurre en las masas, funciona como un recurso reforzador del poder hegemónico, en condiciones en que este se funde con la burocratización institucionalizada, lo que potencia el carácter alienador de ambas manifestaciones, aun en la pretendida o real creencia de dedicación al bien público.

Conjuntamente con ello, la convivencia de liderazgo e institucionalidad burocrática plantea el tema de la asumida incontrovertibilidad de la ascendencia del primero por sobre las prerrogativas de las propias organizaciones, como caso extremo de fusión de poderes que puede operar en el sentido de una centralización autoritaria e, incluso, con visos de unipersonalismo.

La historia de las revoluciones ha sido testigo de tales exageraciones. Las preguntas serían ¿se ha trabajado en la dirección de contrarrestar esos efectos perniciosos posibles? ¿Cómo equilibrar el reconocimiento del papel preeminente del liderazgo con las normas de vigilancia institucional y la participación activa de los diversos actores sociales?

Aquí parece operar un conjunto de arquetipos sociales, presentes en las tradiciones del desarrollo histórico de los pueblos que, por tanto, forman parte de la mitología construida desde el inconsciente colectivo y la tradición cultural de las naciones. La divinización del líder responde probablemente a angustias existenciales y a necesidades de apoyo espiritual que tienen un parentesco cercano con los fenómenos religiosos —si bien estos pueden estar inspirados también en una concepción filosófica especial. La figura simbólica del «redentor», el «protector», el «orientador», el «amigo supremo», típicas de las deificaciones religiosas, se transfieren al liderazgo político de la vida real por

medio de mecanismos de identificación y proyección, de defensa ante la angustia existencial individual y colectiva, que convierten su contenido y energía en figuraciones satisfactorias sustitutivas de las de la situación problemática que la origina.

## Alternativas a la burocracia

### La institucionalidad compleja: la implicación hologramática del sujeto

Una forma de comprensión diferente de la institucionalidad social es su consideración como conjunto de sistemas complejos que se construyen en tramas interrelacionadas con procesos de abajo-arriba y de arriba-abajo, en los que desempeña un papel muy importante la auto-organización del sistema desde sus propios componentes, como articuladores intencionales de las partes y el todo.<sup>12</sup> Así, las instituciones, como realidades «objetivas», además de presentar una dinámica propia de sus condiciones y procesos estructurales, son «construidas» desde las subjetividades-praxis colectivas, determinantes y determinadas, en una relación «omnijetiva»,<sup>13</sup> considerado el asunto desde perspectivas teóricas de la complejidad.

No solo es tener en cuenta las condiciones interactuantes, sino colocar al sujeto (individuo, actores sociales, subjetividad social) en el centro de los análisis y, también, conformando el contexto institucional construido; es darle la real dimensión hologramática (constructora de la totalidad y de sus partes) en todo su movimiento de articulación con las estructuras e historia —espacio-tiempo—, consideradas como dimensiones de las contextualidades complejas en nuestros trabajos.<sup>14</sup>

La comprensión compleja profunda en una intención develadora-emancipatoria de las relaciones individuo-instituciones-Estado-sociedad requiere el análisis de los mecanismos psicosociales a partir de los cuales se producen unas u otras formas de relaciones y comportamientos reales que son unos de sus emergentes principales.

El planteamiento de normas y valores desde las necesidades de una determinada institución social (de arriba-abajo) puede no corresponder con las necesidades o expectativas de los grupos sociales o individuos, lo que crea límites estrechos de acción social e individual. Cualquier norma es manejada, alterada, de acuerdo con el *todo* que es reinterpretado en la *parte*, desde las condiciones específicas e intrínsecas que operan en ese nivel,<sup>15</sup> de ahí que las normas reajusten y actualicen los patrones cotidianos de interacción social<sup>16</sup> y constituyan fuentes de subjetividad e institucionalidad —frente

a otras impuestas— desde la realidad micro del proceso social.

Toda norma institucional implica un carácter prohibitivo; se vincula a las formas instituidas de hegemonía (Gramsci), en el marco de relaciones asimétricas de poder (Foucault); y genera limitaciones o constreñimientos que necesitan tomar el referente de necesidad y potencialidad de los grupos e individuos, a partir de su propio espacio de construcción y aporte social. Aquí resultaría clave considerar el principio de la Ecología de la acción, enunciado por Edgar Morin: «Toda acción escapa cada vez más de la voluntad de su autor a medida que entra en el juego de las inter-retroacciones del medio en el cual interviene», por lo que la participación de todos los actores-sujetos intervinientes en el proceso dado es esencial para garantizar su interpretación consensuada y efectividad, sin lo cual, la norma se adultera espontáneamente, ajustándose a las necesidades de los «receptores».<sup>17</sup>

Así, la dialéctica de abajo-arriba y arriba-abajo forma la consistencia del entramado social que mantiene la autorregulación dirigida al desarrollo de la institucionalidad social. La acción posible del ejercicio del poder por la ciudadanía se autoclausura en la institucionalidad burocrática; es decir, produce su propio cierre y limitación a partir de los límites impuestos por las normas habituales y la rutina de los procedimientos establecidos. La condición de posibilidad antiburocrática fomentaría su carácter emancipatorio.

### De la institucionalidad burocrática a la emancipatoria

La construcción de la institucionalidad con un sentido emancipatorio estaría dirigida a la construcción de autonomía; pero ello no implica la promoción de una desintegradora de los individuos y los sujetos sociales, con características irresponsables e irrefrenables, que atente contra la articulación social solidaria, sino una integración en el marco de la dialogicidad que puede ser conflictiva y, sin embargo, conducir hacia procesos de concertación social. Coincido con Jorge Luis Acanda cuando señala:

La cuestión clave al pensar la hegemonía es preguntarnos qué sujetos queremos potenciar con el desarrollo de la sociedad civil [...] La autonomía efectiva del individuo es la garantía de la posibilidad real de que la sociedad civil socialista sea el campo privilegiado de autoconstrucción de sujetos colectivos que mediante su asociatividad comprometida cuidan la comunidad política que promueve y protege sus intereses.<sup>18</sup>

Valdría la pena considerar —en el polo opuesto— la noción de *hombre de orden*, muy relacionada con la visión de la ideología como legitimación de la dominación que señala Giulio Girardi:

Aquel que concibe su desarrollo como la adhesión a una norma exterior, a un sistema de valores preexistente, a un orden moral y político, a una ley que coincide concretamente con el sistema de valores dominante en la sociedad [...] de la que forma parte [...] Su actitud fundamental es, pues, la docilidad a la ley, docilidad que exige el sacrificio de toda aspiración en conflicto con ella, aun la aspiración a la libertad.<sup>19</sup>

Así, en lugar de propiciar la conformación de un *individuo de orden* como una figura social vinculada a la institucionalidad burocrática, se trataría de proponer una subjetividad social emancipatoria, cuyo eje central sería la configuración de *autonomía integradora*.<sup>20</sup>

### Rumbos hacia la sociedad emancipatoria

La desburocratización de la sociedad implicaría la creación de espacios de autonomía integradora de los sujetos sociales, a través de formas de deliberación en colectivos e instituciones, como comunidades críticas de amplio espectro, con actores institucionalizados y no institucionalizados bajo la conducción de representantes de base. Estos moverían el enfrentamiento de los problemas de abajo hacia arriba e impulsarían y argumentarían el cambio de las normas sociales y jurídicas para dar más entrada a la voluntad económica, política y social de los diferentes actores. Entonces, las políticas armonizarían más con las expresiones de la subjetividad social, en contextos normales de contradicción y potencial o real conflictividad.

Conducida en esa dirección, la política brindaría oportunidades a la construcción de la autonomía integradora, basada en los aportes de los diferentes actores sociales, así como en sus posibilidades auto-organizativas y autopoieticas;<sup>21</sup> es decir, en condiciones en las que las iniciativas de los propios actores de base constituyen el sustento fundamental de su producción y reproducción como sistema, dentro de un marco de expresión amplio de sus potencialidades, tendientes a la búsqueda del consenso hacia objetivos compartidos y negociados de desarrollo individual y social.

La autonomía integradora configura, en nuestra elaboración, un elemento central de la construcción social de una *ética emancipatoria* dirigida a los objetivos del desarrollo humano en libertad, solidaridad y dignidad, para la realización de la justicia social, el progreso y la elevación de la calidad de vida de todos. Ello prioriza la interconectividad entre los sistemas e instituciones sociales al enfatizar los procesos de autogestión por los propios actores sociales, combinados con las acciones centrales.

En este sentido, la institucionalidad socialista dejaría de ser una esfera de acción preferencial solo del Estado. Se estructuraría a partir de la relación primordial entre los sujetos sociales autónomos y las instituciones

estatales y sociales, así como en la interacción de abajo-arriba y de arriba-abajo, en una tensión dialéctica que haría prevalecer la inclusión, los poderes compartidos, la libertad de proposición y de control popular de las decisiones, por encima del sometimiento al poder institucional burocrático; y ponderaría la creatividad colectiva, abierta a soluciones flexibles más que a la visión institucional orientada al autocumplimiento inflexible del modelo teórico-ideológico de partida. Su fin sería el de propiciar el consenso social en armonía, a partir de un propósito emancipatorio dirigido al desarrollo multilateral de las esferas de actividad social y de los individuos, con vistas a la satisfacción de las crecientes necesidades materiales y espirituales de las personas con la potenciación de sus oportunidades de autonomía, progreso y autorrealización para la construcción de proyectos de vida desarrolladores.<sup>22</sup>

El propio modelo político, económico, social y cultural de institucionalidad estaría, en tales condiciones, abierto a las aportaciones y construcciones de la ética emancipatoria y, por tanto, regido por las reconstrucciones posibles en todos los planos del conocimiento y la vida social. Se trata, entonces, de que

el poder, en lugar de reducirse a una estrategia de manipulación, deba convertirse en un dispositivo de aprendizaje [...] un proceso que desarrolle el protagonismo de los sujetos populares, su capacidad de saber y de poder [...] una posibilidad de fortalecer la constitución de un sujeto popular colectivo, aun en sus múltiples expresiones e identidades. Un espacio para construir poder, aprender a ejercerlo, percibir los límites y potenciar procesos de aprendizaje; he aquí la riqueza y el desafío de una pedagogía del poder.<sup>23</sup>

Además, sería cuestión de reconocer la importancia que desde el enfoque de la complejidad, adquieren las redes sociales como espacios que potencian la solidaridad, configuran una identidad, devienen un referente para sus participantes y, a la vez, desarrollan poderes, generan rivalidades y conflictos, enfrentan competencias.<sup>24</sup>

Esto implica la manifestación de la dinámica social en su realidad contradictoria y emergente, que solo puede encauzarse a partir de su expresión abierta y no de restricciones y sanciones extremas que, de cualquier manera, no eliminan el conflicto, sino que lo mantienen soterrado.

Al decir de Paulo Freire, se trata del paso de la conciencia mágico-intransitiva y transitiva-ingenua (formas de conciencia oprimida o falsa conciencia), hacia la transitividad crítica, que es conciencia liberadora a través del vínculo acción-reflexión-transformación.<sup>25</sup>

En la nueva institucionalidad emancipatoria, como plantea José Luis Rebellato, hay que

transformar estas redes y estos espacios, conformándolos como redes que dan libertad, es decir, factores que potencian una identidad sociocultural, fortalecen intercambios de comunicación, capacitan en la construcción de espacio y cultura democrática, ayudan a visualizar colectivamente la situación de exclusión, permiten construir estrategias y distribuir equitativamente las responsabilidades del poder y la decisión.<sup>26</sup>

Los conceptos gramscianos de hegemonía y contrahegemonía y, vinculados con ellos, los de seducción por el poder, legitimación o aceptación, consenso activo y pasivo, cultura dominante y contracultura, remiten indirectamente a las ideas de Marx y Gramsci sobre el carácter de la emancipación humana y tienen gran aplicabilidad en la configuración de institucionalidades populares democráticas.

No puede reducirse el concepto de contrahegemonía a la lucha de clases y a la sociedad capitalista. En el caso de los países que han desarrollado procesos revolucionarios, se puede dar la paradoja que sugiere Enrique Dussel y que podríamos enunciar de la siguiente manera: ¿Cómo se garantiza que en la sociedad liberada, los anteriormente excluidos del poder no generen nuevas formas de opresión o reproduzcan las anteriores?<sup>27</sup>

La nueva institucionalidad emancipatoria socialista requiere de una praxis contrahegemónica frente a, y también desde, los poderes dominantes y una tensión que obligue a reconstruir los patrones de relación habituales, ya que en el proceso de construcción de las alternativas posibles del poder popular las instituciones deben ser popularmente «vigiladas»; el funcionariado debe ser controlado por formas de participación popular democráticas que eviten la instauración —intencional o inercial— de burocracias alienadas de las necesidades e intereses de las masas populares. Esta sería una forma de evitar que la hegemonía se ejerza como un modo de dominación societal, fenómeno que ha ocurrido tanto en sociedades de totalitarismo del mercado como de socialismo estatal. Ello requeriría, según Esther Pérez,<sup>28</sup> tener en cuenta dimensiones de lo social-cultural-político insertas en cualquier sistema y modo de actividad social:

- la autonomía relativa de las opresiones de matriz cultural, que pueden reproducirse más allá de la destrucción de relaciones de opresión económicas y estructurales;
- la existencia de opresiones diversas introyectadas por los individuos y grupos humanos; y
- la reproducción del sistema mediante mecanismos de legitimación ideológica y cultural, los cuales aluden a formas de injusticia generadas por sistemas de dominación social.

No hay posibilidad de auto-organización y expresión de las fuerzas creadoras de cualquier sistema o vía de

institucionalidad social, si no se liberan sus tendencias constructivas de autonomía desarrolladora, que implica también compromiso con las finalidades concertadas e integración social en la diversidad. En este marco interpretativo se ubica el concepto de autonomía integradora que venimos desarrollando.

Visto así, la construcción de nuevas subjetividades-praxis sociales puede constituir formas de expresión de contrahegemonías emancipatorias. Estas tienen que tomar sus contenidos de los diferentes contextos institucionales en que emergen para fomentar su crítica y creatividad sistemáticas, por lo que se requiere la elaboración de normas de compromiso, consenso-concertación y responsabilidad social solidarias muy especiales.

Dicho de otro modo, las instituciones sociales, habitualmente generadoras de hegemonías diversas, deben crear las condiciones para producir sus propias contrahegemonías, pero no solo como oposición al estado actual de cosas, sino como re-creación del necesario, en su funcionamiento solidario hacia condiciones de progreso social.

## A manera de conclusión

A partir de su interpretación como contextualidades complejas, el enfoque de la institucionalidad burocrática actualiza la consideración de la multiversidad de factores explicativos en el análisis de las relaciones sistemas-entornos, al establecer un conjunto de dimensiones generales, de extensión variable, de acuerdo con su presencia en la naturaleza y dinámica de la situación concreta.

Pero no solo tiene en cuenta todas las condiciones interactuantes, sino que coloca a los sujetos (individuos, actores sociales, subjetividad social) en el centro del análisis y de la acción creadora, en tanto forman parte también el contexto construido. Ello evidencia la real dimensión hologramática, articuladora de las relaciones parte-todo, en sus movimientos de interconexión con las estructuras e historia —espacio-tiempo— del sistema-entorno.

A partir del conjunto de los vínculos significativos se hace posible el análisis de la complejidad de los «momentos-situación» objetivos-subjetivos y su comparación diferencial para formar un cuadro integrador y de proyecciones de la dinámica del sistema-entorno, desde sus procesos autorganizados, así como en sus constricciones, limitaciones y potencialidades.

Por otro lado, el uso de la categoría *autonomía integradora* como expresión de la tendencia natural-intencional del sistema humano-institucional refuerza la idea de que los procesos autorganizados, para

llegar a ser constructivos y neguentrópicos (creativos, contrarrestantes de su propia disolución), tienen que articular su capacidad de autonomía con la posibilidad de identidad e integración del sistema —autorreferencialidad— para obtener estados de balance entre caos y equilibrio posible en medio de situaciones de desarrollo potencial.

De manera que se propone que la dirección de desarrollo de institucionalidades no burocráticas, como relaciones sistema-entorno, analizadas en sus contextualidades complejas, deba enmarcarse en un rumbo de realización de grados sucesivos de autonomía integradora de sus actores y procesos dinamizadores. Si es así, en los sistemas sociales y humanos ubicados en contextualidades complejas la tendencia de desarrollo, en su condición de eticidad, tiene que expresar la posibilidad de construcción de libertad humana en diferentes formas de subjetividades y praxis emancipatorias; es decir, en una acción y conciencia libres, orientadas al bien público —léase el bien de las mayorías excluidas, con los grados de concertación de otras capas sociales para su integración.

## Notas

1. A diferencia de la teoría del «corte epistemológico» althusseriano —muy debatido en su época— diversos autores han puesto de manifiesto que entre las obras «juveniles» y las «maduras» de Marx (por ejemplo, entre los «Manuscritos» del 44 y *El Capital*) existe una diferencia de énfasis y de profundización de determinadas vertientes de su objeto de estudio, pero que siempre estuvieron presentes las dimensiones económicas y sociopolíticas de la alienación, para proyectarlas en una imagen integradora de emancipación social humana. Véase Carlos Marx, «Manuscritos económico-filosóficos de 1844», *Escritos económicos varios*, Grijalbo, México, DF, 1961; *El Capital*, t. I., Ediciones Venceremos, La Habana, 1965.
2. Sobre este concepto, véase Ovidio D'Angelo, «Contextualidades complejas y subjetividades emancipatorias», ponencia presentada al IV Seminario Internacional de Complejidad, La Habana, 2008.
3. Max Weber, *Economía y sociedad*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971.
4. Este es un concepto que fundamentamos en la noción de contextualidad compleja, que refleja la trama compleja de análisis del momento concreto en un país concreto, habida cuenta de sus multirrelaciones y determinaciones, incluidas las dimensiones de subjetividades sociales y emergencias en el interior del propio sistema. Véase Ovidio D'Angelo, ob. cit.
5. Max Weber (ob. cit.), a lo largo de su obra, señala los siguientes rasgos de la organización burocrática: a) carácter legal de las normas y de los reglamentos; b) carácter formal de las comunicaciones; c) racionalidad en la división del trabajo; d) impersonalidad en las relaciones de trabajo; e) jerarquía bien establecida de la autoridad; f) rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales; g) competencia técnica y meritocrática; h) especialización de la administración y de los administradores, como una clase separada y diferenciada de la propiedad (los accionistas);



Ovidio D'Angelo Hernández

i) profesionalización de los participantes; j) completa previsibilidad del funcionamiento.

6. Las organizaciones populares surgidas en el primer momento revolucionario se van convirtiendo en estructuras centralizadas orientadas desde el Estado-Partido con objetivos nacionales que muchas veces no responden a las problemáticas de las localidades y colectivos específicos. Aunque mantienen el vínculo entre lo macro y lo micro, sus espacios de participación se formalizan en extremo, lo que impide una expresión social más aportadora.

7. Véase Adolfo Sánchez Vázquez, *Entre la realidad y la utopía*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, pp. 13-4.

8. Max Weber, ob. cit.

9. Véase Michel Foucault, *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Tecnos, Madrid, 1981; *Power-Knowledge*, Pantheon Books, Nueva York, 1980.

10. Michel Foucault, «Modelo burocrático de organización», disponible en [www.monografias.com](http://www.monografias.com).

11. Para un interesante análisis de este doble fenómeno de poder-sedución, como componentes de la legitimación de la hegemonía, véase Jorge Luis Acanda, «Luces y sombras, la apropiación de Gramsci en Cuba en el último decenio», en *Hablar de Gramsci*, Centro Juan Marinello, La Habana, 2003; Antonio Gramsci, *Quaderni dal carcere*, Einaudi, Turín, 1975 y *Antología*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.

12. Véase Pablo Navarro, *El holograma social*, Siglo XXI Editores, Madrid, 2001; Edgar Morín, *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona, 1990.

13. El término, empleado en los enfoques de complejidad, se refiere al estatuto relativo, en el nivel epistémico, de las determinantes objetivas y subjetivas, también intersubjetivas, en la «construcción» o interpretación de la realidad dada; de manera que la sitúa en la interrelación concreta de sus articulaciones en esas dimensiones interactuantes.

14. Véase Ovidio D'Angelo, ob. cit.; Boaventura de Souza Santos, *Reinventar la democracia, reinventar el Estado*, Editorial José Martí, La Habana, 2005.

15. Véase Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona, 1994; Jorge Wagensberg, *Ideas sobre la complejidad del mundo*, Tusquets, Barcelona, 1998.

16. Véase Pedro Luis Sotolongo, *Teoría social y vida cotidiana. La sociedad como sistema dinámico complejo*, Publicaciones Acuario, La Habana, 2006.

17. Edgar Morin, *El método 6: La ética*, Cátedra, Madrid, 2003.

18. Véase Jorge Luis Acanda, ob. cit., p. 134.

19. Véase Giulio Girardi, *Por una pedagogía revolucionaria*, v. 1, Editorial Caminos, La Habana, 1998, pp. 21-2.

20. Véase Ovidio D'Angelo, *Autonomía integradora. El desafío ético emancipatorio de la complejidad*, Publicaciones Acuario, La Habana, 2005.

21. Véase Frank Capra, *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*, Anagrama, Barcelona, 1998; Nicles Luhman, *Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general*, Alianza Editorial/Universidad Iberoamericana, México, DF, 1991.

22. Para un enfoque articulador psicológico y social de estos conceptos claves, véase Ovidio D'Angelo, *PROVIDA. Autorrealización de la personalidad*, Academia, La Habana, 1993; *El desarrollo personal y su dimensión ética. Fundamentos y programas de educación renovadoras*, PRYCREA III, La Habana, 1996; «Sentido de vida, sociedad y proyecto de vida», en *Problemas de la ética*, t. 1, Publicaciones Acuario, La Habana, 2000; *Educación, sociedad y desarrollo humano*, Ediciones Acuario, La Habana, 2001; *Autonomía integradora...*, ed. cit.

23. José Luis Rebellato, *Antología mínima*, Editorial Caminos, La Habana, 2000, pp. 35, 46, 50; véase también Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*, Siglo XXI Editores, México, DF, 1982; *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI Editores, México, DF, 1985.

24. José Luis Rebellato, ob. cit., p. 16.

25. Paulo Freire, obs. cit.

26. Ídem.

27. Enrique Dussel, *Ética de la liberación en la Edad de la globalización y la exclusión*, Trotta, Madrid, 1998.

28. Esther Pérez, «Qué es hoy la Educación Popular entre nosotros», *Caminos*, n. 20, La Habana, 2000.

© TEMAS, 2011

# ¿Existe una Iglesia católica cubana fuera de Cuba?

**Enrique López Oliva**

*Periodista e historiador. CEHILA-CUBA.*

Llegó a nuestras manos, gracias a la revista *Temas*, una obra sobre los católicos cubanos en los Estados Unidos. Se trata de *Cuban Catholics in the United States, 1960-1980. Exile and Integration*,\* del investigador Gerald E. Poyo, actualmente profesor de Historia de St. Mary's University, en San Antonio, Texas.

Según el autor, escribió el libro para

entender un poco el proceso de formación de la comunidad cubana en los Estados Unidos [...] usando los católicos como un *case studio* (caso de estudio) [y] explorar cómo las ideas de «exilio» e «integración» surgieron y coexistieron entre los cubanos durante esa época.

Poyo vio a los católicos como «un grupo activista, visible, y con muchas publicaciones».<sup>1</sup>

El libro, además de una introducción del autor, comprende nueve capítulos: «Reforma y Revolución», «Traición y disidencia», «Comunidad de fe», «Identidad e ideología», «La cuestión social», «Una guerra justa y necesaria», «Etnicidad y derechos», «Católicos hispanos

en los Estados Unidos» y «Diálogo». A estos se añaden un epílogo y una amplia bibliografía que incluye materiales de archivos, informaciones tomadas de diversos medios, historias orales, entrevistas y comunicaciones de veintidós personalidades: académicos y actores políticos de la comunidad cubana —entre los últimos concurren tres sacerdotes católicos y un prelado estadounidense (Mons. Bryan Walsh<sup>2</sup>).

Siempre que leo un libro sobre historia del cristianismo viene a mi mente una cita del célebre teólogo de la antigüedad, Aurelio Agustín,<sup>3</sup> quien representó un puente entre el llamado Mundo antiguo y la civilización cristiana, y fuera llevado a los altares católicos con el nombre de San Agustín. En su obra *Confesiones* (de 397 d.C.) escribió:

Cuando se narran acontecimientos pasados que sucedieron realmente, no se atraen a la memoria los acontecimientos propiamente sucedidos, sino aquellos conceptos que, sugeridos por sus imágenes y tamizados a través de los sentidos, se imprimieron como huellas en el alma.<sup>4</sup>

La historia de la Iglesia católica en Cuba en los últimos cincuenta años ha estado marcada por

\* Gerald E. Poyo, *Cuban Catholics in the United States, 1960-1980. Exile and Integration*, Institute for Latino Studies, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2007.

desgarramientos, en gran medida reflejos de los cambios provocados por la radicalidad de la Revolución cubana.<sup>5</sup> Entre estos desgarramientos figuró la separación de un sector importante de creyentes, contrario al proyecto de cambios políticos y sociales emprendidos por la Revolución, que abandonó su patria y se dirigió, principalmente, hacia los Estados Unidos. Muchos de los integrantes del grupo trataron de estructurar un contraproyecto político y se proclamaron «contrarrevolucionarios».

Durante su primera etapa, el exilio cubano en los Estados Unidos estuvo caracterizado por un anticomunismo militante y un catolicismo de corte conservador, inspirado en varias encíclicas papales, en especial la *Divini Redemptoris* (1937) de Pío XI —que percibía al comunismo como «intrínsecamente perverso»<sup>6</sup>—, e influido ideológicamente por el impacto de las revoluciones bolchevique y mexicana<sup>7</sup> y, por la Guerra civil española, así como por la política de guerra fría apoyada por la jerarquía católica estadounidense. En ella se destacó el Arzobispo de Nueva York y cardenal Francis Spellman, que ordenó al primer sacerdote cubano en el exilio, Daniel Sánchez, en agosto de 1962. (p. 95)

Esta caracterización resulta incomprensible si no recordáramos quiénes eran sus principales guías espirituales antes de salir del país. Habría que señalar que, en 1959, alrededor de 70% del clero católico en Cuba era de origen español. Muchos habían pasado por el trauma de la Guerra civil (p. 123), algunos combatiendo en las filas de la Falange franquista contra «los rojos» y solo unos pocos —en especial del clero vasco— en el campo republicano, los llamados «curas rojos», que después permanecerían, casi todos, en Cuba. Entre estos últimos se destacó el franciscano Ignacio Biain,<sup>9</sup> quien fuera director de la revista *La Quincena*, y mostrara sus simpatías hacia el proceso revolucionario. Permaneció en la Isla hasta su muerte en 1963, pues se negó a aceptar las presiones de sus superiores para que saliera del país.

El anticomunismo en lo político y el conservadurismo en la fe católica, que distinguió a aquellos primeros exiliados a partir de 1959, no impidió que sectores minoritarios de esta emigración asumieran posiciones diferentes ante el hecho revolucionario cubano y realizaran diversas lecturas del suceso. Fueron estos los que buscaron, por diversas vías, un acercamiento hacia los cubanos de la Isla; lograron la creación de organizaciones con tales fines, como la Brigada Antonio Maceo y de publicaciones como la revista *Areíto*. Su enfoque del asunto y las intervenciones públicas los situaron en la posición de tener que enfrentar el rechazo y la hostilidad de la mayoría «exiliada», que llegó a extremos como emprender acciones violentas

contra ellos, incluyendo al asesinato de algunos de sus miembros, como Carlos Muñiz Varela en abril de 1979.

Surgieron, incluso, pequeños grupos de jóvenes cristianos con inquietudes sociales, que bajo la influencia del pensamiento y la acción del sacerdote guerrillero y sociólogo colombiano Camilo Torres Restrepo, y al calor de la incipiente Teología Latinoamericana de la Liberación —vista por los conservadores como un caballo de Troya de los comunistas dentro de la Iglesia—, abogaron por una «Revolución cristiana, no comunista», para enfrentar la creciente pobreza y la injusticia social en Latinoamérica (p. 207). Llegaron a apoyar la elección del socialista Salvador Allende como presidente de Chile.

Acercarnos a esa «otra Cuba» —como se le ha llamado—, instalada en los Estados Unidos, no es tarea fácil para los que vivimos en la Isla. La distancia es no solo geográfica; está teñida por dolorosas y profundas rupturas que dividieron a muchas familias y condujeron a enfrentamientos fratricidas violentos. Recuérdese la expedición por Bahía de Cochinos de 1961, organizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para la cual se logró movilizar a muchos miembros de organizaciones católicas de la comunidad cubana residente en los Estados Unidos, los cuales llevaban, en una manga de la camisa del uniforme, un escudo con una cruz sobre la isla de Cuba, y el lema: Dios, Patria y Libertad. En la expedición armada participaron tres sacerdotes católicos —ninguno nacido en Cuba— y un ministro evangélico.

Lo interesante es que, pese al dolor y la violencia que nos han marcado, continúan existiendo lazos entre los cubanos de ambas orillas y permanecen inquebrantables muchos afectos.

¿Cómo se vieron a sí mismos los católicos cubanos que se marcharon de Cuba, por razones políticas, después de 1959? La respuesta a tal interrogante es, en nuestra opinión, el principal aporte de este serio estudio académico, que trasciende la estrechez de los condicionamientos políticos e ideológicos, para ofrecernos un rico, tenso y dinámico panorama histórico de una comunidad establecida fuera de su territorio nacional, obligada a adaptarse a una serie de códigos nuevos que incluyó la adopción de una lengua diferente y distante de la materna, y de hábitos de vida enraizados en otra cultura religiosa: el protestantismo. Un grupo que inicialmente pensó que abandonaba la Isla por corto tiempo para retornar a restablecer su forma de concebir Cuba, inspirada en el modelo pre-revolucionario.

El primer grupo que abandonó la Isla en los diez primeros años luego del triunfo revolucionario se consideró a sí mismo «exiliado» y no «emigrado»,

pues confiaban en un pronto retorno que «nunca se materializó» (p. 184). Solo unos pocos de los que murieron fuera de su terruño lograron que sus familiares repatriaran sus restos, luego de engorrosos y costosos trámites; la mayoría fueron y siguen siendo enterrados lejos del lugar donde nacieron.

El presidente histórico de Democracia Cristiana en el exilio, Dr. José Ignacio Rasco, antiguo profesor de Cívica en el Colegio de Belén en Cuba, insistía en 1969: «No debemos abandonar nuestro deseo de un futuro retorno» (p. 156). Con él tuve oportunidad de conversar ampliamente en varias ocasiones en Miami —ciudad considerada «la segunda capital de los cubanos». En esos intensos y honestos ratos el viejo profesor criticó algunas de sus actitudes de aquellos primeros años de exilio, y declaró su deseo de volver a Cuba algún día.

Pudiéramos preguntarnos si existen dos Historias de Cuba: la escrita en la Isla, y la de los cubanoamericanos, recreada por el contexto en el cual, según quién lo interprete, escogieron vivir o los obligaron a ello. Poyo se detiene en un aspecto poco abordado por los estudiosos que encaran este complejo proceso: el papel desempeñado por la religión católica, tal como fue interpretada y vivida por esos feligreses cubanos que se establecieron en los Estados Unidos, y trasladaron sus formas de religiosidad, pastorales, asociaciones laicales, escuelas, organizaciones políticas de inspiración católica (surgirían nuevas en el exilio), publicaciones, etc. Para preservar sus costumbres y hábitos, sus jerarquías sociales y de valores, así como retener una identidad, que amenazó con desintegrarse y ser absorbida por la cultura dominante estadounidense, se aferraron a un pasado que iba poco a poco borrándose de la memoria; intentaron retenerlo mediante la recreación de símbolos y narrativas que pretendían mantener vivo lo que ellos consideraban propiamente «cubano», tan difícil de transmitir a sus hijos formados o nacidos en los Estados Unidos, con escasos contactos con el país de origen.

Según Poyo, surgieron «escuelas cívico-religiosas» en las parroquias católicas de asistencia mayoritariamente cubana, con el objetivo de proveer «un contexto nacional y cultural» a los niños de la comunidad cubana, para mantenerles vivo el recuerdo de la patria. A partir de 1979 se organizaron peregrinaciones a San Agustín, en la Florida, lugar donde falleció, en 1853, el sacerdote patriota cubano Félix Varela, y se fomentó la devoción a la patrona del pueblo cubano, la Virgen de la Caridad del Cobre, a la cual se le dedicó una ermita, consagrada por el cardenal de Filadelfia, John Krol, el 2 de diciembre de 1973, que se convertiría en un centro religioso y espiritual de particular importancia para los católicos cubanos del sur de la Florida y otros insertados en el extenso territorio estadounidense.<sup>9</sup>

El simbolismo encarnado por la Patrona de Cuba merece especial interés para no pocos estudiosos de la

temática cultural-religiosa cubana. Para la mayoría de los nacidos en la Isla y no pocos de los que lo hicieron en el exterior, de madre o padre cubanos, la Virgen de la Caridad se erige como el símbolo por excelencia de la cubanidad. Trasladarse hasta la basílica dedicada a ella, en el poblado santiaguero de El Cobre, tiene algo de cálida aventura, acto semejante a la hipotética vuelta al seno materno.<sup>10</sup>

Se ha hecho cada vez más frecuente encontrar allí, en cualquier época del año, a cubanos residentes en el exterior, cuyo viaje a los orígenes identitarios pasa por el reencuentro con la «virgen mambisa», como también se le conoce. Por eso, no es azaroso que la ermita construida en Miami mire hacia la Isla, ni que el sitio sea de casi obligada peregrinación para aquellos que llegan de la Isla en visitas familiares (pp. 105-7).

Pero no todo fue fácil para los exiliados cubanos en los Estados Unidos; no siempre hallaron acogida y comprensión, idea errónea que suele a veces tenerse en Cuba. En 1972, Monseñor Coleman Carrol prohibió al sacerdote cubano Ramón O'Farril realizar una invocación en español en una ceremonia ecuménica celebrada durante la Convención anual del Partido Republicano, y removió al sacerdote Jorge Bez Chabebe, primer presidente de la Asociación de Clérigos Hispanos, por sus denuncias contra el comunismo y por su apoyo «a la causa cubana» (pp. 196-7).

Durante los 60 y los 70, los católicos cubanos en el sur de la Florida construyeron una comunidad dependiente en la fe, valores y tradiciones [...] de su lugar de origen» y «recrearon su nuevo mundo en exacta imagen de su lugar de origen», afirma Poyo (p. 119). Pero ello no debiera entenderse como que la comunidad no encontraría fuertes obstáculos en sus propósitos de conservarse identitariamente. En un primer momento, los católicos cubanos chocaron con una Iglesia católica estadounidense marcada por la mentalidad de origen irlandés, que inicialmente no aceptó en su seno a las organizaciones católicas trasplantadas desde la Isla. No obstante, en 1961 los cubanos establecieron un Comité de Organizaciones Católicas en el Exilio, con el cual se enfrentaron al Obispo de Miami, Carroll, y a su equipo diocesano, quienes no veían con buenos ojos el surgimiento, de facto, de una «iglesia étnica», con una «específica agenda política» en la Florida (p. 191).

Se trató de someterlos a las estructuras diocesanas de la Iglesia católica estadounidense, «americanizarlos», rechazando, en un principio, la realización de cultos religiosos en español, resistiéndose a la incorporación, en sus estructuras, de los obispos que abandonaban la Isla, e incluso manteniendo en posiciones marginales al clero procedente de Cuba.<sup>11</sup>

Hasta el papado, al corriente del conflicto, vio con reservas lo que llegó a considerarse una actitud

extremista de los católicos cubanos residentes en los Estados Unidos, quienes reclamaron el apoyo de esta frente a la jerarquía católica estadounidense, así como respecto a su política de enfrentamiento con el gobierno revolucionario cubano. Este último, mantuvo relaciones oficiales con la Santa Sede, aunque esta apoyó con firmeza a la Iglesia católica de la Isla.

Por intermedio de su representante en La Habana, especialmente Monseñor Cesare Zacchi (rechazado por el exilio), el Vaticano intentó frenar el éxodo de católicos de la Isla, y mediar con las autoridades revolucionarias ante las diferencias y contradicciones que surgieron con la Iglesia. Estas se debieron a los efectos de medidas como la estatización de las escuelas católicas, en el marco de la nacionalización del sistema de enseñanza, y las confrontaciones derivadas de una política ideológica ateizante, además de la utilización del espacio religioso cubano por opositores políticos al gobierno de la Isla.

Los opositores políticos al nuevo gobierno, luego del aplastamiento de las organizaciones contrarrevolucionarias en la Isla, intentaron convertir a la Iglesia católica en Cuba en «un partido de oposición», a lo que se negaron la jerarquía y el clero cubanos, por lo que fueron acusados por sectores católicos del exilio de debilidad y de confabulación con el gobierno revolucionario.

En 1969 la Fraternidad del Clero y Religiosos de Cuba en la diáspora envió una carta al Secretario de Estado de la Santa Sede, que expresaba su inconformidad con la política seguida hacia el gobierno revolucionario y el mantenimiento de relaciones diplomáticas con este (p. 170).

El papado renovador de Juan XXIII (1958-1963), llamado por los conservadores «el Papa rojo», abrió la posibilidad a los católicos de dialogar con los marxistas —lo que rechazarían los cubanos del exilio, firmes anticomunistas. La celebración en Roma del Concilio Vaticano Segundo (1962-65), iniciado por ese pontífice y culminado por Pablo VI, propició un proceso de *aggiornamento* (puesta al día) de la Iglesia; y la realización en Medellín (Colombia) de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM, 1968), para poner en práctica, en América Latina, los acuerdos del Concilio.

La aparición, a principios de los años 70, de la Teología Latinoamericana de la Liberación —en alguna medida inspirada en la Revolución cubana—, más cambios ocurridos en los propios Estados Unidos a consecuencia del Movimiento Pro Derechos Civiles de la población afroestadounidense; la elección, por primera vez, de un presidente católico en los Estados Unidos; los asesinatos de John F. Kennedy (1963), Malcolm X (1965), el reverendo Martin Luther King, Jr.

(1968), y Robert Kennedy (1968); así como la sucesión de golpes militares en América Latina, auspiciados por los Estados Unidos, fueron hechos que tener en cuenta para visualizar el cambiante contexto en que se desenvolverían los católicos cubanos exiliados.

No obstante, como muestra Poyo en su investigación, los exiliados cubanos desarrollaron diversas estrategias de lucha contra la incipiente Revolución cubana: momentos de lucha armada, presiones diplomáticas, discursos políticos y *lobbys* ante el gobierno estadounidense para tratar de favorecer su agenda política (pp. 174-80). Pero hubo cubanos que «por razones morales» se opusieron «a asesinatos y acciones terroristas» (p. 158).

## El diálogo: ¿posible o imposible?

Las reiteradas visitas de cubanoamericanos a la Isla, rechazadas por el sector más radical del exilio, así como los diálogos iniciados a partir de 1978 entre representantes del gobierno cubano y de las comunidades cubanas residentes en el exterior abrieron una controversia que no solo tuvo manifestaciones violentas, sino que complejizó aun más las casi inexistentes relaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos.

La creciente población cubana que abandonó la Isla —mayoritariamente blanca— llevaría a tratar de definir su lugar en los Estados Unidos en los 70. Los pocos afro cubanos que emigraron por entonces se enfrentaron —incluso aquellos que se habían comprometido con la causa del exilio— a una «doble discriminación». Tal fue el caso del cubano negro Sergio Carrillo, quien trabajaba en Cuba con la Agrupación Católica Universitaria, y después se unió a la invasión de Bahía de Cochinos. Carrillo reconoció que en la Florida tenía dificultad para encontrar empleo, se enfrentaba con carteles que decían: «No perros, no negros» y con baños segregados, razón por la cual muchos negros y mulatos cubanos se mudaron al norte de los Estados Unidos (p. 204).

Con el tiempo, las divisiones se acentuaron, sobre todo después de la llegada de nuevos emigrados procedentes de Cuba. No dejó de preocupar a los líderes católicos del exilio que cubanos blancos abandonaran la práctica ortodoxa católica y se vincularan a religiones cubanas de origen africano (pp. 200-2).

La comunidad católica del exilio buscó en la población hispana católica una conexión y un aliado para ampliar su influencia en la sociedad estadounidense. No obstante, le censuraron la simpatía con la cual muchos líderes de movimientos de origen hispano veían el proceso revolucionario cubano; especialmente a los de la población mexicano-estadounidense les criticaban

que «vieran a la Revolución cubana [como] aceptable alternativa a la opresiva pobreza en los Estados Unidos» (p. 216).

Muchos cubanos exiliados encontraron en su catolicismo —como señala Poyo— un asidero «de ideas y de prácticas» para asumir el dilema que afrontaron en todos los órdenes; no solo las consecuencias de la Revolución, sino significativas reformas dentro de su propia Iglesia, y turbulentos acontecimientos en los Estados Unidos y América Latina.

Va siendo hora de que los académicos cubanos de la Isla nos aproximemos con seriedad y políticamente desprejuiciados —aunque podamos en algunos aspectos no estar de acuerdo—, a esta «otra Cuba», tan diferente a la nuestra y a la cual, sin embargo, no somos del todo extraños, como tampoco a ellos les somos tan ajenos. Obras como la de Gerald E. Poyo ayudan, sin dudas, a entender esa otra Cuba en su complejidad, al sistematizar un complejo proceso que, hasta el momento, se nos pierde.

No son pocos los impedimentos para trasladarnos entre ambos lugares —sobre todo para los cubanos de la Isla—, ni las serias limitaciones con la bibliografía. Solo una pequeña parte de la producción intelectual de los cubanos de dentro se conoce en los Estados Unidos, y viceversa. Por ahora nos unen más la música, los tostones y las remesas económicas que los libros.

Ojalá no esté lejos el día en que exista en Cuba una colección de textos publicados fuera de de sus fronteras geográficas, similar a la que tuvo el Fondo de Cultura Económica de México, que atesoró y difundió todo lo que se publicaba en el exterior sobre ese país.

Conocer las percepciones que tienen otros sobre nosotros es un paso importante hacia el conocimiento propio e indudablemente ayuda a corregir errores —todos los humanos los tenemos—, y a vincularnos con ese «otro mundo» que tanto tiene que ver con el nuestro. De ahí la importancia, para los cubanos de la Isla y del resto del mundo, de poder acceder a ensayos como *Cuban Catholics in the United States...*, de Gerald E. Poyo.

## Notas

1. Comunicación por e-mail del profesor Gerald E. Poyo al autor de esta nota, 16 de abril de 2010.
2. Monseñor Bryan Walsh fue director en Miami de Caritas Católicas-Chatolic Charities, y figura clave en la llamada Operación Peter Pan, que trasladó hacia los Estados Unidos a unos 14 000 niños cubanos, entre 1962 y 1963.
3. Aurelio Agustín (354-430), nacido en Tagaste, provincia romana de Numidia, actual Túnez.
4. Véase *Atlas Universal de Filosofía*, Océano, Barcelona, 2008, p. 684.
5. Véase Enrique López Oliva, «La Iglesia católica y la Revolución cubana», *Temas*, n. 55, La Habana, julio-septiembre de 2008, pp. 138-151.
6. Véase Gerald E. Poyo, ob. cit., p. 122. En lo adelante, solo se señalará la página de referencia a la obra reseñada.
7. Véase Enrique López Oliva, «La Iglesia católica y la Revolución mexicana», *Temas*, n. 61, La Habana, enero-marzo de 2010, pp. 49-60.
8. Véanse varias referencias a Biain en Gerald E. Poyo, ob. cit., pp. 35, 39-40, 42, 48, 54, 62 y 248.
9. Este autor tuvo ocasión de visitarla, y allí conversar con quien fuera, durante mucho tiempo, su capellán, el cubano Monseñor Agustín Román, que llegó a ser Obispo auxiliar de Miami y desempeñó un importante papel dentro de la comunidad católica cubana exiliada.
10. Véase Thomas A. Tweed, *Our Lady of the Exile. Diasporic Religion at a Cuban Catholic Shrine in Miami*, Oxford University Press, Nueva York, 1997.
11. Este fue el motivo por el cual Monseñor Eduardo Boza Masvidal, antiguo Obispo auxiliar de La Habana, se vio obligado a realizar su ministerio en una parroquia en Los Teques (Venezuela). Véase Gerald E. Poyo, ob. cit., pp. 269-70.

© TEMAS, 2011

# Cuba-Estados Unidos: ¿es posible una relación distinta?

**Carlos Alzugaray Treto**

*Profesor. Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Universidad de La Habana.*

Daniel P. Erikson pertenece a una joven generación de latinoamericanistas estadounidenses. Después de una trayectoria de diez años, que lo llevó a colaborar con dos de los más importantes tanques pensantes de la élite del poder —Diálogo Interamericano (DI) y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR)—, fue designado, en junio de 2010, *Senior Advisor for Policy* (Asesor político principal) en el Buró de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.

Erikson ha estado trece veces en Cuba. La primera, en el año 2000, cuando aún hacía su maestría en Políticas Públicas en Harvard. Ha escrito más de sesenta artículos, casi todos referidos a asuntos cubanos. Ha coeditado el volumen *Transforming Socialist Economies: Lessons for Cuba and Beyond*. No hay dudas de que tiene las credenciales necesarias para producir un buen texto y tener éxito en lo que parece ser su objetivo principal: influir en la dirección de la política futura de los Estados Unidos hacia Cuba.

Su libro más reciente,\* ha sido recomendado por Jorge I. Domínguez, Brian Lattel y Julia E. Sweig,

\* Daniel P. Erikson, *The Cuba Wars: Fidel Castro, the United States and the Next Revolution*, Bloomsbury Press, Nueva York, 2008.

todos reconocidos especialistas en temas cubanos provenientes de varios sectores del espectro político. La revista *Foreign Affairs*, órgano del CFR, elogió la obra en los siguientes términos:

Con esta fresca, astuta y comprensiva exploración de dos décadas de relaciones Estados Unidos-Cuba, Erikson emerge como una valiosa voz nueva en los círculos de política exterior de Washington [...] *Las guerras de Cuba* es un llamado elocuente para respuestas más realistas y decentes que ayuden en vez de castigar aún más al largamente sufrido pueblo cubano.<sup>1</sup>

El propio Erikson se refiere a su libro como una combinación de análisis político y reportajes de primera mano.<sup>2</sup> Se fundamenta en el conocimiento que tiene su autor de los órganos de formulación de política exterior de Washington, cerca de cincuenta entrevistas a actores claves y una bibliografía selecta. Por haber sido publicada en un año electoral (2008) estuvo diseñada fundamentalmente para tener un impacto sobre la política del que resultara electo presidente.

El volumen está pensado para el lector norteamericano, preferiblemente vinculado al proceso de formulación de política, aunque con pasajes de interés para un público

más amplio. Ello genera algunas omisiones llamativas. La perspectiva cubana de la relación con los Estados Unidos pudo ser más abordada. Entre las fuentes y entrevistas utilizadas, no aparecen las de los académicos cubanos que trabajan en la Isla, ni de los funcionarios del gobierno, a los que Erikson seguramente tuvo acceso.

La obra describe con habilidad contextos y lugares, y posee una prosa clara y atractiva. Está organizada en doce capítulos. El primero, «Die Another Day» (Morir otro día), aborda el período que va desde el anuncio de la enfermedad del Comandante Fidel Castro, el 31 de julio de 2006, hasta la elección oficial de Raúl Castro para sustituirlo, en 2008.

El autor pone de relieve las actitudes peculiares de altos funcionarios del gobierno norteamericano en relación con Cuba. Caleb McCarry (coordinador para la transición cubana en el Departamento de Estado) le confesó que no le gustaba ocuparse de situaciones hipotéticas, cuando su cargo estaba basado precisamente en una de ellas: la ansiada «transición cubana hacia la democracia» (p. 23). Por otra parte, cita al director nacional de Inteligencia, John Negroponte, el 14 de diciembre de 2006, quien aseguró públicamente que la información de inteligencia que poseían los Estados Unidos indicaba que Fidel no duraría más de unos meses (p. 24). No obstante, Erikson afirma que el gobierno cubano había quedado en un «estado de animación suspendida», debido a la ausencia de Fidel, sin tener ninguna fuente directa en la que basar semejante aserto (p. 17). Lo anterior no le impide sentenciar juiciosamente:

A principios de 2008, Fidel Castro trastornó una vez más las predicciones ominosas sobre el fin de su vida. Al renunciar, unos días antes de la sesión de la Asamblea Nacional del 24 de febrero, se posicionó como supervisor de la misma transición de poderes a su hermano Raúl que sus enemigos fuera de Cuba habían jurado impedir a toda costa. Su éxito garantizó que tanto la próxima generación de nuevos líderes cubanos como el sucesor de Bush en la Casa Blanca tuvieran que heredar el casi medio siglo de lucha entre los Estados Unidos y Cuba» (p. 25).

El segundo capítulo «War of Nerves» (Guerra de nervios), intenta resumir la historia de las relaciones entre Washington y la Revolución cubana hasta la primavera de 2003. En él se demuestra el nivel de injerencia en los asuntos internos cubanos durante los primeros años de la administración Bush, en particular por las acciones provocadoras de James Cason, Jefe de la Sección de Intereses en La Habana. Estas últimas llevaron a una situación de suma tensión en Cuba que condujo a varios secuestros de aviones. El gobierno cubano tomó enérgicas medidas contra los ciudadanos que se habían prestado a esas maniobras. El propio Erikson reconoce el peligro cuando termina

escribiendo: «Fidel Castro y su régimen sobrevivieron para luchar otro día» (p. 53).

En este capítulo, acepta una vieja tergiversación de los orígenes del conflicto entre la administración Eisenhower y el Gobierno revolucionario, al afirmar que aquel reaccionó ante la expropiación de empresas norteamericanas y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. En realidad, como lo prueban numerosos documentos publicados, Eisenhower decidió deshacerse de Fidel Castro ya desde junio de 1959 y el motivo esencial estuvo en el curso independiente que siguió Cuba tanto en lo interno como en lo externo, y no en ninguna medida concreta que se hubiera tomado contra intereses legítimos de los Estados Unidos.<sup>3</sup>

Por otra parte, el autor considera que el gobierno cubano reaccionó con excesiva represión ante delitos evidentes de colaboración con la estrategia de «cambio de régimen» del gobierno norteamericano. Aun cuando pueda pensarse que las penas impuestas fueron excesivas, las autoridades de La Habana habían actuado hasta entonces con sensatez, demorando varios años la aplicación de una ley aprobada en 1999, precisamente para contrarrestar los efectos de la Ley Helms Burton de 1996; y solo lo hicieron cuando percibieron un peligro inminente.

El siguiente capítulo, «The Dissenters» (Los discrepantes), trata de presentar la cara amable de los ciudadanos que se prestaron para las maniobras de Cason. Erikson repite lugares comunes, sin exponer los argumentos del gobierno cubano. No es cierto, por ejemplo, que este haya «ejecutado, encarcelado o expulsado hacia el exilio a muchos de los oponentes del nuevo gobierno desde los primeros días de su arribo al poder» (p. 57). Entonces, se cumplió con la promesa de hacer justicia con los asesinos y torturadores, ladrones y malversadores del régimen de Batista.

Sin embargo, este capítulo critica la política de «financiar la democracia» puesta en vigor por George W. Bush, y la contradicción que implica mantener el bloqueo al tiempo que se pretende fomentar la subversión en el país por medio de programas de ayuda a la llamada disidencia. (pp. 74-5).

El capítulo 4, «The Empire Strikes Back» (El Imperio contraataca), narra las medidas para crear la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre, presidida por Colin Powell, con el objetivo de proponer un plan para acelerar «el cambio de régimen» y «ayudar al pueblo cubano» después de derrocado el gobierno.

Como señala Erikson, lo que más llama la atención del Informe de la Comisión Powell es que «si bien promovía claramente muchas de las mismas presunciones sobre Cuba que probaron ser tan erróneas en Iraq, fue escrito durante un período en el cual el esfuerzo de los Estados Unidos en el golfo Pérsico estaba desarticulándose».



El autor opina que, para el verano de 2004, nadie pensaba que una acción militar contra Cuba estuviera sobre el tapete (p. 89). Sin embargo, en su entrevista con Roger Noriega, excolaborador del senador Jesse Helms, este afirma que fue partidario de invadir a Cuba, como se hizo con Haití ese año. Como señala el hoy Asesor político principal del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la política de Bush hacia Cuba tenía como escenario preferido «la rápida desaparición del régimen de Castro y su sustitución por un gobierno democrático proestadounidense» (p. 91). Erikson reconoce, sin embargo, que «aunque no hay evidencia de que una invasión a Cuba por los Estados Unidos fuera jamás considerada seriamente por la administración Bush, hay varias razones por las cuales tal premisa podría ser considerada como muy plausible en La Habana» (p. 103).

Para el autor, la comunidad cubana en la Florida ha comenzado a cambiar y a ello se refiere en el capítulo 5, «The Community» (La comunidad). Hace un esfuerzo por presentar varios puntos de vista y así entrevista al presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, José «Pepe» Hernández; a la directora del Consejo para la Libertad de Cuba, Ninoska Pérez Castellón; al presidente del Grupo de Estudios Cubanos, Carlos Saladrigas; y al candidato demócrata que se enfrentó al congresista republicano Mario Díaz Balart en la elecciones de 2008, Joe García.

Según Ericsson, para los tradicionales dirigentes de la derecha cubanoamericana, el camino de regreso a Cuba pasa por Washington, como argumentó Jorge Más Canosa (p. 126). En un pasaje que muestra la esencia del razonamiento usual en estos círculos, nuestro autor sentencia:

Ciertamente, desde que Castro tomó el poder, la experiencia de los exilados cubanos ha sido inseparable de la presunción de que de alguna manera encontrarían el vehículo que los devolvería a Cuba en sus propias condiciones —ya fuera por una invasión dirigida por exilados, el colapso del régimen por el bloqueo norteamericano, una intervención militar estadounidense, o hasta por una Comisión respaldada por la Casa Blanca para ayudar a una Cuba libre. Esta convicción, que tiene solo una frágil base en la realidad, quiere decir que estos exilados nunca se han visto obligados a enfrentar la realidad de Cuba como es hoy y tratar con un país de carne y hueso, que continúa creciendo, cambiando y evolucionando a escasa distancia de las costas de su hogar de adopción en Miami (p. 128).

Valdría apuntar que tampoco Washington ha intentado relacionarse de manera normal, sin condiciones previas, con la nación cubana real, y opta solo por escuchar a aquellos que le dicen lo que quiere oír.

En Miami, Erikson contrastó estas opiniones con las de la profesora Marifeli Pérez Stable, quien considera que hay cambios importantes produciéndose en esa

ciudad y en Cuba, «excepto que todavía no nos hemos enterado» (p. 134). El autor pudo haber entrevistado a muchos que tienen otras posiciones, como Max Lesnik, Andrés Gómez o Domingo Amuchástegui. Quizás hubiera descubierto que el cambio es mucho más profundo de lo que él supone.

Uno de los elementos que Erikson considera claves en la formación de la política norteamericana hacia Cuba se debe a la efectividad e intransigencia de los propulsores de la actual política y la pusilanimidad e ineficacia de sus opositores en el Congreso. El capítulo 6, titulado «Capitol Punishment» (un juego de palabras que pudiera traducirse como «castigo capitolino») trata sobre ello. Por sus páginas desfilan instigadores del bloqueo y de la política de línea dura, como los republicanos Dan Burton, Lincoln Díaz Balart y la demócrata Debbie Wasserman Schultz; congresistas republicanos y demócratas que se oponen al bloqueo, pero no simpatizan con el socialismo cubano como Jeff Flake, Bill Delahunt y Charles Rangel; y simpatizantes del gobierno cubano, como los demócratas José Serrano y Maxine Waters. La lección general resultante es que el sistema político norteamericano está diseñado para facilitar que grupos de intereses especiales puedan secuestrar una política y dificultar todo proceso de cambio racional a pesar de su fracaso y de su poco apoyo popular.

Hay todo un terreno complejo y cenagoso en el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos y es el que se refiere a las acciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) iniciadas desde los primeros años, sus consecuencias y las respuestas cubanas ante ellas. Erikson comienza su capítulo 7, «Spy versus Spy» (Espía contra espía), con una de ellas: los complots contra la vida de Fidel Castro organizados con el concurso de la Mafia estadounidense. Nunca se podrá enfatizar lo suficiente que los Estados Unidos desencadenaron contra Cuba una amplia y abarcadora «guerra sucia» ilegal y perniciosa, iniciada en 1959 y refrendada oficialmente por el presidente Dwight Eisenhower, el 17 de marzo de 1961, cuando aprobó el «Plan de acciones encubiertas para derrocar el régimen de Castro en Cuba», elaborado por la CIA bajo sus propias instrucciones.

Si no se entiende esta noción, es difícil comprender los acontecimientos que se narran en el capítulo 7 y mucho menos el alto nivel de desconfianza y escepticismo provocado en amplios sectores cubanos, no solo en el Partido y el gobierno, sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.

Erikson le dedica su capítulo 8, «The Least Worst Place» (El lugar menos malo) a la Base naval de Guantánamo. El autor reconoce que el peculiar estatus legal de la Base es precisamente la razón por la que la que Bush la eligió para recluir allí a los prisioneros

(p. 189). El hecho de que, según el Tratado firmado en 1911, Cuba retiene la soberanía legal, le permitió a Washington negarles a los reclusos los derechos que se les tendrían que reconocer dentro del territorio continental.

El capítulo siguiente, «Through the Looking Glass» (A través del espejo), toca diferentes aspectos de lo que se pudieran llamar las relaciones inter-sociales. Incluye casos tales como el documental de Michael Moore sobre la salud pública en Cuba; las caravanas de solidaridad de Pastores por la Paz; la participación de artistas cubanos en las ceremonias de los Grammy Latinos; la asistencia de un equipo cubano al primer Clásico Mundial de Béisbol, en 2006; y las dos versiones de la película documental sobre Fidel, del laureado director Oliver Stone. En todos estos casos, se argumenta con efectividad que las relaciones científicas, culturales, deportivas, académicas y educacionales entre nuestros dos países han sido víctimas de un alto grado de politización y hostilidad por el lado norteamericano. Merece particular mención la entrevista al reverendo Lucius Walker, a principios de 2007 (pp. 214-8).

En el capítulo 10, «The Capitalist Temptation» (La tentación capitalista), se abordan los aspectos económicos de la compleja relación. El autor subraya el enorme impacto que tuvo sobre Cuba la crisis desencadenada por el derrumbamiento del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, a principios de la década de los 90, pero omite los daños que el bloqueo norteamericano le causa a la Isla, así como el rechazo de la comunidad internacional ante este, manifestado en resoluciones reiteradas y sucesivas de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo casi unánime de sus miembros, desde 1992.

Una de las entrevistas más significativas de este capítulo es la de Tom Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en la cual se expone con claridad la lógica de una normalización de relaciones desde el punto de vista de la élite empresarial.

El embargo de los Estados Unidos es uno de los más grandes fracasos de política exterior en el último medio siglo. Esto no debe sorprender a nadie. Las sanciones unilaterales no funcionan, y Cuba lo demuestra [...] El hecho de que a las compañías norteamericanas se les niega acceso al mercado cubano es un regalo para las firmas de otros países. Eso me molesta mucho, pero lo que más me molesta es la incapacidad de Washington en reconocer este fracaso como lo que es (p. 237).

Según Erikson, una de las posibilidades de negocio en una futura relación normal con los Estados Unidos está en la extracción de petróleo. Por ello entrevistó a Jorge Piñón, expresidente de operaciones para América Latina de la transnacional Amoco, y actualmente cabildero de la industria petrolera.

El capítulo concluye con un reporte de la entrevista que hiciera el autor a Pedro Monreal, a la sazón investigador del Centro de Investigaciones Económicas Internacionales (CIEI) de la Universidad de La Habana. Esta es la única realizada a un especialista vinculado directamente a instituciones cubanas. Según Erikson, Monreal piensa que el levantamiento del bloqueo tendrá efectos disruptivos imposibles de controlar por parte del gobierno cubano (pp. 250-1). Esta es una afirmación discutible e hipotética.

Por último, «The Next Revolution» (La próxima revolución) refleja lo que puede definirse como el argumento central de la obra:

Ahora la Isla está inmersa en su próxima revolución: una revolución de expectativas crecientes en La Habana, Miami y Washington acerca de los pasos que los Estados Unidos y Cuba pueden dar para trazar un futuro mejor para los ciudadanos de ambos países. Representa un desafío que las dos naciones deberían abrazar, porque las guerras de Cuba han durado excesivo tiempo, dañado las vidas de muchas personas y alcanzado demasiado poco para justificar convertir este conflicto en el legado para futuras generaciones (p. 314).

En agosto de 2008, cuando Erikson terminó el manuscrito, pronosticó que Cuba «está en vísperas de la más anticipada y dramática transición política de nuestros tiempos» (p. 312). Según este, tal transición, que mantendrá al Partido Comunista en el poder en el corto plazo, está grávida de posibilidades y riesgos. En esas circunstancias, la diplomacia estadounidense ha resultado totalmente inefectiva, atándose ella misma «en un nudo gordiano que la ha dejado poco preparada para hacer mucho excepto mirar a la distancia cómo se desenvuelve la transición cubana» (p. 310).

Los Estados Unidos no reconocieron la significación de la primera Revolución cubana hasta que resultó muy tarde para modelar su curso. Hoy, mientras las nuevas fuerzas de cambio continúan acumulándose dentro de Cuba, será la responsabilidad del próximo presidente evitar la repetición del mismo error.

Con estas frases, Erikson trata de apuntar hacia la necesidad de un cambio de política hacia Cuba sin que queden claras qué medidas preferiría, pero partiendo de otra premisa discutible: que Washington puede moldear o influir sobre su curso.

Desde el punto de vista de un lector cubano, algunas aseveraciones son incompletas y contribuyen a una visión no histórica del conflicto. En la actualidad muchos analistas en los Estados Unidos atribuyen la continuidad de la política de los Estados Unidos a un factor doméstico: la influencia del voto cubanoamericano en un estado electoralmente oscilante (*swing*) como la Florida. Por momentos, Erikson parece aceptar esta lógica, y su visión inicial contribuye a ello, cuando afirma que Kennedy apoyó la invasión dirigida

por los exilados en Bahía de Cochinos (p. 27). Sin embargo, es demostrable históricamente que la existente es una política «estadounidense» en la que los cubanoamericanos han tenido y tienen un papel de acompañamiento. Cuesta trabajo pensar que, si hubiera el interés, la clase política de los Estados Unidos no podría superar este obstáculo.

Puede ser que al no incluir en su libro entrevistas a académicos, funcionarios y ciudadanos cubanos favorables al socialismo, ni examinar su copiosa bibliografía, Erikson se ha dejado influir por la visión sesgada de la realidad de la inmensa mayoría de los entrevistados y de sus fuentes escritas. No obstante, en el contexto de su país, él utiliza todos los recursos disponibles para hacer una presentación inteligente y coherente que contribuya al cambio. En ella se incluyen algunos de los elementos que podrían servir para reorientar la política hacia Cuba en una dirección más racional que lo que ha sido hasta ahora. Sin duda, el autor representa una de las corrientes de opinión prevalecientes en el debate interno, en el cual cada vez más especialistas se suman a la idea de la reformulación. Pero el tema clave entre los partidarios de una nueva política es si se cambian solo los métodos —bloqueo por tendido de puentes— o también los fines —cambio de régimen por cooperación y eventual normalización.

Esta es precisamente la fortaleza principal del libro, incluso para lectores cubanos. A lo largo de estos años de «implacable antagonismo» se ha creado en la Isla la visión de que es imposible una normalización de relaciones con los Estados Unidos y, consecuentemente, que toda iniciativa proveniente de Washington persigue propósitos ocultos inconfesables y hay que rechazarla. La imagen de un imperialismo eternamente interesado en promover el fin de la Revolución y de sus más caras conquistas no es el resultado de una campaña propagandística, sino de una interpretación histórica válida. Toda iniciativa de normalización proveniente de sectores de poder en Washington ha sido vulnerable y efímera. Lo que ha prevalecido es la posición de la derecha ultra-montana.

Sin embargo, Erikson nos permite advertir que esa visión reduccionista puede ser errónea, y que hay en los Estados Unidos más de una alternativa de política hacia Cuba, detrás de cada una de las cuales existe un importante sujeto social; aun de grupos de poder. Tales opciones y sus sostenedores aparecen claramente delineadas en *The Cuba Wars...* y pueden resumirse de la siguiente forma:

1. Mantener la política diseñada por la administración Bush e, incluso, fortalecerla en sus aspectos más punitivos. El objetivo central de esta política es el «cambio de régimen» por todos los medios posibles pero sobre todo a través del bloqueo. Esta opción

es en esencia la vigente, aunque las medidas del presidente Obama la han erosionado marginalmente. A pesar de su evidente fracaso, los partidarios de ella insisten en que su elemento clave debe mantenerse. Los que la propician son básicamente los sectores más conservadores del Partido Republicano y de la élite de la política exterior, y la extrema derecha de la comunidad cubanoamericana. Una variante de esta posición, dentro de la propia administración Obama, es la de mantener las sanciones económicas unilaterales como palanca de negociación para obtener concesiones del gobierno cubano. Caleb McCarry, Dan Burton, Lincoln Díaz-Balart, Mel Martínez, Bob Menéndez, Ileana Ross Lehtinen, Debbie Wasserman Schultz, Otto Reich, Roger Noriega, Pepe Hernández y Ninoska Pérez Castellón son los *dramatis personae* que militarían en esta tendencia.

2. Mantener los objetivos de la política —cambio de régimen y contención del ejemplo cubano—, pero modificar los medios mediante la eliminación paulatina del bloqueo a cambio de concesiones cubanas y el aumento de las medidas de subversión, como los programas de «promoción de la democracia», que se llevan a cabo por distintas vías y las transmisiones de Radio y TV Martí. Esta alternativa tiene un apoyo importante en ambos partidos; como elemento negativo, parte de la falsa premisa de que el gobierno cubano no posee legitimidad y que Washington tiene la responsabilidad moral de promover un cambio hacia un sistema que le sea afín. Es similar a la posición de la Unión Europea. Aquí tendríamos a personas como Joe García, Carlos Saladrigas, Thomas Shannon, Vicki Huddleston, Marifeli Pérez Stable y Sergio Bendixen.
3. Cambiar tanto los medios como los objetivos, a partir del criterio de que en el interés nacional de los Estados Unidos está mantener una relación normal con Cuba por los beneficios económicos y de otro tipo que de ella se derivarían, sin tratar de interferir en la política interna cubana, aunque sí criticándola. Los partidarios de esta opción se basan en el Informe de la Institución Brookings, cercana al gobierno de Barack Obama, *Cuba: una nueva política de diálogo crítico y constructivo*, publicado en 2008. Favorables a ella serían sectores liberales del Partido Demócrata y moderados del Republicano. Sería una política muy similar a la que sigue Canadá hoy en día. En el Congreso tiene sus principales propulsores en los senadores John Kerry y Richard Lugar, los representantes Jeff Flake y Bill Delahunt y personalidades como Tom Donahue, Kirby Jones, Jorge I. Domínguez, Julia Sweig, Robert Pastor, Jorge Piñón y Oliver Stone.

4. Incrementar la colaboración con Cuba al máximo posible. Esta política la promueven congresistas como José Serrano y Maxine Waters, personalidades como Michael Moore, Noah Chomsky y cubanoamericanos como Arturo López-Levy, Max Lesnik y Domingo Amuchástegui.

Por supuesto, ninguna de estas posiciones aparece en forma pura. Las opciones 1 y 4 son minoritarias, pero los que defienden la primera tienen la ventaja que esa es la política vigente en los Estados Unidos. Probablemente una mayoría se mueve entre las opciones de cambio 2 y 3 y muchos de los partidarios de la 3 se sientan obligados a criticar al gobierno cubano y sean proclives a formular su postura en términos más parecidos a la opción 2. Sin embargo, esto es un error pues la dinámica real de los cambios en Cuba no conducirá a la desaparición del socialismo cubano ni al derrocamiento del gobierno, sino hacia su evolución a formas distintas, y esto pone a los partidarios de la opción 3 en una posición vulnerable de ser criticados desde la derecha.

Del libro de Erikson, se deduce que él es partidario de las posiciones 2 o 3. Su crítica de la política de la administración Bush y su defensa de otra alternativa lo prueba. Pero no podemos saber qué cambios propone.

Por ejemplo, Erikson no explica claramente ni toma partido en el espinoso tema del terrorismo, considerado por muchos como «el elefante en la cristalería» de las relaciones bilaterales. Cambiar la política de los Estados Unidos hacia Cuba, como propone, precisa de un esfuerzo mancomunado de los actores políticos interesados en hacerlo, incluyendo la Casa Blanca, la burocracia de política exterior, los grupos de presión

y el Congreso. Los acontecimientos recientes en la Isla (excarcelación de presos políticos y procesos de reformas que apuntan hacia el incremento del papel de la economía no estatal) se mueven en la dirección en la que el discurso político actual de muchos de estos sectores consideran ser condiciones previas. Por tanto, existe una oportunidad significativa, incluso antes de que termine el actual mandato presidencial.

Pero en este cambio hay dos partes importantes: el pueblo y el liderazgo cubano, que tanto han resistido una política ya fracasada. Ese tema está vinculado con la esencia de *Las guerras de Cuba...* en cuanto a que, para normalizar las relaciones, ambos reivindicarán su voluntad de que cualquier política norteamericana tenga que aceptar la legitimidad de su gobierno y la capacidad de su pueblo para darse el sistema económico y político que elija soberanamente sin interferencias externas.

## Notas

1. Richard Feinberg, «*The Cuba Wars: Fidel Castro, the United States and the Next Revolution*, by Daniel P. Erikson», *Foreign Affairs*, Nueva York, noviembre-diciembre de 2008.
2. Daniel P. Erikson, ob. cit., p. 317. En lo adelante, solo se consignarán las páginas, entre paréntesis, en el texto. Todas las citas han sido traducidas por el autor de este artículo.
3. Véase Carlos Alzugaray, «Colimando al caimán: Cuba y Estados Unidos en 1959», en Fernando Martínez Heredia, coord., *Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico*, n. 3, La Habana, 2009, pp. 302-42.

© TEMAS, 2011

## Un nuevo libro sobre cultura cubana

**Denia García Ronda**

*Profesora y ensayista. Revista Temas.*

La permanencia del interés académico por la cultura cubana en los Estados Unidos es un hecho innegable y significativo. Las razones de ese interés son tan variadas como los propios estudios y estimativas; pero lo cierto es que desde los mismos inicios del proceso revolucionario cubano hasta hoy, con énfasis en el período posterior a la caída del campo socialista, Cuba ha estado presente en las líneas investigativas de la mayoría de las universidades y centros, y en los acercamientos críticos de muchos especialistas. En ello se destaca el Bildner Center for Western Hemisphere Studies, que durante más de veinte años ha organizado coloquios, conferencias y otros eventos sobre diversos temas relacionados con Cuba. Es precisamente a partir de uno de ellos —*A Changing Cuba in a Changing World*, celebrado en marzo de 2008— que está conformado *Cultura y letras cubanas en el siglo XXI*\* que compiló y prologó la profesora e investigadora Aracely Tinajero, especialista en literatura latinoamericana y cubana.<sup>1</sup> Para ello seleccionó dieciocho de las ponencias presentadas,<sup>2</sup>

que mayoritariamente tocan distintas manifestaciones de la cultura artístico-literaria.

El volumen está estructurado en dos partes. La primera, que llama «Cultura» —excluyendo del término a la literatura—, está, a su vez, dividida en dos secciones: una dedicada a la música y las artes visuales, donde se halla la mayor diversidad temática, por las muchas manifestaciones que caben en estas últimas (pintura, gráfica, cine, fotografía, etc.), y otra donde se amalgaman un texto historiográfico, una reflexión —a partir de obras literarias, cinematográficas y musicales—, sobre mujeres de la ex Unión Soviética residentes en Cuba; y un ensayo sobre la evolución y funciones actuales de la Biblioteca Nacional José Martí. La segunda parte, dedicada por completo a la literatura, también se estructura en dos apartados: el que recoge textos críticos sobre obras de los últimos veinte años y el que incluye estimativas acerca de producciones anteriores, bajo el rubro «Relecturas». En el primero de estos acápite están ensayos sobre Reinaldo Arenas, el tratamiento del exilio y la emigración en la literatura cubana, el reflejo del jineterismo en las obras literarias, la ciudad de La Habana como espacio simbólico, y

\*Aracely Tinajero, ed., *Cultura y letras cubanas en el siglo XXI*, Iberoamericana-Vervuert, Madrid/Frankfurt del Meno, 2010.

otros que tendremos oportunidad de comentar, ante la imposibilidad de abordarlos todos.

A tal diversidad temática y de manifestaciones culturales se suma la de enfoques, según, como es lógico, la experiencia, ideología y dominio de la obra o fenómeno que comenta cada autor. Lo mismo puede decirse en cuanto a la diferente calidad de los textos que recoge el volumen; desde un excelente ensayo, como «Fotografía, cine y modernidad en *Jardín*. Una nueva lectura sobre la novela de Dulce María Loynaz», de Alexander Pérez Heredia, hasta otros que presentan lamentables errores que sugieren poca o mala información sobre las obras comentadas y su contexto. Uno de esos casos es el del ensayo «En el 400 [sic] aniversario de *Espejo de paciencia* de Silvestre de Balboa», de Raúl Marrero-Fente, cuando confunde a Ramón de Palma (narrador y crítico cubano del siglo XIX) con Ricardo Palma (el autor de *Tradiciones peruanas*), y a José Antonio Echevarría, el descubridor del manuscrito de *Espejo...* con Esteban Echevarría, el escritor argentino considerado uno de los iniciadores del romanticismo (p. 278). Tales confusiones afectarán seguramente el entendimiento de lectores no avisados, aún más cuando en la Bibliografía ambos autores aparecen con sus nombres correctos.

Por otra parte, en «*La hija de Cuba: Gertrudis Gómez de Avellaneda y la novela del siglo XX*» de María C. Albín, hay varias cuestiones que la autora pasa por alto y que seguramente tienen que ver con la selectividad que, en cuanto a la literatura cubana, se aprecia entre los estudiosos de los Estados Unidos y de otros países, por diversas causas, entre estas el desconocimiento de mucho de lo que se publica en la Isla, quizás por la dificultad de las editoriales cubanas de insertarse en el mercado mundial del libro. A pesar de que, como dije al principio, existe un sostenido interés de la academia norteamericana por las obras de autores cubanos, tanto de los residentes en el territorio nacional como de los emigrados, solo una parte de lo producido en Cuba es conocido y valorado por ella. Así, Albín afirma que «*La hija de Cuba*, de María Elena Cruz Varela, es la primera novela contemporánea que rescata y ficcionaliza la figura de una de las más importantes escritoras de las letras hispánicas en el siglo XIX: Gertrudis Gómez de Avellaneda», (p. 231) con lo que desconoce u obvia las dos novelas que Mary Cruz escribiera sobre ella: *Niña Tula* y *Tula*.<sup>3</sup>

Tampoco alude la autora de la reseña a la cercanía temática y argumental entre la novela de Cruz Varela y la de Leonardo Padura —*La novela de mi vida*— publicada varios años antes, que trata sobre José María Heredia.<sup>4</sup> Por las informaciones del artículo (desconozco la obra de Cruz Varela) se puede apreciar que se trata, como en la de Padura, de personajes actuales que se vinculan, respectivamente, con uno de los dos grandes poetas cubanos del siglo XIX, los que, dentro de la ficción,

cuentan «la verdadera historia» de sus vidas, a partir de manuscritos perdidos en el tiempo, hallados por jóvenes del presente. Hay en las dos obras un «juego de espejos» en que los personajes actuales reconocen, a medida que investigan los documentos encontrados, aspectos de su propia vida y sentimientos coincidentes con los de sus objetos de estudio. Ambas se basan en documentación histórica y en cada una hay reflexiones sobre los acontecimientos que marcaron la vida de Heredia o de la Avellaneda.

Un tercer caso que denota desconocimiento —esta vez mucho más desconcertante— es el texto «La Biblioteca Nacional José Martí: historia y nuevas corrientes sociopolíticas de una institución cultural», de Carlos Riobó, cuyo autor parte de premisas falsas sobre la realidad cultural y aun de la geografía política y demográfica del país. Al cuestionar el sistema cubano de bibliotecas públicas, en especial la organización y función de las provinciales —a las que considera simples tributarias de la Nacional—, supone un escenario donde La Habana es el único espacio urbano y «culto», y todo lo demás áreas rurales, de cultura oral.

La tesis con la que concluiremos —dice el autor— es que los sistemas culturales de La Habana y de una provincia típica de la isla eran distintos, dispares y sistemas cerrados durante el proyecto de creación de bibliotecas provinciales. El acto simple de alfabetizarse ya compromete una cultura rural, cuando esa cultura era anteriormente oral y transmitida a través de generaciones. (p. 171).

Aunque es innegable la diferencia, en cuanto a nivel de desarrollo cultural, en ese período, entre La Habana y el resto de las provincias cubanas, la existencia de importantes bibliotecas, desde el siglo XIX, en ciudades como Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Santa Clara, por citar solo algunas de las que hoy son capitales provinciales, indica, a simple vista, el carácter urbano de su cultura, la cual ha sido desde entonces —sin negar la de transmisión oral, propia de cualquier sociedad en cualquier estadio de desarrollo—, tan libresca como la de La Habana. Por otra parte, durante la Campaña de Alfabetización dejaron de ser analfabetos cerca de un millón de cubanos. El resto (cinco millones) ya sabía, al menos, leer y escribir, y la enorme mayoría de estos no vivía en La Habana. Calificar de cultura ágrafa la de las provincias cubanas —en especial la de las ciudades cabeceras que es donde se ubican las bibliotecas provinciales— antes de la alfabetización es, cuando menos, un error de bulto, y más suponer que esta y la posibilidad de contar con un servicio bibliotecario compromete su cultura.<sup>5</sup>

Dentro de la diversidad de propósitos ideotemáticos y de estilos en el libro que reseño existen ciertas comunidades entre la mayoría de los textos. Una de ellas es la jerarquización del acercamiento sociológico y/o

político a las obras que tratan sobre arte o literatura. Apenas hay análisis textuales, en cuanto a estructura, lenguaje, y otros recursos. Las interpretaciones se basan, por lo general, en la relación que puede existir, para el crítico, entre la obra y la realidad cubana actual, sin entrar en los planos compositivo y expresivo. Una de las excepciones de esto es el texto citado de Alexander Pérez Heredia y otra —independientemente de que estemos o no de acuerdo con todas sus apreciaciones—, el de Ilka Kressner «Identidades por negociar: la presentación de la piel humana en la fotografía de René Peña». En ambos, se aprecia una hermenéutica integral desde los lenguajes literario y artístico respectivamente. No es cuestión de pretender análisis endógenos, sin diálogo con el contexto sociocultural, cosa que sería estéril desde el punto de vista comunicacional; pero el arte y la literatura tienen sus propios caminos de relación con la realidad contextual, que no se limitan a lo ideotemático, y que en este libro apenas son recorridos.

Otro texto excepcional, según mi criterio, es «Hacia un entendimiento mejor de la cultura literaria en la Cuba revolucionaria», de Par Kumaraswami y Antoni Kapcia; ensayo teórico, basado en principios y categorías de los estudios literarios, en el que se destaca la objetividad de sus reflexiones, la claridad de sus argumentos y, sobre todo, la definición de las causas de acercamientos fragmentarios o incompletos a la literatura cubana posterior a 1959. Dicen los autores:

Los que estudian la relación entre la Revolución cubana y la cultura suelen seguir dos pautas típicas: se enfocan en lo específico (textos, autores o crisis específicas) o las examinan con un lente particular y predeterminado. Sin embargo, lo que falta es un análisis del contexto más amplio de esta relación, o sea, un estudio de la cultura literaria cubana, entendiendo por esta la compleja red de relaciones, decisiones, comportamientos, actitudes, políticas y procesos que se han desarrollado alrededor de las instituciones y los circuitos de producción, la promoción, la regulación, la distribución y la recepción de la literatura. (p. 178).

Para ejemplificar lo que sugieren como función de la literatura en Cuba, se basan en la Feria Nacional del Libro, su evolución y sus características actuales y, sobre todo, el papel del escritor como protagonista y también el del lector como «agente activo en los procesos de valorización de la literatura» (p. 190).

Otra de las identidades que presenta una buena parte de los enfoques es ver muchas de las obras comentadas —si están producidas en la Isla— como «respuestas» o manifestaciones de «resistencia» a una supuesta o real política oficial cubana; con lo que reducen la compleja relación Estado/artista a una simple razón binaria; califican implícitamente al sistema como represivo, y proyectan actitudes individuales o de grupo hacia la mayoría de los escritores y artistas cubanos, que se

dividirían solo en «oficiales» y «contestatarios». Como bien dicen Par Kumaraswami y Antoni Kapcia en el texto antes comentado,

[el] problema [...] radica en el enfoque tradicional basado en la figura del escritor individual, siempre visto en términos del escritor *contra* el Estado, el comunismo o la represión cultural. Según esta visión, el escritor individual se convierte en opositor supremamente activo o víctima sumamente pasiva del Estado y sus mecanismos de restricción y reproducción. (p. 178).

Algunas de estas valoraciones se pueden aplicar, por ejemplo, al texto de Rafael Rojas «El debate historiográfico y las reglas del campo intelectual en Cuba», que tiene, por otra parte, la virtud de hacer un recorrido por gran parte de la historiografía cubana, tanto de la escrita en la Isla como fuera de ella. En su texto, Rojas comienza por responsabilizar al marxismo-leninismo y al nacionalismo revolucionario de «la crisis de la producción historiográfica cubana» hasta mediados de los años 90, y de «lagunas» en el estudio de zonas históricas —«el período del Pacto del Zanjón (1878-1895), el autonomismo, el anexionismo, la ocupación norteamericana (1898-1902), la primera (1902-1933) y la segunda República (1940-1952), los exilios y las prácticas subalternas»— y asegura que «hoy son zonas ampliamente exploradas desde múltiples referencias metodológicas y teóricas, dentro y fuera de la isla» (p. 131). En mi criterio, esa formulación puede suscitar dudas sobre su verdadero sentido. ¿Se trata, como sería deseable, de criticar la sola apelación a las categorías del marxismo o la aplicación dogmática o doctrinaria de estas en el estudio de esas «zonas», sin tener en cuenta las vías específicas de la disciplina, o piensa que un enfoque marxista o nacionalista deslegitima, de entrada, los acercamientos históricos a ellas? ¿Incluye los enfoques marxistas y/o nacionalistas entre esa posterior multiplicidad de referencias a que alude, o los desautoriza?

Acierta el autor en considerar la mayor amplitud y diversidad metodológica en los estudios históricos a partir de los 90, en lo que mucho tienen que ver las nuevas posibilidades de investigación y de publicación de sus resultados en revistas fundadas en la época, y la extensión de los abordajes a la historia social,<sup>6</sup> pero no hay que obviar lo realizado antes. En realidad, como ha demostrado Jorge Ibarra en varios textos,<sup>7</sup> en los años 60 se creó en Cuba un clima de libertad creativa y de revalorización de prácticamente todas las etapas de la historia cubana, ambiente que se retoma en los 80, después del período oscuro de los 70, cuando se intentó —y se logró en gran proporción— cautelar la producción historiográfica, y se tomaron medidas que afectaron a varias instancias relacionadas con los estudios históricos, y en especial a obras de diferentes autores, muchas de las cuales, no obstante,

tenían una clara orientación marxista. Aun así, en los 70, aparecieron en Cuba libros de historiadores tan importantes como Manuel Moreno Fragnals, Julio Le Riverend, Oscar Zanetti, Juan Pérez de la Riva, Jorge Ibarra, María del Carmen Barcia, Pedro Dechamps Chapeaux, entre otros, con textos indispensables para la historiografía cubana.

Rojas habla, cuando comenta cada una de las «zonas» que selecciona para su exposición, de reacciones de «la historia oficial», ante «la historiografía crítica» y las revalorizaciones que esta realiza sobre determinados temas. Para el crítico —al menos en este texto—, esa historia oficial no se manifiesta, como se esperaría, en documentos o discursos de dirigentes políticos, sino en la obra de algunos historiadores. Según sus apreciaciones, el hecho de que, por ejemplo, estos consideren el autonomismo como antinacional y antipatriótico es «un viejo enfoque», y no una interpretación valorativa de sus objetivos y acciones, que no por ello deja de reconocer los aspectos positivos de esa tendencia acerca de su crítica a la política española en Cuba o sus aportes al desarrollo de la cultura cubana.

Sobre el período republicano hasta 1958 (no hay que olvidar que, desde 1902, Cuba nunca ha dejado de ser república), el autor reconoce los diversos estudios que enfocan, a partir de la transformación de los estudios culturales, «la visibilidad de sujetos heterogéneos como actores de la historia» (p. 137), y la revaloración de aspectos y personalidades; pero insiste en la división entre lo que llama «la ideología oficial» —representada, para él, en la obra de algunos historiadores— y la académica, supuestamente desautorizada por la primera.

La ideología oficial desautoriza o desconoce la revaloración historiográfica de la República con el argumento de que la oposición, el exilio y el gobierno de los Estados Unidos desean una «restauración» del antiguo régimen o una anexión de la isla a su gran vecino. (p. 138).

Aparte de la simplificación de un asunto tan complejo como las relaciones de Cuba con los Estados Unidos —cuya influencia en los estudios históricos, de cualquier matiz ideológico, el autor no destaca—, esa desautorización cae por su propio peso cuando se aprecia los trabajos académicos publicados en Cuba, que, por cierto, no son solo de cubanos, residentes o no en la Isla, sino de muchos estudiosos de otras nacionalidades.<sup>8</sup>

A pesar de la heterogeneidad de los textos recogidos —lógica en eventos como el que le sirve de fuente—, un volumen como *Cultura y letras cubanas en el siglo XXI* es útil y necesario no solo por la difusión de la creación intelectual cubana, mediante su recepción crítica, sino que da pie al mayor conocimiento de los estudios sobre ella, así como al debate o al diálogo entre los que en la Isla y en otros espacios socio-culturales se interesan en temáticas, disciplinas, obras, corrientes, relacionadas con Cuba. A partir de libros como el que comento se hace diáfana la necesidad de esos intercambios de opiniones e ideas, así como del acceso de unos y otros a lo que se publica sobre la cultura cubana, vista esta en su sentido más amplio.

## Notas

1. Entre sus ensayos está *El lector de tabaquería*, Mención honorífica del Premio Casa de las Américas, en 2007.
2. Según la compiladora, «la conferencia abarcó tal magnitud que hubiera sido imposible reunir todas las ponencias en un solo volumen» («Introducción», p. 15).
3. Mary Cruz, *Niña Tula*, Letras Cubanas, La Habana, 1998; *Tula*, Letras Cubanas, La Habana, 2001.
4. Leonardo Padura, *La novela de mi vida*, (Premio Internacional de novela Casa de Teatro; República Dominicana, 2001), Ediciones Unión, La Habana, 2002. Hay edición española anterior.
5. Otro error, de menor importancia, es considerar que el Consejo Nacional de Cultura era dirigido por María Teresa Freyre de Andrade. La doctora Freyre dirigió la Biblioteca Nacional y realizó una extraordinaria labor metodológica y bibliotecológica en beneficio de toda la red de bibliotecas de la Isla.
6. La situación de estos estudios y sus proyecciones aparecen en Oscar Zanetti, «La historiografía social en Cuba», *Temas*, La Habana, n. 1, enero-marzo, 1995, pp. 119-28.
7. Véase, por ejemplo «Historiografía y Revolución», *Temas*, ed. cit., pp. 5-17.
8. Rojas no repasa, o al menos no referencia, los sendos *dossiers* que la revista *Temas* incluyó en dos números extraordinarios (22-23 y 24-25) referidos a la República de 1902-58.



## Correspondiendo

**En esta sección se publican opiniones de nuestros lectores contenidas en cartas y otras comunicaciones dirigidas a la Redacción, y otros textos de interés.**

**Rogelio Rodríguez Coronel presenta el número 65 de la revista *Temas*.**

*El doctor Rogelio Rodríguez Coronel, profesor titular de la Universidad de La Habana y vicedirector de la Academia Cubana de la Lengua, tuvo a su cargo las palabras de presentación del número 65 de Temas. El acto se realizó en Casa de las Américas, el día 27 de abril de 2011.*

Presentar este número de la revista *Temas* me ha propiciado una experiencia de lectura que habitualmente no se tiene. Por lo general, se es muy selectivo cuando se va a leer algo en una revista, estimulado por el interés hacia un autor, un texto, una temática; pero leerla en su conjunto es acercarse a otra manera de percibir las voces, los diálogos que se establecen entre los distintos artículos, los puntos de vista, y de alguna manera uno comienza a entender mejor el entresijo de ideas que aparece en ella. El número está dedicado fundamentalmente al bicentenario de la independencia de Hispanoamérica; pero su contenido es amplísimo.

Yo diría que hay dos grandes zonas temáticas, dos grandes espacios para el diálogo: uno es América Latina en su bicentenario, su literatura y su historia («Enfoque»), y otro es la Cuba del Período especial hacia acá, la Cuba de hoy, las consecuencias de aquella crisis («Controversia»), un material riquísimo que parte del debate al que me referiré en su oportunidad. He asistido a esas dos grandes zonas de diálogo que tienen, soterradamente, una conexión.

Primero vamos a tratar de presentar la primera gran zona que es «De letras y pensamientos hispanoamericanos», de «Enfoque», compuesta por seis trabajos de diversa índole, desde la reflexión teórica general, histórica, hasta el acercamiento hermenéutico a un texto.

El primero de los trabajos que llaman la atención es «Colonialidad del poder. El grillete de nuestra historia». Es un texto de un sociólogo mexicano, de la Escuela de Altos Estudios de París, Luis Martínez Andrade. Resulta bien incitante este acercamiento a la historia de América a partir de la categoría sistema-mundo, propuesta por Immanuel Wallerstein. Es un ensayo que trata de revisar las líneas fundamentales del desarrollo de la modernidad y el capitalismo en lo que compete a América Latina y el Caribe. El autor se detiene en considerar cómo el sistema-mundo capitalista desconoce los preámbulos y, sobre todo, la inclusión, la importancia, el protagonismo, del mundo asiático antes del descubrimiento de América, y cómo ya existía, efectivamente, un conocimiento y un sistema, que luego fue desestimado para, de alguna manera, estructurar una nueva perspectiva a partir del hombre europeo; eso es, fundamentalmente, lo que él plantea en una de las partes del ensayo como *Conquiro ergo sum*, («Conquisto, luego soy»); cómo ese sistema-mundo, construido a partir del hombre europeo, engendra precisamente las ciencias sociales, y en función de qué ellas están concebidas. El autor propone una nueva categoría, frente a la colonialidad del poder —que como se sabe proviene de «colonialidad del ser»—: la colonialidad del hacer, que se refiere a transfiguración de los paradigmas civilizatorios coloniales en las prácticas sociales, lingüísticas y culturales de la población; es decir, cómo se va a proyectar todo el hacer de la práctica colonial en el comportamiento del ser humano y de su sociedad.

Es notorio cómo este número va a hacer énfasis, en muchos trabajos, en el comportamiento poblacional y su proyección social. A partir de este mismo texto, que es de un carácter teórico general, nos encontramos con la categoría «colonialidad del hacer», no con ese nombre, por supuesto,

pero sí, de alguna manera, en reflexiones en torno al hacer, al comportamiento de la población, del individuo, en muchos de los otros trabajos.

Tomemos, por ejemplo, el ensayo de Jorge Fonet, «Narrar Latinoamérica a la luz del bicentenario». Fonet es, sin duda, un investigador que tiene un lugar en los estudios literarios latinoamericanos, sobre todo en la narrativa del cambio de siglo. Es autor de *Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI*, que fue Premio Carpentier del año 2005. Esta vez, su texto es una exposición de la emergencia e insurgencia de una nueva promoción de narradores y, una vez más, como en tantos otros momentos de la historia literaria latinoamericana, se interroga sobre la existencia de América Latina y su literatura; toma en cuenta diversas posiciones, la situación distinta, efectivamente, a la década de los 60, la narrativa del *boom*, y también posiciones que, incluso, yo catalogaría como conflictivas frente a esa interrogante de la identidad latinoamericana, como es el caso de las de Jorge Volpi. Para valorar esa narrativa más reciente, parte Jorge Fonet de cuatro textos: *Salón de belleza* (1994), del mexicano Mario Bellatín; *Tengo miedo, torero* (2001), del chileno Pedro Lemebel; *El ejército iluminado* (2006), del mexicano David Toscana, y *Palacio quemado* (2006), de Edmundo Paz Soldán. A partir de estas cuatro novelas que Fonet considera paradigmáticas, en el debate de ideas y de la conformación estética, y del cuestionamiento mismo de adónde va América Latina y qué somos los latinoamericanos, trata de discernir las rutas fundamentales de nuestra narrativa de finales del siglo XX y principios del XXI, continuando, de alguna manera, sus indagaciones de *Los nuevos paradigmas...* Es un ensayo que de inmediato pasa a ser bibliografía de la novela latinoamericana más reciente.

Lo complementa, por lo que tiene de sugerente, un trabajo de Luis Álvarez Álvarez, ensayista, profesor del Instituto Superior de Arte de Camagüey, que se llama «Lezama Lima, el *imago* americano». Es interesante porque nos retrotrae a ese momento que Fornet tiene como trasfondo para la reflexión sobre la nueva narrativa: los años 60 y los cuestionamientos sobre identidad, las preocupaciones sobre el ser latinoamericano. El trabajo de Luis Álvarez es, precisamente, sobre *La expresión americana*, y resalta la distinción americana de Lezama; traza las líneas fundamentales del pensamiento lezamiano sobre la identidad del descubrimiento y los cronistas, pasando también por los conflictos de la imagen de lo europeo sobre América Latina. Enfatiza Luis en que Lezama insiste con energía en la necesidad de comprender lo específico americano a través de la evolución histórica, es decir, tener la historia como sustento.

Es curioso cómo Lezama va a estar también en otro trabajo, sobre Haití, y cómo su pensamiento se va enraizando, cada vez más, en la historia. Resulta sumamente interesante lo que está ocurriendo en ese sentido. Ya lo veremos más tarde.

También el texto de Álvarez habla de la importancia de tener en cuenta la memoria cultural, en el caso de Lezama, como instrumento para el quehacer hermenéutico de interpretación de la cultura latinoamericana. En este sentido Lezama contribuye, en su momento, a modificar la pobreza existente de los estudios sobre cultura continental; es decir, Luis Álvarez coloca *La expresión americana* como uno de los grandes textos de la década de los 60, que intentan dar respuesta a esas preocupaciones epocales, y que, de alguna manera, se replantean en los nuevos narradores, como dice Jorge Fornet en su ensayo. El texto de Luis es una revalorización de lo que significa, desde el punto de vista histórico-cultural, *La expresión americana* de Lezama Lima.

El cuarto trabajo que incluye esta parte, «Monstruos en la hacienda. El concierto como narración de la nación», vuelve sobre un texto clásico. Doctorante de la Universidad de Texas, en Austin, María Alejandra Zambrano trata sobre *Huasipungo*, del ecuatoriano Jorge Icaza, con el cual va a dialogar después el trabajo que encontraremos de Margarita Mateo. Es increíble la composición, las voces, cómo se establecen relaciones en todos estos trabajos. Se propone la autora explicar la manera en que la

propuesta de *Huasipungo* «empalma con el debate político que sobre el concierto y la estrategia para gobernar a los indios sostuvieron los intelectuales de los primeros años del siglo XX»; su propósito es hacer una lectura que reconozca «el diálogo establecido entre la novela y la coyuntura sociopolítica de Ecuador en esa década [los años 30], las representaciones desafiantes y monstruosas de los sujetos marginales, en contraposición con la aceptada dentro del imaginario blanco-mestizo y, finalmente, las tácticas violentas de gobernabilidad promovidas por la clase terrateniente liberal serrana para disciplinar al indio concierto». O sea, al indio sometido, en esas relaciones de producción. Es una relectura, un enfoque, una mirada sociológica de *Huasipungo*, pero fundamentalmente a la luz de los acontecimientos actuales, en el Ecuador de hoy, y desde ese punto de vista implica una revalorización y una actualización de esta novela clásica en la historia literaria latinoamericana.

El trabajo de la profesora, novelista, narradora y académica Margarita Mateo Palmer, «Repensando la vanguardia narrativa hispanoamericana», insiste en algo que ella ha desarrollado en otra oportunidad: la incompreensión o la poca atención que ha tenido la primera vanguardia en Hispanoamérica. Autores como Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Roberto Arlt, Pablo Palacios, han sido desconocidos desde el punto de vista histórico-literario; incomprendidos por la crítica y por el público lector. La autora propone la necesidad de revalorizarlos en la historia literaria.

Yo recordaba, leyendo el texto de Margarita, el caso de Mariano Azuela. Cuando llega, a finales de la década de los años 20, lo que se llamó el Período Hermético, escribe una novela espléndida, *La luciérnaga*, y luego abandona esa experimentación en su narrativa. Azuela confiesa que sintió que perdía lectores, que ya no lo entendían, que no podía comunicarse, y prefiere volver al patrón decimonónico de narración hasta el final de su vida. Sin embargo, autores como Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Roberto Arlt, Pablo Palacios, insisten en esa renovación, aunque se queden solos. Y se quedaron solos, incomprendidos. Solo al cabo del tiempo, a partir de los años 60, y de una manera aislada, empiezan a ser reconocidos y republicados. Este trabajo de Margarita Mateo Palmer, por lo tanto, está repensando, en términos de historia literaria, el lugar que estos autores y otros

deben ocupar como verdaderos pioneros en la renovación de la narrativa, sobre todo la latinoamericana.

Termina esta parte con un trabajo, bien curioso, «Vicisitudes de las voz *independencia* en el siglo XIX cubano», de Josefina Suárez, historiadora, ensayista, profesora. Es un texto que me fascinó. Siguiendo las transformaciones en el campo semántico del término, interpreta la evolución histórica del pensamiento cubano en el siglo XIX; los hechos históricos y la lengua interactúan en el terreno de la política. Es una trayectoria de las modificaciones del campo semántico, el empuje de la palabra *independencia* a través del siglo XIX, de acuerdo con los intereses y puntos de vista de los sujetos de la enunciación. Independencia y separatismo, por ejemplo, serían una primera dilucidación, independencia y anexión, independencia absoluta, soberanía. Por supuesto que el término alcanza su sentido más pleno, más completo, en José Martí, que es justamente la culminación de esa trayectoria, de esas modificaciones, de esas veleidades de la palabra «independencia» en el campo semántico y su utilización.

Después de esta gran sección en que se produce este diálogo con América y con la historia, está la llamada «Controversia», dedicada a recoger el debate de los Últimos Jueves, de *Temas*. Esta vez, el tema es «El Período especial veinte años después». La conformación del panel es sumamente interesante; hay dos economistas cuyos puntos de vista no coinciden en algunos aspectos, y está el punto de vista de una socióloga, que introduce un movimiento extraordinario en el debate y que ofrece la dimensión social de aquello que los economistas están debatiendo en términos de modelo económico. Los participantes son la socióloga Mayra Espina; José Luis Rodríguez, que tiene una peculiar voz dentro del grupo por haber estado implicado en el trazado político gubernamental de la economía cubana, y Juan Triana, investigador de la Universidad de La Habana, economista también. Entre ellos se produce un verdadero debate, como dijo el moderador del panel, Rafael Hernández, director de la revista; pero además, el lector saca una conclusión de la complejidad, no solamente económica, de ese período; sus antecedentes en términos de modelo económico, de concepción del socialismo; y lo que ocurre en esos años 90 y cómo se proyecta hacia el nuevo siglo. Creo que esta controversia abre lo que sería la segunda zona dialogante de la revista,

porque muchos de los trabajos que vienen a continuación dialogan o están inmersos en el espíritu de esta misma polémica. La pregunta fundamental es, por supuesto, la que Rafael ratifica una y otra vez, y trata de encauzar: ¿en qué consiste el Período especial?, ¿se trata solo de una crisis económica?, ¿cuáles han sido sus causas principales?, ¿qué efectos tuvo sobre el conjunto de la sociedad?; la relación, por ejemplo, entre la política y las investigaciones sociales, la sobrevivencia del socialismo y de qué socialismo se trata. Todo esto en medio de un debate sumamente rico y que nos va a poner a reflexionar una vez más, no solamente sobre el Período especial, sino sobre sus antecedentes y consecuencias.

Ahí se abre esta tercera zona de la revista, que se llama «Entretemas», la cual se propone mantener un diálogo continuo en torno a los tópicos que se ha ido abriendo a discusión y a exponer contribuciones, comentarios, etcétera. Aquí aparecen cuatro ensayos. El primero trata sobre la Revolución haitiana desde una perspectiva antropológica que, de alguna manera, tiene que ver con aquel primer segmento de «Enfoque». «La victoria no basta. Liberación y «contra sí» en la Revolución haitiana», de Dmitri Prieto Samsónov, investigador del Instituto Cubano de Antropología, todavía queda inmerso en el ambiente del bicentenario y lógicamente es esto lo que estimula su concepción y publicación. Es un sugerente ensayo que plantea las contradicciones que marcaron el devenir de la Revolución haitiana y la inserción del país en el sistema-mundo capitalista, categoría que dialoga con el texto de Martínez Andrade.

Hay un aspecto sobre la importancia de la *performatividad escritural*, como la llama él, y justamente cómo la escritura y el legajo, el documento, tiene un sentido y forma parte de un ser, por lo menos social, en la época. Utiliza mucho la categoría «vida desnuda», de Walter Benjamin, para señalar la consideración del hombre como mera vida que puede ser sacada de todo contexto político explícito, tratada como residuo, sin que esto entre en la esfera de lo punible. Y aquí es donde hay una referencia a la noción de poesía de Lezama, que referí antes. El antropólogo se apoya en ella cuando sustenta que las épocas históricas tienen su poesía en la creatividad misma; en Haití el sistema

poético *per se* tuvo su refugio en los ámbitos campesinos, dice el autor. Cita la concepción de Lezama como la poética se realiza en la historia, encarnada en la creatividad de los pueblos y a partir de ahí analiza lo que sucedió, por qué se frustró, por qué la victoria no bastó en el caso de la Revolución haitiana y cómo esta se volvió «contra sí». Habla de la ruptura ontológica que generó el abismo entre el sistema político y el sistema poético como una de las claves para dilucidar la transdominación en Haití. A partir del antiguo régimen y de las nuevas prácticas sociales generadas por la revolución se demuestra la presencia y regeneración de las dinámicas sociales que diseñan el futuro de Haití.

Yo no podía dejar de pensar, durante todo el tiempo en que leía este ensayo, en *El reino de este mundo*, de Carpentier. Este se hubiera reconocido en el acercamiento de este joven autor, porque precisamente alguno de esos aspectos, por ejemplo, el mimetismo con respecto al antiguo régimen, es lo que Carpentier está trabajando en el caso de Henri Christophe en *El reino de este mundo*, y recordé aquel pasaje de los negros con todas sus pelucas blancas, en aquellos palacios, reproduciendo la estructura y las maneras francesas.

El segundo ensayo se introduce más en el ámbito de la controversia. Se trata de «Signo del prejuicio en un modelo de cultura: imagen *versus* semejanza», de Víctor Andrés Gómez, escritor e investigador cultural. Fue Mención en el Premio *Temas* de Ensayo de 2007, en ciencias sociales. Este texto me pareció también muy iluminador. Entronca, como decía, con la controversia sobre el Período especial, cuando se agudizan las contradicciones, pero rebasa esa etapa. El autor pone un ejemplo bien interesante: el desriz del cabello de la mujer negra, con tenaza caliente, potasa y todo eso. A partir de ahí, analiza lo acumulado culturalmente en Cuba, que proviene de la imagen del sistema-mundo capitalista, las imágenes heredadas de una cultura occidental, blanca, machista, patriarcal, que se entronizan y conviven en la cotidianidad y forman parte de los modos de vida, de las copias de determinados patrones, de determinados modelos, y que, de alguna manera, presiden la conducta cotidiana de muchos de los habitantes en Cuba. Por supuesto, está básicamente hablando de los

problemas del racismo encubierto en sus múltiples modalidades, en sus múltiples planos dentro de la sociedad cubana.

Hay otro trabajo que yo diría que también está en la órbita de aquella controversia, pero que tiene una dimensión en otro sentido. Es «El conocimiento entre nosotros: reflexiones desde lo social», de Jorge Núñez Jover, profesor de la Universidad de La Habana, también Mención del Premio *Temas* de Ensayo, en 2009. Acaba de salir publicado por la editorial de la Universidad de La Habana un libro suyo precisamente con esa temática—los problemas del conocimiento—, y es sumamente atrayente. Este autor, investigador y profesor de la Universidad de La Habana, se ha dedicado, en especial, al estudio del conocimiento y a las estructuras educacionales de pregrado y posgrado en cuanto a su difusión. En el ensayo que comento, él desenvuelve el análisis a partir de la política social del conocimiento, su apropiación y función sociales. Es un excelente texto para la construcción del país que deseamos, una argumentación mesurada que no niega las contradicciones y carencias actuales, una reflexión muy lúcida, que está planteando todas las estrategias, todas las limitantes, y todo lo que se ha fraguado en nuestro país y que, de momento, tiene determinadas contradicciones, y generan tensiones en la esfera del conocimiento, y cómo lo único que tenemos en nuestro país es ese capital humano condicionado justamente por el conocimiento.

Sigue inmediatamente otra vertiente de esa controversia: un trabajo que se titula «*Que el vaso no sea más que la flor*»—tomado precisamente de José Martí— «Deseos individuales y necesidades colectivas», de las psicólogas Consuelo Martín, de la Universidad de La Habana, y Maricela Perera, del ICAIC. El trabajo se escribe a veinte años del Período especial, pero, de algún modo, está dialogando también con él. Es un texto muy valioso, creo yo, avalado por la investigación científica, por la objetividad de las conclusiones, para la comprensión o, por lo menos, una toma de conciencia de las tensiones generadas entre el individuo, sus necesidades y valores, y la sociedad; la distorsión que se ha producido en esa escala de valores, en esas necesidades. Se impone, desde la ideología y desde la política repensar y reconformar las bases del consenso social sin perder su

esencia histórica, que es lo que nos hace optar por el socialismo y apostar por su construcción. La transformación de la subjetividad de lo cotidiano desempeña un papel trascendental en la organización de la realidad social, estrechamente vinculada con la armonización de deseos individuales y necesidades colectivas, a favor de una ética del ser en la cotidianidad. La investigación se desarrolló en La Habana, pero obviamente podemos extender sus conclusiones al resto del país. Creo que este ensayo de psicología social es un aporte de las ciencias sociales para el trabajo educacional, para repensar los valores que se han desfigurado, y que necesitamos recolocar en su justa dimensión.

Finalmente, aparecen en el número las reseñas, en una parte llamada «Lectura sucesiva», se inicia con las palabras de presentación de Rufo Caballero del cuarto volumen de *Último Jueves. Los debates de Temas*. Su texto se llama «Cuando las reinas dejan el escenario», que refiere un debate sobre homofobia y cultura cívica en ese volumen. Rufo se detiene en él, no solamente para reseñarlo, sino también para participar *a posteriori*, desde la escritura, y dejar

sentados sus criterios, sus puntos de vista, sus posiciones, llenas, además, de anécdotas que ilustran determinados pasajes, opiniones y posturas que él asume frente al problema de la homofobia. La revista *Temas* introduce una nota sobre el reciente deceso de Rufo Caballero, y yo quiero aprovechar este momento de presentación, para unirme a este sentimiento de la revista porque a todos nos conmovió que un ensayista, un crítico tan profundo y útil como él, tan polémico, tan movilizador de ideas, nos haya dejado.

Otra reseña es «Ibarra sobre Marx, los historiadores y la plantación esclavista», de María del Carmen Barcia, Premio Nacional de Ciencias Sociales, como sabemos. Es un comentario sobre el libro *Marx y los historiadores ante la plantación y la hacienda* —que ella considera difícil, pero sumamente iluminador—, de Jorge Ibarra, «el decano de los historiadores cubanos», como, con justicia, lo llama su reseñadora.

La tercera es más que una reseña, un trabajo crítico. «Ensueños del alba, otra vuelta a los 60», de Yailén Campaña Cisneros, investigadora de la Casa de Iberoamérica, de Holguín, es un análisis

narratológico de *Celestino antes del alba*, de Reinaldo Arenas, centrado en la construcción del narrador. La autora vuelve, con un sentido de revalorización, a la primera novela de Arenas, a partir de la funcionalidad del narrador, no solamente dentro del texto, sino en la evolución de la narrativa cubana a partir de estos años, según la autora.

La última sección de este número es «Correspondiendo», donde se recogen las palabras de presentación del número 64 de *Temas*, por Hal Klepak, profesor emérito del Colegio Militar Real de Canadá, y también los elogios que hacen Ana Cairo y Juan Valdés Paz a José Antonio Portuondo y a Tomás Amadeo Vasconi, respectivamente, por haberseles dedicado a ellos los Premios *Temas* de Ensayo 2010.

Como pueden ver, la riqueza de este número de *Temas* es enorme. Como siempre, la revista ratifica su protagonismo en la creación de un espacio para el debate de las ideas sobre el mundo en que vivimos; esta función la realiza con responsabilidad y profesionalismo. Creo que recojo el sentir de los lectores al felicitar al equipo de realización de *Temas*.